GERMÁN DE LOS SANTOS / HERNÁN LASCANO

ROSARIO

LA HISTORIA DETRÁS DE LA MAFIA NARCO QUE SE ADUEÑÓ DE LA CIUDAD



SUDAMERICANA

GERMÁN DE LOS SANTOS
HERNÁN LASCANO

ROSARIO

LA HISTORIA DETRÁS DE LA MAFIA NARCO QUE SE ADUEÑÓ DE LA CIUDAD

Sudamericana

A la familia, por el amor y la paciencia.

GERMÁN

A Eduardo Martiné, maestro de la Escuela 8 de Catalinas Sur, Buenos Aires.

HERNÁN

A cada mil lágrimas sale un milagro.

Itamar Assumpção, “Milágrimas”

PRÓLOGO

por HUGO ALCONADA MON

Germán de los Santos y Hernán Lascano lo lograron otra vez. *Los Monos*, el libro que publicaron en 2017, fue tan revelador como apabullante. De prosa ágil y ritmo vertiginoso, cada línea era una invitación abierta a producir una serie para alguna plataforma como Netflix o HBO. Pero con una salvedad: todo lo que allí contaron había ocurrido, era real, sin pizcas de ficción. Y no cualquier productor se les anima a criminales vivos. Siempre es más fácil escribir sobre muertos, como Pablo Escobar Gaviria, que no pueden reclamar. O apretar.

Ahora, seis años después, De los Santos y Lascano demuestran que aquel libro no fue casualidad, sino el fruto del trabajo arrollador de dos periodistas excepcionales que saben combinar la anécdota con lo estructural, las vivencias cotidianas con causas y consecuencias de un drama social, y los lúmpenes de los barrios marginales con las familias de apellidos más ilustres. Solo así —con todo eso y más— podemos entender Rosario, hoy.

Porque Rosario se explica con el jefe de un clan criminal que, preso, no tiene que verbalizar una orden para que maten a quien se le ocurra. Le basta con preguntar cómo anda Carlitos o María o Paco, da igual, y rascarse la axila izquierda para que la Señora Muerte haga lo suyo.

Porque Rosario se explica también a partir de sicarios que se convirtieron a la fe —o eso dicen— y ahora imparten sus bendiciones a los guardiacárceles que los dejan salir para pastorear a sus ovejas como pastores evangélicos. Y se explica, también, a partir de una gran dama, fina y de amplísima cultura general que departe sobre arte con un fiscal… con una pistola calibre 22 en la cartera.

Pero Rosario es más que Rosario. Es apenas la versión más grotesca y violenta de una realidad que se esparce por todo el país. ¿O vamos a creer que únicamente en Rosario hay clanes criminales? ¿O fuerzas de

seguridad, fiscales, políticos y jueces corruptos? ¿O banqueros y financistas que lavan fortunas? ¿No será, acaso, que en la ciudad de Buenos Aires la criminalidad solo está más organizada?

Esa es una de las razones que explican por qué Rosario está como está desde hace años, entre asesinatos, extorsiones, balaceras, secuestros y tanto más. Porque la criminalidad se desreguló. Con policías y políticos tan codiciosos que hasta los criminales tienen que frenarlos cuando negocian. “Dejá de hablarme por teléfono que vamos a terminar en Cincinnati, demente”, fue la respuesta patética de un forajido a un senador que del otro lado de la línea le reclamaba más dinero.

Porque, sí, los autores de este gran libro nombran los nombres que hay que nombrar. Esteban Alvarado, Guillermo Cantero, los hermanos Funes o Luis Medina son algunos de los protagonistas de estas páginas, pero De los Santos y Lascano muestran la lucidez que dan la experiencia y los conocimientos para remarcar que la trama solo comienza en estos criminales, aunque abarca muchísimo más.

Abarca a pibes y pibas sin más expectativa de vida que llegar a fin de mes.

Abarca a barrabravas que pasaron de viviendas del Fonavi a mansiones en countries.

Abarca a policías que compiten entre sí por el dinero narco.

Abarca a políticos que no pueden explicar cómo financian sus campañas, ni cómo viven, ni con quiénes interactúan… porque irían presos.

Abarca a fiscales y jueces que no investigan aunque estén las evidencias más flagrantes.

Abarca a empresarios que levantan el índice para perorar sobre ética, pero no pueden mirarse al espejo sin bajar la vista.

Abarca una red de rutas, terminales portuarias y una hidrovía que preferimos no ver.

Pero abarca, también, cómplices que deciden decir basta —y muchos mueren en el intento—, políticos, policías, fiscales y jueces dignos que se juegan la vida cada día, empresarios que rechazan tentaciones, periodistas que informan a pesar de las amenazas y una sociedad sana que, a veces, reacciona y exige más y mejor vida.

Rosario encarna, en definitiva, un ejemplo dramático de la violencia como sistema regulatorio de la vida cotidiana, con un mercado que mueve millones de dólares, cash, y desnuda un contraste morboso con la ineficacia del Estado. Porque De los Santos y Lascano demuestran la carencia de un plan consistente y de un personal capacitado, lo que combina con la subejecución presupuestaria. Más patético no se consigue.

Este libro, sin embargo, supera a *Los Monos*. Porque donde aquel texto se concentró en un clan criminal, este ofrece una mirada más abarcadora, más ambiciosa. Y donde aquel exponía las cloacas rosarinas, este también ahonda en esa senda pero además expone aspectos luminosos de esa pujante y hermosa ciudad. Muestra y demuestra que tiene las personas y las capacidades para superar la noche.

Hace ya muchos años, un editor veterano me dio una lección de esas que llegan como lo hacen las mejores enseñanzas. Al pasar, como quien no quiere la cosa. La realidad supera la ficción, me dijo. Y con el tiempo —y algunas investigaciones— comprobé que tenía razón. Porque la vida cotidiana supera cualquier película, novela, serie o miniserie.

En estas páginas, De los Santos y Lascano así lo reafirman, de forma precisa, atrapante y atroz.

1
LA FUGA DEL SIGLO

Diego Silva tenía una empresa de construcción en Venado Tuerto. Conoció cierto esplendor económico, que lo había llevado años atrás a disfrutar un hobby caro: pilotear aviones. Le gustaba esa sensación de estar como en otra dimensión, fuera del mundo, o arriba de él. Su vida siempre había transitado por el filo de un precipicio, en el que caer era una amenaza latente. Pero la pandemia provocó estragos en sus finanzas. Y cayó a pique.

Los meses que la empresa estuvo parada generaron un agujero que se agrandaba día a día. Y necesitaba dinero líquido para poder salvarla y solventar una vida rica en diversión. Plata que pudiera ser devuelta a mediano, o quizá a largo plazo. Había caído en la usura de las cuevas financieras, que le prestaban a intereses exorbitantes, que hacían cada vez más difícil la situación. Tenía el agua en el cuello y con tendencia creciente. Su situación, según contó tiempo después a un grupo de fiscales que descreía de su relato, era desesperante.

Fue un abogado el que le acercó una salida, una puerta que se abría y él podía decidir entrar o no. Tenía sus riesgos, como todo, y justamente no estaban a baja altura. El letrado era un tipo complicado. Más oscuro que gris. Y eso le valió que el 12 de octubre de 2022 un tribunal condenara a Antonio Di Benedetto a 12 años de prisión, acusado de una megaestafa inmobiliaria en el sur de la provincia de Santa Fe. La organización se quedaba con campos a partir de operaciones espurias con escrituras.

Silva recordaba siempre ese momento, cuando Di Benedetto le tendió la mano para ayudarlo, y le comentó que había un hombre llamado Esteban Alvarado que podía salvarlo. Él dijo que no lo conocía, pero solo bastaba poner en Google su nombre para que aparecieran centenares de artículos sobre este narcotraficante. ¿Quién

iba a creerle? Pero eso no importaba.

¿A cambio de qué iba a recibir ese dinero?, preguntó Silva al letrado, que en ese momento estaba en libertad. Tiempo al tiempo, respondió su interlocutor. Lo cierto fue que Esteban Alvarado lo salvó. Silva ponía comillas cuando lo contaba. Le prestó 20.000 dólares. Pero nada era gratis, no con esa suma de dinero en el medio, y menos aún con Alvarado como dador del préstamo. Sabía que la muerte podía tocar la puerta en cualquier momento. El dinero se lo llevó a Silva un joven que manejaba una camioneta blanca. No hubo conversación, sino transacción. Esta gente no habla demasiado. Pactaron un encuentro en Rosario. Todo fue sencillo y rápido. Pero solo era el comienzo de una larga historia.

A Alvarado le había interesado más el hobby que tenía Silva que su empresa constructora con la que podía realizar algunas operaciones de lavado de dinero, y hasta quedársela en caso de que su cliente no pagara. Matarlo era un trámite que podía resolverse en cualquier momento. Era lo de menos.

Los pilotos pertenecían a un rubro que siempre atrajo a Alvarado, como también las avionetas que su madre comenzó a usar a principios de los 90 para traer cigarrillos de contrabando desde Paraguay. Él usó luego esa misma ruta para traer droga. El aire era más seguro que kilómetros de ruta, con los riesgos que implicaba la logística terrestre. Se jactaba de que sabía volar.

"¿Sabés pilotear helicópteros?", le preguntó Alvarado. Silva no encontraba las palabras precisas para contestar. Volaba en avioneta, pero nunca había hecho despegar un helicóptero. Ese detalle no importaba demasiado. Lo que le servía a Alvarado era conseguir alguien limpio, que no estuviese bajo la lupa de la justicia y la policía, y sobre todo que pudiera volar.

Silva se capacitó en el pilotaje de helicópteros, como quería el narco que le había prestado el dinero para salvar su empresa. Y a partir de esos nuevos saberes adquirió el sobrenombre de Lobo, por la serie norteamericana *Airwolf* de los años 80. Silva contó a los fiscales casi un año después que desconocía en ese momento para qué quería Alvarado que él aprendiera a volar un helicóptero. Pensó que era para trasladar droga desde Paraguay. Los funcionarios judiciales siempre

dudaron de la veracidad de su historia, pero tampoco les importaba demasiado, porque el nudo de la trama estaba en otro lado y el protagonista principal era el narco rosarino.

Alvarado tenía un plan que le daba vueltas en la cabeza desde que escuchó, en junio de 2022, que el tribunal que lo había juzgado por asociación ilícita y por el crimen del prestamista Lucio Maldonado lo condenó a la pena máxima: prisión perpetua. ¿Cuál era el plan? Fugarse de la cárcel. Y con Silva había encontrado lo que buscaba: un piloto que lo sacara del penal de máxima seguridad de Ezeiza en helicóptero. Era la única manera de salir de allí, después de las madrugadas que atravesó desvelado en busca de esa revelación que lo nutriera de una salida de la cárcel. El traslado al penal de Ezeiza había complicado todo, porque de Piñeiro estaba seguro que podía huir. Lo habían derivado a la penitenciaría federal, después de que en junio de 2021 Claudio "Malevo" Mansilla, un narco rosarino, organizó un golpe comando y logró escapar. Estuvo prófugo un año y ahora estaba con él en Ezeiza.

Alvarado le contó a Silva que había visto un helicóptero a buen precio en España. Lo encontró por la web desde la cárcel. Todo parecía una locura. El empresario y piloto contó a los fiscales detalles de su viaje para comprar un helicóptero en Paraguay.

Realizaron una operación a su nombre de manera legal. Importaron una aeronave a Asunción, a través de una empresa que se llama Aramí Poty SA, una firma que se dedica a la logística y a operaciones de importación y exportación en Paraguay. El contacto era un hombre llamado Anselmo, un paraguayo que vivía en España y hacía de intermediario. Alvarado le entregó el dinero a Silva para liquidar la operación de la compra del Robinson R44, que le costó 180.000 dólares.

El valor en el mercado era más alto. Uno nuevo costaba casi el doble. Silva tenía dudas sobre la cantidad de dinero que tenía que desembolsar su jefe. Alvarado tenía el dinero, pero Silva no quería quedar abrochado con problemas en la justicia paraguaya. En un diálogo por teléfono, Alvarado fue claro: "Yo soy un banco. Si me decís la quiero mañana, pasado, en la semana, está hoy, o cuando quieras". A Silva esa frase le retumbaba en su cabeza: "Soy un banco".

El piloto confesó a los fiscales que no podía salir. Sabía que Alvarado lo mataría tarde o temprano si lo traicionaba. Y si no lo traicionaba también. Contó con lujo de detalles las conversaciones que había mantenido con el capo narco, que le ofreció que si lo sacaba de la cárcel en el Robinson R44 quedaría saldada la deuda de 20.000 dólares, le pagaría otros 50.000 y le dejaría el helicóptero que estaba a nombre suyo. No podría hacer mucho con la aeronave, porque lo buscaría todo el país si se concretaba la fuga. Lo mejor sería tirarla al río o quemarla.

El primer problema que enfrentó Silva fue que el helicóptero llegó desarmado de España. Lo llevaron a Campo Nueve, en el sudeste de Paraguay para armar como un rompecabezas. Cuando estuvo listo lo trasladaron a Gualeguaychú, Entre Ríos, donde tenía un hangar a disposición.

Allí le pintaron una patente falsa, que pertenecía a una aeronave que estaba en falta. Nadie entendió la jugada, típica de un hombre como Alvarado. La intención era que se lo tomara por una aeronave que usó en 2020 Mario Vicente Baldo, un hombre sentenciado a 12 años de prisión en 2009 en Córdoba, por traficar droga en avionetas. Lo habían detectado en un Robinson R44 matrícula LV-ZXN. Alvarado cuidaba esos detalles, aunque después no le sirvieran de mucho.

Silva les contó a los fiscales que lo escuchaban en una oficina del centro de Buenos Aires esa mañana que cuando Alvarado percibió o sospechó que él tenía dudas sobre la operación le mandó un sicario a la puerta de la escuela de sus hijos en Venado Tuerto. Se acercó a Silva y le dijo al oído una simple frase: “Esto tiene que salir bien sí o sí”. El hombre tenía una pistola 9 milímetros en la cintura. No necesitaba decir nada más, con su sola presencia en ese lugar quedaba claro que sus hijos corrían peligro, que si algo malo pasaba ellos podrían pagar las consecuencias. Esos eran los códigos que descifraban ese ambiente.

Las charlas con Alvarado eran diarias, sobre todo a la noche y a la madrugada, cuando el jefe narco no paraba de describir detalles del plan. Estaba convencido de que era una genialidad, que nadie esperaría que alguien se escapara por arriba. El efecto sorpresa era el as en la manga. “Son solo veinte segundos, y después no me agarran más. Vamos a estar lejos”, le repetía a Silva con un entusiasmo que le

recargaba la ansiedad a cada momento. Las noticias desde los tribunales eran todas malas. La justicia, distraída tanto tiempo con él, ahora lo tenía en la mira. Había caído. Estaría gran parte de su vida en la cárcel. No podía vivir así.

Por eso repasaban una y otra vez el plan. Habían surgido algunas dudas. Cómo subiría al helicóptero. Porque la aeronave no podía descender, es decir, asentarse sobre el piso del patio de la cárcel de Ezeiza. No solo que era muy riesgoso, sino porque podría ocurrir que el resto de los internos también pretendiera subirse. La situación podría terminar mal, convertirse en un desastre.

Debía ser una sorpresa y todo tenía que transcurrir muy rápido. Para ello necesitaban una red donde colgarse y que el helicóptero ascendiera en pocos segundos. Ni los propios presos iban a tener tiempo de hacer nada.

—Esta semana vamos a laburar al detalle, sabés... —propuso Silva.

—Sí, sí. ¿Querés que hagamos la red? Bien hecha, bien atada.

—A mí me gustaría saber si aerodinámicamente no es perjudicial. Sería mucho mejor para la operación, pero como última instancia. Lo estuvimos viendo ahí con el Gringuito, de bajar sin las puertas de atrás. Ustedes suben en los patines. Pegan el salto y se ve como que es viable también la operación, pero, bueno, dejame que investigo un poquito lo de la red, más que nada por el tema aerodinámico.

—Entonces, ¿vos preferís los esquíes o la red?

—Lo más seguro son los esquíes… no ponemos nada en riesgo. Bajo un segundo más y se suben pero solo pueden subir dos.

—Jaja. Lobo, miro videos y no se van ni a recatar. Va a ser tan rápido que no les vamos a dar tiempo a nada. Tenés que encarar directo como te marqué yo. Máximo son 20 segundos.

Repasaban el plan punto por punto. Alvarado había estado meses, con una paciencia desconocida, viendo cada detalle. El nudo de este proyecto era la sorpresa. Nadie imaginaría que un narco de Rosario, no un mexicano ni un excéntrico magnate colombiano, iba a animarse a salir de una cárcel por arriba. Y sobre todo, porque lo que más lo entusiasmaba era que nadie iba a poder detenerlo. La fuga sería un éxito. Y además lo seducía que iba a quedar en la historia.

Era cierto que nadie podría atraparlo. El lugar más cercano donde la

Policía Federal tenía su flota de helicópteros era Puerto Madero. "Si salía no lo encontrábamos más", explicaba un fiscal federal, después de escuchar a Silva contarles sobre el plan. Porque el proyecto era riesgoso y alocado, pero real. Factible.

El centro de monitoreo aéreo de Palomar no podría hallar en los radares la aeronave. Era como encontrar una aguja en un pajar en la zona, donde se hacían decenas de vuelos irregulares: no había monitoreo ni seguimiento en la región Centro debido a la enorme cantidad de vuelos no declarados, sobre todo por los fumigadores que arrojan glifosato en los campos.

Alvarado encargó una herramienta tecnológica que sería clave: un reloj smartwatch, un aparato inteligente por el que podía enviar y recibir mensajes de WhatsApp. La importancia de este reloj era que cuando él estuviera en el patio del penal el "día D" podía estar en contacto con Silva que iba a venir a rescatarlo. Y nadie se daría cuenta de que en realidad tenía un celular en la muñeca con forma de reloj.

Por eso, cuatro días antes del gran escape un hombre de Alvarado le hizo llegar un nuevo teléfono a Lobo, que ya estaba enlazado con el reloj.

Alvarado quería quedar en la historia, como lo hicieron el estadounidense Joel David Kaplan y el venezolano Carlos Contreras en 1971, cuando con un helicóptero se fugaron de la cárcel de máxima seguridad de Santa Martha Acatitla, en México. Se la conoció como la "fuga del siglo". Estos dos reclusos, con causas por homicidio, tráfico de armas y narcotráfico, escaparon del patio del penal en un Bell modelo 47. El cine retrató la historia con épica cuatro años después en la película *Breakout*, protagonizada por un recio de la época, Charles Bronson. Alvarado quería hacer ese papel cincuenta años después.

Como Contreras en la década del 70, Alvarado había sido muy celoso con la información. Dentro de la cárcel nadie conocía que se iba a fugar. Silva no sabía qué día sería la fuga. Alvarado no se lo decía para evitar filtraciones. Su gente le avisó un jueves. La fuga sería el viernes 3 de marzo, cerca del mediodía, cuando los reclusos del pabellón E salían al patio antes del almuerzo. Allí había una cancha de fútbol, el lugar ideal, despejado, para que aterrizara un helicóptero.

El plan arrancaba en Gualeguaychú, donde estaba el Robinson R44

que habían pintado de negro. Pero cuando la maquinaria iba a empezar a funcionar una alerta se encendió. Desde la madrugada en el penal de Ezeiza había movimientos raros. Grupos tácticos entraban en los pabellones con penitenciarios que destrozaban todo.

En un principio, Alvarado temió que se hubiese filtrado la información de que iba a escapar ese día. Cómo podrían existir tantas casualidades. Las requisas dentro de la cárcel eran contra gente de Los Monos, sus enemigos. Los allanamientos los habían ordenado dos fiscales que Alvarado consideraba sus principales enemigos, como Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, de la Unidad de Criminalidad Organizada de Rosario.

Ellos investigaban el crimen de Lorenzo Altamirano, un músico y artista callejero, que Los Monos habían secuestrado en la calle y luego asesinado cerca del estadio de Newell's. Jimi, como le decían a este muchacho, no tenía nada que ver con las tramas mafiosas. Murió por una casualidad y una mente retorcida que decidió raptar a alguien en la calle y usar su cadáver como un envoltorio para pasar un mensaje al interior de la barra de Newell's.

Alvarado se tranquilizó cuando dentro de la cárcel le llegó información calificada de que los allanamientos eran contra Carlos "Toro" Escobar, Leandro "Pollo" Vinardi y Cristian "Pupito" Avalle. Se calmó por un lado, pero la ansiedad lo comía por dentro, porque los planes de la fuga del siglo debían posponerse una semana. El penal estaba alborotado y era un riesgo mayor tratar de bajar un helicóptero ese día. Todos estaban engomados, dentro de sus celdas cuando se realizaban los allanamientos. Le avisó a Lobo que los planes debían postergarse.

Alvarado le envío al piloto una captura de pantalla de la página web del portal de noticias Rosario3. Allí había una explicación por el despelote dentro de la cárcel, el día que el jefe narco quería convertir en histórico. La noticia decía: "Crimen en el Coloso: Allanan cárceles federales por la 'complicidad estructural' con Los Monos". Luego, Alvarado le envío varios mensajes a Silva. Tenía mucha bronca porque por los Cantero había tenido que postergar la fuga. La ansiedad crecía a cada minuto y también su fastidio, su malhumor.

—Con esto se explica por qué estaba todo raro, la concha de su

madre. Vos podés creer… —afirmó Alvarado.

—Flor de quilombo, qué lo parió. Qué bárbaro. Bueno, ahí tenés la respuesta. Che, después te hablo porque voy agarrado hasta de la humedad: a 170 me lleva el hijo de puta.

—Pero estoy obligado a decirte.

—¿Qué?

—A decirte si veo algo raro, ya te dije, yo cuido a los míos y por los míos mato y muero.

—Vamos a salir.

—Pero no es miedo ni nada, es cuidar a los míos.

—Vos tenías miedo de subirte… jaja.

Silva sabía manejar la situación, incluso, con mayor cintura de lo que alguna vez se hubiera imaginado. Porque después de que se pospusiera el plan se impuso en su cabeza la idea de salir. Sabía que su vida no sería la misma, y que tanto él como su familia corrían peligro; pero peor era ir a la cárcel, donde él no podría durar mucho, sobre todo sin dinero. Durante los últimos días había comenzado a pensar que si el plan salía bien también podrían matarlo. Él no iba a ser más útil, y esta gente no dejaba cabos sueltos.

Lobo respiró hondo cuando se enteró de la noticia. Las dudas lo carcomían. No sabía qué hacer para salir. Escapar. Tres días después se contactó con gente de la Policía Federal. Había decidido traicionar a Alvarado, una medicina que el propio narco había usado varias veces, la más trágica, como creían los investigadores, aquel 2006, cuando entregó —según declararon testigos en el juicio— a sus compañeros en una sucia chatarrería de la zona sur de Rosario. La policía mató a todos sus compañeros. Ahora era él quien debía tragarse la traición, y lo peor, por su personalidad, era que ni siquiera lo sospechaba, quizá por el fragor de un plan que en los papeles era genial.

Los agentes federales llevaron a Silva a la reunión con los fiscales. Le dijeron que tenía que seguir en contacto con Alvarado como si nada hubiese ocurrido. La división de Operaciones Federales había logrado intervenir el teléfono, y los agentes veían todo lo que le llegaba a Lobo. El plan se había postergado para el viernes 10 de marzo.

El jefe narco intentaba que a Lobo le quedaran las cosas claras. Con el dinero no había problemas. Lo tendría cuando quisiese.

—Si vos querés lo tuyo, lo tuyo se termina, cuando vos quieras que se termine el trabajo. Vos me decís. Yo soy un banco, me entendés. Me decís la quiero mañana, pasado, en la semana, y lo tuyo se termina y está hoy, mañana o cuando quieras.

—Dale, listo. Ni una palabra más.

—Bueno, escuchá otra cosa. Nosotros vamos a estar al tanto a ver qué sale. Si vemos que a la 1, 12.30, nos sacaron [al patio] vos tenés que estar afuera, ya vas calentando motores y tenés que ir poniendo en marcha la máquina un rato antes. Prendelo y apagalo.

—Sí, obvio. Ni hablar, con todo, con combustible y todo.

—Porque, yo calculo que lo puedo estirar hora y media.

—Bueno.

—Desde que te llamo, que ya salís a campo, hora y media.

—Bueno, dale. Si estamos jugados con el horario, viste por cualquier cosa digo.

—Si venís a 170 [kilómetros por hora], tenés hora y cuarto.

—Bueno, dale.

—Y sacá los números.

—Sí, sí, ya vi algo.

—Obvio que estamos jugados, tenemos 15 minutos, que no es nada.

—Nada.

Lobo contó el plan con lujo de detalles. Ya lo había relatado a un grupo selecto de policías de la Federal, pero después fue el turno de los fiscales. La idea de los investigadores era seguir el plan, el que había definido Lobo con Alvarado.

Silva iba a salir con el helicóptero del hangar de Gualeguaychú, poco antes de las 11 de la mañana. Debía viajar hasta General Rodríguez, donde había gente de Alvarado. De ahí el trayecto hasta la cárcel eran unos pocos minutos. Alvarado iba a estar en el patio, en la cancha chica de fútbol, vestido con una remera anaranjada de Holanda.

La aeronave debía tener cuidado con cinco columnas de alumbrado, que Alvarado ya le había marcado al piloto. Tenía que descender sin tocar el suelo, y ahí Alvarado y Alan Funes, otro jefe narco con el que había hecho amistad en Ezeiza, se iban a subir a los patines del Robinson R44, que iba a levantar vuelo e ir hasta General Rodríguez.

La idea era subirse al helicóptero y viajar hasta un punto en General Rodríguez donde iba a esperar a los prófugos gente de Alvarado fuertemente armada y con varios vehículos para continuar la fuga. Estaba previsto esconder el helicóptero en un galpón cerca de Open Door. Todo se terminaba allí, poco más de una hora después de escapar de la cárcel.

El plan de los fiscales y la Policía Federal era otro. Seguir el hilo de la fuga pero de diferente manera, porque debían probar que Alvarado quería huir del penal de máxima seguridad. Y el plan tuvo éxito, aunque no para Alvarado. Permitieron que la aeronave que piloteaba Silva despegara del aeródromo de Gualeguaychú.

Lobo viajó hasta el haras de la Policía Federal, en la autopista Riccheri, en Ezeiza. Habían elegido ese lugar porque probablemente los integrantes de la banda de Alvarado podrían ir monitoreando el vuelo. Pretendían hacer creer que el Robinson R44 iba hacia la cárcel de Ezeiza, pero en realidad paró antes en el haras de la PFA.

Allí tomó el mando de la aeronave un piloto de la fuerza que iba acompañado de otro efectivo como custodio. Silva quedó en manos de los agentes de la Unidad de Testigos Protegidos, y él junto con su familia fueron resguardados. Días después salieron del país.

A la par, se inhibieron las señales de telefonía celular en la cárcel. Alvarado, que estaba en el patio, presintió algo extraño cuando se bloqueó la señal de su smartwatch y decidió enterrarlo en la cancha de fútbol. La fuga que iba a quedar en la historia se había caído por una traición. Mientras masticaba bronca, aislado dentro de la cárcel, por la cabeza de Alvarado rondaba aquel recuerdo amarillento de esa chatarrería donde diecisiete años antes él había conducido a su banda a una trampa, similar a la que le habían tendido a él.

2
LA CHATARRERÍA

El primero que olfateó algo raro fue un policía veterano del Cuerpo Guardia de Infantería. Había pasado más de una década y media, y aquel tiroteo seguía intacto en su memoria. No abundaban enfrentamientos así en la historia de la policía. Cuatro ladrones, algunos con largo recorrido en el hampa, llegaron a robar a una chatarrería del oeste rosarino dedicada a la compraventa de metales. Se metieron en el playón delantero del galpón en lo que pintaba como un robo más. No sabían que adentro, entre los pedazos de fierros, los esperaba un ejército de treinta policías de Investigaciones, Seguridad Personal y del Grupo de Infantería de Respuesta Inmediata. Alguien los había entregado.

Una figura criminal en ascenso le había dado un día antes a la Policía de Investigaciones (PDI) el dato de lo que iba a pasar. Este inicio de intercambio de información aseguraría procedimientos para la fuerza a cambio de libre acción para el delator. El golpe sería a las 10 de la mañana. Por lo que desde las 9.30 seis tiradores especiales estaban apostados, mientras esperaban el golpe.

El jefe de Investigaciones no quiso que actuara el Comando Radioeléctrico. Si lo llamaban seguro que los ladrones serían advertidos. El encargado de Infantería, al que le decían Martillo, llegó a las 9 de la mañana. Analizó el callejón cerrado frente al galpón y se camufló debajo de una montaña de basura dejando un pequeño rectángulo de aire para su visión. Los esperaban a las 10. Con el montículo de cartones, plásticos y material de reciclaje oprimiéndole el cuerpo, Martillo los vio entrar al galpón a las 10.02.

Venían a paso vivo, vestidos con ropa de trabajo, de grafa color azul, con una convicción plena como la luz matinal de aquel febrero de 2006. Pasaron el portón formados en una especie de doble fila. Se

cubrían con pistolas sostenidas por los dos brazos en alto, lo que a Martillo le hizo pensar que sabían usar sus armas, que no eran chorros comunes, que suelen llevar la pistola en la mano displicentemente. No esperaban resistencia pero arremetieron con actitud táctica acaso preparados para esa improbable posibilidad.

Y la posibilidad improbable se concretó muy rápido. Uno de los Bengoechea, una dupla de hermanos policías que llegaría a la más alta jerarquía, hizo el primer disparo. Estaba invisible dentro de la cuchara de una máquina retroexcavadora y obligó a que los ladrones, que no podían ver a nadie, volvieran sobre sus pasos firmes. Retrocedieron desordenados mientras disparaban como locos hacia la nada. Estaban desconcertados. Para los policías camuflados en sus posiciones los intrusos, como blanco, eran pan comido.

En medio de ese molinete de balazos, escondido bajo la montaña de basura, Martillo mandaba plomo a mansalva. El primero que cayó en ese parpadeo infernal fue Maximiliano Ever. Cortado por una ráfaga, otro ladrón experimentado, Daniel Aguirre, se plantó de rodillas en el suelo. Los que lo vieron desplomarse se acordaban más tarde de una escena de *The Walking Dead*. Muy malherido Aguirre consiguió sentarse en cuclillas. Perdido por el dolor, llamaba a su madre con el cráneo abierto, desprendiendo masa del lóbulo cerebral hasta quedar en silencio. Pasaría dos días internado hasta morir.

Fueron dos minutos de tiroteo enloquecedor e interminable. La patrulla invisible masacró a los cuatro asaltantes que aunque tiraran no tenían cómo recular en la explanada rectangular del depósito. Los cuerpos quedaron tendidos en la puerta, fulminados en el acto por disparos que los barrieron en abanico haciéndolos saltar del aire al suelo.

Todo parecía muy extraño para conciliar con lo que contaba oficialmente el jefe del operativo aquella mañana del lunes 6 de febrero de 2006. Si había sido un brutal enfrentamiento no parecía probado ante la falta de una trayectoria confrontada de las balas, con ningún policía rozado o herido y sin evidencia de daños del lado opuesto desde donde tiraban los delincuentes. El suceso tenía el aspecto inicial de una sangrienta emboscada. O una ratonera, como le llamaban en la jerga.

Un par de horas después de la lluvia de balas el jefe de Unidades Especiales, Rodolfo Romero, relataría a los periodistas que un llamado anónimo a la Brigada de Investigaciones los había puesto en aviso. “Va a haber un asalto de mucha gente armada en una chatarrería de Lavalle al 2100. Háganme caso porque es posta”, dijo la misteriosa voz, según explicó Romero. Lejos de los micrófonos un policía les soltó a los cronistas que el llamado había sido de un tal Chueco. Algunas crónicas reflejarían el dato interesado al día siguiente. Un vecino contó otro detalle llamativo, los policías habían llegado antes de que se desatara el tiroteo.

Un hecho sanguinario, ningún policía herido, cuatro ladrones muertos, un relato que hablaba de ataque inicial de los delincuentes y un llamado anónimo imposible de rastrear porque había sido hecho desde un locutorio. Un paquete cerrado para que la aparente cacería no implicara para la fuerza el menor sobresalto, más allá de los sumarios rutinarios a los policías participantes. Pero que dejó en pie un pilón de dudas.

Sobre el hecho más oscuro el tiempo puede, sin embargo, proyectar alguna inesperada y caprichosa luz. Dieciséis años después de aquel sangriento episodio en la chatarrería, dos testigos mencionaron en el juicio oral en 2022 contra Esteban Alvarado que él había entregado a su banda aquella mañana de febrero, cuando la policía protagonizó una masacre.

Alvarado llegaba al juicio como jefe de una asociación ilícita que generó varias empresas económicas a partir de sus delitos, como instigador de homicidios y por hechos de lavado del dinero acopiado con violencia y otros negocios. La primera semana del trámite se transformó en un tratado asombroso y deslumbrante de la criminalidad de los últimos veinte años en Rosario.

En esos pasajes quedó perfilada la historia de un líder criminal en sus muchas facetas. El incidente de la chatarrería refiere el momento inaugural de una relación que sería fecunda y sistémica: la del pacto de Alvarado con la oficialidad con mando de la policía de Rosario.

Ese intercambio probado que le aseguró cobertura durante mucho tiempo a Alvarado se fraguó en algunos avisos que este hacía a la policía sobre actividades delictivas de sus entornos. Quedó planteado

en el juicio. Se habló de un robo al supermercado La Reina de bulevar Oroño y Saavedra, de un golpe al hipermercado mayorista Makro cometido en agosto de 2004 en la salida de la autopista a Santa Fe. También del atraco a la chatarrería que compraba toneladas de bronce, acero, aluminio, plomo y especialmente cobre, que por esos días cotizaba a dos dólares el kilo, lo que volvía atractivo el plan.

En el juicio se dijo que Alvarado entregaba a su gente para avanzar en su propio camino criminal. Primero la testigo Mariana Ortigala, cuyo hermano Rodrigo fue estrecho colaborador de Alvarado, contó que este antes de traer cargas de marihuana en avionetas desde Paraguay se dedicaba a robar autos a mano armada y a otro tipo de asuntos turbios. “Fue aprendiendo un montón con lo de los autos, armó una banda que fue esa banda famosa que murió en la chatarrería”, les dijo a los jueces.

También Carlos Argüelles, testigo clave, habló de aquella “entrega”. Él había sido la mano derecha de Alvarado. Desde que declaró en su contra se salvó de tres intentos fallidos hasta que en septiembre de 2021 lo mató un sicario en su taller.

“Carlitos me contó que Esteban entregó a la banda de la chatarrería, cuando los mataron a todos, en la calle Lavalle, la misma banda que robó en el Makro y que hacía entraderas”, dijo Mariana Ortigala, que había sido investigada por estafas con automóviles. Al momento del juicio ella visitaba regularmente en la cárcel a Ariel “Guille” Cantero, archirrival de Alvarado, y le habían pegado cuatro balazos en la puerta de su casa después de declarar en su contra. Pero conocía a su banda desde adentro.

Finalmente, llegó el momento de reproducir la voz de Carlos Argüelles, registrada en un audio a fines de 2020 con la garantía presencial de una jueza. Fue algo pocas veces visto en un juicio: el relato en audiencia de un testigo muerto. Justamente por haber dicho eso que se iba a escuchar. Allí la voz de Argüelles se refiere a la chatarrería: “En el 2006 Esteban fue a robar una chatarrería y murieron cuatro de sus compañeros. Ya habían ido antes a robar ahí. Volvieron y los acribillaron a todos, él quedó a cargo porque su compadre Víctor Oviedo murió, y quedó a cargo del hijastro de Víctor”.

Víctor Hugo Oviedo era el empleado de la chatarrería que según la policía entregó el robo a la banda de Alvarado. Le decían el Chueco. El grupo de Esteban fue a cometer el asalto. Pero esta vez él no estuvo allí. Alguien avisó lo que pasaría. Y a los cuatro que entraron los reventaron a balazos de arma reglamentaria.

El Chueco Oviedo, compadre de Alvarado y entregador del robo, fue otro de los muertos, junto a Maximiliano Ever, Daniel Aguirre y Jorge Luis Graña, el único sin antecedentes delictivos. Alvarado apadrinó al hijo adoptivo del Chueco, que tenía doce años, pero que sobrevivió a su padre apenas nueve años. Era Darío Sebastián Fernández y lo llamaban el Oreja. En su breve vida fue tan sanguinario que era improbable que los perros rabiosos del hampa no lo devoraran. Lo encontraron en un descampado del norte de Rosario en 2015 con un tiro en el cráneo.

Los sumarios administrativos a los policías del caso de la chatarrería no determinaron una actuación irregular. La jueza fue Alejandra Rodenas, vicegobernadora entre 2019 y 2023. Con ella hubo una escaramuza de uno de los tiradores que recordó que la magistrada, según dijo, estaba brotada tras llegar a la escena donde yacían cuatro hombres. Les dijo que le explicaran por qué no había ningún herido del lado de los policías, que eso parecía un fusilamiento, algo no exento de lógica. “Parece que usted se habría quedado más tranquila si un policía caía”, se le plantó uno de los de Infantería, sin filtro y con la adrenalina a tope. “Esto no es un partido de fútbol, señora. Teníamos información e instrucción de combate. Y esta gente entró armada a hacer cualquier cosa”.

El mismo policía rezongaba mucho después de que, ante el ingreso de los asaltantes al playón, uno de los propios hubiera dado la voz de alto. “Fue una estupidez. No estamos en Nueva York. Estos tipos tenían historia y venían a partirnos en dos. Voz de alto las pelotas”.

El acuerdo de Alvarado con sectores jerárquicos de la policía provincial fue la primera muestra de su sagacidad. En el juicio se vio iniciada la fase embrionaria de esos pactos. Que funcionaban sobre la base de una gratificación a la fuerza por entregar acciones que pudieran quedar como operativos positivos para la policía. Y, se vería después, por mucho dinero, con la droga de por medio. Otro negocio

más lucrativo. Millonario.

En esos días de juicio iba a quedar muy expuesta la forma en que Alvarado construyó su organización criminal, su liderazgo, sus alianzas, su personalidad, sus pactos con policías de rango. Algo a tal punto afianzado que el propio fiscal de San Isidro Patricio Ferrari lo contó en 2017 cuando consiguió que lo condenaran a siete años de prisión por robar autos de alta gama en el conurbano norte, que se llevaban a Rosario.

"De las escuchas lo más notorio eran dos cosas", dijo el fiscal. "La principal actividad de Alvarado no parecía tener que ver con lo que nosotros investigábamos, robo de autos, sino con estupefacientes. Y la protección que gozaba de la policía de Rosario era impresionante. Por eso ni avisamos al allanarlo en agosto de 2012 y mandamos a tropas de Gendarmería Nacional".

A raíz de esas escuchas se allanaron en diciembre de 2012 las sedes del Comando Radioeléctrico, de las tropas especiales tácticas y las comisarías de barrio Ludueña, de barrio Belgrano y 17ª de Fisherton, todas zonas de actuación de los grupos de Alvarado, del oeste al norte de la ciudad. Pero nada prosperó. En la Justicia Federal de Rosario los movimientos de Esteban tampoco llamaban la atención pese a que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) desde 2013 había elevado 14 informes allí sobre las actividades de narcotráfico de Alvarado y sus conexiones policiales. Pese a eso, el primer procesamiento por drogas para él fue a fines de 2019, cuando todo se había descubierto en la justicia provincial, no por asuntos de estupefacientes, más bien por la violencia desaforada que usaba para sus negocios.

Desde el momento que se contó por primera vez, lo de la chatarrería fue un evento sospechable y opaco. Alguna explicación llegó dieciséis años después. Esa luz tardía alumbró algo que estuvo asimismo largamente en penumbras: la vigorosa y extensa historia de la sociedad entre Alvarado y la policía rosarina. Que empezó aquel 6 de febrero de 2006 cuando ese hombre frío y desconfiado, que aprendió las reglas del submundo del delito de su madre contrabandista, comenzó a construir su nombre. Luego un alto jefe policial le buscaría un socio.

3
EL CHOFER DEL COMANDO

Cae la tarde de un viernes de 2006. El oficial principal que con los años llegará a lo más alto de la Jefatura de Rosario es comisario en el Comando Radioeléctrico. Convoca al chofer de su patrulla, porque tienen que ir a España y Batlle y Ordóñez, en la punta sur de la ciudad, una zona pesada, donde Los Monos pisan fuerte. No hay asentada ninguna orden de operación para cumplir funciones allí. El chofer que lo conoce desde hace muchos años sabe que hay algo raro y quiere averiguarlo.

"No preguntés. Y sacate el escudo", ordena el jefe. Se refiere al distintivo del Comando que sus integrantes llevan colocado en el hombro. El chofer no habla más. Maneja en silencio hasta llegar a la esquina donde cuatro años después se levantarán los muros del casino de Rosario. Van en una camioneta de la Agrupación Cuerpos. En el lugar los espera un Fiat Uno negro. Los dos policías se apean con las armas en la cintura. El jerárquico baja una última indicación al chofer. "No abras la boca. Hablo yo".

Del Uno negro bajan dos jóvenes de no más de 25 años. Llevan la contribución semanal en un sobre. Jamás vieron antes a estos policías. El jefe lo sabe y por eso pregunta. "¿A quién le ponés vos?". El más alto de los pibes entiende que le están consultando para quién va la plata. "Yo le pongo al Duque", responde.

El hombre que escalaría alto en la policía de Rosario tenía ese apodo. Por eso fue hasta esa esquina. Que estuvieran mentando que ese sobre semanal era para él supone peligro para sus expectativas de proyección en la fuerza. "¿Quién te dijo para quién va la plata, mugriento? ¿De dónde me conocés? Yo soy el Duque. Llamá a tu jefe. Que venga ahora para acá", ordena al soldadito.

El joven capta que el tono no admite desobediencias. Entrada la

noche, los reflejos del alumbrado de iodo pintan de amarillo esa porción de suburbio bravo. A los pocos minutos el jefe de los dos jóvenes que llevaban el sobre a los policías se presenta. Tiene el pelo renegrido como resortes de mimbre, se mueve con serenidad, lleva en la mano derecha un Nextel negro.

Es Pájaro Cantero, el líder de la banda de Los Monos. Ya empezaba a ser conocido más allá de esa que era su zona. Sin vueltas, saluda al policía. Le pregunta si pasa algo malo.

"Tu gente está hablando al pedo. Dando nombres", vomita el policía. Cantero dice que eso no volverá a pasar. Le muestra la pantalla de su Nextel al jefe policial. "No sé cómo le llegaron los nombres", le dice. "Pero nosotros le pagamos a este. Móvil 3810. Viene los viernes o los sábados".

El policía no alza la voz. La patrulla 3810 la manejaban dos empleados del Comando que con la venia del superior les empezaron a cobrar de forma regular a los vendedores de droga. "Si ustedes quieren seguir trabajando no mencionen más a nadie", advierte el jefe. Pájaro responde fiel a su parquedad. "Está bien".

Desde que se cosió el primer uniforme hubo conexión económica entre policía y delito. Pero con la venta de drogas que explotó en las calles empieza a tejerse en la ciudad una relación desconocida, recíprocamente redituable, siempre tensa, aunque estrecha como nunca.

Es tan torrencial el dinero que surge de la instalación de laboratorios de cocaína, las cocinas donde localmente sale la sustancia terminada, que algo jamás visto irrumpe. La sed por beber de ese río de dinero incesante y sin bordes moviliza a cada sector de la policía. Y termina por anarquizar algo que hasta las instituciones más carcomidas por la corrupción deben mantener para sobrevivir: el don de mando.

Eso que pasa en Rosario no tendrá parangón en el país. El manantial de la droga desordena la calle y el flujo de efectivo que genera se devora en cinco años la capacidad policial de gobernar el orden público. El fervor desordenado de la policía por recaudar genera un caos. Cada área de la fuerza saca dinero de los narcos.

El momento en que todo empieza a irse al demonio tiene símbolos

fuertes en algunos nombres propios. Uno es el de Hernán Segovia. Es un chofer del Comando Radioeléctrico que pese a su jerarquía mínima ostenta el poder del apellido. Su hermano es Mario Roberto Segovia, quien en 2008 aparecerá en los diarios como el “rey de la efedrina”.

Con el impresionante y vertiginoso capital que amasará su hermano, Hernán Segovia empieza a dominar por dentro las rutinas del Comando para que nadie perturbe el crecimiento familiar. El efecto se nota en la zona de Fisherton, barrio residencial y de origen inglés del oeste de la ciudad, donde el patrullaje toma un ordenamiento caprichoso. La orden de servicio dice que cada patrulla debe aplicar treinta minutos de presencia fija en un lugar y los siguiente treinta de rotación en la zona.

Pero uno de los móviles se saltea la rutina. Se queda estacionado con los policías frente a un enorme portón en la calle Álvarez Condarco al 300. Es la casa que resulta allanada cuando los servicios de inteligencia nacionales detectan un contrabando de 300 kilos de efedrina hacia México. En la vivienda hay lingotes de oro, una fortuna en efectivo, dos camionetas Hummer y hasta un Rolls Royce Thunder hecho por encargo.

Es la casa del “rey de la efedrina”. Cuando salta la bronca, como les gusta decir a los policías, un descalabro documental obliga a la institución a activar un camuflaje. Como cabo de la Agrupación Cuerpos, Hernán Segovia tenía un llamativo récord de viajes al exterior que para los servicios de inteligencia, aunque la justicia no lo probó, explicaría su rol de operador comercial de su hermano Mario.

Eso le exigía dejar todo el tiempo su trabajo manejando patrulleros y excederse por mucho en su licencia ordinaria. El descubrimiento dejó al desnudo una incongruencia: aparecía en funciones en el libro de guardia aunque en el mismo momento estaba de viaje, en otro hemisferio. Había que justificar la ausencia por los viajes ya que la plata de ese arreglo iría a la cúpula. Todos quedaban en evidencia.

No hubo más alternativa que cambiar cada libro de guardia donde constaba que el policía tomaba servicio sin haberlo hecho. Y eso que la institución policial sabe hacerlo bien, trabajar para encubrir es mucho trabajo. El cabo Segovia se iba a atender los negocios de su hermano a Colombia, a México, a India o a China. Shanghái es una vía de entrada

de metanfetaminas que tiene gran demanda en el mercado chino. El hermano del “rey de la efedrina” viajaba seguido allí. Eso significaría que en sus turnos en el asiento de chofer estaba poco o nada.

Hubo que rehacer uno por uno libros de 200 folios. Eso exige buscar quiénes fueron los sumariantes de servicio para que los volúmenes se confeccionen de nuevo con la caligrafía del hombre indicado y no de otro. Esta vez para que en los renglones donde Segovia aparece tomando turno se lea que está de licencia. Es cambiar tres o cuatro detalles y transcribir como estaba el libro viejo a uno en blanco.

Esa labor agotadora lleva tres o cuatro noches enteras por libro y la letra debe coincidir con la del escribiente de guardia. La institución se ocupa de ubicar al empleado calígrafo y tapar esa discordia. No es una búsqueda rápida. El affaire efedrina se descubre en 2008 pero los viajes del cabo eran de 2006. Los Segovia pagarían por esa cobertura desde entonces no solo a los responsables del turno. La plata viajaba hasta lo más alto.

Un veterano del Comando repite la antigua frase que dicen todos. Nadie en la policía se baña en una pila de bautismo ni se escandaliza por manotear una moneda. “Nosotros las hacíamos todas. Agarrábamos de las putas, del quinielero, del combustible de los móviles, de los que compraban mercadería robada. Pero la droga no porque uno tiene hijos. Y en ese mundo sin respeto matan a cualquiera”.

No meterse con la droga quiere decir no meterse con la droga sistemáticamente. Si por ejemplo en un patrullaje por un andurrial del barrio La Tablada desde un móvil del Comando veían a un hombre de la vieja guardia del campo narco, hasta el chofer y el encargado se bajaban. “Si cruzábamos a Campito Giglione o al Mingo Selerpe, dos vendedores históricos, les rompíamos los bolsillos. Pero sacarles la semanal no. Armar una junta con los narcos es pudrir la autoridad y cavarse la fosa”.

Justamente, trabar un lazo estructural convirtió a la policía de Rosario en una organización delictiva más. No una cualquiera: la más desplegada territorialmente y la más rentable. Pero el rédito ya no iba a escurrir hacia la institución como estructura sino que quedaría retenido por sus hombres en particular. Eso descompuso la capacidad

de regular la violencia y contener a los grupos delictivos comunes que empezaban a armarse hasta las muelas.

Fue esto lo que hizo que la policía de Rosario, como luego se aceptaría al más alto nivel institucional, cayera de manera vertical a un abismo. Hacia 2006 la policía empieza a construir un vínculo duradero con los hombres que manejan a los vendedores de calle. No es que antes no pasara. Lo que no ocurría era la sistematicidad, el despliegue territorial ni la velocidad vibrante en que el negocio de las cocinas de cocaína inundó la ciudad de billetes.

La policía nunca perdió la capacidad de saber lo que pasaba en las esquinas. Pero cuando esa marea de efectivo tapó las calles cada escritorio clavó el hocico en la novedad. Los comisarios con mando empezaron a vender al camarada que quisiera pagar las zonas más rentables o los turnos de guardia, a levantar el servicio de calle para liberar zonas y a avanzar contra determinados grupos criminales para favorecer a sus competidores. Todo a cambio de billetes.

Lo que desarmó la autoridad de la policía no fue hacer esto, sino hacerlo con angurria ciega y suicida. Como la plata estaba en la calle, en los búnkeres que vendían 24 horas a consumidores sin freno, hasta históricos cagatintas de secciones de escritorio se mandaron al asfalto. El método fue que cada sector tuviera su brigada de calle. El jefe de Orden Público, que atendía las comisarías, habilitó la Brigada de Orden Público. La División Judiciales tuvo su Brigada de Judiciales. Y otras reparticiones no necesitaron escudar su glotonería en un rótulo burocrático. Con su sola ambición peinaron las esquinas y las villas en busca de pagadores.

Eso generó un estado de desconcierto en los despachos de las bandas que pagaban regularmente a la policía. De repente, se encontraron con que debían rendirle la semanal no a una sección policial sino a cuatro. Las quejas explotaron pero la plata era tanta que prevalecía la intención de abrir un poco más la mano como si fuera la sobretasa de un negocio clandestino.

El problema fuerte fue para la policía como estructura. Cuentan veteranos del Comando que la relación entre un líder criminal y un líder policial aseguraba un negocio que debía redituar recíprocamente. El narco que paga obtiene permiso para su actividad y entrega al

oficial a cargo relativa calma en el territorio bajo su mando. Si hay una escaramuza, el comisario de patrullas o de la seccional puede exigirle al narco que controle el lugar bajo amenaza de retirarle la protección y hacerle frente.

Pero cuando los que venden protección son cuatro o cinco mandos policiales a la vez esa orden ya no puede activarse. ¿Por qué? Lo explica un veterano del hampa que vive de lo que hizo y ya se salió de los circuitos bravos. “El comisario A se molesta porque hay tiros en su zona y entonces le tira la bronca al narco que le paga. El problema del comisario A es que este narco también le paga al comisario B y al comisario C y consigue de ellos lo que necesita”. ¿Qué le dice el pagador al comisario A si este reacciona porque no le tranquiliza la zona? “No te enojes conmigo. Arreglate con B y C porque también les pago a ellos”.

Al pagar a tres “porongas”, las relaciones se dispersan, nadie puede pedir obediencia, porque ningún policía es mirado como el responsable de imponer el orden. El problema, entonces, pasa por la capacidad de mantener el ejercicio de la autoridad. Algo que en este caso no es lo último sino lo primero que se perdió.

La identidad de los actores de los pactos y la dimensión de sus beneficios recíprocos empezarán a verse diez años después en los juicios. Pero para entonces la ciudad está marcada por una violencia que entrevera todo, que mata implicados en las tramas criminales pero también a personas ajenas a ellas, que tiene a adolescentes actuando como sicarios y a la policía desterrada de la escena por muchos fajos de razones. El velo flexible que se corre expone que en esos sótanos estaban las más altas jerarquías policiales.

Ocho días antes de que lo mataran, en septiembre de 2020, Marcelo “Coto” Medrano plantó una queja a los policías que lo hostigaban por los pagos. Exjefe de la barrabrava de Newell’s, había llegado a dominar la tribuna por su capacidad barrial comercializando drogas en la zona norte de la ciudad. Una tarde el chico que mandaba a entregar sobres al área de Drogas fue cortado por una patrulla de otra repartición. Le sacaron todo lo que llevaba, que tenía destinatario policial, pero distinto.

Coto era uno de los que renegaba de soltar dinero en varias

direcciones. Quedó claro en el Samsung J7 que le sacaron del auto donde lo fulminaron a tiros en una estación de servicio. “Ya habíamos hablado con Drogas. ¿Y esta gente lo fue a ver al pibe también? Que ellos paren la bronca. No le vamos a estar pagando a los dos”, figuraba en el teléfono.

La inmensidad hormigueante de barrios tomados por los muertos es el resultado de esos acuerdos entre policía y comercializadores de droga. Con eso no hay mando, ni comando, ni conducción. El que manda es el que recauda. Pero es un mando efímero, sin capacidad de generar obediencia en el territorio y no es solo la desintegración de la policía. También lo será, no puede ser de otro modo, de la política con representación legislativa, de los gobernadores y sus elencos de gestión y de los funcionarios de la justicia.

Es el crepúsculo o al menos la reconfiguración hacia destino incierto de una relación lucrativa y duradera. “Esta es una época distinta en Rosario”, dice un oficial retirado en 2018, aún muy ligado a la fuerza, que pasó los sesenta años de edad. “Ya entramos en el momento en que se matan mujeres y niños. Eso lo facilitó la policía cuando metió la mano en la droga. Eso rompió todo”.

Acá empezó el tiempo en que los jefes criminales se enteraban antes que nadie de quiénes serían los jefes de policía. En algunos casos porque los conocían muy bien.

4
EL CONFIDENTE COMPARTIDO

A Luis Medina le preocupaba el futuro inmediato. Había sido hábil en escalar desde la casa modesta en la que nació en barrio Belgrano, un enclave de clase trabajadora en el oeste rosarino, hasta coronar una posición de magnate. De modo furtivo y veloz, a los 40 años se había convertido en uno de los tres mayores emprendedores del narcotráfico de Rosario. De robar camionetas del correo en la calle pasó sin escalas a liderar el mercado urbano del comercio de cocaína. El progreso material no le alcanzaba. Le interesaba el progreso simbólico también. Quería ser una figura pública respetada, como empresario legal. Y por eso movió cielo y tierra para poner una franquicia del boliche Esperanto.

Todo el mundo sabía que era un narco pero a través de testaferros y abogados consiguió las habilitaciones de la intendencia de Rosario, en manos del socialista Miguel Lifschitz en ese momento. Esperanto, la franquicia del boliche de Buenos Aires, era gigante. Era más lujoso que el de Capital Federal, en el VIP había un cuadro de Tony Montana, obra del artista Gabriel Schiavina, un pintor reconocido a nivel internacional.

Medina inauguró el local ubicado en el centro de Rosario frente a una multitud. La justicia nunca lo había rozado por sus negocios con la droga pero el Ministerio de Seguridad ese día sembró el boliche de efectivos de civil. Era el 24 de febrero de 2013. Medina se exhibió de etiqueta, estrechó manos como anfitrión y se sacó fotos con invitados especiales.

Pero tenía miedo. Había hecho negocios con colombianos y les debía plata. Sabía que las presentaciones públicas no evitan que las deudas en el campo criminal se ejecuten al contado. Y se lo decía a Claudio Torres, un narcotraficante cordobés, con el que tenía un vínculo

comercial. “Estoy preocupado, sé que me quieren boletear, tal vez me equivoqué al meterme en Esperanto”. No estaba errado. Era como haber subido a una torre desde donde todos podían verlo. Y en la calle, no en las instituciones, sabían de qué modo había hecho su fortuna.

“Me enteré de que tenés un quilombo con colombianos”, le dijo Torres, a quien tampoco le quedaba larga vida por delante. Medina le contestó que los había convocado para pagarles en la casa del country de Pilar, en la provincia de Buenos Aires, donde se había refugiado, precisamente, porque intuía que en Rosario encontraría la muerte. Otra de sus percepciones era que Alvarado, a quien él decía haber iniciado en el asunto de las drogas, quería correrlo del mundo. Acertaba en ambas.

A pesar de los miedos y sus acechanzas, era más fuerte el afán de predominio y de fortuna. “Mañana o pasado me vuelvo a Rosario a terminar de trabajar. Me puse los guantes después de dos años. Arreglé con toda la gorra [la policía] hasta la ciudad de Santa Fe”, le dijo a Torres.

Un hombre que había trabajado para ellos fue el que mejor explicó la escabrosa ruta entre la asociación inicial de Medina y Alvarado y las desconfianzas arrebatadas que convencían a cada uno de la necesidad de eliminar al otro. La conveniencia mantenía precariamente las actividades de ambos, pero el rencor era más fuerte. Y uno de los dos quedó fuera de juego con los métodos que la mafia usa para ordenar su economía.

El que explicó la prehistoria de esa desconfianza tenía poco que perder. En una celda donde cumplía prisión perpetua apuntó un resumen sobre la relación iniciática de Medina y Alvarado. Lo más común en toda la historia del vínculo fue su tensión constante.

Los dos se conocían de chicos. Desde el fin de la adolescencia en barrio Belgrano, Medina se ocupaba de robos ligados a vehículos. Tenía varios compañeros para esos trabajos pero la planificación era de su novia, a la que apodaban la Gitana, y que moriría en Pérez, una ciudad limítrofe a Rosario, dos años después que él.

La entrada al campo de las drogas se dio hacia 2004 de la mano de su pareja de entonces, Daniela Ungaro, una mujer atractiva,

procedente de una familia pesada de la zona sur y dedicada hasta ese entonces a los delitos duros del hampa clásico: piratería del asfalto, asalto de camiones de caudales, robos de mercadería en galpones. Pero la cocaína comenzó a relegar todos los viejos quehaceres.

Los Ungaro se adentraron en la novedad del microtráfico y Medina vio su ocasión. Su primer punto de venta fue en la avenida Avellaneda, frente al boliche Mogambo, un viejo depósito de dimensiones enormes que de viernes a sábado explotaba de público. Era un negocio de venta de bebidas y cigarrillos que también ofrecía drogas. Tener un despacho para el consumo de cocaína al lado de una discoteca popular lo hizo millonario.

Con la expansión empezaron los tropezones con la competencia. En especial con Alvarado, de su mismo barrio, “el número uno de mis enemigos”, como lo llamaba. Medina tenía un arreglo con las brigadas de Gendarmería, a las que daba información sobre los búnkeres de su contrincante, a la vez que ordenaba a los suyos mandar a matar a los soldados de los puestos del rival, lo que implicaba el cierre provisorio de esos puntos de venta de droga.

Alvarado hacía exactamente lo mismo. Su convenio era con la policía provincial a la que le pasaba datos sobre los quioscos de Medina y bajaba órdenes de ejecución contra sus dealers. Era muy sagaz para conquistar zonas. Advertía qué grupos disputaban y al identificarlos fabricaba discordias: hacía circular amenazas contra uno y mandaba a echarle las culpas al otro. Cuando una de esas refriegas provocaba una muerte, como efecto automático se cerraba el búnker. Con el hormiguero en pleno tumulto él entraba a la zona e instalaba el propio. Así se acercó Alvarado a los dominios de Medina.

Al escalar, esa confrontación resultó peligrosa para todos. Y explica gran parte de la raíz de violencia en Rosario. Con las muertes la policía recibía órdenes de intervenir, el negocio se alborotaba y en el furor desordenado de las balas cualquiera podía morir. Eso entendió José Arandia Chinen, el Negro José, un segunda línea que era dueño de búnkeres, y que tenía una relación cordial con uno y otro.

Fue él quien los juntó para calmar los ánimos y retomar la racionalidad en un negocio que, decía, ofrecía lugar para todos. “Que dejen de matar gente, que discutan la posibilidad de repartirse las

zonas, lo que sea”, le dijo el Negro José a un amigo, quien se ocupó de armar la cumbre.

El encuentro resultó un éxito. Alvarado y Medina se entendieron o, al menos, entendieron que dejar de anegar de sangre las calles tendría más rédito que continuar una pelea reiteradamente delatora. El hombre que hacía de enlace de ambos comentaría que se había acordado la distribución de zonas y que en los lugares donde algún búnker resultaba demasiado provechoso lo más lógico sería la propiedad a medias, facturando una semana cada uno.

El convenio incluyó otros puntos. El pacto con Los Monos establecía que no podían vender cocaína, por su extraordinaria rentabilidad. A los Cantero se los podía abastecer únicamente de marihuana al por mayor.

Los dos narcos pactaron también mantener laboratorios comunes de fabricación de cocaína de máxima pureza y cocaína simple, barata. El encargado de la elaboración era un suboficial de policía, que vivía en la zona sur de Rosario. Controlaba un comercio de teléfonos celulares y cocinaba droga. También hacía negocios de venta de heladeras que sustraían empleados de la fábrica Gafa, que está ubicada en la zona.

Uno de los que se proveía con la droga que fabricaban era un verdulero de la zona sur que después cayó preso por robar en casas de mujeres mayores en el barrio Parque de Rosario, un enclave de residencias de dos plantas detrás del estadio de Newell’s. El policía se tuvo que esconder cuando el verdulero, de apellido Santoro, fue descubierto y asociado a la muerte en ocasión de robo de cuatro ancianas.

El momento del armisticio hizo que Alvarado y Medina se forraran de efectivo en grande. Pero en 2012 algo dio un giro. Los controles internos que daban las fuerzas de seguridad en Santa Fe fallaron. Un fiscal de San Isidro que investigaba robos de autos de alta gama en el norte del conurbano bonaerense descubrió que luego de sustraídos, en general de manera violenta a mano armada, los vehículos iban a Rosario para su desguace. Entre los organizadores de este delito estaba Alvarado. El 5 de agosto de 2012 lo detuvieron en un allanamiento masivo como jefe de la banda. Fue el primer día de cinco años en que Alvarado estuvo en cárceles bonaerenses.

Rosario quedó imprevistamente vacía y disponible para Medina, que se había mudado a la provincia de Buenos Aires, porque temía a las oscilaciones del humor de su socio. Tenía una veta de negocios abierta con colombianos que buscaban establecerse en Santa Fe interesados en los puertos del litoral fluvial para sacar cocaína a ultramar por el Paraná. Pero con los tres años de acuerdos le reventaban los bolsillos. No quería ser el vecino emprendedor de la calle Perú sino ganar influencia y estatus.

"Le interesaba que se lo conociera como un empresario y no como lo que era", contaba el hombre que trabajó para los dos jefes narco. Como era incapaz de justificar ingresos, Medina delegó en prestanombres la explotación de Esperanto. Pero no funcionó. Para cuando abrió la disco le quedaban ocho meses de vida. La habilitación del boliche no fue fácil. Surgieron algunos imprevistos. Un joven concejal, Roy López Molina, escuchó a los vecinos que se oponían a los ruidos que iba a generar en pleno centro la disco. Pero los ruidos eran un problema menor. El edil se metió en el tema y presentó un pedido de informes en el Concejo Municipal. Luego, increíblemente, el investigado fue López Molina. Porque Carlos Varela, el abogado del narco, acusó al joven edil de recibir coimas para evitar que se asentara Esperanto. El único que había salido a oponerse al "blanqueo" como empresario de uno de los narcos más poderosos de Rosario terminaba acusado por supuesto "cohecho". El socialismo, en silencio.

Medina buscaba blanquear su dinero con la compra de autos de alta gama. El preso que reveló estos entretelones dijo que Medina cedió los autos a Reina Automotores, de Lelo Pérez, un negociante simpático y de gran sagacidad comercial, todo el tiempo vinculado a actores del delito, en algún momento célebre por su romance con la vedette Vicky Xipolitakis. Perez lo niega. "Los autos eran de clientes, pero ninguno de este hombre". La versión del preso indica que Medina le derivó a Reina varios vehículos que quiso revender, una dinámica fácil para lavar dinero sucio, multiplicar transacciones para alejar la primera maniobra comercial de la vigilancia fiscal.

La concesionaria llegó a tener en 2013 cuatro vehículos de Medina exhibidos en simultáneo. Un Audi A3, dos Audi A5 y una Toyota Hilux. El encargado de la venta era un hombre rápido y ambicioso,

Germán Tobo, que convenció a Medina de que con su capacidad de compraventa debía poner una agencia de autos propia. Así nació Lume, en la zona oeste. Cuando mataron a Medina, Tobo no tardó ni un día en llevarse los autos del difunto a un galpón de avenida Ovidio Lagos, frente a Jefatura. A los pocos meses Tobo fue acribillado en la puerta de su local. A alguien no le gustó lo que había hecho.

Dos constantes hubo ese año en la cabeza de Medina: el objetivo de recomposición de sus negocios y la idea fija de la muerte que lo esperaba. A tal punto que ya se definía en tiempo pasado. "Sépanlo: si a mí me pasa algo fue Esteban Alvarado", le decía al hombre que trabajó a dos puntas, un individuo que a diez años de la concreción de ese anuncio seguía juzgando prudente no mostrarse. Y que narraba con precisión que al caer Alvarado preso en 2012 Medina se encargó de la administración de sus quioscos de droga.

"Eran 79 búnkeres los que tenía Esteban cuando estaba preso en Campana. Y Medina dejó de darle el dinero que le correspondía". Era una montaña de billetes. Según el testigo, "la entrada solo de los de Alvarado iba en 2013 de 1.300.000 a 1.700.000 pesos. Cada siete días". Al cambio de entonces eran entre 260.000 y 340.000 dólares por semana. Por un lado, la plata de los locales. Para ese momento Alvarado les contaba a los propios que Medina le venía reclamando 50.000 dólares del negocio común con una avioneta.

Demasiado efectivo como para no molestarse.

Pero Medina seguía porque la corriente de dinero que generaba era más adictiva que las precauciones. Las advertencias venían de mucho antes. Un día de 2010 el hombre que trabajaba para él y para Alvarado cruzó a Medina por la avenida Francia. Se saludaron de auto a auto.

—¿Qué estás haciendo? —preguntó Medina.

—Iba para mi casa, vengo de lo de mi vieja —dijo su amigo.

—Haceme la segunda, vamos hasta Tortugas —pidió Medina.

El hombre de confianza aceptó. Fueron al oeste hacia el primer pueblo de la provincia de Córdoba. Por la autopista, desde Rosario, 45 minutos de viaje.

Los dos hombres se bajaron en una estación de servicio. Pidieron café en el minimarket. Era invierno y oscurecía temprano.

—No me dijiste qué hacemos acá, Luis.

Medina soltó una sonrisa y mantuvo una pausa.

—Viene una camioneta con los líquidos para la cocina. Es mucha plata. Nosotros vamos a ir adelante y ellos nos siguen. Si no vemos ningún control, les digo que pasen.

—Me tendrías que haber contado antes para dejarme decidir si acompañarte —dijo el amigo.

Ya era tarde. No había posibilidad de desertar. Con los pocillos servidos en la mesa, los dos hombres se quedaron en silencio un buen rato.

—Luis, ¿por qué no dejás todo esto? Ya sos millonario. Te van a matar.

Nuevamente se quedaron callados. La camioneta de los precursores químicos se estacionó a un costado de los surtidores. Medina pagó los cafés, hizo una seña y se encaminó a su auto. Cuando entraron, abrió la guantera y sacó una hoja de cuaderno. Se lo extendió a su invitado.

En el papel se leía una lista con cuatro renglones completados en birome. Policía: $ 300.000. Gendarmería: $ 250.000. Federal: $ 200.000. Drogas Peligrosas: $ 300.000.

Eran cifras mensuales. Para 2010 la suma redondeaba 270.000 dólares al cambio oficial.

—¿Te das cuenta de cómo es esto? —dijo Medina. Yo estoy acá con vos, en el medio de la ruta, en un pueblo de mierda, y estoy facturando. Estoy en mi casa y facturo. Estoy durmiendo y facturo. Esto no se puede parar ni dejar.

La camioneta que traía los precursores químicos se había acomodado detrás del Audi. Cuando Medina hizo una seña los dos vehículos se pusieron en camino hacia el este.

5
LOS COSTOS Y LAS GANANCIAS

Pocas cosas hay más racionales que la violencia. En un pasaje de la serie *Fargo*, el grupo fuerte del pequeño pueblo de Minnesota que lleva ese nombre afronta problemas al tropezar con un grupo más poderoso, que es la mafia de Kansas City. El grupo más pequeño se dedica al movimiento de cargas, uno de los rubros predilectos de las organizaciones criminales tanto para trasladar bienes como para lavar activos.

Los de Kansas codician ese negocio, saben que por su mayor poder terminarán por absorber a los más chicos, que vacilan en vender. "¿Los matamos?", pregunta ante la demora uno de los sicarios a un contador de la mafia. "Quizás", responde el contador. "Si el mercado ordena matarlos, los matamos. Si ordena ofrecer más dinero, ofrecemos más dinero. Hacemos lo que dictaminen los costos y las ganancias".

Dos equivocaciones garrafales arrasaron con la historia empresarial que, con paciencia y en penumbras, Esteban Alvarado había construido durante los cinco años previos a 2019. Uno de esos errores fue no haberse desecho un año antes del Chevrolet Cruze con el que Lucio Maldonado fue llevado por sus captores a la quinta en el paraje Los Muchachos, en las afueras de Rosario, donde lo tuvieron secuestrado y le dieron muerte. Fue el GPS de ese auto el que marcó el lugar del cautiverio, una casa que estaba bajo usufructo de Alvarado, y donde se halló una carpeta colmada de direcciones. El segundo gran descuido fue el iPhone que el propio implicado, al advertir que lo detendrían, arrojó al agua en un camping de Río Tercero y que conservaba 4600 mensajes propios.

Esas ligerezas redondearon la acusación contra Alvarado como ideólogo del asesinato de Maldonado, un prestamista algo excéntrico, lo que le generó una sentencia de prisión perpetua. A Maldonado lo

secuestraron en la puerta de su casa del barrio La Tablada y se lo llevaron en su auto. Dos días después encontraron el cuerpo con las manos atadas y tres disparos en una colectora a 200 metros del casino de Rosario. Junto al cadáver había un mensaje escrito en papel que decía: “Con la mafia no se jode”.

El Cruze estuvo 45 minutos parado frente a la casa de campo de Alvarado. Cuando allanaron ese lugar, en una mesa rústica de la cocina encontraron una carpeta rosa con una imagen de Winnie Pooh. Era una caja de Pandora. Allí figuraban los secretos mejor guardados de Esteban. Impuestos, facturas de servicios, expensas comunes de edificios, tasas municipales por alumbrado y limpieza.

Los impuestos estaban en la casa de Alvarado. Se “peinaron” las viviendas e inmuebles que se encontraban en esas direcciones. En una casa vivía un comisario antidrogas. En otra, su exmujer en un country. En los lugares se hallaron constancias actuariales, escrituras públicas, contabilidades paralelas. Brotaron indicios de maniobras de lavado de dinero y de un pasamanos de bienes entre los miembros de la organización. Figuraban las sociedades comerciales, los nombres de los socios, la forma en que el uso de la fuerza hace billetes. Lo que mucho tiempo después, cuando intentó fugarse de la cárcel, dijo al encargar la compra de un helicóptero: “Yo soy un banco”.

Las evidencias del asesinato de Maldonado les permitieron a los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery descubrir un armazón de sociedades económicas con relaciones cruzadas: las empresas, los bienes que las sustentaban en su capital societario, los pagos al personal y de impuestos y las personas que trabajaban en ellas aparecían entremezclados todo el tiempo. Ese es el distintivo de la asociación ilícita por la que fueron acusadas diez personas como miembros y Alvarado en la cúspide como el jefe.

El grupo de Alvarado accionaba con planteles que hacían sus tareas en tres escalones. En el primero estaban los encargados de cometer delitos contra la propiedad y las personas. Los sicarios, los organizadores de atentados y los encargados de gestiones en la calle. El asesinato de Maldonado es un hecho maldito porque iluminará el modo de ser de la organización en todos los niveles. La banda empieza a funcionar para armar otras maniobras con el fin de desvincularse de

ese homicidio. Y lo hace mediante la invención de evidencia que intenta pasar la responsabilidad hacia Los Monos, rivales de Alvarado en el negocio. Uno de los que se busca perjudicar es Rodrigo Ortigala, testigo que declaró en forma reservada contra Alvarado por haber sido su allegado, miembro de su banda. Otro al que se trata de implicar es Leandro "Chulo" Olivera, un integrante de la banda de Los Monos.

Alvarado buscó atribuirles a Ortigala y Olivera tres ataques a balazos contra casas de funcionarios del Poder Judicial cometidos en diciembre de 2018 y enero de 2019 para endilgarles la culpa de esos casos, en especial, la del crimen de Maldonado. El plan de Alvarado era deslizar hacia el entorno de Los Monos un delito por el cual él aparecía acusado.

El segundo escalón del grupo lo integraban los policías que le dieron protección. Son los encargados de proveer cobertura a los movimientos criminales de la banda y al mismo tiempo impunidad. Era un sensacional anillo de resguardo en el que había muchos comisarios. Luis Quevertoque, Javier Makhat, los hermanos Martín y Marcelo Rey, y Cristian Di Franco terminaron condenados. También el suboficial Pablo Báncora, que filtra a policías cómplices de Alvarado, desde adentro de la oficina de los fiscales, la dirección de una experta contable que hace investigaciones económicas de las bandas. La casa de esta mujer fue acribillada a balazos. Uno de los tiros pasó a centímetros de la cabeza de su madre.

El tercer estamento de la banda está en el encadenamiento de negocios con empresas que funcionan lícitamente. Encargados y empleados que las administran y las gestionan están relacionados entre sí. Son los que surgen como socios de las mismas empresas, dedicadas al transporte, a la logística, a la distribución de bienes, a la venta de vehículos: todas actividades utilizadas en el blanqueo de dinero que será usado en nuevos hechos delictivos.

Los delitos para concretarse precisan de un andamiaje económico que les permita afrontar gastos. ¿Qué es lo que hay que pagar? "Vehículos que se arman para que parezcan otros, personas que hacen inteligencia, coimas a policías para plantar evidencia en las investigaciones", alega el fiscal Matías Edery en una de las audiencias. "Con esta estructura donde usan vehículos, teléfonos y logística de

empresas legales les dan sustento económico a sus negocios ilícitos”.

Los fiscales detallaron el modo en que toda esta estructura estaba entrelazada. Nombraron cinco empresas ligadas a Alvarado, dedicadas a actividades de logística, transporte y comercialización de rodados, que forman una red de sociedades de responsabilidad limitada: Edra Servicios Logísticos SRL, Logística Santino SRL, Logística TSC SRL, Toia SRL, Sagrado Corazón de María SRL. Estaban legalmente constituidas y eran dirigidas por Alvarado. También estaban ligadas a ellas otras sociedades unipersonales. Sus responsables terminaron condenados por asociación ilícita. Algunos trabajaban en las firmas y otros eran testaferros, entre ellos Rosa Capuano, la exesposa de Alvarado y madre de sus hijos.

Las actividades, dirán los fiscales, no pueden hacerse sin que esas personas conozcan el papel central que tiene el máximo jefe. “Lo escuchamos a Alvarado dirigiendo a estos estamentos a los que les da las órdenes. En esta misma sala. Gracias a los audios recuperados de su mismo teléfono rescatado del agua”, dice Edery.

Hablar del dinero que acumularon estas sociedades significó en lo concreto dos números: 165 vehículos y 38 inmuebles. Esos son los bienes que atesoró la asociación ilícita. Entre los inmuebles hay viviendas en barrios cerrados como Funes Hills, Puerto Roldán y Tierra de Sueños de Roldán, zonas residenciales pegadas a Rosario. Al grupo también le inmovilizaron depósitos en veinte cuentas por orden del Banco Central por 40 millones de pesos o medio millón de dólares. Le trabaron además siete embargos a requerimiento de la autoridad monetaria.

La acusación de lavado de dinero incluyó al abogado que acompañó durante diez años a Alvarado. El profesional solía rezongar en las audiencias, decía que era inaudito que se confunda maliciosamente su rol con las acciones de la gente a la que representa. En la sala había colegas que se sumaban a esa indignación. Y denunciaron estos hechos en el Colegio de Abogados de Rosario para que pusiera límites a los fiscales por lo que definían como una “caza de brujas y un ensañamiento contra el ejercicio de una profesión liberal”.

El fiscal Luis Schiappa Pietra atajó el reproche en la jornada siguiente del juicio contra Alvarado. Los miró a todos y anunció que

no habían imputado a una persona por su trabajo de abogado sino por sus aportes decisivos al funcionamiento y la expansión de una organización criminal: “No dejaremos que se instale esta confusión interesada”, dijo el fiscal. “No perseguimos abogados. Perseguimos a personas que cometen delitos y con una evidencia con la que tenemos certeza que habrá condena”, agregó.

La primera acusación se explicó como una maniobra típica de una banda que tiene como objetivo construir poder económico. Hicieron eje en la compra, en 2016, de un campo de diez hectáreas en Coronel Bogado, a 50 kilómetros de Rosario, a valor irrisorio. El campo fue registrado a nombre del abogado que, en ese momento, figuraba en la AFIP como contribuyente de riesgo, es decir, sin capacidad económica para esa operación. El valor escriturado fue tres veces menor que el valor fiscal catastral. El valor catastral de un inmueble además es ya algo muy por debajo del valor real.

Ese campo ubicado se incorporaba a un acervo millonario expuesto en el juicio. En el pleito figuraban los bienes que acumuló una organización en la que están implicadas 34 personas. Ahí estaba algo que explicaba que en la batalla de la violencia estaba implícita una mayor. Era la batalla por el dinero.

El Estado buscaba, a través de sus fiscales, quedarse con ese patrimonio acumulado. Hacerlo significaba, decían los fiscales, apuntar a la banda donde más duele como objetivo contra el delito complejo. Aunque algunos de los hombres de una banda puedan cometer hechos de enorme crueldad, un grupo criminal no tiene como objetivo último practicar la violencia. Si lo hace es como método, en general de última instancia, para asegurar la rentabilidad de su negocio.

La sospecha consolidada es que la violencia de esta asociación ilícita se practicaba con regularidad. La información compilada por fiscales de la Agencia de Delitos Complejos terminaría vinculando a Alvarado con unos 40 homicidios en total. Un testigo de identidad reservada dirá que son más de 100. Es Carlos Argüelles. Un año después lo encontraron muerto.

Esas empresas inscriptas de Alvarado para prosperar necesitaron de permisos estatales que otorgaba la policía garantizando no avanzar

contra sus actividades ilícitas a cambio de beneficios. La policía será los ojos y los oídos de los grupos en una ciudad que ha perdido el alma.

Lo que le permitió edificar a Alvarado su fortaleza económica fue la actividad comercial y no la actividad violenta que se le atribuye. Lo más constante, cotidiano e invisible fue el movimiento de sus empresas. Los hechos de sangre fueron más esporádicos pero de gran visibilidad. La trama de empresas que le descubrieron requirió de mucho ingenio y capacidad de trabajo. Eran compañías lícitas al frente de las cuales se situaron “hombres de paja”, al decir de los fiscales, es decir, testaferros que le permitieron moverse en las sombras.

En quince meses de audiencias quedó claro que el grupo de Alvarado estaba complicado por delitos graves contra la vida. Pero para los investigadores el impacto que produce la sangre, que es esporádico, tapa el verdadero quehacer de una banda. Y eso se ve en todos los bienes que atesora. Como decía el contador de *Fargo*, algunas veces se usan balas, pero la mayoría de las veces dinero.

Entre los inmuebles decomisados había varias casas de significativo valor en la trama criminal porque mostraban cómo las viviendas eran instrumento de lavado y cómo la maquinaria para hacerlo mezcla actores del mundo ilegal con el legal. Para esa expansión no solo se requirieron testaferros sino conocimientos más sofisticados que proporcionan profesionales.

Además de su abogado defensor que según los fiscales se quedó con un campo con dinero de su cliente, fue condenado (con sentencia firme de la Cámara de Apelaciones) un arquitecto que levantó o refaccionó viviendas para Alvarado. Para los investigadores construyó casas a Alvarado en Puerto Roldán, apareció como su prestanombre y también hizo remodelaciones. Los jueces superiores dijeron que era quien se encargaba de conseguir inmuebles, construir a sabiendas de dónde provenía el dinero, adquirir una decena de camas náuticas en guarderías de lanchas, actuar él mismo como testaferro prestando el nombre para obtener más bienes. Y visitarlo en prisión mientras avanzaban esos negocios, según apuntó la Cámara Penal de Rosario al convalidar el fallo.

Al arquitecto le atribuyen ser quien edificó y anotó a su nombre una

casa en Puerto Roldán en un momento en que estaba en quiebra, es decir, en incapacidad de adquirir bienes. Esa casa luego fue vendida a Luciano Previtera, que está imputado como miembro de la asociación ilícita, pero los fiscales consideran que el dinero venía de Alvarado. Cuando fue allanada estaba vacía.

También el constructor aparece como comprador de un departamento en Condominios del Alto, frente al Shopping Alto Rosario, donde encontraron viviendo al allanarlo al exjefe de Drogas de la Policía de Investigaciones, comisario Javier Makhat. En ese departamento vivió la familia de Alvarado cuando Esteban decidió instalar allí a su esposa e hijos al pensar que Luis Medina quería matarlo. Los fiscales consideraron a Alvarado su verdadero dueño, aunque la última escritura estuviera a nombre de la mujer de Makhat.

Cuando el arquitecto inscribió el departamento a su nombre estaban en quiebra él y su mujer. Los fiscales buscaron y lograron que ese departamento se decomisara por considerarlo parte del patrimonio de Alvarado. Todos están relacionados con todos.

Una de las casas de Alvarado, en Misiones 865, en el barrio privado Tierra de Sueños 1 de Roldán, era el domicilio legal de Transportes Toia SRL. A esa firma pertenecía el remolque de un camión hallado en 2017 con 493 kilos de marihuana en la provincia de Río Negro, hecho por el cual Alvarado terminó condenado como organizador. Algunas empresas estaban legalmente constituidas y eran dirigidas por Alvarado. Otras eran sociedades unipersonales de Nadia Toledo, Jorge Benegas, Leandro Suárez y Rosa, la ex de Alvarado.

Un entramado empresarial así, para los fiscales, sirvió como fachada para un circuito de actividad económica. Y la violencia es el martillo para asegurar ese predominio barriendo a los competidores. El logístico de la mafia de Kansas, que quiere comprarle a la familia de *Fargo* sus camiones y sus rutas, prefiere no gastar balas en exceso para evitar alboroto. Pero el propósito, les anuncia a sus hombres de acción, es económico. “Si la gerencia nos dice que adquiramos el territorio lo hacemos. Ya sea con efectivo o mandando cuerpos a la morgue”.

6
CÓMO SER INVISIBLE

El 9 de abril de 2013 un testigo de identidad reservada con pasado en la policía santafesina se presentó en la Fiscalía Federal N° 1 del centro de Rosario y esperó a que lo llamaran. No se demoró en rodeos cuando lo atendieron. "Vengo a denunciar a una banda que vende drogas con la policía". Hizo referencia a una decena de personas pero enfocó centralmente a Luis Roberto Medina. Lo señalaba como el narco más grande de Rosario y afirmaba que vendía droga con el auspicio de la policía provincial.

El texto mencionaba las direcciones de siete locales de venta, zonas de distribución del negocio, identidades de vendedores medianos y asesinos por encargo. Como dato decisivo aportó que el socio principal de Medina era alguien que estaba preso en una cárcel de Buenos Aires desde ocho meses antes. Su nombre era Esteban Lindor Alvarado.

La investigación fue asignada a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. A partir del momento que la recibió el jefe de esa fuerza en Rosario, Emilio Lencina, elevó 14 informes a la Justicia Federal que sobresalían por detalles acumulados en trabajo de campo. Con ellos se completó un expediente de nueve cuerpos en el que se destacan, de manera notable, las conexiones de Alvarado con el negocio de las drogas.

El elemento central de uno de los informes era un video. Las imágenes mostraban un punto diminuto en el cielo que tomaba, al acercarse a tierra, la forma de una avioneta. Se puede ver que la pequeña aeronave aterriza en un campo, el piloto arroja unos bultos, cierra la puerta y despega. El video estaba en una notebook secuestrada a Alvarado en el año 2012, cuando un fiscal bonaerense, que lo perseguía por robo de autos de alta gama y lo llevó a prisión, la obtuvo como evidencia.

En ese cúmulo de informes que llevó tres años de trabajo quedaba muy claro quién era y a qué se dedicaba Alvarado y sus colaboradores. Confeccionaron planillas donde constaban nombres, datos personales, actividades, lugares de movimiento usual, informes migratorios y fotografías. Más de 1800 páginas sobre una organización de narcotráfico de robustos vínculos policiales, explicitados por otra parte, en momentos en que una violencia criminal difícil de descifrar dejaba en la ciudad marcas sangrientas. Tenían indicios claros de la organización criminal de Alvarado como para avanzar en su persecución. Pero la Justicia Federal, por razones que nadie conoce, no lo hizo. A la mayoría de los mencionados les esperaba un destino común: presos por la justicia ordinaria o asesinados.

El mayor valor que tiene la causa federal 5433/2013 es que deja al desnudo, por primera vez en un ámbito oficial, la existencia de una relación estrecha entre Medina y Alvarado. La perdurable incógnita es por qué a esa pesquisa la dejaron congelada. Su inicio se produjo ocho meses antes de que a Medina lo acribillaran con 18 balazos junto a su novia en el acceso sur de la ciudad el 29 de diciembre de 2013. Para entonces hacía siete meses que Alvarado estaba preso en la cárcel de Campana como jefe de una banda de ladrones de autos de alta gama.

La evidencia de que la Justicia Federal de Rosario dejó llenarse de moho fue utilizada por dos fiscales de la justicia provincial. Esos dos funcionarios mostraron cómo esos negocios de drogas y la protección policial eran el motivo notorio de cuantiosos hechos de violencia. Con esa prueba no solo condenaron a Alvarado sino a varios de los jefes policiales que trabajaban para él.

Un servicio de uno de ellos como jefe de la Brigada Operativa de la División Judiciales fue comandar la persecución a Los Monos. Tenía motivos legales para hacerlo. Pero al avanzar lo que hacía era sacarle su principal competidor a su protegido y cómplice.

El día en que el comisario Lencina declaró en el juicio de Alvarado el aire de la sala se cortaba con trincheta. El oficial de la PSA mostró el video de la avioneta. Contó que los narcos ordenan que les saquen los asientos, para que entonces el piloto viaje solo en aparatos con tanques suplementarios y así tener más autonomía de vuelo. Aludió a los vuelos irregulares que cubren rutas desde Paraguay a Córdoba y

Santa Fe. Este era uno de esos.

Advertir la relación de la avioneta con Alvarado fue todo un golpe de suerte. Y de ojo. El video fue tomado con un viejo celular Blackberry desde adentro de una camioneta que esperaba a la avioneta en un camino rural. Pero el que filmaba dejó apoyado el teléfono adentro del vehículo y la cámara, que no toma precauciones, registró el número de identificación del parabrisas. Con ese guarismo se pudo determinar la patente del vehículo. Era una Hilux que estaba a nombre de Jorge Antonio Benegas. A quien al final de ese juicio lo condenarían a cinco años de prisión por ser la mano derecha en asuntos comerciales del principal acusado.

A Lencina le preguntaron cuánto tiempo trabajó en el caso. “Tres años”, respondió. Con serenidad, solvencia y datos explicó cuánto tiempo investigó desde que llegó la denuncia inicial de aquel testigo reservado. Hicieron seguimientos en el terreno, armaron informes patrimoniales y movimientos migratorios. Con ello perfilaron la actividad del grupo narco de Alvarado, la trama de sus relaciones económicas y la cobertura policial del clan.

Los fiscales quisieron saber qué obstáculos había encontrado para avanzar en el trámite. Señaló que constantemente en la Justicia Federal le negaban pedidos de habilitar escuchas telefónicas que robustecerían la prueba. El caso lo tenía el juez federal Marcelo Bailaque. Le insistieron si conocía los motivos por los que su pedido no prosperó y la causa fue abandonada. “No tengo idea”, dijo.

En el momento del alegato para pedir penas contra Alvarado por hechos violentos, no por drogas ya que no era asunto de su competencia, el fiscal Luis Schiappa Pietra no se olvidó del detalle: “En el peor momento de la violencia en la ciudad, en el año 2013, se empezó a generar evidencia de esas conexiones en la Justicia Federal de Rosario, que sin explicación razonable nunca fueron tenidas en cuenta. Esa evidencia sólida entonces desechada sí la estamos usando en este juicio. Pero la omisión nos parece muy grave. Por lo que vamos a pedir que el Consejo de la Magistratura de la Nación evalúe la conducta de quienes tenían a cargo la investigación y que no autorizaron medidas cruciales para el avance de ese trámite”.

Los informes del comisario Lencina eran el tratado sumario que

explicaba la criminalidad de ese momento en Rosario, las claves de la violencia, sus nombres propios, sus imágenes en fotos y videos, las rutas de los billetes. Ese trabajo le habría permitido entender a la ciudad a qué fuerzas se enfrentaba. Los pecados mortales de la justicia lo impidieron.

Lo que dijeron los fiscales provinciales que pidieron condena es que durante mucho tiempo la Justicia Federal contó con información clave sobre el grupo de Alvarado, que tenía supremacía en el comercio de estupefacientes en Rosario, y rehusó avanzar por motivos desconocidos, a la vez que decidió no compartir información con la justicia provincial cuando allí eran públicas las investigaciones por delitos de sangre entre grupos ligados al comercio de drogas.

“La denuncia al juzgado federal fue de 2013. Allí se identifica a Alvarado, Medina y a todo un contexto. En ese momento Santa Fe ardía”, dijo Schiappa Pietra. El juez federal actuante en el caso denegó de manera reiterada los pedidos de intervenciones telefónicas que en base a lo que surgía del trabajo de campo se hacían sobre los sospechosos. Las negativas a interceptar esos celulares iban en desmedro de una pesquisa exitosa porque los sospechosos, advertía el policía investigador, cambiaban continuamente sus líneas.

El relato del testigo reservado que inició la pesquisa de Lencina nombraba como actores importantes del campo de la droga a gente que aún no era célebre. Por ejemplo, Luis Pollo Bassi, el que desafiaría a Los Monos desatando una locura de sangre. O el prestamista Lucio Maldonado, al que ordenaría eliminar Alvarado seis años después. También a José Arandia Chinen, conocido como el Negro José, el mismo que en 2010 había bregado por lo necesario de un armisticio entre Medina y Alvarado para evitar que en el arrebatado avance del negocio todo el mundo terminara muerto.

El que había hablado de ese acuerdo empujado por el Negro José era el confidente mutuo que tenían Medina y Alvarado. La relación del Negro con ellos provenía del barrio donde los dos eran capos. Había hecho trabajos para uno y otro antes de que se volvieran competidores. No estaba intentando jugar a dos puntas. Los trataba a ambos de la época en que no había conflictos, antes de que devinieron enemigos. Le había recomendado a Medina que se abriera porque lo

iban a matar.

Con Alvarado no se habría animado. Para él Esteban, como lo llaman los próximos, había sido igual de ambicioso que Medina pero más audaz. Conocía de memoria la prehistoria de su relación con la policía. Recordaba que el arranque de Esteban fue robando y comprando motos para desguace. Siguieron autos y camionetas. Pero en 2002 comenzaron sus negocios con las drogas. Por esos años Alvarado empezó a acercarse a contactos uniformados que lo llevaron rápido y en persona a reuniones a la Jefatura de Policía donde, decía el confidente doble, mantenía almuerzos y cenas con altos jefes dos veces por semana.

El confidente contaba que Alvarado fue socio en un cargamento de cocaína a Portugal por el cual quedó detectado y preso Ariel Spadoni, dueño de una concesionaria de motos. Usaron tambores de pulpa de pera congelada donde se disimularon 1235 kilos de cocaína.

Alvarado hacia 2006 tuvo la primera causa formal por drogas. Fue el mismo año en que, según sus viejos socios, celebró con la policía el acuerdo de la chatarrería, donde morirían acribillados bajo balas policiales cuatro de sus allegados. Pero esa causa de drogas no avanzó.

Su crecimiento evidenció una faceta que ninguna organización criminal de la ciudad tendría: la diversificación económica. Alvarado tuvo una intuición genial y certera: creyó que para financiar la logística de sus emprendimientos ilegales necesitaba empresas legales.

Pero ese castillo de efectivo se construyó sobre una pila de cadáveres. Con las morgues duplicando los turnos de trabajo, con las ambulancias y los furgones fúnebres corriendo todo el día por los suburbios, con matadores y adictos deambulando como fantasmas por una ciudad que no los comprendía a ellos ni a la dimensión de lo que se enfrentaba.

7
EL TELÉFONO DE ROSA

Una antena de telefonía a la altura de Villa María captaba el movimiento de un celular. Y para Esteban Alvarado todo vuelve a derrumbarse. Fue un 1° de febrero de 2019 al mediodía. La referencia de la ubicación la proporcionaba una línea intervenida. Era Rosa Capuano, la mujer de Esteban, que hablaba con la dueña de una cabaña en las sierras. Los investigadores de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) de Santa Fe detectaron el dato escuchando desde Rosario. “Estaremos allá en dos horas”, dijo la mujer.

El Ministerio de Seguridad decidió que una brigada de tres hombres de la fuerza de elite provincial saldría para Córdoba. La referencia sugería que Alvarado y su familia estaban en un parador turístico de Embalse Río Tercero. Por los datos soltados por unos gitanos conocieron que se movían en un Jeep Renegade rojo. Para evitar filtraciones el dato quedó blindado entre cuatro personas en Rosario. Esa misma noche los tres policías viajaron en una camioneta particular, con armas personales de portación legal y vestidos de civil. Nada que los identificara como policías. Así llegaron al lugar indicado.

Era un camping privado de casas flotantes llamado Almafuerte. En el predio hay un amarradero, que es un muelle natural donde atracan lanchas, y un área verde con parrilleros junto al lago. El sábado al mediodía los policías se pusieron con discreción a barrer la zona. Con binoculares uno de ellos detectó que había una familia sentada en las mesas de un parrillero. Reconocieron a la mujer, de quien tenían fotos. Rubia, mediana estatura, sonrisa franca, buen físico. Era Rosa, sin dudas. Pero el supuesto Alvarado no se asemejaba a la fisonomía que le conocían. No era el hombre robusto y retacón de siempre. Tenía barba, una gorra encasquetada que no dejaba ver la cara y una contextura notoriamente más delgada.

Uno de los efectivos ingresó al camping solo y pasó muy cerca del hombre. Le pareció que, pese a su delgadez, era la persona buscada. “Para mí de los que están acá es el más parecido a Esteban. Pero está mucho más flaco”, reportó el policía observador a su jefe.

Los enviados llamaron entonces a la comisaría de Embalse y dos patrulleros se dirigieron al camping. Fue entonces que irrumpieron por detrás los otros dos policías santafesinos. Cuando Alvarado advirtió a la patrulla captó con exactitud lo que estaba pasando. A todo lo que le daba salió corriendo hacia el lago. Pero el jefe de la TOE le dio la voz de alto empuñando un arma. Cuando llegó a la orilla Esteban metió la mano en el bolsillo. “Levantá las manos donde pueda verlas”, le gritó el policía, temiendo que tuviera una pistola. Esteban sacó el teléfono del pantalón cargo y lo arrojó al agua. En ese momento fue dominado.

“Alvarado, sabés quién te agarró, somos de la TOE, policía de Santa Fe”, le dijo el hombre que lo sujetaba de espaldas mientras le colocaba las esposas. Era Maximiliano Bertolotti, jefe de la brigada actuante. Alguna vez Bertolotti diría que su interés era que se enterara de que lo habían agarrado policías santafesinos. Una especie de revancha disipada e improbable. Porque sabía que la policía santafesina era la que históricamente lo había cuidado.

Un policía se sumergió en el lago y fue tanteando en el lecho opaco. No parecía fácil el objetivo. Pero tras una búsqueda al tacto de cinco minutos dio con el celular —un iPhone 7— que seguía funcionando.

Enseguida lo entraron esposado a la comisaría de Embalse. Los hombres de la TOE quedaron inquietos cuando estuvieron allí. Se trataba de una seccional pequeña, con mínimas condiciones de seguridad para alojar a un hombre al que señalaban como poderoso, influyente y dispuesto a todo. Lo quisieron sacar al dispensario del pueblo para hacer la revisación médica en un móvil común con un solo policía en el volante. Bertolotti los convenció de que no.

En el momento en que hacían los trámites del acta Alvarado volvió a cruzarse con el hombre que lo había detenido. Estaba con las esposas hacia adelante y por eso le tendió la mano. “Lo felicito, no es fácil atraparme a mí, en esto soy una persona importante”. Bertolotti no sintió que fuera una ironía. Le dio la mano.

El ministro de Gobierno de Córdoba, Juan Carlos Massei, envió

desde la capital mediterránea dos dotaciones del grupo de elite ETER (Equipo de Tácticas Especiales Recomendable) y un batallón del Cuerpo de Infantería. Estos custodiaron la comisaría hasta el traslado a la cárcel de Bower.

Por una participación, como imputación inicial, el destino de Alvarado surgía complicado. En principio tenía la condena pendiente de ejecución sobre un robo de autos en Buenos Aires.

Pero su horizonte judicial se ensombrecía con otra cosa. Para los autores materiales o ideológicos del homicidio del prestamista Lucio Maldonado, agravado por la participación de dos o más personas, es prisión perpetua. Es una pena mayor de la que suelen recibir organizadores de narcotráfico. Pasarían tres años para que tres jueces le dictaran por unanimidad la pena máxima. Y se descubriera no solamente cómo había instigado la muerte de Maldonado. También cómo se había convertido en un empresario sólido a través de economías criminales diversas, cómo había financiado sus delitos a través de sus empresas y cómo estas habían podido prosperar gracias a que ni la policía ni la Justicia Federal especialmente usaron la enorme prueba que demostraba esa evolución.

Después de que lo atraparan en el camping Alvarado pasó una semana preso en la cárcel de Bower. Desde Santa Fe comisionaron al mismo grupo para que lo buscara y lo trasladara a Rosario. Esta vez con dos camionetas con cuatro policías tácticos como escoltas.

Le tocó retirarlo de Bower al mismo policía que lo había doblegado a la orilla del lago. Cuando lo vio, Alvarado lo saludó y solo le recriminó que no lo hubieran trasladado rápido. “Me dejaron enfriar una semana acá a propósito”, le dijo.

Bertolotti quiso encargarse de llevarlo él mismo en el auto asignado, un Volkswagen Vento celeste que usaba el ministro de Seguridad. Lo subieron a Alvarado en el asiento de atrás, esposado, pero con una cadena agregada que le sujetaba brazos y piernas, y que iba enganchada con candado al anclaje del asiento. Al lado se ubicó un custodio. El jefe de la TOE se colocó en el asiento delantero en diagonal a Esteban para poder verlo durante el viaje.

Y, sobre todo, para poder conversar y escucharlo. Un poco como Ulises, con la tentación de oír el relato de esa fascinante sirena del

campo del hampa, aunque sin estar amarrado, el que iba con cadenas era Esteban.

Viajaron en silencio unos 150 kilómetros durante una mañana soleada por la autopista a Rosario. Al llegar al peaje de James Craik uno de los móviles se adelantó para que en la garita el señalero levantara la baranda y no detenerse. Esteban notó que a ambos costados de la dársena por la que pasaban había dos uniformados con armas largas.

“Estos ven mucho Netflix”, dijo.

El jefe le preguntó si miraba series. Se pusieron a hablar de cine. Esteban hizo una crítica a los narquitos nuevos que balean a cualquiera imitando los personajes de las series de violencia urbana en Colombia. En un momento comentó que su película favorita era *El Padrino*. Dijo que la había visto infinidad de veces y que había sacado de ella muchas enseñanzas.

Un año después el jefe policial recordaría la mención. Fue cuando, antes de balearle la casa, le arrojaron una cabeza de perro a la perito contable de la unidad fiscal que investigaba el patrimonio de Alvarado para la acusación en juicio.

En la película, el cantante Johnny Fontane es el ahijado de Don Corleone. En una boda un quebrantado Fontane le cuenta a su padrino que necesita un papel en una película para relanzar su carrera, algo que el rico productor Jack Woltz ya le había negado.

El *consigliere* de Don Corleone interviene y le pide como favor a Woltz que le dé a Fontane el papel que tanto desea. Pero el productor se niega enfáticamente por un problema previo que tuvo con el cantante. Lo hace mientras le muestra en una caballeriza, orgulloso, a su mejor pura sangre. “Seiscientos mil dólares en cuatro patas”, le indica.

La siguiente escena es un montaje libre que muestra a Woltz en su dormitorio. Está metido en la cama y se nota que hay una huella de sangre que al destaparse avanza por su mano. Se despierta y su ropa de cama está teñida de enormes manchas bermejas. ¿De dónde viene la sangre? Lo sabemos después de escuchar el aullido del productor. A los pies de la cama está la cabeza seccionada de su caballo.

En el juicio Esteban rechazará la responsabilidad de la mayoría de

los delitos que le endilgan. Dice que no ordenó matar a nadie. Que la idea de su vigor empresario es una fábula de los fiscales. Pero acepta que tuvo la idea de tirar la cabeza de perro a la contadora que lo investigaba. Y le pide disculpas.

En el resto del viaje Alvarado le habló a los policías de la importancia que le daba a su familia. No mencionó nada relacionado con sus atribuidos delitos, con las personas que había conocido, con haber mandado a ejecutar gente. Todo lo que profirió, recuerdan sus acompañantes, lo hizo desplegando un carisma notable, con un don muy atractivo de conversación, con una inteligencia espontánea y vehemente.

Comentó que le gustaban los aviones. Que él mismo era piloto. “Una vez tuve que aterrizar con viento de cola”. Dijo que lo logró y que se sentía muy a gusto con ese logro.

8
EL QUE HABLA MUERE

Mariana Ortigala sentía calor en el lado izquierdo del cuerpo, como si algo vibrara sobre la piel de su brazo y su cuello. Allí tiene tatuada una cruz que se incrusta en una rosa y después sube, como si trepara como una enredadera, y se envuelve en llamas que toman forma en la mirada de un tigre. El ardor más punzante, según ella, era cerca de la muñeca donde tiene tatuada la inscripción: “Protegida de Dios”.

Esa noche no durmió bien. Quizá esa sensación de estar sofocada tenía otro origen, más alejado de lo místico y más cercano a lo terrenal. A la mañana siguiente iba a ir al Centro de Justicia Penal de Rosario con Carlos Argüelles, un mecánico que adulteraba los autos que robaba Esteban Alvarado. Argüelles había sido uno de los hombres de mayor confianza del jefe narco, enemigo de Los Monos. Sabía cada detalle de su vida. Ortigala lo había convencido de declarar contra su jefe. Fue complicada la tarea, porque el miedo que irradiaba Alvarado era atroz.

Mariana Ortigala ya lo había hecho. También había cambiado de bando, hoy estaba en las filas de Guille Cantero. Lo hizo, según ella, para sobrevivir. No creía en la protección que le podía dar el Estado. En cambio, estaba convencida de que era más efectiva la seguridad que le aportaba el líder de Los Monos, que está preso condenado en la cárcel de Marcos Paz. En la justicia la versión era diferente. Sospechaban que ella se había convertido en uno de los eslabones principales de Los Monos, que no solo recibía seguridad, sino que también hacía negocios en nombre de Guille.

“Carlitos” era mecánico y había estado al lado de Alvarado durante más de una década y media. “Toda una vida”, decía con melancolía. Él tenía una prolijidad extrema para adulterar los autos que la banda robaba y luego vendía. Quedaban impecables, como nuevos, decía. No

solo conocía de memoria ese mundo de ladrones sino también el otro capítulo, el del narcotráfico, que era mucho más pesado. Una cosa lo llevó a la otra. El mecánico sabía cómo eran los vínculos con la policía, los negocios que irradiaba Alvarado, que era lo que interesaba conocer de primera mano a los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra. Apostaban que en el juicio contra Alvarado el mecánico se transformaría en una carta importante.

A las 10 de la mañana, Mariana tenía previsto pasar a buscar al mecánico por el taller. Carlitos aún tenía dudas y estaba nervioso. Sabía a lo que se enfrentaba. No había pegado un ojo en toda la noche. La cárcel le daba temor, pánico. Se hacía preguntas obvias. ¿Qué iba a pasar con su familia? ¿Quién los iba a mantener? La prisión era su destino si se negaba a contar los negocios de su jefe. Mariana le dijo que le darían protección desde la fiscalía, pero eso no le servía de nada, porque todo su negocio era ilegal. Se encontraba en una encrucijada. Pero estaba harto de Alvarado, de sus locuras. Y lo torturaban las muertes. No podía más.

Mariana subió al auto rojo estacionado sobre la entrada del garaje de su casa en Roldán. Había tomado sol en la pileta y completado su rutina de ejercicios que garantizaban tener un cuerpo cuidado, que no le envidiaba nada a una fisiculturista. Tenía puesta una musculosa negra, un short de jean desflecado y unas zapatillas. Usaba el pelo corto, con la nuca al ras, que dejaba ver el tatuaje que subía por su hombro.

Los dos sicarios esperaron el momento justo, cuando ella saliera de su casa y se subiera al auto. Parecía todo cronometrado. Seguían sus pasos desde hacía días. Cuando el auto clavó los frenos los perros ladraron con ese poder de intuición extraño, de que algo malo iba a pasar.

Dos hombres bajaron, uno de ellos con dos pistolas, y comenzaron a disparar. Mariana estaba sentada en el auto cuando escuchó los disparos. Con reflejos frenéticos saltó al lado del acompañante. Y ahí sintió un ardor en la espalda, cerca de la cadera. Pero siguió porque no sentía dolor. Tenía que salvarse, escapar de las balas. La muerte estaba ahí, a pocos metros. Los sicarios habían quedado detrás de su auto, a su espalda. Fueron segundos. Ella abrió la puerta del acompañante y

salió corriendo, mientras las balas le zumbaban. Logró salvar su vida al trepar, herida de tres tiros, una pared de dos metros de la casa del vecino.

Ese día 13 de marzo de 2020, Ortigala tenía planeado llevar a Argüelles a declarar. No lo pudo lograr. Terminó internada en el hospital Español con siete disparos. Salvó su vida por un milagro. Los sicarios, según contó, la siguieron hasta el sanatorio. Preguntaron a qué área la habían derivado. Era demasiado ejecutarla dentro del hospital. Los riesgos eran altos y se fueron sin cumplir su tarea de matar a la "traidora", como la tildaba Alvarado.

El ataque contra Ortigala no impidió que Argüelles contara todo lo que sabía de su exjefe. Pero antes de que eso sucediera tenía que llegar la venganza. El ojo por ojo que había desangrado Rosario. A las 19.32, Mariana recibió de un contacto de la fiscalía de Rosario los videos del ataque. Todavía estaba internada. Tres tiros le habían dado en la espalda y en los glúteos. La suerte estaba de su lado.

Las imágenes de las cámaras de seguridad resultaban clave para saber quiénes eran los sicarios que habían querido matarla. Ella no tenía dudas de que se trataba de soldados enviados por Alvarado. Pero el objetivo en aquellas horas era identificar a los tiradores.

El video empezó a pasar de teléfono en teléfono. A las 21.02, las imágenes llegaron al celular de Otniel Almonte de León, un dominicano que era uno de los principales matones a sueldo de Guille Cantero. En ese momento estaba prófugo. Cumplía los encargos de su jefe con suma eficiencia y también con un alto grado de saña. Empleaba algo que no era común en Rosario. Tener trato con las víctimas, de manera agradable, que no mostraba ninguna intención oscura, y después matarlas como si nada. Así había hecho con el policía Cristian Ibarra el 22 de julio de 2019. Se subieron a un auto, donde empezaron a charlar y en el momento justo sacó su pistola y le voló la cabeza.

Cinco minutos más tarde, el video que había llegado al teléfono del dominicano entró al celular de Pablo Nicolás Camino, otro hombre cercano a Guille Cantero, que desde la cárcel de Marcos Paz había montado el plan para la venganza. Matar a Alvarado, detenido en Ezeiza, era imposible, pero alcanzaba con asesinar a su gente. Esa era

la dinámica que se había impuesto en Rosario desde el crimen de Claudio “Pájaro” Cantero, hermano de Guille.

Como sucedía cada vez que se ponía en marcha la maquinaria de la venganza, la información era clave. En solo unos minutos empezaron a circular nombres, que llegaban a los teléfonos de los alfiles de Guille Cantero. Otro hombre cercano al líder de Los Monos, Damián “Toro” Escobar, referente de la barra de Newell’s, también recibió los videos. Había que encontrar rápido a los autores para planear el contraataque.

“Escuchá. Escuchame otra cosa. Hay un buen billete. Hay que juntar la gente. Yo ya hoy fui a hacer los puntos donde me mandaron. Ya tengo todo. Fui hoy tempranito. Ahí hablé con Anteojito —otro de los sobrenombres de Guille Cantero— y me dio el OK! Te da las herramientas [las armas] para laburar. Todo”, ofertó a un sicario uno de los hombres del Dominicano.

Unas horas después empezaba a llegar información a los sicarios de Guille. A Pablo Camino le llegaron datos precisos, identidades y direcciones de tres hombres de Alvarado: Nicolás “Fino” Ocampo, Adrián “Muertito” Fernández y Rodrigo Carlos Sánchez. Dos de ellos iban a morir a los pocos días.

Sánchez fue ejecutado el 19 de marzo de 2020, seis días después del ataque a Ortigala. El Fino Ocampo fue asesinado a balazos cuando llegaba a su casa de Ocampo al 6600 a bordo de una camioneta Toyota Hilux modelo 2012 en compañía de uno de sus pequeños hijos el 16 de abril de 2021. Y Muertito Fernández fue atacado tres veces, pero sobrevivió. Guille Cantero no había olvidado vengarse.

El crimen de Sánchez fue planeado por Jonathan Brezik, un hombre muy cercano a Los Monos, de quien se dice que tiene un contacto muy cercano con Celestina Contreras, la mamá de Guille. Brezik se crio en el barrio Las Flores dentro del núcleo del clan. Con el tiempo se transformó en un hombre temible, que maltrataba y tenía un trato humillante con los “soldaditos”, los que a diario ponían el cuerpo y la mente para disparar y vender droga.

Brezik planeó el crimen de Sánchez, una de las manos derechas de Alvarado, desde la cárcel de Resistencia, donde había sido trasladado tras caer en una investigación por tráfico de drogas. El plan para vengar el intento de asesinato de Mariana Ortigala comenzó dos días

después de que el sicario le disparara con dos pistolas a la mujer.

Ese día el hermano de Brezik robó un auto para utilizarlo en el crimen de Sánchez, que se iba a concretar cuatro días después. Su hermano pidió un remise desde una pizzería en San Martín y Garay. El Renault Logan le iba a servir para usar en la ejecución de Sánchez. Mientras esperaba que lo buscara el remisero que iba a ser robado hablaba con su hermano, preso en la Unidad Penal Nº 7 de Resistencia.

—¿Qué auto es? —preguntó Brezik a su hermano.

—Es un Logan rojo.

—Ah, ¿son buenos esos o no?

—Y sí, boludo, siempre tienen autos buenos en las remiserías.

—¿No es arriesgado que estés en una pizzería?

—No, nunca vengo, no tiene cámara ni nada. No soy boludo.

El Renault Logan terminó en manos de dos sicarios, que lo usaron para interceptar a Sánchez, en Wilde y Urquiza. También utilizaron una camioneta Toyota Hilux de apoyo, para asegurar que no pudiera escapar de Fisherton. El ataque se produjo a plena luz del día, cerca de las 11.30, en una zona donde hay varios comercios, entre ellos, una panadería, un supermercado, la sede del Centro Asturiano y una escuela.

Sánchez era un engranaje vital en la organización de Alvarado. Estaba anotado como empleado de la empresa Logística Santino SRL, una firma dedicada al transporte a nombre de Rosa Capuano, la expareja de Alvarado, que configuraba una de las pantallas para mover el dinero. Sánchez iba esa mañana a la empresa, ubicada a 150 metros de donde lo ejecutaron.

Desde la cárcel de Resistencia, Brezik había intentado matar a otro de los clásicos enemigos de Los Monos, Luis Paz, el padre de Martín, conocido como Fantasma, que fue asesinado el 8 de septiembre de 2012, un crimen que representó un mojón en la historia de la violencia narco en Rosario.

Los Monos querían matar a Paz por la misma razón que Alvarado pretendió ejecutar a Mariana Ortigala: por boquear. En ese mundo de la mafia el que hablaba, confesaba, declaraba o pasaba información a un rival tenía como destino la muerte. Alvarado y Guille Cantero coincidían a pleno con ese apotegma. Los Monos estaban convencidos

de que Paz había sido el principal informante del juez de instrucción Juan Carlos Vienna, que investigó la llamada megacausa de Los Monos con un séquito de policías de la División Judiciales que eran empleados de Alvarado. Pero además algunos creían que Paz fue quien planificó el crimen del líder de la banda Claudio "Pájaro" Cantero, para vengar la muerte de su hijo. En ese territorio del ojo por ojo todo era posible. Por eso para ellos era clave matar a Paz.

Después de que lo detuvieran en una causa de narcotráfico en Santa Fe, Paz fue enviado al penal de Coronda en un principio. Allí Brezik planeó asesinarlo con una granada. Había contactado a un interno del penal santafesino, apodado Chino, a quien le ofertó pagarle un millón de pesos y una casa. "De última agarrá el millón y yo te hago dar una casa donde quieras", le ofreció. El ataque no prosperó por problemas dentro de la cárcel de Coronda. Luego, Paz fue trasladado a Rawson.

El que siguió en la lista después de Sánchez fue otro hombre clave del entorno de Alvarado. Los Monos pagaron a dos sicarios 270.000 pesos para que ejecutaran a Nicolás "Fino" Ocampo. El crimen se concretó de manera quirúrgica el 16 de abril de 2021, cuando los sicarios Uriel Reynoso y Brian González mataron a Fino dentro de su camioneta Toyota Hilux en la puerta de su casa. En el asiento de atrás estaba su pequeño hijo de dos años, ahijado de Alvarado, que no sufrió un rasguño.

Ocampo era un hombre que tenía un largo recorrido en el mundo narco. Había sido una persona de confianza de Luis Medina, y tras su trágica muerte pasó a cumplir órdenes del que había mandado a matarlo, Alvarado.

Hacía pocos días que Fino había salido de la cárcel, al asumir en un juicio abreviado pertenecer a la banda de Alvarado. La condena había sido leve y, tras estar unos meses en el penal de Piñero, empezó con salidas transitorias. Una de las cosas que hizo al recuperar la libertad fue comprarse una camioneta nueva, pero la transacción no fue fácil. El vendedor le daba vueltas hasta que con un par de apretadas la cedió. El día que le entregaron la Toyota Hilux lo mataron.

Cuando llegó a su casa en Ocampo al 6600 vio algo extraño. Era un hombre con experiencia, que actuaba con precaución. En el asiento de atrás iba su hijo de dos años, Lindor, elegido por el segundo nombre

de su jefe, que era el padrino. Al estacionar la camioneta vio a dos pibes en moto. Se dio cuenta de que lo iban a atacar y trató de salir hacia adelante, pero había un montículo de arena. Dio marcha atrás y chocó contra un Chevrolet Prisma estacionado. Quedó encerrado y a merced del sicario, que se bajó de la moto y lo ejecutó. Le asestó tres veces en el pecho. No le vació el cargador ni fue por un tiro de remate. Tres disparos, nada más.

A pesar de los tres agujeros en el pecho, Fino trató de bajar de la camioneta, pero no tenía fuerzas. Se desmoronó sobre el volante ante el llanto desconsolado del bebé que estaba en el asiento de atrás. Ocampo sabía que su cabeza tenía precio. Había escuchado el rumor de que ofrecían un millón de pesos por matarlo, una cifra alta para el mercado de la muerte rosarino. Días antes había contado eso en la fiscalía de Rosario. Le ofrecieron una custodia permanente, pero la rechazó. La gente que vive en el costado ilegal del mundo no puede tener custodia. Lo sabía. Como era testigo protegido dos o tres veces al día lo llamaban a un celular para monitorear si estaba bien. Ese día el teléfono sonó pero ya estaba muerto.

9
EL TESTIGO QUE SE ANIMÓ A HABLAR

Sentado, con un cuaderno de espiral sobre las piernas, en una sala en el Centro de Justicia Penal de Rosario, Argüelles tragó saliva y comenzó a contar su historia, y la de su jefe Alvarado. Aclaró que su testimonio era “voluntario”. El fiscal Luis Schiappa Pietra lo interrumpió y aclaró un punto esencial, que el mecánico estaba imputado.

Para Argüelles ese detalle tenía poca relevancia, quizá porque presentía que su vida se acortaba con cada palabra. “Por dónde empiezo”, preguntó.

“Voy a ir directamente a lo que importa en esta causa. Estoy imputado por una serie de hechos. Entiendo que yo participé. Entonces, ya que vengo a hablar de Esteban Alvarado en perjuicio de él sería justo que yo me haga responsable de mis actos. Yo no me quiero desvincular de nada”, respondió al fiscal, que comenzó con las preguntas.

Lo que sigue es el relato de Argüelles en primera persona. Argüelles acomodó la voz y habló con serenidad. Como si no hubiera mañana.

Él me llama y me dice: “Carlitos, están allanando mi casa en el country y tu taller. Andate para allá [para el taller] así no rompen la puerta”. Voy con la llave y me presento. Les pregunto a los policías de qué se trataba el allanamiento y me explican que era por la causa del crimen de Lucio Maldonado. Al principio no entendía nada, pero después cuando vuelvo a mi casa, y aparece Alvarado, él me explica lo que estaba pasando. Me dijo que necesitaba que le hiciera un favor. Cuando lo llevé al centro me contó qué era lo que quería. Pensar que fue la última vez que lo vi.

Me dijo que él sabía quiénes eran los testigos que habían declarado en su contra en la causa de Maldonado. Él quería que yo me contactara con

Rodrigo Ortigala, que era mi amigo. Tenía que averiguar en qué auto se movía y qué chapa patente tenía el auto. Si no lo hacía iba a enfrentar las consecuencias, me dijo. Y advirtió que si le contaba a Rodrigo o iba a hablar con los fiscales él se iba a enterar. Eso era cierto porque una tal Pipa le pasaba la información desde la fiscalía.

Me dio directivas precisas de dónde me tenía que reunir. Tenía que ser un lugar con buena luz y con cámaras de seguridad. Frente a Rodrigo debía gesticular con la cabeza y decir "qué hiciste, amigo". Le dije que yo no era Pablo Echarri y le recordé que había estado internado en un psiquiátrico, donde salvé mi vida cuando empecé a escuchar a Facundo Cabral.

Me reuní con Rodrigo Ortigala en una estación de servicio de Avellaneda y Córdoba. El plan que tenía preparado Alvarado era que en esa reunión Ortigala me iba a contar que había matado a Maldonado. Y yo le tenía que decir: "Qué hiciste, amigo". En realidad, el que lo había matado era él, pero lo que iba a hacer era usar esa conversación en perjuicio de Ortigala. Porque el plan era desviar la investigación del crimen de Maldonado hacia Ortigala y Los Monos.

Lo llamé a Ortigala con la excusa de que tenía que comprarle un Fiat Palio. El auto salía 20.000 pesos; le entregué la mitad. El problema fue que no pude ver la chapa patente de su auto. Me reuní una segunda vez y detecté que había llegado en un Peugeot 208. El auto no era de Rodrigo, sino de un vecino. Alvarado me dijo que se iba a encargar él. Decidió contratar a un detective privado que le consiguió todos los datos.

A partir de ese momento la información empezó a llegar. Era un Volkswagen Up y consiguió la chapa patente. Alvarado me dijo que me iba a mandar un auto que tenía que ser igual que el de Ortigala. El auto me lo trajo uno de los empleados de una agencia de autos de Alvarado. Pero no era el mismo. Era un modelo más viejo. Él me mandó una filmación y se veía claramente que el auto que me habían traído era más viejo. Entonces me mandó a comprar los faroles traseros a Sader. También conseguí un paragolpe y lo pinté. Quedó bien pero el auto era diferente. Yo en ese momento no sabía qué iban a hacer con el auto. Alvarado lo único que me dijo es que era para desviar la investigación.

Después me enteré de cómo era el plan. Iban a pasar con el auto que yo había arreglado por la casa del Chulo Olivera. Lo tenían que detectar las cámaras de seguridad. Lo que querían mostrar era que Ortigala iba a la

casa de Chulo. Iban a incriminar a los dos en el crimen de Maldonado. Yo estaba atrapado y esto iba a tener consecuencias. De eso estaba seguro. Las imágenes de esas cámaras se sumaban a lo que yo debía declarar, que Ortigala me había confesado que había matado a Maldonado. Lo que faltaba era que iban a relacionar dos celulares. Chulo estaba siendo escuchado en la fiscalía.

Yo tuve que ir cerca del casino, para que el teléfono impacte en las antenas. Me senté en un banco de bulevar Oroño. Yo debía contestar mensajes de texto como si fuera Chulo. Ese número quedaría automáticamente registrado. Yo estaba nervioso. En un momento mandé dos veces el mismo mensaje. Del otro lado contestaba una chica, como si fuera Ortigala.

El mensaje que yo envié decía: "Hablame a este que el otro está pinchado". "Viste que salió todo bien lo del gordo". Yo ahí me bajé. Querían hacer una balacera con una moto, que la iban a chocar. En la moto iban a dejar armas que se usaron en el homicidio de Maldonado y la llave de una cochera donde había pistolas y teléfonos de Chulo Olivera y Rodrigo Ortigala dentro de una chata Chevrolet S10. Esos teléfonos tendrían la conversación que yo escribí junto con la chica. Por eso es que el abogado se acercó a la fiscalía a pedir que se abran estos teléfonos porque vincularían a estos clientes.

El Volkswagen Up blanco me lo trajo Sánchez, que hace poco fue asesinado. Es un empleado de Alvarado. El plan estaba en marcha porque iban a encontrar el arma que se usó para matar a Maldonado en la casa de Ortigala. El arma estaba en poder de alguien cercano a Esteban. Me doy cuenta de que si pasaba esto Rodrigo no salía más. Él quería que encontraran el arma, la filmación en lo de Chulo, la conversación en la estación de servicio.

Trato de ser lo más prolijo posible. Por eso leo este cuaderno. Acá fui anotando todo. Yo hago un esfuerzo terrible para acordarme. Y escribí todo porque necesito un orden. El plan para infiltrar los teléfonos ya lo dije. Voy ahora a hablar sobre Maldonado. La conversación que mantuve con Hugo, el hermano. Hay otras muertes relacionadas.

El fiscal lo interrumpió. Y le preguntó si Alvarado se comunicaba por Telegram.

—Él decía que los mensajes se autodestruían. Usaba Telegram y otras aplicaciones. El teléfono no era el único. Él se manejaba con tres o cuatro teléfonos. En el departamento que estaba viviendo quedaron varios teléfonos. Me contestaba que estaba en Chile, que estaba flaco. Lo conozco desde el año 2001. Voy a contar lo que pasó antes y después del crimen de Maldonado. En realidad, lo que pasó después ya lo conté. Para contar lo que ocurrió antes no necesito el cuaderno. Alvarado iba a tomar mates al taller. Me dijo que el día que mataran al Gordo Lucio se iba a armar un bondi bárbaro. Mató a tanta gente, que no me sorprendió lo que dijo. Él manda a matar. Alvarado asesinó con sus propias manos muy pocas veces, porque si ve sangre se desmaya. Él manda a matar siempre.

A mí no me gusta que muera la gente ni siquiera los malos. Por eso hago lo que hago. Antes de la muerte de Maldonado está el crimen de Enrique. Es un chico que secuestraron, torturaron y tiraron en Soldini. Este chico hizo algo malo que lo relacionaba con Maldonado. ¿Por qué sé que está relacionado? Me lo contó Alvarado personalmente. Que se encargó otra gente. Cómo llamar a la familia de Enrique y decirle dónde estaba el cuerpo. Alvarado venía al taller y me decía cómo hacer para que aparezca el cuerpo sin llamar a la policía. Me daban ganas a mí de llamar, pero estaba todo corrompido. Un día voy a la calle French, cerca de Nicaragua. Me lleva a buscar unos repuestos de un Focus blanco. Eran de un auto que me iban a traer de Buenos Aires. En ese encuentro miro el auto y en el asiento trasero había un charco muy grande. Le pregunté de quién era la sangre. "Es el auto con el que se secuestró a Enrique", me dijo.

Él me dijo que cuando mataron a Enrique estaban preparando a un sicario. Que le pusieron una bolsa negra en la cabeza y lo asfixiaron. Cuando lo encontraron a Lucio Maldonado me dijo que no iban a saber nunca porque ni los huesitos quedaron.

Yo tenía un taller en la calle Miller. Estaba atravesando el fallecimiento de mi hija. Soy un chapero de la buena escuela y un muy buen pintor. Hicimos amistad con Esteban y me empezó a llevar autos. Conocí a su mamá. Después tuve captura en 2004. Nos fugamos cinematográficamente. Nos fuimos en una avioneta a Paraguay. Yo les di fotos a los fiscales. Nos fuimos desde acá a Córdoba y desde ahí nos tomamos una avioneta. Estuvimos unos meses. La avioneta era de Esteban y la manejaba un chofer

de él. Me puso a pintar avionetas en Paraguay. Me tenía que levantar temprano. Traían cigarrillos Rodeo a la Argentina. Porque estaba viva la madre y no permitió nunca que se cambiara de rubro.

Me voy a enfocar en algunas cuestiones que refieren a su personalidad y a las cosas que hizo. Cuando andaba con Luis Medina los trapitos se acercaban a pedirle monedas. Le daban una moneda y picaneaban a los chicos. Es una costumbre de él. Torturar. Hace juegos con ácidos. Te pone el líquido y tenés que esperar dos minutos. Usaba el ácido con el que se saca la pintura de los coches. Le gustan esos juegos.

Cuando tenía que matar a alguien siempre decía: "Antes que llore mi mamá que llore la tuya". Papelitos en el aire. Qué significa. En la gestión de Maximiliano Pullaro, que nunca lo dejó de nombrar e investigar, quería que con una avioneta tirara 100 o 200 kilos de marihuana envuelta en papeles con la palabra Pullaro. Entre tantos muertos que muera alguien más. Le quería secuestrar el hijo a Pullaro. Se había enterado a qué club los chicos iban a hacer sus actividades.

Un conocido de él dijo que sus hijos iban a ese club. Iban a intentar llevarle una nota de que le iba a secuestrar los hijos si no dejaba de investigarlo. Cuando tuvo la causa en Buenos Aires puso a Pierri como abogado. Nunca lo defendió y mandó gente para que lo mataran. A Carlos del Frade también lo quería asesinar. Me lo contó personalmente. Se jacta de las cosas que hace. Ahora detenido dice que él no tiene banda. Somos más de 30 en esta causa. A Guille Cantero no lo quiere. El próximo Robledo Puch va a ser el Guille, porque no va a salir más. Yo tengo 40 homicidios que ordenó.

Le dije "Esteban: Dejá de matar, porque esto va a ser ojo por ojo. Dejá de matar". Me dijo que nadie le va a faltar el respeto. Cuando se separó de la mujer, vi que se le había salido la cadena, se subió al colectivo de la noche y del tráfico de droga. Él nunca anduvo en la noche. Yo le dije que se comprara un hotel en Brasil. Me empujó y me dijo: "¿Quién te dijo a vos que yo quiero vivir tranquilo?".

Me van a matar a mis hijos con una ametralladora. No quiero que muera más nadie. No llegué a irme. Si me hubiera ido antes no estaría acá. Este es un plan de Dios y esto algún día se iba a saber.

En los búnkeres que había a la gente se la mataba en la puerta porque era la manera que se cerrara un búnker. Así acaparaba territorio. Recuerdo

que había tres chicos en un rastrojero comprando droga y los acribillaron para que cerraran el búnker. A los chicos de los búnkeres les tiraban nafta y los prendían fuego vivos. Una mamá perdió a dos hijos. A uno le decían Carpincho, lo mataron a balazos y a su hermana la prendieron fuego y después la tiraron en la vía y se supo después que estaba embarazada.

Acá no se muere nadie si Esteban no decide que se muera alguien. En 2012 se jactaba de haber matado a más de 100 personas en esta guerra narco dictadura. Sirve para el marketing aunque la víctima fuera un gil. Era para que sepan que estaba ahí.

Si firmás con nosotros firmás con el diablo. Paquetito de yerba. Cuando se lo visitaba en las cárceles de Campana o Urdampilleta, no necesitaba decir andá a matar a tal. Decía "cómo anda Carlitos", se tocaba la axila izquierda y había que matarlo.

Pienso que esto es una narco dictadura. En la dictadura secuestraban personas, las desaparecían, les sacaban sus bienes, robaban y torturaban. Son dos engranajes que actúan al mismo tiempo. Estamos sometidos a una narco dictadura que él impone.

Por más que le den 50 años él va a seguir matando. Él está creando un imperio. Ahora va a ser letal para todos. No tiene más nada para perder. Él es el asesino serial más grande de la Argentina. Si no lo aíslan, vamos a estar a merced de él.

10
EL INCORREGIBLE

En la primavera de 2021 el frío no parece querer irse. El calor no llega nunca, y con la intensa humedad, la celda queda congelada durante la madrugada. La cárcel de Marcos Paz está en el medio del campo, a cinco kilómetros de la ruta 6, en la provincia de Buenos Aires, y las heladas tardías transforman el calabozo de Guille Cantero en una heladera.

Él le cuenta a una amiga que lo visita seguido que el invierno fue duro, pero que ahora siente más el frío en la noche porque los guardiacárceles le sacaron el colchón. “Durmió en el piso, enrollado con unas frazadas”, graficó la visitante. El hombre que los medios señalan como el más temido y poderoso de la mafia rosarina duerme sobre el cemento gélido de la cárcel.

Cantero pasará gran parte de su vida en una prisión. Está preso desde junio de 2013, cuando se entregó a los policías con una sonrisa socarrona. Pensó que estaría en la cárcel unos días, meses, quizá. Descontaba que sus abogados lograrían sacarlo, como otras veces había sucedido con él y su hermano Pájaro. Pero el contexto político había cambiado. Ahora Los Monos eran un enemigo del poder político, al que habían arrinconado con sangre en las calles. Y Guille había traspasado todos los límites imaginables dentro de la cárcel.

El muchacho de lentes y pelo negro enrulado como su padre, que no había terminado la escuela primaria, se había transformado en un líder. Y ese camino lo había transitado en la cárcel. Porque cuando su hermano vivía era él quien manejaba los hilos del clan familiar, que empezaba a despegar a nivel económico. Aspiraban a dejar de ser unos matones que habían surgido en la más extrema pobreza para transformarse en narcos. Pero con Guille a la cabeza nunca lograron dar el paso que llevara a disfrutar del dinero que acumulaban. Porque

todo lo que giraba en torno a él era muerte, caos y violencia. Tenía una rabia incontenible que hacía visible en las burlas que ensayaba cada vez que tenía que participar de un nuevo juicio. “El problema es que está jugado. No tiene nada que perder. Y eso es lo peor”, interpretó uno de los fiscales, como si fuera un psicólogo. Había colaborado para extender la ristra de condenas contra Guille, que superan los cien años.

El crimen de Pájaro, un mes antes de que Guille se entregara, alteró todo. Él y su hermanastro Ramón Machuca, junto con otros miembros de la banda, salieron a vengarse con más sangre. Arrinconaron con crímenes al gobierno del socialista Antonio Bonfatti. Con el paso del tiempo esos renglones de violencia se naturalizaron. Guille fue uno de los responsables de que los asesinatos se transformaran en una postal casi cotidiana. Para mantener su rústico negocio había que disparar.

Después de la muerte de Pájaro había empezado otra etapa, un ciclo diferente, que nada tenía que ver con el pasado, con ese bajo perfil que había impuesto su hermano mayor. Guille era distinto, más visceral. Por eso algunos lo apodaban Loco. Las circunstancias habían llevado también a que el negocio cambiara. Los Monos se habían transformado en una franquicia criminal. La marca era el miedo y el terror. El negocio de la droga había pasado a ser un engranaje más de una paleta de actividades criminales, que incluían secuestros, extorsiones y, sobre todo, pago por protección. El negocio de la protección se vuelve provechoso y menos riesgoso que el comercio de drogas. Un esquema de funcionamiento de la mafia italiana más clásica, que emigró a los suburbios de Nueva York y Chicago a principios del siglo XX.

Guille estaba enceguecido esa primavera de 2021. Porque por primera vez comenzaba a pasarla mal dentro de la cárcel. Ya no alcanzaba el dinero, que malgastaba para coimear a los guardiacárceles. En el Servicio Penitenciario Federal empezaban a pasarle factura por los problemas que habían generado los beneficios que obtenía a cambio de parvas de plata.

Dormía en el piso, sin colchón, por una razón muy sencilla. Era la segunda vez en menos de un mes que le habían encontrado un teléfono fijo dentro del calabozo. La noticia había generado un escándalo y una

denuncia penal contra los guardiacárceles por parte del Servicio Penitenciario Federal, a los que habían desplazado. La marca de Los Monos la utilizaban también los medios de comunicación. Se había transformado en una banda con sello propio, como lo había sido en su momento Miguel Ángel “Mameluco” Villalba en la provincia de Buenos Aires. Esa caracterización simple y llana que hacían los medios le servía como una inmejorable estrategia de marketing para su franquicia.

La noticia del hallazgo de los teléfonos fijos había llegado a la tapa de los diarios nacionales. Por las redes sociales circulaban hasta memes con la desopilante situación. Un narco que en su celda tiene un escritorio y un teléfono fijo, como si fuera una oficina. Cuando la pandemia de covid comenzaba a amainar esa imagen parecía aún más desopilante, porque la mayoría de la gente había estado en una situación similar durante meses.

Los policías santafesinos que allanaron la celda le tenían más que respeto. Transpiraban miedo. Guille estaba de buen humor aquella mañana. Usaba el mismo recurso de siempre, la burla, que expresa un desprecio profundo. No paraba de reírse, como siempre en esas situaciones. Esa risa generaba pánico entre los que tenía enfrente, sobre todo cuando se refería a los policías por el nombre que llevaban en el uniforme. Eso ponía más inquietos a los efectivos. Uno de ellos no aguantó y decidió romper el silencio que reinaba dentro del calabozo. Le aclaró que “cumplían órdenes de la fiscalía”. Era casi un ruego. Guille se daba cuenta y jugaba con eso. “Quédense tranquilos, ustedes son laburantes. No les voy a hacer nada a sus familias”. Los policías asentían en silencio, mientras completaban el acta.

Guille había encontrado siempre la grieta por donde obtener provecho. Estaba preso desde hacía ocho años y había entendido cómo se mueve el sistema, a pesar de que siempre peleaba contra él, y cómo encontrar una ventaja. ¿Para qué? Nadie sabía responder esa pregunta, que no solo tenía como destinatario a Guille, sino a esa generación de mafiosos que había construido poder asentado en la muerte y el dinero. Pero la mayoría estaban presos o dentro de un ataúd. ¿Dónde estaba el negocio?

Siempre podía hacer lo que quería. Y también pagaba para

mantenerse con vida, porque había una larga lista de personas que querían matarlo. Al tope de esa nómina estaba Esteban Alvarado, preso en la cárcel federal de Ezeiza.

Ese instante de fragilidad, que lo mostraba durmiendo en el piso envuelto entre frazadas sucias, lo dejaba desguarnecido, y exhibía su debilidad. Los guardiacárceles le habían sacado fotos, por lo que sospechaba que Alvarado disfrutaba con esa postal. Los allegados a Guille creían que Alvarado había pagado para que le sacaran el colchón. En la prisión estas situaciones toman una importancia simbólica muy intensa.

Por eso Guille estaba cargado de una ira que no podía controlar. “Es fuerte y sobre todo muy vivo”, repetía su amiga. Fortaleza y viveza eran una conjugación temeraria en la Argentina, donde muchos habían prosperado con esa configuración. No era necesario mucho más. Que Guille Cantero fuera el líder de una de las bandas más poderosas dejaba expuesta la propia debilidad y deterioro del país.

La cárcel le había servido también de protección. Porque a pesar de que no era fácil matar a un líder mafioso, en las calles de Rosario, Guille no habría sobrevivido. Ahora también temía que después de la humillación viniera la muerte. Eso mascullaba su círculo más íntimo.

Guille había pasado por siete cárceles. Cuatro federales, como Ezeiza, Rawson, Resistencia y Marcos Paz, y dos santafesinas, Coronda y Piñero.

Al principio creyó que todo se venía abajo, cuando lo sacaron de Piñero, una prisión ubicada a 20 kilómetros de Rosario, y lo trasladaron en plena madrugada, en medio de un infernal operativo de seguridad, a Ezeiza. Los elegidos por el gobierno de Mauricio Macri para dar un mensaje de fortaleza eran Cantero y Emanuel Chamorro, lugarteniente del líder de Los Monos.

El entonces ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, le había pedido a su par nacional Patricia Bullrich que sacara al líder de Los Monos de Santa Fe. Era una demanda expresa del gobernador Miguel Lifschitz, que veía, a diferencia de sus antecesores, que el problema de la violencia iba a explotar aún más: no estaba errado. En agosto de ese año salieron 50.000 personas a la calle bajo el lema Rosario Sangra. Reclamaban paz y justicia.

El argumento que usó Pullaro fue que había peligro de fuga. Otro componente que daba legalidad al traslado era que la Justicia Federal había procesado por primera vez por narcotráfico a los miembros de Los Monos, por lo que ahora se podía enviar a Cantero a una prisión federal. Lo querían lejos de Santa Fe, como si la distancia resolviera problemas mucho más profundos. En esa época se aproximaba el inicio del megajuicio contra 27 miembros de Los Monos —comenzó en noviembre de 2017— y temían que Rosario se transformara en un caos.

Para el Servicio Penitenciario de Santa Fe los máximos líderes de la banda planeaban escapar. En un escrito que presentaron en la justicia provincial denunciaron que el 3 de enero de 2016, en una requisa en el pabellón donde estaban los integrantes de la banda, habían secuestrado teléfonos celulares. Unos días después, según el Servicio Penitenciario, desde fuera del perímetro del penal, habían disparado contra los guardiacárceles que divisaron drones que sobrevolaban la cárcel. ¿Quién saldría a negarlo?

La desesperación era tal para sacarse de encima a los dos presos más peligrosos que en el trámite ocurrieron cosas extrañas. A las tres de la madrugada los guardiacárceles de Piñero entraron al pabellón C y gritaron: “Orden de traslado”. Guille salió esposado, en ojotas, pantalón corto y una remera negra. En esta ocasión no sonreía. En otro móvil del Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias (GOEP) estaba Chamorro. La caravana de seis camionetas con más de 20 efectivos arribó a las 6 de la mañana a Ezeiza, donde los canales de televisión empezaron a transmitir en vivo la llegada de los dos convictos pesados. Los que no se enteraron de que iban a llegar dos presos de “alta peligrosidad” eran los guardias del Servicio Penitenciario Federal.

Los abogados de Cantero presentaron un hábeas corpus, pero nada podía parar la decisión política que se había tomado. El gobierno de Macri no quería que se repitiera un nuevo escándalo en una cárcel como había ocurrido el 27 de diciembre de 2015, cuando se fugaron los presos Martín y Cristian Lanatta, y Víctor Schillaci, que fueron atrapados en Santa Fe después de quince días de una huida que sirvió para alimentar a los canales de TV en enero. La saga, una road movie

litoraleña, fue desopilante.

A Guille tampoco lo querían en el penal federal de Ezeiza. Tres días después de llegar a esa cárcel lo subieron a otra camioneta para hacer un viaje más largo: a Rawson, donde en 1972 se había producido el fallido intento de fuga de presos que pertenecían a Montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Pero Guille no tenía la sagacidad de Mario Santucho y Fernando Vaca Narvaja, que planearon junto con los presos políticos durante meses una fuga que no salió como esperaban.

Estar allí, preso en medio de la Patagonia, a más de 1400 kilómetros de Rosario, era insoportable para Cantero. Hasta conseguir un celular se comunicaba con el teléfono público de la cárcel con Leandro Vilches, por entonces uno de sus amigos más fieles, que estaba preso en Piñero. Ya mostraba que no le importaba nada. Con el Gordo Vilches mandaban droga en encomiendas. “Son todos giles”, le decía Guille. Estaba harto, porque además su abogado Fausto Yrure no lograba sacarlo de ese agujero con la premura que él pretendía. Entonces, el 19 de agosto la ansiedad lo superó.

Llamó a la oficina del juez de Sentencia Edgardo Fertitta. Atendió una pasante, que se llevó el susto de su vida. Del otro lado de la línea, el líder de Los Monos fue claro: “Decile al juez que se meta el traslado donde ya sabe y que lo voy a matar”. Fue sentenciado a seis años y ocho meses por coacción agravada a un magistrado.

El regreso a Santa Fe se concretó después de una tragedia, que conmovió a los miembros del clan Los Monos, y sobre todo a Guille. Su sobrina Daiana, de 16 años, hija de Pájaro, había fallecido en un accidente automovilístico en la ruta 35, cerca de Bahía Blanca, cuando viajaba con otros dos amigos de Guille hacia Chubut para visitar a su tío.

La tragedia aceleró la presión de los abogados de Guille y dos meses después regresó a Santa Fe, a la cárcel de Coronda. Fertitta, el juez al que había amenazado y prometido matar por teléfono desde Rawson, y su colega del fuero federal Marcelo Bailaque avalaron el traslado de Cantero y de Chamorro, que estaba alojado en Neuquén. Yrure, el abogado de Guille, advirtió en ese momento que se trataba de una decisión “basada en cuestiones de dignidad y humanidad”.

En la cárcel de Coronda dijeron que habían preparado un sector de máxima seguridad para Guille. Las autoridades de la prisión sabían que eso era puro cuento. Pero él nunca tramó fugarse. Parecía vivir a gusto en la cárcel. “Aunque parezca mentira hay gente que tiene mejor calidad de vida dentro de un calabozo que en la villa en la que vive”, analizó uno de los abogados de la organización.

“Cantero no es un preso violento, que va a generar conflictos. Es complicado en otro sentido…”, sintetizó un guardiacárcel de Coronda, el viejo penal donde Cantero había tejido buenos lazos con los agentes penitenciarios. El dinero aceitaba las relaciones, como siempre.

En septiembre de 2017, cuando se encontraba alojado en la cárcel de Coronda, le instalaron un teléfono fijo en su celda que lo ayudó a organizar un secuestro extorsivo, el primero de su carrera criminal. Dentro de la cárcel se había dado cuenta, según coincidieron varias fuentes judiciales que seguían escuchando a Guille, que tenía limitaciones para manejar la venta de drogas desde sus propios búnkeres. Vanesa Barrios, su pareja, hacía ese trabajo, como lo prueba la primera causa federal que enfrentó la banda, aunque no era sencillo armar la logística del negocio tras los barrotes. Ese condicionamiento lo llevó a pensar en otros emprendimientos. Decidió ampliar la paleta de su actividad criminal. Ese fue el cambio central, y aunque hubo empresas que no funcionaron, los niveles de recaudación aumentaron de manera significativa. Todo el engranaje que movía era rústico y, como siempre, con alto voltaje de violencia.

Un año después de retornar a Coronda planeó insertarse en una actividad de alto riesgo: los secuestros extorsivos. Este tipo de delitos generan un gran impacto político y social. Y además logran mover los resortes de las fuerzas de seguridad y la justicia. El plan de Guille era comenzar su saga de secuestros con el mundo que conocía como la palma de su mano: los narcos de Rosario. Aparece en este capítulo de la vida carcelaria de Cantero algo que permanecerá en el resto de su recorrido criminal, que se basa en obtener dinero de personas que transitan por una zona oscura o gris. Sacaba provecho de una ciudad donde una economía sombría, que vivía de negocios espurios, cubría una franja importante. De esa manera se garantizaba que nada saldría de ese submundo, porque las víctimas, protagonistas de delitos o de

actividades en negro, no podrían denunciar.

La idea general estaba rodeada de argumentos que tenían sentido. El problema era la mano de obra, como en otros rubros de la economía legal. Guille solo podía usar la violencia extrema para conseguir dinero, pero no mostraba la sagacidad e inteligencia necesarias para transformarse en el líder de una organización con cierto aire de sofisticación, como ocurrió en otros países. Ninguno de los capos narcos de Colombia y México habían egresado de Harvard, pero estaban rodeados de gente que tenía otros contactos y sobre todo perspectiva del negocio.

El secuestro de Franco Rodríguez, el hijo de un carnicero, terminó por transformarse en una comedia negra. El muchacho que en ese momento tenía 19 años logró salvar su vida por un error estrafalario. Los cómplices de Guille Cantero se habían equivocado cuando raptaron a Rodríguez en la zona sur de Rosario. El joven estaba aterrorizado cuando dos hombres se acercaron en Seguí y Espinillo y lo redujeron; le pusieron una capucha y lo subieron a un auto. Lo llevaron a un galpón, donde en teoría estaría cautivo hasta que entregaran el dinero del rescate. En ese momento se dieron cuenta de que se habían equivocado de víctima. El primer signo que divisó Ezequiel "Parásito" Fernández fue el lunar. El pibe que habían secuestrado no tenía esa marca en la cara que sí mostraba la foto de referencia. Una hora después, Parásito atendió el teléfono que sonaba de manera insistente. No le quedaba otra y tuvo que admitir el error ante su jefe.

"Es otro, nada que ver este, amigo", le dijo a Guille. Por las dudas, Cantero le ordenó que lo dejaran unos minutos más en el galpón. "Esperamos un rato a ver qué dice", apuntó el líder de Los Monos, que le refregó a Parásito: "Este es más seco que ustedes".

Ya que lo habían secuestrado por error, quizá podían sacar algo. Rodríguez les contó, después que lo golpearan, que era empleado de una metalúrgica y que su padre tenía una carnicería. Guille le dijo a Parásito que le "pidiera al padre dos kilos de asado". Era una broma. El emprendimiento criminal había sido un desastre. Rodríguez vivió momentos de angustia desaforada en manos de los sicópatas a los que desde la cárcel Guille les había encargado el primer secuestro de su

carrera. Meses después se fue a vivir a Europa.

Santiago Marquevich, jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (Ufese), tomó el caso como una prioridad, porque conocía a Los Monos, tras su paso por la fiscalía federal de Rosario. Temía que, a pesar de que habían fallado, los Cantero irrumpieran en el negocio criminal de los secuestros. En ese caso las cosas se empezarían a complicar, y correría más sangre. La condena fue dura: diez años de prisión. Los dos "empleados" de Guille, Parásito Fernández y José Horacio "Grasa" Fernández no pudieron participar del juicio porque estaban muertos. Un sicario de Alvarado los había acribillado en solo segundos cuando estaban dentro de un auto en Granadero Baigorria, junto a Gerardo "Abuelo" Abregú. Alvarado había dado la orden de matar a los tres hombres de Guille porque sospechaba que el líder de Los Monos pretendía atentar o secuestrar a su hijo.

Nada podía salir peor para Guille. Lo iban a condenar por un secuestro extorsivo que había sido un fiasco, y a sus "empleados" los había ejecutado Mauricio Laferrara, el sicario más pesado de su enemigo.

Luego del malogrado plan, Cantero fue trasladado otra vez al penal de Piñero. Su abogado había logrado persuadir al camarista Daniel Acosta de las malas condiciones de detención que enfrentaba el líder de Los Monos en Coronda, donde estaba en un sector de aislamiento. Había sido como regresar a su casa, donde se abrió uno de los capítulos más pesados de su carrera criminal. Y allí también lo recibieron con la oficina lista: un teléfono fijo a su disposición.

La estadía en esa cárcel fue relativamente corta. Contaba con todos los servicios posibles, a pesar de que el Servicio Penitenciario decía que estaba en un sector de alto perfil, con los máximos controles. Pablo Cococcioni, secretario de Asuntos Penitenciarios, reconoció que era una categoría de presos a la cual el Servicio Penitenciario no estaba acostumbrado.

Después de varias idas y vueltas en el plano judicial, se aproximaba el inicio del primer juicio que enfrentaría la banda narcocriminal desde que había surgido hacía más de veinte años en el barrio La Granada, en un suburbio del sur de Rosario. Guille se había

transformado en un problema de Estado. Como las cárceles no estaban preparadas para enfrentar este nuevo entramado mafioso, como había señalado Cococcioni, tampoco la propia ciudad lo estaba para enfrentar un juicio de esas características. Cantero, como ya lo había hecho antes, volvió a dejar al descubierto las falencias del Estado, con su arma más preciada: el terror.

11
EL MIEDO DE LOS HOMBRES DE NEGOCIOS

El exdirectivo de la Bolsa de Comercio de Rosario se corre el saco hacia un costado y hace un ademán que parece exagerado. Muestra la culata de la pistola Glock 17, que lleva oculta en su cintura, con una funda Houston de kydex, un material parecido al plástico. La funda está sujetada por el cinturón, y se usa dentro del pantalón. A simple vista no se ve que lleva un arma.

El hombre peinado con fijador, que tiene el pelo brillante como de otra época, dice que no es el único que va "calzado", y es cierto. El miedo no solo acelera el pulso, sino que da vueltas en la cabeza, construye una paranoia que a veces toma forma real. Pero el miedo es algo que parece oculto. También se disimula como las armas que cargan muchos ejecutivos del centro de Rosario.

—¿Tiene portación, porque si no es ilegal?

—Claro que tengo portación.

—El trámite es engorroso y hay que cumplir varios requisitos.

—Sí, tener un juez amigo —responde el hombre de negocios y hace una especie de chasquido con su boca, que conjuga con una mirada cómplice y deja al descubierto su edad con ese gesto.

No es necesario decir: "Vos me entendés". El empresario veterano, que se dedicó toda su vida al corretaje de granos, admite como si fuera una charla de almacén de barrio que "nunca se vivió así". En realidad, él nunca vivió así, con un arma en la cintura, la misma que lleva un pibe que sale a matar. "Esto es una selva", apunta.

El establishment empresario de Rosario se dio cuenta del peligro cuando las balas comenzaron a picarle cerca. Apareció la "mafia", que firma las extorsiones y se hace escuchar con disparos que se incrustan en los frentes de las casas, negocios o empresas. La rúbrica "con la mafia no se jode" —uno de los sellos de Los Monos— amplió el radio

del miedo, que en un principio era exclusivo de los más pobres. Allí comenzaron las extorsiones y después penetraron en otros sectores más acomodados: los apretadores se dieron cuenta de que el negocio debía apuntalarse con esa franja de la economía, cada vez más ancha, que sobrevive ni en el blanco ni en la oscuridad total de la ilegalidad, sino en un terreno gris.

La Fundación Rosario y el Foro Regional Rosario, dos entidades que agrupan a empresarios de importancia, argumentaban en un principio que las noticias que encasillaban a Rosario como una ciudad narco, muchas veces de manera exagerada en Buenos Aires, "estigmatizaban" a la ciudad. Esa idea daba por superado el problema.

Después advirtieron, sobre todo en el Foro Regional, que no era un problema de enfoque periodístico. Ocurrió cuando empezaron a tener miedo, y el problema había dejado de ser un karma de la llamada "periferia", donde la sangre corría desde hacía más de una década.

Repetían el eslogan del entonces gobernador socialista Antonio Bonfatti, que aducía que los medios de Rosario no tenían esos enfoques, según advertía, "porque nos conocen". Había una realidad paralela. La millonaria pauta publicitaria extirpaba de los titulares la palabra "narco" cuando estaba asociada a la violencia. No le sirvió demasiado a su gestión.

Hoy muchos empresarios que muestran arrepentidos de no haber visto el problema en su dimensión real, sobre todo por ignorancia, y están aterrorizados. Amainar ese miedo cuesta dinero.

Un hombre más joven que el corredor de granos, que pertenece al mundo de las finanzas, es más preciso: "Tenemos miedo a los narcos y a los fiscales". La frase parece una síntesis ajustada. Pero no son solo los hombres de negocios los que transpiran miedo, sino también los abogados que hicieron mucho dinero con su trabajo. Aquellos que defendieron en los tribunales a los narcos más pesados. "Acá se respira pólvora todo el tiempo", grafica Carlos Varela que logró alejarse de a poco, casi como si nadie se diera cuenta, de la defensa de los miembros de la banda Los Monos. Las nuevas generaciones de narcos son más problemáticas, porque tienen más dinero, pero son "perros rabiosos", grafica.

El universo narco rosarino es algo particular. Los que "vivieron" de

los grupos mafiosos, abogados, contadores, financistas, ganaron mucho dinero. Se hicieron ricos. La mayoría de los narcos más importantes están presos o muertos. Los “ricos” son los sobrevivientes del negocio y cargan con el miedo que deja el resultado final.

Por eso en Rosario la riqueza se oculta, se disimula, se disfruta afuera, en Miami, Europa o más cerca, en Buenos Aires. No es que florezca un sentimiento de culpa, sino que exhibirla representa un riesgo. Un ejemplo es que uno de los principales empresarios de la construcción se mueve en un Volkswagen Gol. El auto importado que posee está en el garaje limpio y brilloso para pasear por Buenos Aires.

Roberto Fontanarrosa ensayó hace años que él prefería quedarse en Rosario porque era una ciudad que “tenía escala humana”. Ese concepto se contraponía a la mirada desde Rosario hacia la Capital Federal, un monstruo que se mueve sobre la base de ser impersonal.

Rosario era la contracara. Y los hombres de negocios disfrutaban de esa cercanía. Porque esa comunidad de amigos y conocidos generaba cierto alivio y sobre todo protección. No por casualidad Pablo Javkin, que se convirtió en intendente de Rosario en 2019, repitió al principio de su gestión la frase: “Los que nos conocen saben que somos gente de bien”. Le hablaba también al exdirectivo de la Bolsa de Comercio que hoy se mueve con una Glock en la cintura.

Una escena de esa proximidad con el problema la demarca un allanamiento que se produjo por una estafa inmobiliaria en la torre Aqualina, a metros del Monumento a la Bandera. El negocio ilícito se había gestado en una peña que hacían empresarios, gerentes de medios y delincuentes más rústicos en el quincho de la terraza de uno de los edificios más caros de la ciudad, ubicado a metros del Monumento a la Bandera. Cuando Guillermo Salazar Boero, expresidente de Terminal Puerto Rosario, vio las camionetas de Gendarmería abajo le pidió a su pareja: “Preparame el bolso”. Los gendarmes no llegaban a buscarlo a él, pero todo era posible.

“Hoy no sabés de dónde viene la guita. Y te podés comprar un quilombo gigantesco, con la mafia o con la justicia. Terminás con un tiro o en la cárcel”, advierte el hombre que maneja una cueva financiera en el centro de Rosario. “Esta ciudad es una gran cueva. Lo fue toda la vida, y mucho antes de que existieran los narcos, porque es

la génesis de una ciudad portuaria donde se mueve mucho dinero, blanco, gris y negro", admite uno de los referentes históricos del negocio.

El miedo genera un costo, no solo un riesgo. Un joven financista averiguó para comprar un auto blindado. "El blindaje que sirve, que es el que usan en Colombia, cuesta lo mismo que el auto. Es una fortuna. Ese modelo incluye la protección antibombas. Pero no es tan fácil porque además hay que pedir una autorización a la ANMaC. Hay que ser legítimo usuario de armas de fuego. Es un quilombo", rezonga.

El hombre de traje impecable se quiere mudar a un country, algo de moda en el rubro. Vive en una mansión en Fisherton, que tiene seguridad privada, con una garita con un guardia las 24 horas, pero igual se siente desguarnecido. "¿A quién le vendo esa casa?", se pregunta. Y analiza que su residencia es donde quiere vivir. "Pensé en alquilar una casa en un country, que no es para nada seguro, porque ahí hay más narcos que en ningún otro lado. Pero qué hago con mi casa. La tengo que demoler porque no se la vendo a nadie", plantea preocupado.

Dado Carey está vestido de ropa sport, con una campera de nailon, una camisa a cuadros y jean y zapatos con suela de goma. Su semblante lo aleja del ideario que la mayoría tiene de uno de los financistas más importantes de la ciudad. Parece un tipo común y corriente. Y lo es. Es de otra generación, menos devota de la moda sofisticada.

En lo que aún es una playa de estacionamiento, con techos a dos aguas de chapa y piso de cemento, se va a levantar un hotel cinco estrellas y un edificio de "alta gama", el primero que se edificará en el centro de Rosario que quedó devaluado por el poderío inmobiliario de Puerto Norte, donde se concentran las inversiones más fuertes.

Carey es uno de los inversores de ese nuevo desarrollo inmobiliario. En la presentación en 2020 no había ninguna autoridad de peso. Nadie del gobierno de Santa Fe ni de la municipalidad está deseoso de aparecer, nadie quiere quedar inmortalizado en una foto. Es por desconfianza, porque el emprendimiento pasó todos los filtros del Concejo Municipal y después de casi dos años se terminó por aprobar.

"Contratamos bancos que pasaron el escáner varias veces y no

encontraron nada. Era para asegurarnos de que no hubiese nada dudoso", explica Carey sobre los inversores.

En la playa de estacionamiento sobre calle Paraguay, con salida por San Lorenzo, donde se construye el complejo había montado un sector donde los invitados, en su mayoría inversores, podían recorrer el edificio, que tendrá una piscina de lujo en la terraza, con un dispositivo de realidad virtual. Uno de los que se colocó esa especie de escafandra de realidad virtual fue Gustavo "Gula" Pereyra. Este excomisario fue sobreseído en el megajuicio a Los Monos y se transformó en denunciante de funcionarios del Ministerio de Seguridad.

Luego declaró como testigo en el juicio contra Esteban Alvarado y describió la protección que tenía el narco entre policías que habían investigado a Los Monos. Ese hombre, que tiene dinero de una herencia familiar, según explicó, y es el dueño del inmueble donde funciona el restaurante Wembley, era uno de los interesados en invertir en un departamento junto al hotel cinco estrellas. El mundo de los negocios en Rosario plantea que las fronteras entre esos territorios ajenos y distantes con la mafia narco se rompieron. Y todo está bajo sospecha.

Ese día Dado Carey estaba aliviado. No era por el lanzamiento de la inversión que había tenido un recorrido burocrático acorde a lo esperado. El abogado que contrató la familia le había contado que su hijo iba a zafar de la causa judicial por lavado de dinero que lo había llevado a la cárcel en marzo de 2021. El alivio le duró poco. Patricio Carey rechazó, como sus otros socios, firmar un juicio abreviado, confiado en que podría sortear una condena. Pero el fiscal Sebastián Narvaja no dio el brazo a torcer. El llamado caso Carey era para la justicia un punto de inflexión. Se buscaba, a pesar de las evidencias que había, marcar la cancha a un sector como el de las cuevas, que se había convertido en una parte vital del engranaje mafioso. La financiera Cofyrco, del hijo de Carey, había cambiado 17.000 dólares blue a Marcelo "Coto" Medrano, un narco que después asesinaron en una estación de servicio en Granadero Baigorria.

En medio de una economía atravesada por una inflación en crecimiento, el dinero que se recauda en los búnkeres, como el que

provenga de cualquier otro lado, pierde valor. A esto se suma que la cocaína que se produce en Bolivia, Perú y Colombia, se adquiere en dólares.

Dado Carey no lograba comprender que su hijo Patricio quedara imputado en una causa que tiene su origen en el narcotráfico. El allanamiento que se hizo en el country La Rinconada, en las afueras de Ibarlucea, a fines de marzo de 2021 mostró el impacto que se buscaba. Patricio Carey fue sorprendido cuando dormía con su familia por efectivos de la Tropa de Operaciones Especiales con la cara tapada y armados hasta los dientes. El joven estaba desconcertado. Nunca se imaginó que su lujosa casa en el barrio cerrado que había desarrollado su padre pudiera ser copada por hombres de negro, encapuchados y armados.

Parecía una película. Para Carey, de terror. Qué tenía que ver esa escena con el pasado de la familia; la vida en el campo en Bogado, donde su padre y sus tíos se criaron en esa geografía sana, despojada de las oscuridades del mundo financiero que había cambiado de forma drástica. Entre los pliegues de una economía que cada vez avanzaba por la franja negra de la informalidad se había colado el crimen organizado. Algunos se subieron al nuevo negocio y a otros los pasó por encima.

¿Cómo quedaron enredados en esa maniobra Patricio Carey y sus dos socios, Fernando Vercesi y Guido Garay?

Los problemas para los Carey comenzaron cuando asesinaron a Coto Medrano y los investigadores reconstruyeron que ese día, 10 de septiembre de 2020, había comprado dólares en Cofyrco, una cueva en Corrientes 832, en pleno centro de Rosario.

Luego, la justicia detuvo a los socios de la financiera —Patricio Carey, Guido Garay y Fernando Vercesi—, ordenó los allanamientos de otras dos cuevas, Financiera Terranova y Trasban SA, y de un edificio de Puerto Norte, en la lujosa ribera rosarina, y se topó con un bolso con 174 documentos robados y perdidos que se usaban para ocultar la verdadera identidad de quienes querían realizar operaciones cambiarias sin dejar rastros.

Garay y Vercesi se declararon culpables de lavar activos del narcotráfico y recibieron una condena de tres años. No fueron presos,

pero se convirtieron en los primeros financistas rosarinos en cruzar el umbral y admitirse como narcolavadores, mientras que Patricio Carey y su hermano Eduardo quedaron imputados por encubrimiento.

La “desgracia” para los jóvenes financistas fue que a Coto Medrano lo asesinaron. Y cuando los fiscales Schiappa Pietra y Edery peritaron el celular del fallecido y reconstruyeron sus últimos pasos, se dieron cuenta de que había ido a Cofyrco a cambiar dólares. Medrano, según un informe de la AFIP, “no registraba en sus 45 años de vida actividades económicas lícitas, susceptibles de ser declaradas activas”. Pero sí acumuló una larga foja de servicios delictivos. Hasta que lo ejecutaron de quince tiros, se dedicaba al “cambio ilegal de divisas, comercio de narcóticos, compraventa ilegal de armas de fuego, delitos violentos cometidos con armas de fuego”.

Hay otras situaciones extrañas que pusieron al Grupo Carey en la mira de la justicia. Otros dos de sus operadores, Carlos Ciochetto y Carlos Aníbal Bacigaluppo, tienen procesamientos confirmados por sus relaciones con otro cuevero, Hugo Oldani, que ya no puede defenderse. Lo asesinaron en la ciudad de Santa Fe, a una cuadra del Ministerio de Seguridad, cuando integraba una red financiera cuyos hilos llegaban hasta la Corte provincial, algunos de los medios gráficos más importantes de Santa Fe y popes del sindicalismo.

Los casos de Carey y Oldani provocaron escozor en el ambiente financiero rosarino, que siempre salió indemne de todo. Por primera vez alguien les tocaba la oreja. Habían aportado desde siempre y a casi todos los partidos grandes sumas de dinero para las campañas a cambio de que nada los rozara. Por eso, los casos Oldani y Carey significaron el principio del fin para la gestión de Marcelo Saín como ministro de Seguridad del gobernador Omar Perotti, cuyo teléfono comenzó a recibir las llamadas de personas muy poderosas e influyentes de la provincia. Los VIP temieron por su libertad. Agitado, a la madrugada, tras enterarse del allanamiento al country de Carey, un empresario llamó a Perotti. Quería saber qué pasaba, qué se había roto. El poder político también utilizó esa simple insinuación, que nunca logró profundizarse ni destapar nada, para sacar réditos de los que podían aparecer en el radar de las investigaciones.

La cueva de Oldani movía dinero negro de poderosos y narcos por

igual. Eso explica por qué la hija del asesinado y una abogada del Ministerio de Seguridad fueron a la agencia de turismo en las horas que siguieron al asesinato y se llevaron una mochila, bolsos y una caja azul ante los ojos tolerantes de una fiscal que no las detuvo. ¿Qué se llevaron? ¿Solo dinero? ¿Documentos comprometedores? Esa cueva podía resultar explosiva, no porque les permitiera avanzar a los fiscales contra "los morochitos de la periferia", sino contra "los delincuentes que se apropian de parte de la rentabilidad que se produce en la periferia o dinero de la corrupción gubernamental que flota en esas mesas de dinero".

Saín terminó desplazado y la investigación no les hizo cosquillas a los poderosos. La justicia sí sostuvo que Oldani y los operadores del Grupo Carey participaron en la "intermediación financiera no autorizada", con "operaciones con cheques [...] e interviniendo en transacciones utilizando un mecanismo para ingresar divisas al país o transferirlas al exterior".

Saín no solo terminó echado del Ministerio de Seguridad sino también del cargo que había obtenido por concurso para manejar el Organismo de Investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), una especie de policía judicial. Era más peligroso en ese puesto que de ministro. A la par de la destitución, dos fiscales de Santa Fe lo imputaron de espionaje ilegal. El hombre que había creado la escuela de inteligencia en la Argentina, para reformar la ex-SIDE y sacarle los vicios de tramar más planes delictivos que legales, aparecía acusado de investigar de forma ilegal a empresarios, periodistas, funcionarios y legisladores. La torpeza política de Saín, que solo construyó enemigos hasta debajo de las baldosas, sin tejer alianzas para amortiguar los golpes que le iban a asestar, terminó de aislarlo de todo el ecosistema político santafesino y hasta nacional. Saín se transformó en pocos meses y sin hacer demasiado en el enemigo de todo el establishment. Los hombres que duermen la siesta y trabajan seis horas en sus oficinas, de los que se había burlado por las redes sociales, lo dejaron fuera de todo en un abrir y cerrar de ojos.

Pero más allá de que nada cambió, las investigaciones contra las cuevas financieras mostraron que ese costado oscuro de las finanzas servía no solo para mover el dinero de una ciudad con una economía

gris sino también eran el sistema bancario de los narcos. El caso de Gustavo Shanahan lo mostró con mayor nitidez que las aventuras del hijo de Dado Carey. La diferencia recaía en un punto clave: Shanahan sabía que el dinero que cambiaba provenía del narcotráfico. Y por el riesgo que representaba cobraba una diferencia mayor.

El 5 de noviembre de 2020 la Justicia Federal de Rosario procesó a Shanahan, extitular de Terminal Puerto Rosario, por narcotráfico, tras detectar que la banda liderada por el expiloto peruano Julio Rodríguez Granthon, preso en el penal de máxima seguridad de Marcos Paz, había cambiado más de 34.000.000 de pesos en esa casa de cambio de manera ilegal.

Shanahan nunca pisó los búnkeres que manejaba desde la cárcel Rodríguez Granthon, con soldaditos "descartables", cuyo destino probable sería la muerte o la cárcel. Pero ganaba dinero con los dividendos de ese negocio ilegal, al cambiar pesos ajados por dólares blue flamantes.

La causa que llevó al extitular de Terminal Puerto Rosario a la cárcel por unas horas y luego a su departamento con vista al río en Rosario, donde cumple detención domiciliaria, se plantea como una bisagra y puede transformarse en un caso testigo. Shanahan no fue procesado por lavado de dinero, sino por narcotráfico.

Con el impacto de esta causa se prendió una alerta en ese sector oscuro de las finanzas que vive gracias a una economía quebrada y que fomenta con permanentes regulaciones la existencia de un mercado paralelo, que se lo llama blue, pero que en el ambiente narco se lo apoda dark. Las tonalidades responden al nivel de riesgo en las operaciones, como se trasluce del caso Shanahan, que cobraba un porcentaje superior al de cualquier inversor porque sabía de dónde provenía el dinero: de los búnkeres de Villa Banana.

"Nos cobra un dos por ciento", le avisó por teléfono el 18 de agosto de 2020 Facundo Pérez a su jefe narco, Rodríguez Granthon, que está preso en el penal de Marcos Paz. "No es nada un dos por ciento", respondió para cerrar el trato con una cueva financiera del centro de Rosario.

Ese porcentaje era el plus que presuntamente Shanahan le cobraba al narco. Esa "tasa diferencial" respondía al riesgo de la operación.

Porque los 34.000.000 de pesos que Rodríguez Granthon quería cambiar, en una sola operación, provenían de la recaudación de los búnkeres que el Peruano, proveedor de Los Monos, posee en Villa Banana, uno de los lugares más marginales y pobres de Rosario.

Ese era el circuito por el que se movían la droga y el llamado dólar dark, divisa que se inserta en este mundo criminal con un precio mayor. Fuentes de este sector oscuro del mundo financiero señalaron que después de esta causa el precio para que los narcos cambien dólares será mayor. Calculan de entre un 5 y un 8 por ciento.

Rodríguez Granthon tenía urgencia por cambiar los pesos que recaudaban sus lugartenientes a dólares por dos motivos, según señalaron los investigadores: reducir el volumen físico del dinero, que era un problema. La recaudación de los búnkeres eran 34.000.000 pesos que ocupaban seis valijas. La otra necesidad que tenía el narco peruano era que para adquirir la cocaína en Bolivia, que luego sus hombres vendían en Rosario, debía conseguir dólares.

A la cueva financiera esa sola operación le dejó un dividendo extra de 680.000 pesos, que en total configuraron más de 1.000.000 de pesos. El riesgo era predecible y luego se hizo palpable cuando el 15 de octubre de 2020 fue detenido Shanahan, que fue socio hace más de una década de Jordi Pujol, el hijo del histórico expresidente de la Generalitat catalana, quien tuvo problemas judiciales en España luego de que el financista rosarino admitiera que había lavado 13.000.0000 dólares de este clan en el puerto de Rosario.

Shanahan fue uno de los hombres de negocios más poderosos de Rosario, con inversiones inmobiliarias millonarias como el complejo de barrios privados Los Pasos, detrás del country Carlos Pellegrini, y el Jockey Club. Para emprender este desarrollo que tuvo problemas y terminó en una demanda judicial millonaria, vendió sus acciones del puerto a Vicentin, una de las principales agroexportadoras de la Argentina.

Bruno Ayala, hombre de confianza de Perú, como le dicen a Rodríguez Granthon, el que recibió la orden, tenía que lograr que en la “cueva” financiera solo le cobraran un dos por ciento por encima del valor del dólar blue. Ayala se fugó antes de que fuera allanada su casa.

Se interpreta en la investigación que ese dos por ciento diferencial

que cobraba la cueva financiera tenía como intermediario o valijero a un exjugador de rugby, Marcos Díaz, y también se encuentra prófugo. Los investigadores tuvieron que acelerar los allanamientos porque habían salido a la luz los nombres de los policías federales que trabajaban de manera encubierta.

Díaz jugaba en la primera del club Atlético del Rosario y era quien mantenía las negociaciones para cambio de divisas con Ayala. Otro jugador de rugby también participaba en esas maniobras, era Román G., quien jugaba en el club Cobras de Brasil y llegó a integrar el seleccionado juvenil Los Pumitas.

La conexión de esos dos mundos, el del rugby y los búnkeres de la calle Valparaíso, en plena Villa Banana, fue generada por el dólar blue que el peruano Rodríguez Granthon necesitaba comprar desde la cárcel de Marcos Paz para seguir trayendo cocaína de máxima pureza a Rosario, donde su gente se encargaba de estirarla y ganarle mucho más que un dos por ciento para venderla en los búnkeres de la misma villa.

Desde las cárceles, tanto en el penal federal de Marcos Paz como en la cárcel de Piñero, en las afueras de Rosario, Los Monos delinearon un negocio que no parece tener límites, alimentado por el universo oscuro de un sector de la economía.

Las extorsiones a las financieras y arbolitos, que manejan la compra y venta de dólar blue, provocan un perjuicio económico a este negocio que llevó a que en la propia city rosarina, según contó un analista financiero, surgiera una nueva cotización de moneda norteamericana ilegal: “el dólar banana”. “Como financieras borders —no agencias grandes, legales y conocidas— y cuevas que trabajan con clientes pesados le tienen que sumar al precio del blue el costo de la extorsión, ahora hacen esa chanza para explicar por qué lo están vendiendo más caro”, afirmó.

12
CONTRATOS PARA MATAR

“El trabajo se tiene que hacer sí o sí, porque ya se pagó”, dijo Guille Cantero, el líder de Los Monos, desde la cárcel de Marcos Paz. Su tono no dejaba espacio para la duda. Era una orden que debía cumplirse. Del otro lado de la línea de su celular escuchaba esa directiva Fabián Giménez, preso en la Unidad Penal Nº 3 de Rosario. El “trabajo” que ya estaba saldado previamente era la ejecución del empresario Mauricio L. Su exsocio, que vivía en una mansión en Rosario y era el dueño de la firma Nutrilab, había pagado 500.000 pesos.

El crimen del empresario se iba a concretar el lunes 10 de mayo de 2021 a las 10 de la mañana, cuando Mauricio L. saliera de su casa con su auto o llegara a la fábrica de suplementos dietarios que posee en la zona sur de la ciudad.

La información la había captado la brigada Antinarcóticos de la Policía Federal, que investigaba una causa por narcotráfico, por lo que avisaron al fiscal Matías Edery de lo que se estaba gestando. Debieron actuar rápido porque el crimen se iba a concretar en pocas horas.

El fiscal ordenó que los agentes fueran a buscar de inmediato a su casa a Mauricio L.

Lo sacaron con un casco y chaleco antibalas de su casa y lo llevaron, con la excusa de que debía declarar, al Centro de Justicia Penal para resguardarlo. Pretendían que el muchacho no entrara en pánico, pero se equivocaron. Temblaba del miedo. Lo que querían evitar en la fiscalía de Rosario era que la información no se filtrara y que pudieran atrapar al sicario que iba a ir por la cabeza del empresario.

Hacía un día que los efectivos de la Policía Federal buscaban al sicario que iba a ejecutar el crimen, algo clave en esta trama, porque la orden que había dado Guille Cantero desde la cárcel de Marcos Paz era que “el trabajo se debía hacer sí o sí”. “Fueron momentos de

mucho estrés porque debíamos evitar que se concretara el plan para matarlo”, contó Edery.

Los efectivos de la Policía Federal detuvieron ese lunes a la mañana a Brian Josué, un joven de 28 años que cumplió una condena por homicidio. Era un sicario profesional. Se movía por la zona del Fonavi de Seguí y Rouillón, en el sur de Rosario, donde vive su madre, pero dormía en otro lugar: allí encontraron en los allanamientos “ropa de trabajo”, de grafa color beige, que había usado para matar el 16 de abril pasado a Nicolás “Fino” Ocampo, un narco que perteneció al clan Alvarado.

A Fino lo esperó cerca de su casa, y cuando llegó con su camioneta se paró enfrente y disparó tres veces. Tenía puntería y no provocaba daños colaterales. Ocampo llevaba en el asiento de atrás a su pequeño hijo de dos años, que solo sufrió algunos rasguños por el estallido de los vidrios.

“A Fino lo asesinó de manera quirúrgica. Tenía custodia policial porque había declarado contra su jefe. A pesar de eso lo mató de tres disparos a través del parabrisas y ninguna bala tocó a un bebé de dos años que estaba dentro de la camioneta”, reseñó una alta fuente de la investigación.

Brian Josué iba a recibir 150.000 pesos por matar al empresario Mauricio L. En la escala de pagos del sicariato es lo que recibe el tirador calificado. El sicario debe ser llevado por un “conductor” en una moto. Por esa función se cobra menos, un tercio que lo que percibe la persona que dispara. El riesgo es similar, pero la labor exige menos precisión.

El resto, más de 300.000 pesos se lo quedan los organizadores, en este caso, Guille Cantero y su lugarteniente en la cárcel de Rosario, Lalo Giménez, quien usaba a su pareja Joana para tareas de logística. “Es una especie de agencia de sicarios” que maneja Guille Cantero desde la cárcel, describió el fiscal.

Mauricio L. ya había recibido una advertencia en su fábrica en Hilarión de la Quintana al 3400, cuando se presentó un joven y preguntó por el dueño de la empresa. Salió una empleada y llamó a Mauricio L. El joven dijo que venía de parte del Sindicato de Camioneros.

El empresario quedó perplejo porque no tiene ninguna relación con ese gremio. En ese momento de incertidumbre el sicario sacó un arma y empezó a disparar. El empresario se tiró al piso y ninguna bala logró alcanzarlo. No está claro si ese había sido un mensaje o un verdadero intento por ejecutarlo. Los investigadores creen que ese episodio fue la primera advertencia. Después seguiría la muerte.

A las pocas cuadras el joven descartó el arma y se sacó la ropa, pero fue atrapado por agentes del Comando Radioeléctrico cuando chocó con su moto. Ese era un sicario “descartable”, como los denominaban en la justicia. Es decir, poco calificado. Que puede ser reemplazado por cualquier joven dispuesto a arriesgar su libertad por unos pesos y por la vibración que le provocaba pertenecer por unos instantes a una banda criminal como Los Monos.

La raíz del conflicto entre los dos empresarios se originó en 2019 cuando se separaron a nivel comercial. Mauricio L. decidió en ese momento abrir un negocio independiente, pero en el mismo rubro: los suplementos dietarios para deportistas.

En ese momento empezó una especie de guerra comercial con Lucas F., que tiene otro nivel de vida. El propietario de Nutrilab vivía en una gigantesca mansión en el barrio residencial La Florida, en el norte de Rosario. Esa casa pertenece al expiloto de Fórmula Uno Oscar “Popi” Larrauri, involucrado en otra causa por juego clandestino, que provocó un cimbronazo político luego de que un amigo del corredor, Leonardo Peiti, declarara en la justicia que pagaba sobornos a fiscales a través del senador peronista Armando Traferri.

Mauricio L. contó que cuatro días antes de que se cumpliera su “condena” a muerte se había encontrado de casualidad con su exsocio en el estacionamiento del shopping Alto Rosario y no fue tranquilo el reencuentro. Lucas F. amenazó con atropellarlo con su Mercedes Benz. De una simple pelea en un shopping la situación había escalado. Había contratado un sicario para matarlo.

La casa donde vivía Lucas F. estaba cercada por un murallón de más de cinco metros, donde en primavera van a anidar en unos huecos que hay en la pared bandadas de golondrinas. Lo extraño de esa mansión era que parecía abandonada.

En esa casa en Álvarez Thomas y Gallo, donde mucha gente va a

admirar las aves, se gestó el crimen de un empresario que se contactó con el líder de Los Monos, quien desde la cárcel de Marcos Paz, con tres celulares, según la investigación, organizó con sus sicarios la ejecución de lo que podría haber sido un nuevo crimen en Rosario.

Los Monos habían desarrollado un emprendimiento que era utilizado por personas ajenas al mundo criminal, cuando debían irradiar miedo o, en el peor de los casos, eliminar a la víctima. Ese negocio se expandió. Otros grupos menores comenzaron a brindar ese servicio de sicariato. La mano de obra sobraba, pero sicarios calificados eran pocos, aquellos que sabían esperar a la víctima y disparar en el momento justo.

Dos años antes del intento de asesinato de este empresario, un financista quedó en la mira de Guille Cantero, que había recibido otro pedido: atacar a Andrés Lamboy, un hombre de negocios, que había escalado en la trama social rosarina con préstamos en efectivo y ciertas habilidades para manejar dinero. Era un rubro en auge en Rosario en los últimos tiempos. Pero el problema no estaba en la plata. Era sentimental.

Un alto jefe de la barrabrava de Rosario Central había contactado al líder de Los Monos para ese trabajo. Siempre lo hacía con pedidos de esa naturaleza, que le llegaban a él y que aportaba soluciones como un favor, que después se pagaban. Tercerizar implicaba también no mancharse las manos con sangre. Cantero no tenía problemas. Ya estaba jugado en la cárcel, condenado a más de un siglo de prisión.

El pedido provenía de un jugador de fútbol que había pasado por el club. ¿Cuál era la raíz del problema que había derivado en que alguien convoque a gente pesada para ir a apretar a una persona? El nudo tenía que ver con una traición. La víctima vivía en el exclusivo country Kentucky, en las afueras de Rosario, donde Lionel Messi construyó su mansión moderna y refinada para pasar sus días cuando retorna a Rosario.

Los movimientos de Lamboy habían sido relevados de manera puntillosa. Todo fue estudiado por Matías César, sicario de Los Monos, un joven cuya historia estaba rodeada de la misma muerte que practicaba. Su primo Nahuel, su tía y su pareja habían sido asesinados por Los Monos después del raid de venganzas que iniciaron tras la

muerte de Pájaro Cantero. Los mataron frente a una escuela, sin miramientos. Luego, César comenzó a matar para el verdugo de su familia. Su primo Milton, sicario igual que él, era a quien los Cantero acusaban en un principio, horas después del crimen, de la ejecución de Pájaro. Era inocente, pero eso no importaba, la condena de la banda ya había sido decretada.

Matías César, que tenía apenas 19 años, hacía algo similar con las víctimas que Guille Cantero le apuntaba. El líder de la banda era el que bajaba el martillo, por dinero. Él solo ejecutaba. Guille le envió el 3 de septiembre de 2018 al sicario algunos datos sobre Lamboy, que le había dado el intermediario. El mensaje de WhatsApp describía algunos movimientos. “Lleva sus hijos al colegio inglés, en Wilde y Mendoza. Se mueve en una Dodge RAM”. En el mensaje también detallaba el número de la patente. Guille le aportaba al asesino a sueldo otro detalle clave. Después de dejar todas las mañanas a sus hijos en el colegio inglés del barrio de Fisherton iba a tomar café a la estación de servicio Axion, que está a unos metros de allí. Cantero envió una foto con la aclaración. “Solo al de negro, ok”.

Desde la cárcel de Ezeiza, donde se encontraba en ese momento, el líder de Los Monos siguió con la recolección de información sobre la víctima. Accedió a su perfil de Facebook y también se la envió a Matías César. La insistencia de Cantero en aportar datos sobre el hombre que debían atacar irradiaba en el sicario una responsabilidad, que no podía dejar pasar.

La mirada de Guille era implacable. Si él no se encargaba personalmente le pasaría el “trabajo” a otro sicario. En Rosario sobraban. Por eso al otro día, Matías César le escribió a Guille para tenerlo al tanto. “No me olvidé de lo que me pediste. Estuve averiguando dónde queda Kentucky”. En ese exclusivo country, el más caro del Gran Rosario, vivía la futura víctima con su esposa e hijos. Era vecino del exvolante de Boca y Rosario Central Cristian “Kily” González. Después se mudó Messi con Antonella y los tres chicos. Construyeron una mansión de estilo nórdico donde se destacan el vidrio y el hormigón.

Matías César estaba desbordado, con mucho trabajo. Durante el mes anterior había baleado más de sesenta blancos importantes, también

por orden de su jefe. Los balazos habían dado en residencias de jueces y edificios judiciales, entre ellos, el Centro de Justicia Penal. Habían cometido algunos errores con las direcciones de los lugares a los que tenían que disparar pero el efecto que buscaban había alcanzado: generar una conmoción política que nunca antes había ocurrido. La mafia tenía en la mira a las instituciones. A la justicia. Era la venganza de Guille por el traslado a Ezeiza, desde donde en ese momento planeaba atacar a Lamboy. Toda la logística para los atentados fue diagramada por Matías César y su novia Lucía Uberti, quienes dormían juntos en una casa en barrio Acindar, en el sur de Rosario.

Guille Cantero había tomado el pedido de atacar al financista porque el traslado a la provincia de Buenos Aires iba a costarle mucho dinero. Cada vez que lo movían de cárcel debía reconstituir la cadena de sobornos dentro de la cárcel para poder continuar con sus actividades mafiosas. Tener teléfonos, tanto celulares como acceso ilimitado al fijo, comida de buena calidad, visitas fuera de horario, entre otras cosas.

Había encargado el ataque a Matías César porque sabía que cumplía con sus consignas y misiones. Pero algo iba a salir mal. El sicario fue detenido junto a su novia por los ataques a los jueces y a los edificios judiciales el 11 de septiembre de 2018. Desde la cárcel, Guille se vio forzado a cambiar de tirador. La operación no salió como se esperaba.

Luego de dejar a los chicos en el colegio San Bartolomé, Lamboy fue al bar del club Caranchos a desayunar con los padres de compañeros de su hijo. Esta vez cambió de lugar. Prefirió el club a la estación de servicio. Poco después de las 8.15 se encaminó hacia su camioneta Dodge RAM.

En ese momento fue interceptado por dos hombres que se bajaron de un Gol Trend azul, con vidrios polarizados, que comenzaron a dispararle. Algunos testigos señalaron que estaban con el rostro cubierto. Con sus armas 9 milímetros los atacantes hicieron más de 25 detonaciones.

Lamboy quedó tendido en la vereda, a unos pocos metros del colegio, con múltiples heridas de bala en las piernas, tórax y el abdomen. Vecinos de la zona llamaron al 911 y una ambulancia del SIES trasladó al abogado y financista al Hospital de Emergencias

Clemente Álvarez, donde fue operado tres veces en un día y sobrevivió de milagro.

Los sicarios huyeron por calle Wilde hacia el sur. La policía recolectó en el lugar veinte vainas calibre 9 milímetros.

13
EL MONSTRUO QUE HICIERON DE MÍ

Señores jueces, les agradezco que me den esta oportunidad. Para mí es importante decir que llevar este apellido, Alvarado, es saber que no importa lo que se pruebe, me van a condenar igual. Quiero decir que los fiscales formaron un monstruo conmigo, me están pidiendo la pena máxima. Hay una estrategia de que la gente que está en mi entorno firme juicios abreviados por conveniencia para que a mí me terminen condenando como jefe. A mi exmujer le pidieron ocho años de cárcel. Le ofrecieron un juicio abreviado y entonces firmó por tres en libertad sin dudarlo. Personas que solamente eran amigos míos, que no tenían negocios conmigo, firmaron condenas por asociación ilícita, todo por su conveniencia. No los culpo. Cuando cinco meses antes de que empezara este juicio lo mataron a Carlos Argüelles, que toda la vida fue mi amigo, dijeron "ah, fue Alvarado", así a boca de jarro. A la preliminar de juicio la llenaron de cosas en mi contra, de homicidios que yo no tengo, no estoy imputado. Hablan de Alvarado, Alvarado, Alvarado. Dicen que mil novecientos 50 millones quieren recaudar con mis bienes, con el decomiso, con las multas, la misma multa que le pusieron a Lázaro Báez, teniendo mil propiedades y mil vehículos. ¿De dónde hice yo tanta plata señores? Si yo estoy preso desde agosto de 2012, no tuve ninguna causa más, hasta 2018, que me imputan el crimen de Lucio Maldonado, al que llevaron frente a una casa que es mía, pero del que ya dije que soy ajeno. Ellos hablan de causas federales y de investigaciones, y nunca me imputaron. Si me imputaron a mí fue porque los fiscales fueron al juzgado federal diciendo que había un entramado de empresas de transporte que yo explotaba, y por eso el juez del federal me procesó. Es todo un invento. ¿Empresas? Cada cual tenía su empresa, la madre de mis hijos tenía su empresa, mi amigo Jorge Benegas tenía su empresa, Marcelo Ianni tenía su empresa, pero como los apretaron a todos, porque fue un apriete, y les dijeron "si no firmás te damos tanto tiempo

preso" obvio que iban a firmar. Pero a mí no me sacaron nada, porque de lo que sacaron no era nada mío. Lo que perdió la madre de mis hijos fue por no tener ningún problema, porque yo estoy seguro de que hizo todo bien ella. Que le he dado una mano a mis hijos, eso sí, las dos manos les di, no una. Mi fuerte siempre fue comprar y vender autos. Los desarmaderos, el día que yo perdí en 2012 me decomisaron los galpones, perdí galpones, perdí hasta el último peso que tenía, si no me los llevaron los abogados, me los llevó el juzgado de San Isidro. ¿De dónde sacan que yo de 2012 a 2018, o a 2017 que salí en libertad, hice un montón de maniobras? ¿Dónde están las maniobras? ¿Dónde están los mensajes, los audios, quién fue? Amigo, soy amigo de gente, conocido de un montón de gente. Que me vaya a ver a prisión un delincuente, alguien que tiene antecedentes, ¿no puede ser que me vaya a ver a la cárcel? Porque sea jefe de una barrabrava, ¿no me puede ir a ver? Yo la verdad no entiendo cuál es la teoría de la fiscalía que todo lo presume. Con presunciones me están condenando porque me condenan mediáticamente. Pero lo único que pueden decir de Alvarado es que siempre tuve relación con los autos, desde el año 95 que estoy involucrado en el rubro automotor, yo me considero uno de los mejores que está en eso, con el tema autos. Entonces digo, ¿qué juicio justo voy a tener ahora? Yo me voy a hacer cargo de lo que hice, de lo que hice me voy a hacer cargo, porque en realidad, la fiscalía dijo cosas que son verdad. No es que dijo todo mentira, dijo cosas que son ciertas la fiscalía, pero otras de las que presume, no van. Yo sí tuve una relación con el policía Pablo Bancora que trabajaba con los fiscales y ahora fue condenado por pasarme información. Me pidieron la captura, después de allanarme todos los domicilios, sin encontrar un arma de fuego, sin encontrar plata, cuando hablan de millones. Me allanaron veinte propiedades que supuestamente eran mías, no encontraron ni diez pesos, y no encontraron ningún arma de fuego. Entonces hablo con mi abogado en ese momento, y la idea era presentarme con una eximición de prisión. El abogado me dice: "Mirá, Esteban, no te presentes, vamos a esperar que pase a ver cómo surgen las cosas". Entonces viajo a Córdoba, me quedo en Córdoba, iba hablando con el abogado, ahí caí, pero yo, desde el primer momento, quise presentarme. Por eso digo que yo las cosas mal no las hice. Mal hice en decirle al abogado que me esconda. Yo estaba acusado de un caso en que no tenía que ver, entonces el mismo Báncora me sugiere

"vamos a armar un entramado", lo propone Báncora de hacer el entramado para vincularlo a Rodrigo Ortigala, que había sido muy cercano a mí, por el homicidio de Maldonado. Yo la verdad le dije que sí, me enganché a hacerlo. ¿Por qué me engancho? Porque había pasado lo de las balaceras a los dos tribunales. Habían dejado un cartel que decía "atentamente Esteban Alvarado, con la mafia no se jode". Pero yo no fui el que hizo eso, y no figura en ningún teléfono, ni en ningún lado. No figura en ningún lado, su señoría, que Esteban armó ese ataque. Entonces yo sabía que era un vuelto de ellos para mí, porque el mismo Báncora decía "mirá, el que está atrás de esto es el Chulo Olivera, que tiene relación con Ortigala", toda gente de Los Monos hoy en día. Bueno ahí empezamos a tramar "¿cómo armamos?". Empiezo a pedir los datos para ver en qué vehículo andaba Ortigala, en que vehículo andaba la hermana, pero nunca quise atentar contra ellos, jamás, y está en los audios que jamás quise atentar contra ellos, sí involucrarlos y desviar la investigación por el homicidio de Maldonado que me culpaban. Empezaron a salir algunas cosas y Ocampo me dice: "Les tiramos la cabeza de un perro". Le dije que sí y les tiramos nomás la cabeza de un perro. Como no saltó en ningún lado, no apareció en los medios, Báncora dice "no, que no tuvo repercusión" entre eso pasaron días, dijo que había que hacer algo que hiciera más ruido. Como yo no le contestaba porque tenía miedo que me dé la antena de donde estaba parando no hablaba yo tanto con Ocampo. Ahí Ocampo se toma el atrevimiento y le hace tirar los tiros a la casa de la doctora Marsili, de la fiscalía, sin tener yo conocimiento y si los fiscales tienen los mensajes, se van a dar cuenta de que no hay mensajes en ese horario, no hay mensajes porque yo no tenía conocimiento de qué había pasado. Bueno, pasó la balacera contra la doctora Marsili, ahí estaban vinculados Argüelles y Ocampo, creo que estaban y no sé si un soldado de Ocampo, que estaba con él. Pero yo para todo esto estaba en Córdoba. La verdad, no me gustó porque, a ver, tonto no soy, no me puedo tirar nunca contra el Poder Judicial. ¿Me entiende, señoría? Contra un fiscal, contra el Poder Judicial no me voy a tirar nunca, porque perdés, voy a perder toda la vida, nunca lo voy a hacer. Cuando me entero, le dije que estaba loco, que iba a tener problemas. Yo la verdad cuando me enteré de lo que había pasado, que leí el diario, que supuestamente estaba la mamá de la señora Marsili cuando dispararon, no me gustó, porque yo no voy contra la

familia de nadie. Me disgusté mucho, porque sé lo que es, porque me pasó a mí que me han baleado las casas de mis suegros, y sé el malestar de la familia. Tampoco nunca tuve la intención de amedrentar al fiscal o amedrentar a la justicia. Mi intención era desviar la investigación contra Ortigala y Olivera. De corazón le pido disculpas a la señora Marsili, porque no quería que pasen por este mal rato, solo era asustar. La primera idea fue dejarle una corona que no era tan grave, pero bueno, las cosas se les fueron de las manos, pensaron distinto. Después con relación al homicidio de Maldonado. Yo no era ni amigo ni enemigo con Maldonado, no tenía nada en común, ¿para qué lo quería matar a Maldonado? Yo no soy un asesino. Yo no tengo ninguna causa por homicidio. Es imposible que la fiscalía tenga esa teoría. No tiene ninguna teoría la fiscalía, porque me ponen como instigador, y no saben por qué lo instigué. El auto de Maldonado cuando lo mataron estuvo frente a la casa que tengo en el campo. El que trabajaba conmigo que estaba en el lugar era Facundo Almada, pero no sé yo quién lo mató, quién no lo mató, quién fue, quién no fue. Lo que yo puedo dar por cierta es mi relación con Almada. Lo conozco por mi hijo, que mi hijo corre en caballo, el chico este Almada le enseñó todo lo que sabe mi hijo de caballos. Almada es una persona que tiene problemas para expresarse por un retraso madurativo. Yo lo viví porque hemos dormido en carpa con mi hijo con él y se orina, no sabe lo que dice. Después conviví en el pabellón 27 de la cárcel de Piñero con él. Es una persona que no entiende, no entiende de verdad, él está sentado ahí y no sabe ni cuantos años le van a dar, ni por qué está detenido, porque no sabe lo que dice. Almada no dormía todos los días en el campo, iba a darles de comer a los caballos y se iba. Yo iba una o dos veces por semana. Los conocidos del campo eran del círculo, los que andaban con los 72 caballos que había ahí. A ese campo venían personas de Buenos Aires o de Chañar Ladeado y me preguntaban si podían parar ahí. Yo les daba para que entraran y se quedaban a dormir. Me acusan porque el auto de Maldonado según el GPS estaba frente a mi campo. ¿Qué hacía el auto de Maldonado ahí? Ni la más remota idea. Yo, con la experiencia que tengo en autos, yo sé que cualquier auto tiene satelital, y más un auto nuevo. Imagínese que yo vengo del año 2012 con el tema de las auto partes, con los desarmaderos y en 2012, estamos hablando seis años antes, las chatas tenían todo satelital. Nadie guardaba una chata robada. Yo en ese

momento no salía a robar. Yo compraba los autos robados. Para comprar un auto, lo tenía que hacer descansar dos días en la calle, para meterlo adentro de un galpón, para que no explote el satelital. Entonces, que me digan que yo voy a meter un auto robado en el campo, como quiere hacer creer la fiscalía. Yo no metí ningún auto robado en el campo. Yo sé lo que es un auto nuevo, y con satelital, no lo voy a meter, por la experiencia que tengo. Capaz que estuvo el auto, yo no lo vi, pero yo no lo metí ni lo llevé. Dicen que le saqué una casa a Rodrigo Ortigala. ¿Ortigala se acordó, en diciembre de 2018 de reclamar una casa que supuestamente le saqué en febrero de 2012? Yo no le saqué ninguna casa a Ortigala, malvendió la casa él, porque supuestamente tenía problemas conmigo, él malvendió la casa, y después la quiso reclamar porque estaba bajo la cobertura de Los Monos. ¿O no saben los fiscales que Los Monos son Ortigala y Ortigala son Los Monos? Lo saben los fiscales. Como saben también que Rodrigo tiene antecedentes, que la causa que pagó Rodrigo en julio o abril de 2012 era una causa que era mía. Yo les vendía los autos robados a ellos y ellos los revendían después. En esa causa estaba yo con ellos. ¿Por qué no se meten los fiscales en esa relación? Porque si lo hicieran los tienen que imputar a Rodrigo Ortigala y a su hermana Mariana en la asociación ilícita. Vamos a dejar de hablar de Ortigala, vamos a hablar de Argüelles, que su muerte me duele. Argüelles fue mi amigo de toda la vida, no sé por qué dijo las cosas sin sentido que dijo. Ortigala, que estaba con Los Monos, le dijo a Argüelles que o declaraba contra mí o le hacían cagar a la familia. Y bueno, ya sabemos lo que pasó, declaró contra Esteban. ¿Quién más quisiera que Carlitos hubiera venido a declarar hoy acá al juicio para preguntarle por todas las mentiras que dijo y desenmascararlo? Pero ya saben. Lo mataron a Carlitos y nadie hizo nada. ¿Qué salió a decir la fiscalía? Que fui yo. ¿No puede ser un vuelto de los Cantero la muerte de Carlitos? En su momento, cuando la fiscalía me propuso el abreviado, me preguntó si yo sabía algo de Pipi Traferri, que es senador, qué podría decir si yo no lo conozco a Pipi Traferri. Pero si yo hubiese inventado algo la habría sacado más barata. Pero cómo no les sirvió, acá estoy. Me desviaron que yo me las agarré con mis abogados porque "no, quedate tranquilo, que vamos a firmar un abreviado, que vamos a sacar el homicidio, que no tenés nada que ver". Bueno, lo llevaron así, y llegó la preliminar y no hubo abreviado. Fue una estrategia de la fiscalía para que yo llegara desarmado. Pero

bueno, acá estoy y me hago cargo de lo que hice, pero de lo que no hice, no. Es una locura la cantidad de años que me piden. Pero bueno, soy Esteban Alvarado. Ningún juez va a agarrar y decir "no, esto no fue". La verdad, no confío en la justicia. No va a haber justicia por mí. Porque acá los malos somos dos aparentemente, Cantero y yo, ¿no hay más gente? Yo desde que estoy detenido, tanto en la otra causa de 2012 hasta que salí, no tengo causas estando detenido, y ahora de 2019 a hoy no tengo ninguna causa estando detenido. Que la justicia vea, que no sea ciega la justicia. Que se me condene como una persona normal, no por quién soy, ni portador de apellido, ni lo que sea. Ustedes, señores jueces, escucharon cuatro horas y media de mensajes y fueron supuestamente los mensajes, según lo que me dijeron los abogados, lo que más me perjudicaban, y en ningún mensaje hablo yo de los atentados a Marsili, o los atentados al Centro de Justicia Penal, o a la fiscalía o el mismo homicidio de Maldonado, nunca hablo de eso. Por eso quería que, ya que los escucharon ustedes, se tome en cuenta de lo que hablo y lo que aclaro, porque se dijeron un montón de cosas que nada que ver, no sé para qué pusieron audios, si yo no hablo de nada de lo que me acusan, soy una persona que mando muchos audios, por eso tenía como seis mil audios en el teléfono, pero audios que no tienen nada que ver con la causa. Yo no hablo de agredir a nadie, de pegarle a nadie, de hacer nada, eso es lo que quería aclarar, su señoría. Otra cosa que me parece inentendible es que todo lo que hago es lavado de dinero, yo fui comerciante toda la vida, toda la vida tuve caballos, desde los ocho años, después tuve caballos de carrera, lo que se necesita en el turf, es un box en el hipódromo para guardar al animal, como si fuera una cochera de un auto, se paga como una cochera, mantenerlo es caro, si el caballo no corre, no hace nada, aunque valga muchísimo pierde valor, pero con un premio en San Isidro, Palermo, el premio le paga todo un año de la mantención del caballo. El que está en el turf sabe cómo es esto, por ahí el que no entiende, como la doctora Marsili, piensa que lavo dinero con los caballos, al que no está en el tema le va a parecer un disparate, el caballo se mantiene solo prácticamente. Uno lo toma como una pasión, como un hobby, no para ganar y generar plata. Mi hijo Santino está con los caballos y no porque le guste la plata, lo toma como un deporte. Voy a contar una anécdota. Teníamos a Masterchef, era un caballo que no servía más. Se crio en un campo y tenía una

deformación en una pierna. Lo domó Facundo Almada que ahora está preso conmigo y ese caballo fue el que ganó, algo como sacado de una película, gracias al cuidado que le dio Almada fue. Él los hacía rendir a los caballos. No quiero mentir pero creo que era Gitana, una yegua que había pagado muy barata, no sé si doce mil pesos, y gracias a Almada corría con los mejores caballos en lo que era destreza. No es algo ilógico tener un caballo para el que le gusta, es lo mismo que tener perros de caza para el que tiene perros. El caballo es lo mismo, se puede vender al precio que a uno le parece lógico, pero siempre es en relación al cariño que uno le agarra al caballo. Mi hijo Santino ha tenido a Tornado, a Viejo del Viento, que lo he nombrado, a Sarnoso y hasta el día de hoy los sigue teniendo, y son caballos como explicaba la doctora Marsili, todos van inscriptos, el caballo que corre cuarto de milla va inscripto, tiene pedigrí, como los perros, padre y madre y van inscriptos. El caballo de carrera lo mismo, el caballo criollo lo mismo, sale padre, madre y te dan los papeles. No era algo que nos producía plata. Santino fue subcampeón de Jesús María en el tema destreza y no me acuerdo ese premio fue de sesenta mil pesos en el año 2018 y en ese tiempo mantener un caballo valía seis mil por mes, Santino ha sacado premios en lugares que iba a correr, Almada se cansó de ganar en muchísimos lugares siendo él que los cuidaba, los corría y los andaba. Eso le quería aclarar de los caballos, señoría. Y después el tema de empresas para lavar, bueno, en este juicio no hay nadie porque todos los que nombraron como socios míos firmaron abreviados. Entregaron lo que tenían y se hicieron responsables porque estaban en libertad. A mí también me hubiera convenido firmar un abreviado por cantidad de años y no estar sentado acá pero no me dieron esa posibilidad. Hablan de empresas cruzadas como prueba de que todo era mío. Que todo el gasoil de las mismas empresas se debitaba de las cuentas, para no usar efectivo, entonces se echaba gasoil y se daba el ticket. Mi hermano, yo y todos esos preferíamos sin gastar efectivo, que debitaban de mi cheque, un suponer, un transporte te paga a sesenta días, entonces vos ese cheque de sesenta días lo pasás a la estación de servicio y te lo agarran a precio contado, a diez mil pesos, te dan diez mil de contado, y eso lo usas en gasoil, entonces tanto para los camiones como de uso personal o los vehículos, se pedían las facturas del IVA porque eran gastos. Hablan de lavado, que no coincidan el precio de los camiones con lo que estaba declarado, le explico por qué su

señoría. No coincidían porque el camión justamente comprado cero kilómetro en el año 2014 tenía un valor de quinientos mil pesos, entonces hoy, como cuando hicieron el informe, vale diez veces más. Entonces decís está mal la cuenta porque este camión está como sobrevaluado, fue metido a un precio bajo. Y no fue metido a un precio bajo fue a valor de factura como cuando lo compró la madre de Santino y lo metió. Lo puso al valor que era. Como dije, fui comerciante toda la vida yo. Sobre los contratos de las empresas, muchos transportes son fleteros, entonces se le hace un contrato como para que los camiones pertenezcan a la empresa y con eso iban a cargar gasoil. No es que se cruzan las empresas, empresa era una sola, Logística Santino, de nosotros. Yo digo de nosotros porque la responsable era de la madre de mis hijos y no está para defenderse acá como no están los dueños de las empresas vinculadas que ya los condenaron en abreviado y agarraron para no ir presos. No hay de ninguna manera una mala intención de lavar ni de delinquir. Aclaro todo esto porque no hay nadie para aclararlo frente a ustedes, señores jueces. No quiero hacerles perder más el tiempo, después ampliaré mi testimonio. Muchísimas gracias, doctores.

Declaraciones de Esteban Alvarado en la causa en su contra por homicidio y asociación ilícita. Febrero y marzo de 2022.

14
EL LUGAR DONDE TODOS SE ENCUENTRAN

¿De quién es el dinero que circula en una ciudad? Puede ser de alguien que lo tiene en blanco, de un testaferro, de un inversor de buena fe, de uno que lo mueve tratando de no pisar en falso, aunque sin tanta inquietud en su origen. El dinero siempre se mezcla. Y las mezclas son peligrosas. Las que lo son en exceso a veces llevan a la cárcel.

En 2016 se detectó una gran estafa con inmuebles en la que quedaron acusadas veinte personas de mundos muy diversos. Se la conoció como “la megacausa de fraude inmobiliario”. Una organización falsificaba documentación para arrebatar propiedades a sus dueños y luego desplegar maniobras registrales para darle apariencia lícita a las falsas transacciones. Gente que nunca había tenido la voluntad ni se había enterado aparecía vendiendo. Cuatro escribanos fueron acusados de legitimar las estafas aunque tres terminarían absueltos. Hubo inversores del campo profesional, financiero y comercial que quedaron pegados. Y en la misma audiencia, en el mismo lodo, actores del campo criminal. Todos surgían en la misma mezcla que generaba el dinero.

Leandro “Lelo” Pérez sería uno de los condenados. Fue dueño de una concesionaria y era habitué de los quinchos de financistas y profesionales rosarinos. En el pasado había sido socio de Ariel Spadoni, dueño de una agencia de motos del centro de Rosario, condenado en 2012 por traficar 1200 kilos de cocaína a Portugal.

Maximiliano González de Gaetano, secretario de un gremio rural sin afiliados, también fue condenado en 2023 en primera instancia a prisión en la megaestafa, porque habría tenido dos sociedades con Luis Medina, el empresario narco asesinado en la zona sur de Rosario en

diciembre de 2013. Cuando tras ese crimen fulminante la policía allanó una de esas empresas en el centro de la ciudad los recibió un chico de 19 años que les apuntó con un arma de fuego no registrada. Era el hijo del sindicalista.

En la resonante causa por fraude inmobiliario y lavado de activos hubo un detallado capítulo reservado a Pérez, dueño de Reina Automotores y conocido por su relación con la vedette Vicky Xipolitakis, y a De Gaetano, secretario general de un estrafalario Sindicato de Monteros. Los investigadores consideraron que ellos jugaron un papel esencial en la red de implicados y les imputaron ser los engranajes para que el segmento superior de la red, los empresarios, captaran fondos del narcotráfico.

Esta imputación produjo una atronadora polémica el día en que se pidieron las prisiones preventivas que, finalmente, la jueza Mónica Lamperti les asignó a nueve acusados.

El fiscal Sebastián Narvaja dijo que el dinero que fluyó a través de estos dos acusados hacia los empresarios Marcelo Jaef, Pablo Abdala y Jorge Oneto era dinero sucio. Y se propuso explicar por qué lo más lógico era que ese dinero tuviera origen narco. Finalmente, los tres terminaron desvinculados.

El solo amague de que los empresarios fueran responsabilizados por captar fondos del narcotráfico hizo saltar de sus sillas a las defensas. Los defensores chillaban que la acusación no tenía el menor acervo probatorio y que, si lo hubiera, debería investigarlo la Justicia Federal.

El fiscal Sebastián Narvaja no pareció inmutarse. Se preguntó cómo se conectaban estas redes con Los Monos. Dijo que a través de gente que detenta bienes de alto valor, no tiene actividad lícita respaldatoria y está relacionada con delitos previos como el narcotráfico. Fue así que vinculó a Pérez y De Gaetano con reputados actores del mundo narco rosarino: Guille Cantero, Luis Medina y Fabián Spadoni, entre otros.

El bramido de las defensas hizo que la jueza convocara a todas al estrado a una reunión de puro orden con el fiscal. Hombre robusto, calvo, cara redonda sin arrugas, gruesos lentes para atemperar serios problemas visuales, voz monocorde y poco expresiva, el fiscal ofrecía una imagen calma que se conjugaba bien con su aspecto físico. Lo

llamaban el Buda.

Nadie entre los que estaban en el público pudo saber qué se dialogaba allí. Solo se vio al fiscal decir al final unas escuetas palabras. Cuando la jueza les ordenó a todos volver a sus asientos los defensores se reunieron un momento a un costado. Eran nueve. El más veterano de los letrados representaba a un empresario que terminaría absuelto. Este abogado era un profesor universitario que había sido ministro de Justicia de Santa Fe: Héctor Superti. Tenía más calle que un poste de luz. Fue él quien tomó la voz para dar un consejo a los otros penalistas. Por la bajo, preocupado, se escuchó que les decía que "desde ahora mejor que se callen todos, déjenlo hablar al Buda sin replicar y mejor que termine rápido".

Con su tono adormecedor, el fiscal Narvaja continuó. "Que se queden tranquilas las defensas. No tenemos filmados a los imputados comiendo con Guille Cantero y planeando la apropiación de un campo. Pero tenemos a Pérez y De Gaetano con vínculos claros con Cantero. Estas personas exteriorizan propiedades de alto valor, caballos de carrera, viajes al exterior, vehículos de alta gama que no se corresponden con su perfil patrimonial declarado. Esos son los indicios que tenemos para acreditar y demostrar que recogen los beneficios de una actividad como la narcocriminalidad". Según dijo esos son criterios objetivos de la doctrina de lavado aceptada por la jurisprudencia argentina.

Primero el acusador explicó el perfil de Lelo Pérez. Los fiscales dijeron que era quien ponía en contacto a la red de estafas inmobiliarias con los empresarios y que derivaba hacia estos fondos para el lavado de activos de otro origen. También aludió a autos vendidos a través de Reina Automotores que aparecen en la causa 913/12, la primera por la que la banda de Los Monos recibió condenas. Al dueño de esa agencia lo mataron a tiros.

Mencionó vehículos con sus patentes, negociaciones, nombres. Un Mini Cooper con seguro y boleto a nombre de Juan Domingo Ramírez, condenado como sicario de Los Monos, se lo habían vendido a través de Reina Automotores. Había otros negociados por la misma agencia hacia el Gitano Andrés, implicado en el homicidio de Diego Demarre, a quien mataron para vengar la muerte de Pájaro Cantero.

La misma agencia vendió un Mini Cooper a Ramón Machuca, alias Monchi Cantero, otro líder de Los Monos. El fiscal detalló un negocio tras otro.

Otro vínculo con el mundo narco que se atribuyó a Pérez fue haber sido socio en la firma Repuestos Exclusivos SRL con Ariel Spadoni, condenado por narcotráfico e implicado en la causa Carbón Blanco, en la que se traficaron mil kilos de cocaína a Portugal y España, lo que le valió sentencia a Patricio Gorosito, fundador del club Real Arroyo Seco, donde en la actualidad entrena Rosario Central.

Todo eso tenía para decir el Buda.

Palabra Santa se llamó una SRL de Lelo Pérez que se inscribió el 27 de mayo de 2015, la misma fecha que el empresario bursátil Jorge Oneto compró un campo de 124 hectáreas en Villa Amelia apropiado por los estafadores, lo que Oneto ignoraba.

Oneto le transfirió a Palabra Santa un departamento en Aqualina, torre frente al río donde la hermana de Lionel Messi tiene un piso exclusivo, como parte de pago del campo. En todos los períodos fiscales mensuales (doce meses) esta sociedad registraba más compras que ventas. Eran ventas por 300.000 pesos y compras por un millón, es decir, deficitaria. La única vez que vende una cantidad sustancial es porque De Gaetano le inyecta fondos en efectivo a Pérez con los que Palabra Santa compra una camioneta Toyota Hilux. Empresas de cartón, dijo la fiscal Valeria Haurigot, que acompañaba a Narvaja. Era cantado que la plata venía de otro lado.

La actividad lícita declarada por Pérez se limitaba a la participación societaria en Palabra Santa y Araca Corazón SRL, que no exhibía movimientos importantes. Con estas sociedades deficitarias o sin actividad, dijo la fiscal en las audiencias, Pérez se las arregló para tener un piso en la torre Aqualina, una casa en Funes, propiedades en el centro, autos de alta gama, dos locales en la céntrica avenida Pellegrini y viajes constantes a Europa, Estados Unidos y México.

González de Gaetano vive en Rosario y su única actividad lícita es como titular del Sindicato de Monteros, un gremio que a esa fecha contaba con 62 afiliados sin aportes registrados y con domicilio social en Necochea. Los únicos movimientos de la cuenta del sindicato la hacían el imputado y su hijo Juan. Sin embargo, el gremialista tiene en

Pueblo Esther una propiedad y una quinta de una hectárea, dos casas de categoría, un stud con tres caballos de carrera y dos departamentos en el centro de Rosario.

Uno de esos departamentos, en San Lorenzo 1067, era la sede de Yasmin SRL y Lumed SRL, sociedades de Luis Medina. Ese departamento enlazó también a una interesante figura del mundo financiero de Rosario: el Turco Azum. Conocido por tener una mesa de dinero en el Club Echesortu, un barrio apacible y arbolado de la zona central de la ciudad, canal de captación de billetes sin pasado.

Un oficial de la fuerza de despliegue rápido santafesina, la TOE, no olvida el día que lo buscaron a Azum por primera vez. Llegaron a su casa en Balcarce al 3700 a la mañana. Era una fortaleza con circuito cerrado de cámaras de vigilancia por lo que el Turco no tardó en captar la que se le venía. Les pidió que no rompieran nada, que él iba a abrir, de modo que no hubiera daños. Les franqueó el paso por la puerta principal pero se encerró en el baño de su habitación. Cuando quedó claro que iban a embestir contra la puerta anunció que iba a salir. Abrió voluntariamente la puerta de tres pulgadas de acero que de ninguna manera los policías conseguirían derribar.

Al salir sacó el celular que llevaba metido dentro del pantalón, alzó las manos y lo partió en dos. Para encontrar el chip los policías hasta desatornillaron el inodoro. Fue en vano. Al final recogieron el teléfono con la idea de que difícilmente el contenido de un aparato quebrado fuera recuperable.

A la semana siguiente los abogados del Turco fueron convocados a asistir a una pericia del teléfono roto que harían especialistas de la Policía Federal. Los peritos conectaron una fuente de alimentación especial y la placa del celular quebrado súbitamente revivió. La expresión de los letrados en ese momento, cuentan los que estaban, fue algo digno de ser visto.

Buscaban ese celular porque sabían que Azum se movía como operador financiero de gente ligada a la violencia. Uno de ellos era Rubén “Tubi” Segovia, ligado a Los Monos, quien a pesar de estar preso en la cárcel de Coronda engordaba su patrimonio con negocios multimillonarios en barrios privados de Córdoba, hasta que cuatro compañeros de pabellón lo estrangularon con un alambre en su celda.

Hacer negocios desde la celda es una constante. Financistas, escribanos o empresarios de bienes raíces se enfrentan a veces a estas tentaciones. Esteban Alvarado compró una casa quinta con terreno para criar caballos a 15 kilómetros de Rosario mientras estaba preso en la cárcel de Urdampilleta, provincia de Buenos Aires. La adquirió pagando cuotas consecutivas a una familia y la propiedad la puso a nombre de sus dos hijos. La compra de esa vivienda le valdría cinco años después la prisión perpetua, por ordenar la ejecución del prestamista Lucio Maldonado, que fue asesinado allí.

No todos cometen actos violentos, como dijo el fiscal al que llaman Buda. Pero el dinero es el vector que conecta violencia con negocios, y el que usa ese dinero puede tener contratiempos. El Turco Azum no fue detenido cuando rompió el teléfono sino tres años después. Tenía su oficina en el mismo edificio donde, ocho años antes, el hijo de 19 años de González de Gaetano había recibido con un arma a los policías que allanaban para buscar elementos del narco asesinado Luis Medina.

En ese 2021 Azum y González de Gaetano fueron llevados a audiencia ante un juez. La fiscal los imputó por encabezar una asociación ilícita que financiaba quioscos de drogas y se apoderaba del excedente de ese comercio, del juego clandestino, la usura, el producido de flotas de taxis y de la compraventa de propiedades. Tomaba plata del delito y la prestaba. Algo que también hacían personas del círculo rojo de la city.

En la audiencia se pasó el audio de una llamada entre la hermana y la madre de Azum. “Los diez departamentos que compró en el centro son una belleza. No sabe dónde meter la guita tu hijo, por eso hace todo esto, tiene que blanquear”. La madre respondió con ácida hilaridad. “Que blanquee dándome lo que me debe”.

Al mismo tiempo Azum caía por una causa de drogas en la Justicia Federal. Ya se sabía que participaba como lavador en la mesa de dinero del Club Echesortu que administraban el presidente y el vice del club. Allí desaguaba dinero de la venta urbana de estupefacientes y de las barrabravas de Rosario Central y Newell’s.

Del celular que había quebrado aquella vez los fiscales no pudieron obtener datos decisivos. El Turco había hecho del sigilo una marca personal. Todos los lugares que frecuentaba tenían cámaras al igual

que su casa. Cambiaba de línea hasta tres veces por semana al punto de que su familia no sabía cómo ubicarlo.

La fiscal Viviana O'Connell historió la pesquisa que lo llevó a acusarlo. Dijo que el Turco tenía relación con la banda de Los Camino cuyo antiguo líder, Pimpi, había sido jefe de la barra de Newell's hasta que lo mataron en 2010. "Azum estaba especialmente vinculado al Tubi Segovia, que fue asesinado en la cárcel", dijo la fiscal.

Lo que se pudo detectar entonces, después de varios homicidios que hubo en la ciudad, fue que Azum financiaba a Tubi Segovia, que a su vez se había ocupado del armado en el territorio de una red de búnkeres. El dinero se utilizaba para la compra de estupefacientes y luego de vendida esa droga era invertido por el Turco en taxis e inmuebles y hasta se les proveía los vehículos a los integrantes de la banda, que después se iba cobrando.

La fiscal dijo que una vez que se afianzan a nivel económico figuras de esta clase buscan acercarse a quienes detentan poder. De las intervenciones telefónicas surgía que Yalil Azum iba a reuniones en Puerto Madero. Él contaba allí que tenía reuniones con funcionarios de la ex-SIDE, con un juez federal, con un diputado nacional de Santiago del Estero. No solo son evidencia de su ascenso económico, afirmaba la fiscal, sino de la necesidad de cobertura política y de fuerzas de seguridad. Se nombran arreglos con políticos y un tal "Berni" que después la esposa del imputado desmintió que fuera el ministro de Seguridad bonaerense. Esas reuniones en el barrio porteño fueron en vísperas de las elecciones de 2019.

La formulación central de la fiscal apuntó a la lógica de la concentración del dinero legal e ilegal: "El narcotráfico funciona como una especie de virus en la sociedad donde se inserta. Genera desde el delito más pequeño, como el robo del consumidor porque necesita el dinero, el delito violento como los homicidios y balaceras, pero también el delito de cuello blanco, que es la parte más compleja. Porque ahí de lo que se trata es de ver adónde va a parar todo ese dinero cuando se inserta en el circuito legal".

Aquella vez que supieron que Alvarado compró una quinta estando preso pensaron que los fondos venían del mundo narco. La pesquisa económica de la misma fiscalía indicó otra cosa. Venían de empresas

legales, una de ellas de fletes, con una flota de camiones y dos inmuebles como capital social. El propio Alvarado había creado una empresa legal para financiar delitos.

En una de las carpetas encontradas en la casa quinta de Alvarado había constancias de pagos de impuestos y servicios de catorce propiedades que formaron parte de su acervo de inmuebles. Al allanar uno de ellos, en un complejo de viviendas construidos mediante un fideicomiso en la zona de Puerto Norte, un distrito acomodado, encontraron viviendo al jefe de Inteligencia de Drogas de la Policía de Investigaciones, Javier Makhat.

Los investigadores supieron que el policía había adquirido esa vivienda a Alvarado, que no tenía necesidad de figurar como propietario precedente porque los fideicomisos brindaban por entonces todas las posibilidades legales para enmascarar bajo la figura de sus administradores a los verdaderos inversores y, con ello, al origen de su dinero.

A Alvarado lo buscaban por el brutal asesinato de un hombre dedicado a la usura. Pero al allanar su casa encontraron inversiones en un inmueble administrado, en un caso, por una persona que figuraba como directivo de la Bolsa de Comercio de Rosario y construido mediante un fideicomiso integrado por el dueño de una importante financiera del sistema legal. Días después la esposa de Alvarado abrió la puerta a la TOE, que buscaba a su marido prófugo, en una vivienda de dos plantas con pileta climatizada en el exclusivo barrio San Marino de Funes Hills.

El terreno del dinero es el lugar donde el ruido de los tiroteos no suena pero todos los actores se encuentran. Abrir la quinta de Alvarado —anotada a nombre de sus hijos de 14 y 17 años bajo su usufructo— destapó una caja de Pandora cuyos hilos llegan a destinos impensados. Ese allanamiento iluminó el lugar opaco que según los especialistas en lavado importa para la política criminal: el de los bienes e inversiones realizadas con dinero del delito.

Hernán Blanco, un experto en Lavado de Activos de la Cámara Nacional de Casación, dice que las organizaciones criminales que empiezan vendiendo droga y saben cómo hacerlo crecen muy rápidamente. Pero su ingreso económico crece más rápido que la

organización interna. Eso hace visible a la banda y le crea problemas. Aunque solo en una primera etapa. Mientras la plata se genera en efectivo y el que la maneja conoce al que la consigue, las bandas son vulnerables. Es el estadio en el que están todavía los grupos callejeros que controlan el microtráfico en Rosario, Córdoba o Mendoza.

"Por eso estamos a tiempo de que el Estado avance. Porque en unos pocos años tendrán amigos banqueros así como ya tienen a muy buenos abogados y al lavar con mucha más eficacia va a ser muy difícil atraparlos", dijo Blanco en una visita a fiscales económicos.

Los mercados legales demandan profesionales, los ilegales exactamente lo mismo. Esto se debe a que el mercado lícito y el ilícito operan del mismo modo y, como los muestran estos casos, están en permanente cruce. Las manos de los profesionales hacen que las redes ilícitas eviten que queden cabos sueltos. Abogados, contadores y escribanos aportan la prolijidad de la técnica. Y como conocen como nadie los intersticios para escurrirse suelen no dejar marcas.

Aunque a veces sí. A Tubi Segovia lo estrangularon en la cárcel pero sus millonarias inversiones llevaron a detener al Turco Azum. Otro brutal asesinato, el del prestamista Maldonado, proyectó un potente chorro de luz sobre los bienes de Alvarado.

En los dos casos la violencia es el lugar donde se hornean turbios negocios cuyos beneficios no recogen marginales sino personas ubicadas en lugares más confortables que los suburbios y con menor sanción social. Los que investigan para tirar de esa manta pueden demostrar que el delito va más allá de descubrir quién aprieta el gatillo.

De Gaetano terminó condenado por el apoderamiento ilícito de cuatro lotes de terreno pertenecientes a María Cristina Lacava, una mujer que desde 2011 reside en Italia, y que nunca supo que fue víctima de esa trama. Con el mayor de esos predios, de 18 hectáreas, varios imputados acordaron desarrollar un loteo y organizaron un fideicomiso llamado La Esperanza para disimular el origen ilícito de ese campo. Para concretar el fraude pusieron como testaferros a sus hijos, entre ellos Juan de la Cruz González de Gaetano. El chico que cuando mataron al narco Luis Medina recibió con un arma a la policía.

Su padre después fue encontrado en la misma mesa de dinero que

administraba el Turco Azum, para inversores que tienen que ver con la violencia y otros que no. La mayor parte del efectivo venía de droga. Azum y De Gaetano utilizaban la oficina 401 del edificio de San Lorenzo 1035. La fiscal dijo que el lugar funcionaba como una financiera. También que ambos compartían negocios de usura y de juego ilegal.

El día que fueron a buscar a De Gaetano para allanarlo por el fraude con inmuebles no estaba en su casa de Pueblo Esther, a 20 kilómetros de Rosario, una zona de quintas. La vivienda era un amplio desarrollo blanco muy bien puesto, con detalles como para una revista de decoración, y extensiones donde había caballos de carrera.

El fiscal al que le tocó la medida no había formado parte de la investigación. Pero era tanta la cantidad de allanamientos que se lo asignaron. En la casa no estaba De Gaetano pero sí su madre. Una mujer que pasaba los 60, elegante y serena, que permitió sin ninguna resistencia el ingreso de los policías.

No hubo nada que alterara el reposo campestre durante la acción de los policías que apenas revisaron algunos cajones con sobriedad. El fiscal mientras tanto caminaba por la amplia sala de estar de la casa. Le habían llamado la atención los cuadros y los contemplaba.

La mujer le preguntó si le gustaba la pintura. Iniciaron una conversación sobre artes plásticas, sobre autores y estilos. Ella contó sus preferencias, su vocación algo frustrada y el gusto por acopiar piezas cuando estaban a su alcance.

La conversación fue agradable. En medio de esa causa pesada y compleja, pensó el fiscal, aparecía esta mujer discreta, que hablaba con gracia y dominio del tema que tocaban. Cuando se retiraba se dirigió por última vez al funcionario que había sentido simpatía por su interlocutora. “Me hubiera gustado conocerlo en otras circunstancias”, le dijo la señora al despedirlo.

Llevaba un 22 en la cartera, contó el fiscal.

15
LA TORRE

“La mesa” era una tradición inalterable en el restaurante Pampa, en Moreno y Mendoza, en el centro de Rosario, donde se comían jugosas carnes rojas, con malbec de buenas cosechas, que se exhibían en una pared terracota como si las botellas estuvieran empotradas en la mampostería.

La mesa redonda agrupaba a personas que se conocían desde hacía tiempo. Un ritual bien rosarino, el de afinar lealtades a través de la amistad y en torno a la costumbre del encuentro, como inmortalizó Roberto Fontanarrosa en la Mesa de los Galanes que asistían al bar El Cairo. Pero esto era diferente. Lo opuesto. Eran hombres de negocios que se sentaban con la seguridad y la garantía de que nada saldría de ese restaurante con las paredes tapizadas de cuadritos, que le daban un ambiente relajado, agradable y cálido.

Era gente que se consideraba importante en Rosario. Todos empresarios de alto rango y algunos también con portación de apellido. A veces había invitados, pero el núcleo duro se mantenía casi inalterable. Una noche de 2009 el agente de bolsa y financista Jorge Oneto llevó a un invitado particular. Un hombre simpático que rápidamente logró seducir a la mayoría de los comensales. Un par decidieron luego abandonar la “mesa”, porque presentían cierta desconfianza, quizá afincada en una cuestión de clase. La primera cena la pagó Lelo Pérez, sin hacer alarde. Era un gesto para sus nuevos amigos, que les agradó.

Las historias del invitado eran desopilantes. Despertaban carcajadas que no eran tan comunes en esas reuniones. En solo tres o cuatro cenas, Lelo Pérez los tenía a todos en el bolsillo. Se había transformado con habilidad, y con destreza, la misma que usaba para comprar y vender autos de alta gama en Reina Automotores, en uno de

los habitués fijos del elenco estable de la mesa que compartían desde hacía casi una década los principales hombres de negocios de Rosario.

Oneto lo había llevado porque creía que podría aportar cierta frescura. Una cara nueva que haría más divertidas las cenas en las que se tocaban todo tipo de temas, desde política y negocios hasta cuestiones más banales, como los viajes que hacían. Lelo se sorprendía por algunas historias que contaban sus nuevos amigos. No lograba comprender cómo gente rica se jactaba de regatear precios, de conseguir pasajes en oferta.

El dueño de un laboratorio, que proveía de medicamentos y drogas oncológicas al Estado, se regodeaba una noche con que su secretaria le había conseguido una oferta “increíble” para viajar con su familia a Miami. Lelo nunca había viajado en clase turista y no conseguía comprender que su compañero de “mesa” no pagara por comodidad cuando le sobraba dinero.

Lelo resguardó detalles importantes que lo habían llevado a esa mesa, entre ellos cómo se había hecho rico. En ese momento no importaban demasiado los secretos. Nadie de los presentes podía alardear una ética impoluta.

Lelo estaba seguro de que esas cenas le iban a abrir nuevos negocios. Por eso estaba allí. Todavía por esos tiempos la Unidad de Información Financiera (UIF) no había puesto la lupa sobre sus negocios. Seis años después de su primera incursión en el restaurante Pampa ese órgano de control empezó a ver su repentino crecimiento económico. Fue luego de que la justicia comenzara a investigar las relaciones de Luis Medina, tras el crimen de este empresario a fines de 2013.

La justicia había llegado, como de costumbre, tarde. En 2011 Medina había conseguido la habilitación por parte del entonces intendente Miguel Lifschitz para instalar en pleno centro de Rosario el boliche Esperanto. Como había sucedido en todas las tramas narco de Rosario, su muerte dejó al descubierto una historia más pesada.

La UIF se constituyó como querellante en la causa 10.307/15, que quedó en manos de la Fiscalía N° 2 de Rosario. Medina figuraba desde 2008 en la AFIP como “deudor irrecuperable”, pero vivía en una lujosa casa en el country La Pradera, en Pilar. Tenía más de veinte autos a nombre de supuestos testaferros, entre los que figuran su exesposa

Daniela Ungaro, su exsuegro Daniel José Ungaro y Esteban Lindor Alvarado, su exsocio en el negocio narco.

A Medina se le adjudicaban cuatro sociedades comerciales. Una de ellas era Yasmín SRL que estaba destinada, según el Boletín Oficial de Santa Fe, a realizar “préstamos con dinero en efectivo en el mercado de la compra y venta de automóviles”. La otra firma era Lumed, creada en 2011 para “organización de eventos, catering y desfiles de modas”. La tercena era Lume, una agencia de autos importados ubicada en Pellegrini al 5500, y la cuarta era Reina Automotores, que manejaba Lelo Pérez y luego un empleado Germán Tobo, que fue asesinado a principios de septiembre de 2014 por dos sicarios frente a la Jefatura de Policía de Rosario. Sin embargo, en los papeles el titular de Reina Automotores era Lelo Pérez.

Pérez también figuraba como socio de Gustavo Spadoni en la sociedad Repuestos Exclusivos SRL. La concesionaria de motos de Spadoni fue allanada en julio de 2012 en el marco del Operativo Peras Blancas, que puso al descubierto un contrabando de cocaína hacia Portugal. Allí fue secuestrada la motocicleta de Martín Paz, alias Fantasma, asesinado en 2012. La moto figuraba a nombre del juez de instrucción que investiga a la banda de Los Monos: Juan Carlos Vienna. Eran simples casualidades, según el entorno de Lelo.

Los comensales de la mesa de Pampa no sabían nada de estas historias. O al menos decían desconocer esas fronteras donde nunca se habían metido. El clima en Rosario era muy distinto en aquella época al que se vive en 2023. La violencia narco no era un problema, al menos, para esa gente. Rosario no cargaba con ese karma de ciudad narco, luego de la guerra que se desató tras el crimen de Pájaro Cantero. La cifra de homicidios, que sirve para tabular en parte el nivel de violencia, llegó a 97 en 2010. La tercera parte de lo que iba a ocurrir en 2023.

Lelo había llegado a la mesa por Oneto, a quien unos meses después le compró un departamento de dos dormitorios en el edificio más caro de Rosario en ese momento: la codiciada torre Aqualina, inaugurada en 2009. Meses después la familia de Lionel Messi también adquirió un piso, donde hoy vive la hermana del crack. Era el edificio más preciado y cotizado de la ciudad, una torre lujosa de 40 pisos que

estaba ubicada a unos metros del Monumento a la Bandera y tenía vista al río. Por fuera de Buenos Aires, en ese momento era el edificio más alto, con 127 metros.

Las anécdotas de Lelo eran desopilantes. Era un tipo con calle que había llegado a la cima. No venía de una familia rica ni había logrado multiplicar lo heredado, como algunos de los que se sentaban en Pampa. Lelo había hecho una fortuna vendiendo autos importados. ¿A quién? Eso no importaba. Juraba que nunca había vendido drogas.

“No pregunto de dónde sacó la plata el que quiere uno de mis autos. A mí qué me importa cómo hizo su fortuna”, repetía a sus amigos. No solo había empezado en los 90 de abajo sino desde el subsuelo. Su historia, según relataba siempre con chistes en el medio, comenzó con un Alfa Romeo. Se le había averiado y fue a comprar los repuestos a Warnes, en Buenos Aires.

Tras averiguar los precios de una mercadería que no provenía, en su mayoría, de los fabricantes oficiales se dio cuenta de que podía hacer negocio. Decidió desguazar el Alfa Romeo y vender las partes. Sacó más dinero que si lo hubiera ubicado en una concesionaria. Desde ese lugar entró en el comercio de autos, de acuerdo con lo que explicaba con tramos épicos. Al poco tiempo, el local que había puesto de venta de repuestos de autos tuvo una visita particular: la policía, que sabía a la perfección cómo se movía ese negocio gris. Querían su parte.

Sospechaba que iba a tener problemas. Entonces, decidió vender todo lo que tenía con facturas truchas. Se “limpió” con bastante habilidad y volvió a empezar con dos autos que le habían dado para vender. Su destreza estaba en la circulación del dinero y en saber lo que el cliente quería. En esa época la demanda de autos de alta gama, en pleno esplendor económico de la Argentina, era firme. Y más aún en Rosario, con los narcos en franco despunte. Empezaba a aparecer una nueva clientela que salía de los suburbios, con mucho dinero líquido que provenía de la venta de drogas. Lo primero que querían tener para demostrar que habían hecho plata no era cambiar de casa ni mudarse, sino comprarse un auto de lujo. Exhibir el ascenso. Eso era lo que resaltaba con mayor intensidad en la periferia.

Una tarde de 2007 estacionó en la puerta de Reina Automotores una camioneta Hummer de la que bajó un muchacho gordito, petiso,

vestido con pantalones cortos y una remera. Lelo pensó que era alguien que tenía que lavar la camioneta, se tentó y salió a dar una vuelta. Esa fue la película que se hizo en su cabeza. Era la única manera de relacionar al conductor con ese vehículo increíble. Lelo se puso a observar la Hummer. Era la única que circulaba por Rosario y nunca había visto una tan de cerca. El hombre entró a la concesionaria sin saludar, con cierta prepotencia. Le preguntó cuánto salía un auto importado que estaba en exhibición. A Lelo le cayó mal de entrada, según contaba a sus amigos, por la forma de actuar del tipo. La mala educación. Lo miró de arriba abajo y le preguntó qué quería. "Ya te dije", respondió el hombre de mala manera. "Salí de acá porque te voy a romper la cabeza", dijo Lelo sin despertar simpatía.

"¿Sabés quién soy yo?", preguntó con el mismo tono el supuesto cliente. "Un negro de mierda", le respondió Lelo sin dejar que terminara la frase. "Soy Mario Segovia, pelotudo", dijo en seco. Lelo no sabía quién era Mario Segovia, como casi nadie. Se le fue encima para pegarle una trompada. Segovia retrocedió y salió corriendo, de acuerdo con la historia que maravillaba a los amigos de Lelo. "Cómo iba a saber que era el rey de la efedrina", con esa frase cerraba la anécdota que causaba sensación.

Lelo tenía más dinero que la mayoría de los otros comensales. Nadie podía correrlo con eso. Había comprado departamentos en Miami. Vivía en el edificio más caro de Rosario. Viajaba al exterior. Se vestía bien y era muy simpático.

Un día decidió hacer una invitación formal a su cumpleaños a los integrantes de la mesa. Les dijo que haría una fiesta en la terraza del edificio, donde estaba el quincho con las parrillas. Iba a ser un cumpleaños inolvidable. Los miembros de la mesa no acostumbraban a concurrir a esos eventos sociales, a mezclarse con desconocidos. Pero accedieron después de la insistencia. Tenían también cierta intriga, porque los seducía el perfil de Lelo. Él estaba convencido de que había otro ingrediente que ayudaba. "Ellos querían tener un amigo pesado. Creían que era Al Capone y yo dejaba que lo creyeran", rememoraba tiempo después. "Pero yo tenía más ética que ellos. Porque en mi negocio no corría el engaño. A pesar de lo que ellos pensaran yo tenía códigos éticos. Si no los tenía no vendía nada", decía. Prefería no

repetir la frase que todos imaginaban en sus cabezas: te mataban.

Antes de la fiesta ocurrió algo inesperado. Lelo sospechaba que nada iba a ser tan sencillo. El intendente de la torre, designado por los propios propietarios, era el dueño del piso 29, también un hombre de negocios: Guillermo Salazar Boero, quien había sido hasta ese año, 2009, presidente de Terminal Puerto Rosario, un lugar al que había llegado por el empresario de medios Orlando Vignatti. Ese año Salazar Boero traspasó las acciones de TPR al financista Gustavo Shanahan, quien más de una década después terminaría preso por narcotráfico.

La firma portuaria entró en convocatoria de acreedores con un pasivo gigantesco, según lo verificado por los síndicos en la causa que estuvo al frente de la jueza María Andrea Mondelli, titular del Juzgado Nº 14 en lo Civil y Comercial de Rosario. En ese expediente se presentaron a verificar 209 acreedores, que reclamaron en total 220 millones de pesos.

Sin embargo, la sindicatura recomendó corroborar unos 86 millones. Sobraban las razones para retirarle la concesión, pero ese recurso de última instancia se quiso evitar por el antecedente de los filipinos, los concesionarios anteriores. Aunque había otras sospechas. Cuando apareció Aotsa, del Grupo Vicentin, interesado en el Puerto, las autoridades trataron de enfocar su mirada hacia adelante. Pero como escribió Oscar Wilde, “no hay hombres lo bastante ricos para comprar su pasado”.

Shanahan, contador público nacional de 67 años, es un hombre muy conocido en el ambiente de los negocios en Rosario, a través de decenas de sociedades y empresas que se crearon para participar en distintos sectores de la vida económica de la ciudad, desde inversiones inmobiliarias millonarias, el manejo de los muelles I y II, participación en el sector financiero, en hotelería y hasta en los juegos de azar.

Este financista fue quien armó el proyecto inmobiliario de Los pasos del Jockey, barrio exclusivo de donde fue desplazado luego de que se esfumaran los fondos de los compradores de los inmuebles, que habría usado para afrontar deudas en el puerto. Shanahan también era dueño de tierras en Empalme Graneros, una de las zonas más castigadas por la violencia narco.

En 2021, Shanahan, que contó durante años con blindaje mediático

a pesar de los escándalos en los que fue protagonista, fue detenido por narcotráfico. Su caída en manos de la Policía Federal, tras una investigación originada en la fiscalía federal de Rosario, mostró claramente cómo el dinero que fluye por el tráfico de drogas termina en las cuevas financieras donde se reinvierte y adquiere otra fisonomía.

A Salazar Boero, que hizo ingresar al puerto a Shanahan, le molestaba Lelo Pérez. Una cosa era hacer negocios oscuros y otra que los tránsfugas, como pensaba el viejo, fueran tus vecinos. Cuando se enteró de que el vendedor de autos iba a hacer una fiesta en la azotea les pidió a los guardias que le exigieran un listado de todos los invitados.

"No hay ningún problema. En un rato les paso la lista, muchachos", respondió Lelo cuando en el hall el jefe de los guardias de seguridad le planteó la situación, que era un requerimiento de la intendencia del edificio. Pérez disfrutaba de ciertas cosas. Como sabía lo que pensaban de él decidió tirar de la cuerda. Hizo una nómina de sus invitados que tenía una particularidad. La mayoría eran de apellido Cantero, el mismo de la banda de Los Monos. Era una lista falsa. Una provocación en busca de una reacción del intendente de la torre. Y eso ocurrió.

A los pocos días Lelo subió al ascensor con su pareja en el piso 30. Paró uno más abajo, y allí subió Salazar Boero con su esposa. Lelo miró a su mujer y le hizo una mueca para trasladarle tranquilidad. Lo conocía a su marido y sabía que podía trompear a su vecino dentro del ascensor. Nadie pronunció una palabra y a pesar de que el ascensor era veloz el tiempo ahí adentro se hizo eterno.

Cuando llegaron al hall de ingreso, Salazar Boero le dijo: "Tengo que hablar un minuto con vos". Lelo sabía que había picado. "Vos te creés pícaro con la lista que nos pasaste. ¿Sabés quién conoce a Los Monos? Yo, pelotudo", lo apuró el expresidente del puerto. Lelo contó luego que el empresario se corrió la campera y le mostró una pistola 9 milímetros.

Cuando terminó la frase Lelo le pegó una trompada seca e intensa, que volteó al empresario. Quedó desparramado en el piso reluciente del hall. La situación fue tan rápida e inesperada, dos vecinos del edificio más caro de Rosario trenzados a puñetes como en la puerta de

la cancha, que los guardias recién acudieron cuando Salazar Boero estaba en el suelo atajándose de las patadas que Lelo le pegaba en el culo. El vendedor de autos tomó el arma y la dejó en el árbol que está frente al edificio. En la torre a veces se vivía como en el barrio. Lelo no tuvo más trabas para hacer su fiesta y exhibir su vida de rico.

En la terraza de Aqualina los miembros de la "mesa" vieron la realidad. Quién era verdaderamente Lelo Pérez. Y se querían morir, según uno de los invitados. Lelo pensaba lo contrario, que les había encantado. Se miraban entre ellos, como chicos tímidos que no saben para dónde ir. En la terraza del edificio los hombres formales y ricos no sabían dónde se habían metido. Pero en ese momento descubrían quién era el muchacho simpático millonario. Se habían topado con la otra Rosario, una ciudad que desconocían cómo había cambiado.

Lo primero que sorprendió a los comensales de la mesa fueron los guardaespaldas. O lo que ellos pensaban que eran patovicas. En realidad no sabían cuál era su función. Pero eran hombres gigantes, con decenas de tatuajes que los remontaban a películas. Uno de ellos siempre recordará los tattoos en la cabeza de un morocho exageradamente fornido, que estaba vestido de traje negro.

Todos se hacían la misma pregunta: ¿para qué patovicas en la terraza del edificio más caro de Rosario? Mientras más miraban más se sorprendían. Esa noche, en ese espacio frente al río, los hombres de la "mesa" se codearon con mujeres hermosas, sexys, vestidas con ropa elegante, que despertaban deseos irrefrenables. Gente que no conocían y otra que sí, que se sorprendían de verse ahí, en esa terraza donde los mozos pasaban con champán importado. Porque ellos no eran los únicos "importantes" de la fiesta. También había empresarios textiles. Lelo estaba exultante. Les agradeció haber concurrido. Fue presentando a los presentes. Los dos mundos, el de los empresarios y el de Lelo, se habían conocido.

Unos meses después de la fiesta de cumpleaños, Lelo fue con una nueva propuesta a Oneto, quien le había vendido el departamento en la torre Aqualina. Lelo quería un piso entero, como Messi. Ofrecía pagarle con el departamento de dos dormitorios que había adquirido en efectivo y el saldo en cuotas. Era mucho dinero. Un millón de dólares. Esa clase de negocios no requerían garantías ni mucho

papeleo. En ese mundo la palabra seguía siendo importante. Al tercer mes, Lelo le dijo a Oneto que se habían complicado algunos negocios. Ofreció saldar el departamento con un campo en Alvear. Oneto consultó con un corredor inmobiliario especializado que fue a ver el campo. Era bueno.

El muchacho simpático, que se mostraba como un magnate, ya comenzaba a meterlo en problemas. Pero si el campo valía lo que él decía no había problemas. Decidió avanzar. Fue el peor error de su vida, según él. Los mundos se habían cruzado y no se había dado cuenta.

16
EL SECUESTRO

La humedad se apreciaba en una densa bruma que flotaba sobre el río. Poco después de las 10 de la mañana el frío intenso comenzó a retroceder cuando un sol tibio despertó a destiempo por sobre las islas frente a Rosario. Jorge Oneto ya tenía decidido que iba a salir a caminar, como lo hacía dos o tres veces por semana. Era una rutina que lo reconfortaba. Estar al aire libre junto al río y de paso hacer un poco de vida sana, como le había recomendado su clínico. Caminar por allí era uno de los placeres que se obtienen gratis en Rosario, a solo unos pasos del centro. Se puede ver el Paraná, los barcos cerealeros que surcan el río yendo a cargar a los puertos del norte, y las islas que están frente a la ciudad, donde los sauces y los timbós parecen desfigurados por la bruma.

Oneto estaba vestido con un pantalón de gimnasia, un buzo y zapatillas. No solo caminar era recomendable para su físico sino que también lo ayudaba a despejar los nudos de preocupación de los negocios que surgían de la agencia de bolsa que manejaba en el corazón de la city rosarina.

Cerca de las 10.30 saludó a los guardias y salió de la torre Aqualina, 200 metros al sur del Monumento a la Bandera, y se dirigió hacia la ribera. El río se mostraba imponente, con esa neblina que simulaba ser tenebrosa. Oneto parecía conectado con su propósito de hacer deporte, lo extraño es que ese día llevaba una botella de malbec.

No era usual que alguien que pretendía hacer deporte cargue una botella de vino tinto dentro de una bolsa de papel madera. Era algo extraño, que desentonaba, además, con todo el entorno. Oneto se iba a encontrar con Sandra, una amiga que había conocido en las caminatas por la ribera y quería darle un regalo ese día, que se festejaba el día del amigo. Sabía que ella apreciaba el buen vino.

Caminó por avenida Belgrano y cuando dio vueltas en la calle de piedra, que se llama Camino de las Artes, se encontró con dos agentes de Prefectura en la puerta. En esa calle empedrada no hay tránsito por lo que los agentes charlaban sin rumbo definido, para que las horas pasaran ese día frío. Oneto pasó caminando a su lado para encontrarse con Sandra.

Un instante después, apareció un auto gris, que paró junto al empresario. Del lado del acompañante bajó un hombre de unos 40 años, bien vestido. Le preguntó si era Jorge Oneto, con un tono neutral, sin entonación. La pregunta fue retórica, porque ya sabía quién era. Solo buscaba una confirmación. Del bolsillo interno del saco sacó un papel tamaño carta que desplegó, como si fuera un documento importante. Oneto no tenía los lentes para leer y no alcanzaba a divisar qué decía el papel, que a lo lejos tenía aspecto de tratarse de un documento judicial. Creyó observar en ese momento los sellos típicos de una citación, pero no estaba seguro.

—Tiene que acompañarnos porque debe ir a declarar en la fiscalía.

El hombre, que nunca se identificó ni dijo que era policía, acercó un poco el documento y Oneto alcanzó a ver un sello y que figuraba el nombre de De Gaetano. Estaba confundido y aturdido porque el recién llegado insistía que debía subir al auto, porque así iba a evitar —según él— que lo buscaran por la fuerza. El argumento no tenía ninguna lógica. Oneto había sido desvinculado hacía dos años por una estafa inmobiliaria millonaria, en la que siempre dijo que fue víctima. Lo que lo confundía era el nombre de De Gaetano, un sindicalista que todavía seguía involucrado en ese caso, que lo había llevado a la cárcel al propio Oneto. Cuando comenzó a comprender la situación el financista miró a los ojos a ese hombre morocho y de mediana altura. Se dio cuenta de que algo iba a pasar.

—Mire, yo no tengo que ir a tribunales, porque el caso está cerrado. No voy a ir a ningún lado. Si quiere comuníquese con mis abogados.

El hombre lo miró fijo. Oneto intentó seguir con su caminata y ver si podía encontrar a Sandra. Pero cuando atinó a moverse el hombre sacó del saco una pistola y se la puso en la panza. “Subí al auto ya, y no intentes hacer nada”, dijo, sin gritar, pero con un tono duro, que demostraba seguridad. Otro hombre estaba al volante en el auto que

había quedado en marcha. Pero Oneto nunca logró ver su cara ni escuchar su voz. A causa del frío la cuadra estaba desierta y los prefectos que estaban del otro lado de la calle ni se enteraron de la situación.

El hombre con la pistola también subió en el asiento de atrás. En silencio y sin hacer ningún movimiento brusco le puso un pasamontañas, que tenía tapado el espacio de los ojos. También le colocó unas esposas de acero y lo recostaron sobre el asiento para que no lo vieran desde afuera, a pesar de que el auto tenía vidrios polarizados.

Oneto estaba en shock. La situación había sido tan rápida que ni siquiera estaba nervioso ni lo había envuelto el miedo. En un principio pensó que ese hombre con mirada imperturbable lo iba a matar, que era un sicario. Pero esa idea desapareció de su cabeza. “Estos son profesionales”, pensó en ese momento. “Buscan plata”.

Recostado en el asiento de atrás con la cabeza tapada y sus manos atadas con las esposas solo podía sentir lo que el auto transmitía a su cuerpo cuando transitaba. Trataba de memorizar por dónde andaba el coche. Era como un ciego en ese momento. Sin ver trataba de descifrar lo que sentía su cuerpo. Asfalto, tierra, ripio. Únicamente estaba seguro de que se habían dirigido hacia el sur. Por el acceso sur y luego por la Circunvalación. Eso fue lo que intuyó de los giros que dio el vehículo, y porque en ese momento no sentía nada, como si el auto flotara, salvo por unos lomos de burro. Era el asfalto nuevo que habían puesto para el Dakar en avenida Belgrano, después de Pellegrini.

Oneto no podía hacer nada. Y eso era lo que lo alteraba. La impotencia. Unos diez minutos después de que lo subieran al auto, el hombre de saco habló con Luciano, el gerente de la empresa. Le explicó con tranquilidad lo que ocurría. Se trataba de un secuestro y tenía que seguir los pasos que ellos, los raptores, habían definido de forma estratégica. Unos segundos después le levantó el pasamontañas y le ordenó a Oneto que hablara con su gerente. “Sí, Luciano. Soy yo, Jorge Oneto”, le dijo para confirmar de quién se trataba, y luego el hombre le sacó el teléfono, le bajó el pasamontañas y volvió a recostarlo en el auto.

El hombre fue claro y conciso en el diálogo que mantuvo con

Luciano, después de que le informaran que tenían secuestrado a su jefe. “Si seguís las órdenes al pie de la letra esto tiene que solucionarse rápido y sin problemas”, dijo. Del otro lado de la línea, el broker de Oneto no emitía palabra. Estaba desconcertado. Atravesado por un miedo que lo dejaba inmóvil. El hombre describió situaciones de la vida privada del cautivo, de su familia, que muy pocos conocían. Era para demarcar quién mandaba en ese momento, quién tenía las riendas de la situación. Y que eran profesionales. No se trataba de gente lumpen que quería hacer dinero fácil, como estaban acostumbrados en Rosario. Una muestra era el secuestro extorsivo que había planeado en 2017 Guille Cantero desde la cárcel de Coronda con dos secuaces que luego terminaron reventados a tiros. Los soldados del líder de Los Monos se confundieron de víctima. Raptaron al hijo de un carnicero, al que golpearon y verduguearon. Esto era otra cosa. Los secuestradores habían hecho tareas de inteligencia previa, sabían dónde se movían, por dónde tenían que ir y dónde llegar. Esta última era la incógnita que atravesaba a Oneto, mientras estaba tirado en el asiento de atrás, con las esposas puestas y el pasamontañas que lo asfixiaba.

“Andá al estacionamiento que está abajo y buscá una mochila. Ahí hay tres teléfonos. De ahora en más vamos a hablar con esos teléfonos. Si llamás a la policía o avisás a la justicia sabés lo que va te a pasar a vos y a él”, dijo el hombre y cortó. Luciano miró por la ventana, hacia la calle Santa Fe, aturdido por lo que ocurría. No podía creer lo que estaba viviendo. Un minuto después bajó al estacionamiento y encontró la mochila negra. No la abrió en ese momento, sino que decidió subir de vuelta a la oficina. Y esperar las nuevas directivas.

De pronto el auto redujo la velocidad. Empezaron a sentirse los amortiguadores. Habían pasado unos 40 minutos. Oneto no tenía reloj, porque el hombre de saco se lo había sacado cuando le puso las esposas. Tampoco podía verlo, por lo que no le servía de nada. Presintió que estaban por llegar. Que el vehículo se movía por un camino de tierra. Unos diez minutos después se detuvieron. Primero escuchó bajar al conductor. Nadie decía una palabra. Tampoco podía escuchar el sonido ambiente, si estaban en un campo o un pueblo o una ciudad. Un par de minutos después se abrió la trasera del auto.

“Bajate”, le dijo el hombre de saco, la única voz que escuchó. Lo ayudó a descender, pero no le sacaron las esposas ni el pasamontañas.

Con pasitos cortos y lentos lo desplazaron hasta lo que Oneto intuyó era una casa. Por el silencio, sospechó que se trataba de una vivienda en el campo. No se escuchaban ruidos de autos ni de camiones, por lo que probablemente estarían lejos de una ruta. Lo metieron en una habitación y lo recostaron en una cama para que estuviera más cómodo y para atarle las piernas. También le colocaron una cinta de embalar en la boca. No podía emitir sonido ni moverse. Al cabo de unos minutos se dio cuenta de que sus captores tenían un control absoluto sobre él. Podrían hacer lo que quisiesen. Golpearlo, matarlo, descuartizarlo, arrojarlo al río, enterrarlo. Él sabía que la clave para que eso no ocurriera era el dinero, ese que hizo circular desde hace décadas por los resquicios de la city rosarina.

La cifra que escuchó Luciano de parte de los captores era exorbitante. Un millón de dólares. Sabía que nunca iba a llegar a ese monto, pero debía recolectar dinero. El horario no era el mejor. Eran las dos de la tarde y los bancos estaban por cerrar. Lo más fácil en un principio era reunir la plata que tenían en la empresa. No superaba los 20.000 dólares. Se comunicó con uno de los socios de Oneto para comentarle lo que había pasado y cómo podían superar la situación. El problema era cómo pedir dinero sin decir para qué era, aunque en ese rubro las explicaciones a veces no contenían detalles. Empezaron a llamar a los amigos de la agencia de bolsa. Los de máxima confianza. Debían actuar con rapidez, pero el dinero no abundaba. Las finanzas estaban desparramadas en decenas de instrumentos y poco quedaba ya en “físico”. A un par de personas de extrema confianza le contaron lo que pasaba. Era la única manera que pudieran juntar más dinero. La búsqueda se abrió como un ramillete. Hacía mucho tiempo que en la city no había gente en busca de plata con esa desesperación. Los rumores comenzaron a circular a la par de los pedidos. Los llamados de los secuestradores se repetían cada vez con mayor frecuencia. Presionaban de una forma cada vez más violenta. La tarde caía y ya no quedaban puertas dónde golpear. La vaquita llegaba a 120.000 dólares y unos 200.000 pesos. Era poco más del diez por ciento de lo que pedían por la vida de la víctima.

Luciano no daba más. Estaba desbordado. No podían conseguir más plata. Ese monto era el límite. Se lo diría al hombre que lo llamaba en la próxima comunicación. Pedía solo que le creyeran. “Esto es todo lo que hay. En dinero en efectivo no hay más”, dijo con un tono de resignación que era convincente.

—Vas a hacer lo que te indicamos. Te movés un milímetro y todo se va al carajo, ¿sabés? Vas a poner el dinero en la mochila que te dejamos en la cochera. Y vas a ir hasta la colectora de Circunvalación y Sorrento, donde están construyendo un nuevo shopping y vas a dejar todo en un contenedor de basura. Nosotros te vamos a estar vigilando. ¿Está todo claro?

Luciano se subió a su auto y comenzó a transitar hacia el oeste de Rosario. Cumplió a la perfección todo lo que le habían indicado. No solo temía por la vida de Oneto, sino por la propia. Ni siquiera miró cuando una moto pasó a buscar la mochila que había dejado. Solo le quedaba esperar que los secuestradores cumplieran con lo pactado y liberaran al financista.

El sol empezaba a ocultarse y el fresco se sentía. Oneto sintió un alivio inigualable cuando luego de escuchar los pasos de los captores comenzaron a desatarlo. No le dijeron nada. Y de la felicidad por no tener más las ataduras en sus manos comenzó otra vez la duda. ¿Si no lograron juntar el dinero y me van a matar? Esa incertidumbre era lo peor, pero trataba de pensar en positivo. Que todo había terminado bien. Lo subieron al auto y tras andar más de media hora lo dejaron en un camino de tierra. No sabía dónde estaba. Era un campo, pero ignoraba dónde. Era de noche y no veía nada. Empezó a buscar alguna referencia pero no encontraba algo que lo guiara. Las luces. Debía encontrar luces hacia dónde ir. A lo lejos percibió algunos destellos. Empezó a caminar. Estaba extenuado, pero tenía que juntar fuerzas para salir de allí. Caminó más de un kilómetro hasta esa luz que creía ver a lo lejos. Encontró una casa, donde le explicó a un hombre que estaba solo lo que le había pasado. Tomó agua. Se sentó. No tenía dinero. Le prometió al dueño de la casa que le pagaría por esa ayuda. El hombre era amable y llamó a un amigo que era remisero, que llegó media hora después. Cuando volvía a Rosario desde el sur, cerca de Villa Constitución, trataba de no pensar cómo había salvado su vida,

que ya no volvería a ser la misma.

17
LAS MUTUALES CON DUEÑO

“No es aceptable que en una ciudad como Rosario, donde tenemos más de 200 homicidios en lo que va del año, personas que manejan mutuales presten dinero sin tener la precaución de pedir siquiera una constancia de monotributo al solicitante. Es un fenómeno normalizado que debe dejar de estarlo. Esta es una actividad al margen de la ley que alimenta y permite que proliferen los delitos de sangre”.

El fiscal Luis Schiappa Pietra estaba al costado del presidente y de un intermediario de la Asociación Mutual de Emprendedores del Litoral. Solo eso impidió que los mirara a los ojos. Ambos habían quedado detenidos por lavado de activos e intermediación financiera ilícita. Era un sábado de septiembre de 2022. Los habían apresado cuatro días antes por venderle dólares a una mujer investigada por comercio de drogas.

La mutual donde lo hacían funciona en los pisos 6 y 8 de España 889, en el centro, a metros del Arzobispado de Rosario. En ese operativo fue incautada una significativa cantidad de dinero, según los fiscales actuantes sin respaldo en operaciones lícitamente registradas.

Los imputados eran el presidente de la mutual, Juan Carlos Vagliente y una persona que le derivaba clientes, Américo Márquez. Este último era el hilo que condujo a los allanamientos. El motivo es que su número aparecía agendado como “Eduardo Dólares” en el celular de Sandra Calegari, una mujer conectada con Pablo Nicolás Camino, preso en la cárcel de Piñero por homicidio y sindicado como actor relevante del comercio de drogas en zona sudoeste, a la vez con vínculos con el líder de Los Monos, Ariel “Guille” Cantero. En la pericia forense del celular de Calegari surgían los detalles de las operaciones financieras entre la mujer y el intermediario.

Al presidente de la mutual le atribuyeron ingresar en el sistema

financiero formal el dinero informal de Sandra Calegari. Para ello el directivo puso a disposición la estructura de la mutual. Los fiscales resaltaron que la entidad no contaba con autorización por parte del Banco Central de la República Argentina para intermediar en el mercado financiero ni para realizar operaciones de compraventa de divisas.

Una obviedad del todo obvia. Pero las operaciones se hacían a decenas todos los días en cuevas o mesas de dinero de la ciudad. En Rosario estos ámbitos invisibles empezaron a iluminarse con el resplandor de los muertos. Y los fiscales de la audiencia lo dijeron. Para que algo cambie hay que empezar a mostrar los estragos de lo evidente.

Los defensores adujeron que las operaciones objetadas habían sido por una cantidad baja de dinero. Los fiscales replicaron que el monto era un detalle. Lo relevante era que la compradora aparecía ligada a un grupo delictivo y las operaciones se hacían con habitualidad. La opacidad de esos manejos también multiplicó rumores que llegaron al Centro de Justicia. Uno de ellos que parte de la cantidad incautada era de un dirigente político conocido que hacía negocios en la mutual y que difícilmente fuera a realizar un reclamo.

En el medio del maltrato de la violencia y de los hijos muertos de la ciudad, los operativos contra las mutuales, cooperativas y cuevas empezaron a ser rutina. Lo que comenzó a tallar entre empresarios e inversores en general fue el miedo a hacer negocios en el mismo lugar que los narcos. Las mutuales por primera vez fueron investigadas por lavado o receptación de origen dudoso.

Un productor agrícola quiere regularizar el dinero que evade. También puede ser un político que obtuvo dinero de la corrupción. O un traficante del mercado de trata. O un distribuidor de droga. En Santa Fe todos ellos tienen un gran sistema a su disposición en las mutuales que funcionan en pequeñas localidades y que están en Rosario también. Les ofrecen allí los mecanismos de cambio de cheques. Va un asociado a la mutual y deposita el cheque de un tercero. La mutual lo lleva al banco, consigue el dinero y lo deja a disposición del asociado. El asociado puede ser un comerciante que dice que la plata provino de su negocio lícito.

Santa Fe, que es la provincia que alberga a la ciudad más violenta del país, es también la que tiene más cantidad de mutuales. Estas entidades asociativas cumplen en su mayoría un rol social de enorme utilidad comunitaria. Ofrecen servicios en pequeñas localidades donde no hay bancos o donde el Estado o el sistema financiero no llega. A veces son las que financian el pago de sueldos a empleados de comunas. Tienen proveeduría, farmacia y obra social en regiones a veces olvidadas. Pero el grueso de la ayuda es económica. Presta, oficiando de caja, o recibe depósitos como caja de ahorro o cuenta corriente.

Pero los controles sobre las mutuales son muy laxos y los interesados diversos en blanquear dinero son los primeros en saberlo. El Banco Central no tiene supervisión sobre las mutuales y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), que es la autoridad de aplicación, no tiene en la práctica capacidad regulatoria.

En los hechos, dicen los conocedores del sistema, las mutuales tienen a un conjunto de asociados que mueven dinero en efectivo o cheques de terceros de actividades oscuras haciendo de fronting para presentar la plata. El argumento de las mutuales para avanzar en las operatorias es que al asociado se lo conoce y es intachable. Sin trazabilidad en la documentación el dinero que se gestiona puede provenir de cualquier lado.

En una economía poco bancarizada la actividad poco controlada de las mutuales es un puente de blanqueo del dinero obtenido en forma lícita pero que no paga impuestos, lo que no es dinero negro sino gris, y obviamente del que viene también de actividades no lícitas o criminales.

Existe un runrún que ya pasó la frontera del rumor y que cuentan directivos genuinamente preocupados de las mismas mutuales: hay asociados que en realidad compran las mutuales. Las adquieren con cantidades siderales de efectivo que atajan de donde sea. El mecanismo de estos capitalistas es tener un plantel propio, sus hombres de paja, que serán los directivos de confianza que en el futuro manejarán la estructura gerencial y administrativa. Eso es lo que se necesita para lavar. El fenómeno de las mutuales con dueño es algo que en Rosario y en pueblos de Santa Fe dista de ser un secreto. La

lógica permisiva de estas entidades son una ancha avenida de ingresos del capital narco.

Los ejemplos sobran y cada tanto están en las noticias. La aparición de una avioneta con droga a inicios de 2020 en San Justo, 200 kilómetros al norte de Rosario, fue el primero de una sucesión de actos que condujeron al allanamiento a una mutual. La trama fue descubierta por el fiscal federal de Santa Fe, Walter Rodríguez, en una investigación por narcotráfico iniciada a partir del aterrizaje forzoso de la aeronave que venía de Paraguay cargada con 200 kilos de cocaína el 22 de febrero de 2020. La pesquisa conectó ese cargamento con dos personas prófugas y con captura recomendada. Eran Lorena Melgarejo y Claudio "Pulga" Casco, que son pareja.

Hilando más fino el fiscal Rodríguez detectó una asociación dedicada al fraude fiscal mediante la utilización de SAS (Sociedades de Acciones Simplificadas), un mecanismo impulsado por ley en 2017, que permite crear una empresa en 24 horas, con requisitos y controles mínimos. Esto le había permitido a la banda generar compañías a lo pavote para mover y lavar dinero del comercio de drogas.

A los seis meses pidieron allanar empresas y domicilios en Rosario por el incidente de la narcoavioneta. ¿Cómo se relacionaban? El fiscal Rodríguez avanzó con los vínculos entre la avioneta que el 22 de febrero ingresó al país y la avioneta que apareció abandonada con 200 panes de cocaína. La información aportada por la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos indicó que el destino de la aeronave podía haber sido cercano a Venado Tuerto, Santa Fe o Rosario.

Al avanzar en la pesquisa surgió que la droga tenía relación con Melgarejo y Casco. Luego quedaron al desnudo las conexiones societarias de estos, por un lado, y el hecho de que el posible destino final de la sustancia trasladada por la avioneta fueran los socios en Rosario.

Se tomaron medidas para establecer dónde estaban Melgarejo y Casco. Para ello se levantó el secreto fiscal y se avanzó en la búsqueda de información de datos financieros y comerciales. Eso arrojó como resultado que eran el núcleo de un conglomerado de sociedades del mismo tipo que presentaban características similares y entrelazadas.

Varias de esas conexiones estaban en Rosario y motivaron los 16 allanamientos. El último fue el de la mutual 23 de Julio, de la calle San Martín al 2300, por la relación especial con la firma de una mujer que se desempeñaba allí.

Lo que se investigaba era la conformación de una asociación dedicada a cometer ilícitos tributarios, a instancia de sociedades por acciones simplificadas y personas que en su conjunto emitieron 8544 facturas por casi cinco millones de dólares.

Los que trastabillaron en la mutual fueron el presidente y su tesorera. Los acusaron por confeccionar facturas falsas por siete millones de pesos que equivalían, al momento de la maniobra, a 50.000 dólares. Como dijo el fiscal en la audiencia, a veces no cuenta el volumen del monto, sino la reiteración de las operaciones y el significado.

Las empresas vinculadas a los dos narcos de Santa Fe habían llamado la atención por no tener acreditaciones bancarias que coincidieran con las facturas emitidas. Tampoco retenciones que demostraran una actividad comercial real. Los domicilios de las firmas eran inexistentes. Y algunos de ellos tenían relación con puntos de venta de droga al menudeo que, según el fiscal federal Rodríguez, se encontraban asociados a “la banda narco criminal vulgarmente conocida como Los Monos”.

En abril de 2023 el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Daniel Erbetta, fue al Congreso de la Nación a describir detalles de cómo los narcos en la provincia habían usado unas cuarenta empresas dibujadas mediante el régimen de las SAS, creado en 2017, para generar facturas truchas y lavar dinero. Se trató de un proyecto de ley para adoptar mecanismos de transparencia en este tipo de sociedades para que puedan ser utilizadas por personas que quieran desarrollar una actividad económica legítima y no quienes la usan como herramienta para blanquear dinero.

La plata serpentea entre el campo lícito de las finanzas y los grupos criminales. Se ve en las mutuales, en los mecanismos de evasión, en la facturación trucha. Pero también se nota al seguir cuarenta cuadras al valijero que retira la plata de un quiosco barrial de drogas y advertir su ingreso en una financiera legalmente inscripta que pertenece al

expresidente del puerto de Rosario. O se nota igualmente cuando balean a un deudor insolvente de una firma prestadora de efectivo para que pague lo que debe. Y un fiscal provincial detectó que quien habría dado las órdenes para lograr ese cobro, con ese método, es la esposa de Daniel Corbellini, el exdirector de la Policía de Investigaciones de toda la provincia, y de la central operativa que maneja toda la información estratégica sobre el despliegue de patrullas.

El dinero es la región más transparente.

18
LAS CONEXIONES

El calor era intenso esa noche, pero corría una leve brisa del río Paraná en la ribera de Puerto Norte, un lugar categorizado como el Puerto Madero de Rosario. Pidieron una ronda de cerveza y una pizza. Cuando trajeron la comida el senador Armando Traferri se empezó a sentir incómodo. La moza se había olvidado de llevar los platos y con el hambre que tenían sus compañeros de mesa no tuvo tiempo de reclamar. El gobernador electo Omar Perotti y Roberto Mirabella, su hombre de mayor confianza, empezaron a comer la pizza con la mano. Traferri insistió al mozo que llevara unos platos. En ese momento Traferri pensó que decidir el armado del futuro gabinete comiendo pizza con la mano era algo grotesco. Pero la discusión no estaba en los modales sino en cuestiones más importantes: cómo se iban a repartir los ministerios de la próxima gestión.

La tercera era la vencida. Perotti había ganado la gobernación de Santa Fe después de dos intentos fallidos; en 2015 estuvo muy cerca, el socialista Miguel Lifschitz lo superó por apenas tres puntos. La campaña "paz y orden" había tenido su impacto en 2019. Era lo que la población buscaba después de que la violencia e inseguridad se fueran de las manos durante la gestión que lo precedió a Lifschitz, encabezada por Antonio Bonfatti.

Si Perotti no ganaba en 2019 se debía retirar a Rafaela, su tierra natal donde había sido intendente dos veces. Porque el Frente Progresista que nucleaba a socialistas y radicales puso como contrincante a Bonfatti, un médico que había tambaleado durante su gobernación por los azotes de la violencia, entre ellos el atentado a balazos contra su propio domicilio en octubre de 2013. La deficiente investigación de este ataque cubrió a Bonfatti con un halo de críticas, a veces de sospechas, que el exmandatario siempre lamentó de viva

voz. Bonfatti era el jefe político de la policía y no impulsó con la energía que semejante acontecimiento merecía su total esclarecimiento. Y por eso al tiroteo contra su casa algunos lo juzgaron como represalia de un pacto no cumplido. El exmandatario siempre se quejó de que no fueran con eso a la justicia para poder exigir evidencia y fijar su réplica. Decía que no solo tenía que defenderse de las balas que pudieron haberlo matado sino de una infamia. Ese planteo pudo haber sido inmotivado o injusto. Pero lo cubrió. Y en una provincia donde el peronismo no ganaba hacía doce años, Perotti ganó.

La jueza que llevó el caso del ataque contra la casa de Bonfatti en la última etapa era la compañera de fórmula de Perotti, Alejandra Rodenas, quien fue cuestionada por los fiscales porque en la justicia habría dejado sin resolver causas emblemáticas, no solo el atentado al gobernador socialista sino también el asesinato del empresario narco Luis Medina, que ocurrió diez meses antes.

Quien había aportado el nombre de Rodenas para que acompañara en la fórmula a Perotti era el senador a quien molestaba que los comensales que se habían reunido en Puerto Norte para definir el gabinete comieran la pizza con la mano. Perotti fue directo, como es su estilo. Le preguntó qué ministerio quería. Después él evaluaría qué darle al hombre fuerte de San Lorenzo. Traferri sorprendió, también con su modo. En voz baja, sin estridencias y con aplomo. “Yo lo único que quiero es que me solucionen rápido los problemas”, dijo. Traferri pedía mucho más que un cargo. Quería no solo inmunidad sino ser socio. Perotti y Mirabella lo conocían, pero a veces ese hombre bajito de ojos claros los sorprendía. Traferri se jactaba de haber sido un engranaje clave para unir al peronismo. Tenía su parte de razón. Y quería una contraprestación a lo que para él había sido determinante para ganar las elecciones. Era una ecuación común en la política ¿Qué significaba que le dieran soluciones rápidas? Traferri lo explicó tiempo después. “Si se necesita una obra o fondos para un proyecto necesito que salga rápido, que no me den vueltas”, apuntó en una confitería de la zona norte de Rosario. Esa frase representaba mucho más. Era similar a lo que había pedido cuando se hicieron los concursos de fiscales para el nuevo sistema procesal penal en 2013. “Yo no quiero

elegir a un fiscal. No me interesa. Lo único que no quiero es un fiscal independiente", le habría dicho Traferri al diputado radical Julián Galdeano.

Que el fiscal fuera peronista, socialista o radical no le importaba. Le interesaba que estuviera condicionado por el sistema para evitar posibles problemas que se solucionaban con un llamado telefónico. Ese pensamiento no era patrimonio del senador. Era algo que pretendía la mayoría de la clase política. No tener problemas con un fiscal que se largue a investigar sin red. La independencia judicial en Santa Fe era una abstracción. Uno de los ejemplos más claros fue la causa que investigaron los fiscales Claudia Martí y Roberto Apullán por supuestas irregularidades en las horas extras de la policía. Los fiscales se toparon en 2017 con una escucha en la que aparecía el entonces ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, que hablaba con el comisario Adrián Rodríguez sobre supuesto acomodo en los concursos de ascensos. El diálogo no tenía mayor relevancia, pero las maniobras que ocurrieron después, cuando el policía fue detenido, demarcaban cómo eran las relaciones con el Poder Ejecutivo y Judicial. Pullaro llamó al fiscal general Jorge Baclini para saber qué había pasado. El contenido de esa conversación dejaba a trasluz los límites que ponía la política. Luego los acusados terminaron siendo los fiscales en la Legislatura y dos años después archivó el caso. No importaba la sanción, sino la lección.

Lo que no soportaría Traferri es que, por ejemplo en San Lorenzo, fuera designado un fiscal independiente, que tuviera ímpetu de investigar sin la contención política. Traferri no era otra cosa que un engranaje del sistema. Y algunos de los fiscales que llegaban a esos cargos también, como lo fue el fiscal regional Patricio Serjal, imputado en una causa que aún no se concretó en juicio.

"A mí no me sirven uno o dos ministerios. Yo necesito soluciones", habría insistido Traferri esa noche calurosa, donde los bichos atraídos por la luz daban vueltas y molestaban. La informalidad de la cena, pizza con la mano, se amoldaba a una reunión en la que los comensales parecían conversar en distintos idiomas. Traferri sospechaba que Perotti no iba a rechazar su planteo, pero que tarde o temprano lo iba a traicionar.

Entre el paquete de soluciones que necesitaba Traferri estaba el

negocio del juego online. Leonardo Peiti, hijo de un histórico capitalista de juego clandestino, había decidido blanquearse. Salir de la oscuridad de la clandestinidad, porque ese lado sombrío no era el mismo que había manejado con soltura su padre hacía dos décadas. Hoy la policía era insaciable y los narcos, socios de los jefes uniformados, una amenaza más grave. Sabía que ese negocio se iba a poner más pesado y sería inviable para su perfil de delincuente que nunca había usado las armas para manejar el negocio.

El encargado que podría darle esa solución a Peiti —según declaró en la justicia provincial— sería Traferri, quien era el nexo con Perotti, al que después de ganar las elecciones de 2019 le trasladaba esas demandas, es decir, las "soluciones". "Fui ayudándolo para la campaña electoral [a Traferri]. Él dijo que tenía todo armado con Perotti y yo tenía que ayudarlo para la campaña. Yo habré puesto unos 200.000 dólares. Si ganaba Omar Perotti íbamos a concretar el convenio", declaró Peiti en la causa judicial de juego clandestino. El rafaelino negó que ese dinero haya ido a parar a los fondos de su campaña electoral.

En esa reunión en Puerto Norte se empezó a romper la relación entre Perotti y Traferri, que regresó en su Mercedes Benz a su mansión en San Lorenzo aquella noche con la clara convicción de que lo iban a "cagar", pero nunca se imaginó que iba a ser investigado, que se iba a romper la *omertà* que gobernó siempre Santa Fe.

El problema para Traferri era que él le había dado la palabra a Peiti. El empresario había aportado lo suyo —más de 200.000 dólares— y no solo no había logrado meterse en el millonario negocio del juego legal online, sino que podía ir preso por un caso que los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery habían empezado a investigar a partir de un crimen en el casino de Rosario, en el que se tocaban todos los polos. El resultado: un cortocircuito en el sistema político. Perotti dio un duro discurso cuando asumió. "Debe haber una clara línea infranqueable que divida a la legalidad y al mundo delictivo. Hay que cortar los vínculos con el delito", afirmó. Marcelo Saín, quien iba a jurar como ministro de Seguridad, se adjudicó ese tramo del discurso. Traferri lo consideraba "el Jaime Stiuso de Santa Fe". Era la primera vez que en una investigación judicial seria se tocaban los puntos que

jamás se habían unido, que siempre aparecían desconectados por un claro interés de la política. El juego clandestino, la recaudación ilegal de la policía, los narcos, el financiamiento político y la protección judicial.

Traferri decía extrañar a Bonfatti que —condicionado por la debilidad política en la Legislatura— le había dado a los 19 senadores más de lo que nunca hubieran imaginado. El senador de San Lorenzo había sido el arquitecto de ese plan junto con hombres rústicos y desconocidos para el resto de los mortales, que se sientan en una banca y son virreyes en sus departamentos. Bonfatti les dio la llave de un poder gigantesco, a costa de cederle un presupuesto millonario que les garantizaba a los senadores ser amos y señores en sus regiones. Traferri era uno de los jefes de los virreyes.

Poco más de dos meses de esa reunión en Puerto Norte ocurrió algo que tuvo consecuencias inesperadas. Aquel 11 de enero de 2020 Enrique Encino, gerente del Banco Nación de Las Parejas, cayó desplomado con el cigarrillo que había salido a fumar en el balcón del casino City Center. El pánico corrió a toda velocidad, ante la perplejidad de lo que había sucedido. El hombre que estaba tirado en el piso había muerto de un tiro en la cabeza.

Los fiscales Schiappa Pietra y Edery actuaron rápido. A las 48 horas detuvieron a Maximiliano “Cachete” Díaz, un ladero de Guille Cantero. Al verse atrapado, Díaz rompió y descartó su celular. Pero un vecino lo encontró y aparecieron los primeros hilos de una red narco complejísima que llegó hasta la cima política y financiera de la provincia.

El teléfono de Díaz habló por él. Expuso que planificó el ataque al City Center con Cantero, preso en la cárcel federal de Marcos Paz, y con otro lugarteniente, Carlos “Toro” Escobar, detenido en la prisión federal de Ezeiza.

Más datos surgieron del teléfono de Cachete. El ataque planeado era un incendio en el estacionamiento del casino, con otros ejecutores, dos días antes. El objetivo era extorsionar a los dueños del casino. Dinero a cambio de tranquilidad. La idea era hacer explotar un auto en el parking cuando estuviera repleto de gente. Pero la Gendarmería detuvo a quienes debían encargarse del golpe a bordo de un

Volkswagen Gol rojo robado, con una Browning 9 milímetros y 14 balas. Díaz cometió entonces un error: le pidió al mandamás del juego clandestino, Leonardo Peiti, que les preguntara a sus “amigos de la fiscalía” por la situación de los detenidos. Así cayó la primera ficha del dominó.

La relación del “empresario” que manejaba el juego clandestino con Los Monos venía de antes. Peiti les pagaba una “mensualidad” para que no lo mataran. Primero abonó 20.000 dólares y luego 5000 por mes, durante un año y medio, más el manejo de tres salas de juego ilegales. Pero Los Monos no solo querían su dinero sucio, sino sus influencias en la justicia, que habría tejido de Traferri.

Urgido por Díaz, Peiti llamó a un comisario retirado y a un empleado conectado al jefe máximo de los fiscales rosarinos, Patricio Serjal. Con esas llamadas expuso el contubernio entre el juego ilegal, la policía, el narco, funcionarios del Ministerio Público de la Acusación y el poder político.

Al comprender que los fiscales habían interceptado sus llamadas, Peiti se vio acorralado y rompió el código mafioso del silencio. Declaró como imputado colaborador. Confesó sus pagos a los jefes policiales José Luis Amaya y Daniel Corbellini —exjefe de la Policía de Investigaciones durante el socialismo, un hombre cercano a Maximiliano Pullaro—, y sus acuerdos ilícitos con Serjal, el fiscal Gustavo Ponce Asahad y el secretario Rodrigo González. Admitió que les pagó para que lo protegieran mientras procuraba dominar el juego online en la región. Y señaló más alto: apuntó contra el senador Traferri. A Un tiempo antes a Pullaro otro policía le había generado problemas: Alejandro Druetta, exjefe de Contrainteligencia, que terminó preso. Fue condenado en 2021 a diez años de prisión por narcotráfico. Pullaro se defendió, cuando lo relacionaban con Druetta, de que durante su gestión se condenó por primera vez en la historia a la banda de Los Monos y durante su mando la policía detuvo a Esteban Alvarado, el rival del clan Cantero, y a la mayoría de los grupos criminales más peligrosos, como los Funes y Ungaro. La historia de Druetta, un narcopolicía condenado, fue el punto débil que encontró Carolina Losada, su rival en la interna de 2023, para lanzar duras críticas y advertir que había que marcar una línea con el pasado. Lo

acusó de mafioso. Pullaro se vengó en las urnas con un triunfo arrollador. A Druetta lo llevó a prisión el narco Ignacio Actis Caporale, cuyo testimonio como arrepentido sirvió en parte para avanzar contra el policía, que tenía un cuidado particular: guardaba los audios de las comunicaciones con los políticos. Druetta suministraba a Caporale estupefacientes —que probablemente obtenía en otros operativos— para vender y después detenía a los dealers y consumidores para hacer buena letra entre sus jefes políticos, así logró ascensos importantes. Incluso, usaba a los medios de comunicación para que difundieran sus operativos "exitosos". El origen de las investigaciones eran opacas denuncias anónimas. "El jefe era Druetta, que entregaba la droga y decía a quién le tenían que vender", declaró el arrepentido en el expediente N° 44820/2018, y agregó que "también pedía que le 'entregara' a gente que compraba droga para él después detenerlos con procedimientos que usaba para ascender en la carrera policial".

Peiti explicó que su sueño era pasar de ser el zar del juego clandestino a la legalidad a través de las apuestas online. Traferri era su nexo con Omar Perotti. "Fui ayudándolo para la campaña electoral [a Traferri]. Él dijo que tenía todo armado con Perotti y yo tenía que ayudarlo para la campaña. Yo habré puesto unos 200.000 dólares. Si ganaba Perotti íbamos a concretar el convenio". Pero eso no ocurrió. Acaso porque el gobernador rompió su relación con Traferri después de asumir en la Casa Gris.

Perotti rechazó los dichos de Peiti. Dijo que "jamás" recibió un peso de Traferri para su campaña. "Me costó tanto llegar a ser gobernador —lo logró en su tercer intento, en 2019— porque no tenía recursos para la campaña como otros candidatos", afirmó, enojado ante la pregunta.

Traferri también negó las acusaciones. Afirmó que había motivaciones ocultas destinadas a perjudicarlo. "Estamos ante una asociación ilícita que tiene una pata judicial, con varios fiscales involucrados, y que es funcional a Marcelo Saín, que era el ministro de Seguridad provincial y ahora se sabe que es el responsable máximo del espionaje en la provincia", indicó.

La sola mención de Traferri incomoda en Santa Fe. Están quienes lo admiran, le temen o lo detestan, pero todos lo definen como un factor

ineludible en la ecuación del poder provincial. A 2023 llevaba en su escaño de senador quince años consecutivos por el departamento San Lorenzo, donde están ubicadas las cerealeras y los puertos que exportan el 85 por ciento de la soja que se produce en la Argentina. Otro de sus aportantes para las campañas fue el histórico Herme Juárez, conocido como Vino Caliente, que manejaba la estiba de los buques y estuvo preso hasta 2020.

¿Por qué es tan poderoso? Porque por él pasaban las negociaciones con el gobernador y con otros partidos, y por él se asentaron las definiciones más calientes sobre partidas presupuestarias, designaciones de jueces y fiscales, traslados de policías y mucho más, apoyado en las facultades que la Constitución provincial le otorga al Senado, al ubicarlo como contrapeso del Poder Ejecutivo. Eso llevó al gobernador Antonio Bonfatti a negociar la creación del Programa de Fortalecimiento Institucional —en la práctica, una partida presupuestaria para que los senadores distribuyan subsidios— a cambio de votos para las leyes que quería o necesitaba.

Esa partida ascendía en 2022 a 795,9 millones de pesos que repartieron los 19 senadores más la presidenta de la Cámara, la vicegobernadora Alejandra Rodenas. A modo comparativo, el presupuesto del Ministerio Público de la Acusación, que agrupa a todos los fiscales y fiscalías de la provincia, alcanzó ese año los 397 millones de pesos. Es decir, los que investigan delitos tienen menos de la mitad de dinero para funcionar y pagar sus salarios que la política para repartir en subsidios.

En el Senado defienden fuerte esa partida. Remarcan que se estableció un triple control para evitar abusos, que sirven para ayudar de manera rápida y eficaz a las instituciones o solucionar emergencias —como la compra de una ambulancia o la reparación de un patrullero— y que otros deberían dar más explicaciones. Algo que, sin embargo, no tiene la más mínima relación con la función legislativa que desempeñan.

El reparto de los fondos del Programa de Fortalecimiento Institucional derivó, muy rápido, en denuncias penales por presunta corrupción y desvío de fondos, con Traferri entre los sospechados. Y esas denuncias provocaron una reacción sintomática de los senadores.

Liderados por el propio Traferri (peronista) y Felipe Michlig (radical), aprobaron la ley 13.695 para arrogarse el control político sobre el régimen disciplinario de los fiscales. Esa ley levantó revuelo y pronto se judicializó. Ante los cuestionamientos los senadores redoblaron su apuesta y aprobaron otra ley más matizada, la 13.807, que rige desde fines de 2018 y sirve como una amenaza latente contra aquellos que pretendan investigarlos.

No fue la única reacción corporativa. Tras la denuncia contra seis senadores que radicó el exconcejal Jorge Boasso por el otorgamiento de subsidios a fundaciones vinculadas a la política, el poder movió sus hilos hasta que logró designar a Serjal como jefe de los fiscales de Rosario. Serjal cumplió: poco después apartó a los fiscales que investigaban el reparto de los subsidios, benefició a los principales acusados y archivó el expediente.

¿Qué declaró Peiti cuando se quebró ante los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery? Que hizo el mencionado pago de 200.000 dólares a Traferri, lo que se sumó a la confesión del fiscal devenido acusado, Ponce Asahad, que también involucró a Traferri en la trama espuria, lo que los registros de llamadas entrantes y salientes del senador parecieron confirmar: la antena de su celular lo mostraba en los lugares y fechas en los que el zar del juego clandestino dijo haberse reunido con él para entregarle fondos.

Los fiscales citaron a Traferri a indagatoria para el 11 de diciembre de 2021. Lo acusaron de cobrar coimas, encarar negociaciones incompatibles con la función pública e incumplir sus deberes como funcionario público. Pero chocaron con el Senado. Radicales y peronistas se unieron para rechazar su desafuero. Traducción: es intocable. La justicia no lo puede investigar, no lo puede acusar y no lo puede procesar. Mucho menos detenerlo.

La votación evidenció el contubernio político santafesino. Todos los senadores peronistas y del bloque de la UCR-Frente Progresista respaldaron a Traferri y solo votaron en contra los cuatro senadores peronistas que respondían al gobernador Perotti, en tanto que se abstuvieron el propio acusado y dos radicales.

“Traferri es parte de un entramado de poder en el que también está

la vicegobernadora y que abarca a peronistas y radicales. Por eso votaron a su favor", dijo en off uno de los cuatro senadores que apoyaron el desafuero. "Traferri sabe que sin fueros va preso".

La protección política que benefició a Traferri contrasta con la forma en que, tras una movida de la Corte santafesina, socialistas y radicales removieron a fines de 2016 al defensor general de la provincia, Gabriel Ganón, quien había expuesto la actuación delictiva policial —con torturas incluidas— reiteradas veces. Y hasta echaron del interbloque Frente Progresista al legislador provincial Rubén Giustiniani por negarse a votar su desplazamiento.

Ante los micrófonos, Traferri se definió víctima de una persecución. "Quiero que mi causa sea una causa emblema para que inocentes no estén presos por fiscales que arman causas, dijo en el recinto. Quiero que sea un precedente, quiero que se haga visible y salga a la luz todo. Tenemos que mejorar la justicia".

Traferri insistió en esos argumentos. "No tengo ninguna duda de que el Ministerio Público de la Acusación provincial no ofrece las garantías suficientes para que yo o cualquier otro ciudadano tenga un juicio justo. Así lo vengo denunciando desde 2011 y así lo reafirmo hoy".

Tuvo además un gesto elocuente e inolvidable no bien le garantizaron que seguiría en su escaño. En el recinto les recordó a la vicegobernadora y a muchos compañeros del Senado los favores que le debían a él. Y que las cosas difíciles de explicar para todos estaban bien guardadas en su memoria. Un abrazo de oso cristalino que marcaba a los colegas cómo se podían ir por el desagüe si se les ocurría cambiar de parecer.

Después radicó denuncias contra los fiscales que pidieron su desafuero. Todas fueron desestimadas por los magistrados que intervinieron. Los acusó de responder al ministro de Seguridad Saín, de falsificar pruebas y de manipular otras, sostuvo que se ensañaron con él —y por extensión con el peronismo que denunció al "narcosocialismo"— y les enrostró que no aplican la misma vara para investigar a todos.

Los fiscales Schiappa Pietra y Edery objetaron la constitucionalidad del artículo de la Constitución santafesina que blinda a los legisladores y lograron que un juez, José Luis Mascali, les diera la razón. También

apoyó su planteo el procurador general ante la Corte provincial, Jorge Barraguirre. Pero el máximo tribunal revocó ese fallo por 5 a 1, con el voto de Daniel Erbetta en soledad. ¿Quién resultó clave en la mayoría? El presidente y articulador de la Corte, Rafael Gutiérrez, quien no se excusó pese a ser amigo de Traferri, como demuestran las más de 300 llamadas entre ellos que constan en un expediente judicial, además de almorzar y militar juntos, como lo reflejaron fotografías que ellos mismos difundieron.

Para Gutiérrez, no debió excusarse. “Los criterios de excusación son restrictivos y mi actuación en ese caso fue muy correcta”, dijo. Su amistad con Traferri, remarcó, no influyó en su proceder. “Mi voto fue técnico y le recuerdo que el fallo salió 5 a 1. No es procedente que yo tenga que excusarme cuando un amigo aparece en un expediente”, dijo.

Para Saín, la actuación de Gutiérrez ante el pedido de desafuero de Traferri confirmaba lo que está podrido en Santa Fe. “Esta maquinación política tiene un jefe, un hombre del Partido Justicialista que hace años que se ha posicionado como el jefe de la banda, que es el doctor Rafael Gutiérrez, miembro de la Corte Suprema de Justicia, quien tiene descaradas vinculaciones con legisladores del justicialismo y del Partido Socialista. Además, ha establecido la estrategia de persecución penal contra mí”, afirmó Saín en el diario *La Nación* el 30 de octubre de 2022, tras su caída como ministro de Seguridad. Meses después, Saín quedó involucrado en una causa por supuesto espionaje ilegal en territorio provincial que no avanzó. Gutiérrez ahondó en esa senda. “Yo me negué a tomarle juramento a Saín, que nunca debió ser designado. No cumplía con los requisitos, y después dijo todo tipo de pelotudeces”, remarcó, antes de corregirse a sí mismo. “Pavadas”. “Ahora afronta dos causas, una por la compra de armas que al final no se concretó, y otra porque espió a medio mundo. Y no lo digo yo, ¿eh? Son los fiscales los que así lo sostienen”, declaró en la misma nota publicada en *La Nación*.

Tras el fallo del máximo tribunal provincial que favoreció a Traferri, Schiappa Pietra y Edery apelaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se ilusionan con que revoque la sentencia, declare la inconstitucionalidad del artículo de la Constitución santafesina que

enuncia los fueros parlamentarios, y les permita citar a Traferri a una audiencia imputativa. Una simple investigación contra el poder político fue un enorme sacudón institucional Santa Fe, donde nunca nadie se animó a investigar negocios ocultos, que sirven para amurar, en definitiva, la estantería donde se sostiene el negocio de la violencia.

La cualidad sobresaliente de esta investigación, tan resistida por Traferri, fue ser la misma que mandó tras las rejas a Serjal, que era hasta 2020 el máximo responsable de la persecución del delito en Rosario. El teléfono con el que se reconstruyó el atentado al casino dejó al desnudo una asociación de intereses muy diversos. Allí estaban conectados Serjal y Traferri con el capitalista Peiti para darle cobertura a su red de juego clandestino. También incluía a Nelson Ugolini, el empleado de la fiscalía que filtraba datos desde adentro a Peiti para que este se los pasara a Cachete Díaz, el organizador del ataque al centro de apuestas. Incluso aparecía un alto exjefe policial de Rosario, el excomisario Alejandro Torrisi, que había sido condenado en la misma pesquisa por recibir dinero de casinos clandestinos controlados por Peiti.

Serjal se marchó en medio de un escándalo junto a su fiscal colaborador Gustavo Ponce Asahad. Ambos fueron presos. En las audiencias se demostró que habían borrado sus intercambios telefónicos con Traferri. Al anterior secretario legislativo del Senado, Ricardo Paulichenko, no pudieron imputarlo porque había fallecido. Pero en audios difundidos ante jueces él decía que se reunía con Traferri para gestionar su habilitación como concesionario de juego legal. Uno de sus comentarios, oído en el estrado, no descolló por la elegancia. “Para el viernes traeme plata”, le dijo a Peiti. “Dejá de hablarme por teléfono que vamos a terminar en Cincinnati, demente”, fue la respuesta.

Lo que se usa y no sirve se tira. La Legislatura destituyó en un parpadeo a Serjal cuando estalló el polvorín. Antes el fiscal regional de Rosario había concedido todos los favores solicitados desde el terreno de los poderes formales que le había dado el cargo. Ordenó levantar la acusación al gerente de un multimedio y a un financista en un fraude inmobiliario. Lo mismo hizo por una contaminación de daño ambiental multimillonario con la empresa Petroquímica Capitán

Bermúdez en zona de influencia de Traferri. La compañía estaba bajo el control del poderoso empresario Sergio Taselli. La caída en desgracia de Serjal hizo que el chanchullo saltara. A la luz de esa elocuente protección el perdonado Taselli fue imputado otra vez.

19
LA CRUELDAD

Hay un video que se graba entre cuatro paredes para consumo restringido. Pero los recursos del realizador son de un realismo que perfora la intimidad. El corto terminará circulando en las cárceles, en las oficinas, en los colegios, en la prensa. Son imágenes que definen cómo se cobran deudas al interior de grupos que comercializan drogas en Rosario. La secuencia deja ver a un joven descargando patadas contra una chica que tiene la cara cubierta de sangre, a la que hace arrodillar, obliga a abrir las manos y se las golpea repetidamente.

El atacante está hablando por un celular con un hombre que le baja las órdenes de aplicar castigo. La chica que sufre la paliza se llama Karen Falcon. La acusaban de quedarse con un dinero que no era de ella.

—Levantate, gila. Dale, levantate. Esto te pasa por mentir. ¿Por qué le mentís al Gordo? Acá se termina la mentira.

Las imágenes viajan desde un barrio modesto de Rosario a un calabozo en el Chaco. En la cárcel federal de Resistencia está preso Jonatan Brezik, a quien llaman el Gordo, un hermano de crianza de Guille Cantero.

Karen Falcón había sido cercana a la banda de Los Funes, rivales de Los Monos. Ahora a la chica un hilo de sangre le cae por la frente, le ofusca los gestos y no le permite levantar la mirada. Es educación a distancia. El tormento, vale decir "enseñanza" perversa, se graba y se transmite en vivo, de celular a celular.

También por teléfono, desde la cárcel, baja una directiva de un muchacho de 25 años, que busca afianzarse en una zona en San Lorenzo, a 20 kilómetros de Fuerte Apache, el barrio rosarino donde se hizo fuerte en el microtráfico de drogas. Se llama Brandon Bay. Es mediados de 2019 y en esos días matan a tres jóvenes en el norte de

esa ciudad. Es completamente inusual una sucesión así en esta zona portuaria de 40.000 habitantes.

Los azotados a balazos son Eduardo Villegas, Jorge Acosta y Rodrigo Gigena. Todos cautivos letales de una guerra tumbera. En San Lorenzo hay tres grupos que controlan el comercio de drogas de una manera pautada. Las zonas están repartidas y por eso los conflictos son moderados. Pero un grupo de rosarinos decidió competir ahí. Y la forma es barriendo a los que están desde antes, armando una simulación de una falsa guerra entre ellos.

Al crear el simulacro Brandon Bay se equivoca. Es con la muerte de Rodrigo Gigena, un bailarín de cumbia de 26 años, muy querido en su zona, que resulta un blanco errado porque las balas eran para otro. Las intervenciones telefónicas descubren la mancada. Y también el método.

Días antes de este homicidio hubo otro, el de Brian Sánchez, caído en la misma dinámica de crear aturdimiento en un barrio a dominar. Los operadores de la fiscalía detectan el método en un mensaje siniestro. “Hay que matar inocentes. Si matamos a un par de inocentes se arma una revolución bárbara”. Lo baja Brandon Bay, desde el pabellón seis de la cárcel de Coronda.

Casi al mismo tiempo a una mujer la amenazan para que venda cocaína para un grupo de transeros en su propia vivienda. “O es por las buenas o es por las malas”, le advierte Mauro Vergara, de 29 años, criado en su misma zona. A la mujer la tiene acorralada. Es la madre de Marcos Basavilbaso, un chico de 15 años que consume drogas y le debe dinero. El dealer quiere recuperar lo que es suyo y siente que el ser acreedor lo reviste de poder. Pero al día siguiente cambia de idea. Quiere el efectivo. Entonces le anticipa a la mujer la muerte de su hijo si no paga los 10.000 pesos. No se demora en rodeos.

—Quiero la plata hoy, vengo esperando hace tres meses, no le doy más plazo, los temas de drogas se pagan.

Es una tristeza escuchar cómo la mujer le asegura que se hará cargo y le implora unos días hasta cobrar la asignación universal. No habrá espera. A Marcos lo matan de tres tiros en su casa de Lincoln 2961, barrio La Tablada, a veinte cuadras del Monumento a la Bandera, el 23 de mayo de 2021.

Vergara lidera desde la cárcel una organización de menores dedicada a extorsionar y balear casas en La Tablada y República de La Sexta para luego usarlas para la venta de drogas. La coerción es su arma de persuasión. Los vecinos saben que los párvulos que maneja Vergara tienen su lealtad condicionada por la admiración o sus adicciones. Hace mucho que atacar a un vecino dejó de ser un límite. Los chicos tirotean las casas de los que no se allanan al negocio propuesto. En la degradación urbana no hay reglamentos.

A Vergara lo terminan llevando a una audiencia. Le hacen escuchar los audios donde amenaza a los dueños de casa a trabajar para él o irse, queda constancia de que para las extorsiones usa adolescentes, que estos tienen armas de fuego. Le dictan prisión preventiva. Una abstracción porque Vergara ya estaba preso.

La calle sigue arrastrada por una marea de cocaína que se compra y se consume. Las escaramuzas del negocio producen una violencia sostenida. A veces produce solo negocios.

Con el comercio de drogas distrito a distrito se abre paso un proceso de deshumanización que es un cambio de relaciones comunitarias, un fraseo nuevo en los vínculos que viene dado por algo que es mucho más que un matiz. Más que la vocación de ser cruel es la premisa de exponer la crueldad.

La atrocidad y la dureza son los atributos de una nueva forma de mando, la cara visible del predominio, la forma de generar obediencia en una comunidad desestructurada en lo económico. Y aunque la crueldad se inserta verticalmente en la sociedad, por ejemplo en el usurero de buena posición que destroza a su acreedor sin clemencia, se disemina más entre muchos que del mundo legal no tienen nada que recibir ni esperar, por eso mucho menos que perder. Nacen estilos que no tienen nada que ver con el pasado.

En otro tiempo, al menos en los relatos de una sociedad más integrada, el producir daño o malestar tenía fronteras geográficas. No se robaba en el barrio ni se atacaba al vecino. El fin del trabajo formal o informal, dejar de pensar el futuro a partir de las instituciones educativas, o simplemente de vivir en entornos amables, rompió con el límite territorial y ensombreció la visión del otro, que ya no fue un igual sino una cosa indefinible.

Estas nuevas formas de relacionarse están muy presentes en los discursos judiciales de los imputados. El reconocimiento del semejante se dificulta para muchos que asumen que solo tendrán algo con la violencia, así sea una vida fugaz o con encierro, pero con acceso a lo que por un tiempo se podrá disfrutar.

El otro, entonces, entra en el campo del desdén. El otro recibirá desprecio del que ya fue despreciado. El mal irrumpe como un hecho trivial. La crueldad puede ser un ejercicio de sadismo pero es también una forma de moverse. Un recurso más para lograr algo.

Y ese régimen administrativo de la saña se expresa de forma indiferente, burocrática, en las voces de sus promotores. Carlos Cristian Villazón es el líder de un grupo de vendedores de cocaína del barrio Los Pumitas. En el otoño de 2023 disparan contra unos transeros que les disputan zonas y matan a Máximo Gerez, un nene de 12 años que jugaba en la calle con sus primos, que resultan baleados.

La cuadra se estremece y explota una pueblada. Los medios nacionales transmiten en vivo. Surge la notoriedad de los Villazón, "los salteños", una gavilla barrial como decenas de otras en el abanico fragmentado que multiplica la sangre en Rosario. Pero que hasta el momento de la muerte del nene no tenían ninguna notoriedad.

Y por eso ahora que todo es público se visibiliza un hecho del grupo que había pasado inadvertido. Carlos Cristian Villazón está preso en la cárcel de Piñero. Desde allí ordena que maten a Alejandro Oroná, un hombre de 55 años que le había prestado dinero a su familia. Villazón se entera de que Oroná llegará en taxi a pedir la plata que es suya. Y desde su celda le explica a Arnaldo Cañete, uno de sus sicarios, lo que tiene que hacer. El aprendizaje de la violencia es tan rutinario como cualquier otro. Villazón le ordena a Cañete como si le estuviera indicando a un albañil dónde apilar ladrillos. No levanta la voz, no demuestra emoción. Solo convicción y raciocinio. Le explica que Oroná llegará a la esquina de Juan B. Justo y Ottone a las 21.30.

—Va a ir el hombre con un taxista. Vos llevá una mochila. Te va a dar un paquete. Vos lo agarrás y ahí lo arrancás. Revisale el auto también y fijate porque puede haber droga mía adentro —dice Villazón.

—Pero al tachero, al remisero, ¿también lo pongo? —pregunta

Cañete.

Villazón está tan seguro de lo que quiere que lo dice dos veces.

—Mátenlos a todos. Mátenlos a todos.

El taxi llega a la esquina a la hora señalada. Cañete se le acerca. Abre la puerta trasera del auto. Oroná entiende en ese acto que el tiempo se congela. Escucha que le dicen: "Acá tenés tu plata". Cañete le dispara cinco veces con la pistola 9 milímetros. Por alguna razón no acata la orden de ejecutar al taxista que sale haciendo zigzag para llevar, inútilmente, al herido al hospital.

La violencia es entonces también un modelo de comunicación. Son los mensajes indolentes de sus ejecutores, quienes a través de ella, de la exhibición de lo que pueden hacer, recrean las formas de fidelidad, de disciplina, de desafío, de autoridad. La escalada de atrocidades no pasa de ser fragmentos de información. Actos de psicópatas que hace cinco años eran inconcebibles son ahora recados en el usual diálogo del mundo criminal.

Estaba muy fresca la noche del 23 de julio de 2022. Dos mujeres esperan el colectivo en el Patio del Mercado al sur de la ciudad. Se llaman Claudia Deldebbio y Virginia Ferreyra. Son madre e hija. Dos autos llegan y sus ocupantes disparan contra la fachada de uno de los edificios de enfrente. Uno de los tiradores advierte que desde la parada las mujeres observan la escena estremecidas. "¿Qué miran?", les dice, y les dispara de frente una ráfaga de metralla. Claudia, asistente escolar, muere en el acto. Virginia, profesora de danzas árabes, a los 40 días.

Seis meses después un joven músico vuelve de un ensayo por una avenida. Se llama Lorenzo Altamirano, tiene 28 años, le dicen Jimi. Tres hombres en un Renault Sandero lo levantan, lo hacen bajar a veinte cuadras, frente a la puerta principal del estadio de Newell's. Allí lo matan de tres balazos.

Durante un mes investigan a Altamirano. Lo ocurrido parece una vendetta de la mafia. Las primeras 48 horas bastan a los fiscales para cerciorarse de que el joven no tenía la menor conexión con el delito. Primero se piensa en una víctima seleccionada por error. Enseguida surge la insinuación espeluznante de que no hay error. Quienes lo mataron eligieron porque sí a alguien para pasar un mensaje de lo que

son capaces de hacer. En el bolsillo del músico pusieron un texto manuscrito dirigido a Los Monos o a barrabravas de Newell's. O, al revés, escrito por ellos. El recado que esconde el cuerpo del joven muerto se descifrará un año después. El homicidio es la advertencia de una facción de Los Monos a otra por una carga de droga interceptada: 60.000 dólares malogrados.

En todos estos casos se hace presente como novedad la dimensión de lo aleatorio. En un ámbito donde la autoridad legal está en quiebra y ninguna organización criminal se erige como indiscutible en su primacía cualquiera puede morir. Este es el enunciado que empieza a circular en cuerpos inertes que quedan como muestra en una ciudad que es un tapiz de huesos.

El fiscal que descubrió a los que dispararon a las dos mujeres en la parada del colectivo dijo en la audiencia de imputación: "El móvil del hecho fue la promesa remuneratoria con el fin de causar temor en la zona y herir o matar a cualquier persona ajena al conflicto para asegurar el territorio". Los que investigaban el crimen de Jimi Altamirano sentaron ante un juez un año después a los autores presuntos. Pero a la semana del crimen señalaron que algo de su muerte no era un jeroglífico. "Fue levantado al voleo, secuestrado y asesinado para utilizar su cuerpo como un mensaje".

Es otra cualidad de la crueldad. Ser indescifrable. Pero estar presente como anuncio concreto en los tiroteos a canales de TV, a casas de servicios fúnebres, a entidades gremiales, al casino, a los edificios del sistema penal, a concesionarias, a locales gastronómicos.

A veces hay gente a la que se extermina de manera teatral con el afán de dejarles memorias imborrables a los más próximos. Como les pasó a los íntimos de Nelson Saravia, el Chivo, un jefe de la barrabrava de Newell's. Cuatro personas irrumpieron en su casa de barrio Alvear un sábado de octubre de 2021 a la madrugada. Lo acabaron dentro de su dormitorio, a balazo limpio delante de su mujer, de su hijo de 8 años y su sobrino de 13.

En otras ocasiones la crueldad se ejerce con una variante compasiva que es ofrecer la chance de no ser un espectáculo colectivo. Ese privilegio, si lo fuera, le tocó a Mario "Gringo" Visconti, uno de los principales referentes de la hinchada de Rosario Central. Había

cumplido una condena por drogas y era allegado al líder máximo de la barra, Andrés “Pillín” Bracamonte.

En mayo de 2016 un ladero de Pillín, su favorito, fue acribillado a tiros. Era Julio César Navarro pero todos lo conocían como Cara de Goma. La afrenta fue un exceso que despojó de protección al Gringo Visconti a quien le atribuyeron la muerte de Cara de Goma. A días del asesinato varias personas llegaron a la casa de Visconti que estaba allí con su familia. “¿Salís solo o entramos?”, le dijeron desde afuera. El Gringo salió sabiendo a dónde iba. Horas después su cuerpo apareció con nueve balazos en un camino secundario de Ibarlucea, en las afueras de Rosario.

El mundo puede ser entendido solo en los corazones de los hombres. Pero en una ciudad con el alma rota, donde a menudo todo es miedo y asombro, la crueldad asumió una forma significante. Una gramática que no se entendía del todo pero que todo el tiempo se usa para hacer comprensible quiénes son los que obedecen y quiénes los que mandan.

20
SOLO LOS CHICOS

Para Joan la disyuntiva era cruel y, según le decían, podía ser de vida o muerte. Todas las mañanas trabajaba con su tío en una verdulería familiar. Por las noches se había conseguido un empleo más en sintonía con las difíciles juntas y presiones del barrio. El trabajo consistía en ir a disparar contra personas o contra casas por órdenes de la banda de Brandon Bay, un vendedor de drogas de un barrio del sudeste, de horizonte bajo y escuálido. Pero desde hace unos días estaba atascado en un dilema que no sabía cómo resolver. Le habían pegado un tiro en una pierna, y la herida se estaba infectando. Casi no podía caminar del dolor. Y no quería salir del departamento prestado donde estaba escondido porque lo buscaban para matarlo.

A los 19 años Joan no tenía un solo antecedente penal. Era conocido en la zona de Olegario Víctor Andrade al 1800 en barrio Flammarión como trabajador, un chico de pocas palabras pero respetuoso. Sin embargo, lo habían baleado porque un día antes él mismo había cumplido con el encargo de dispararle a un joven un poco mayor que él. A un vecino le relató primero que había resuelto el pedido, que el herido estaba "por toser" y que también le había dado en la mano a una nenita. "Ojalá lo de la nenita no sea nada", le dijo el vecino. "Nos faltan dos más todavía", repuso el muchacho, con voz serena.

Pero el disparo en la pantorrilla derecha le dolía mucho y por eso llamó a una operadora territorial a la que conocía del Nueva Oportunidad, un programa estatal que capacitaba en oficios a chicos en riesgo social. "No puedo ir al hospital porque me tiraron y me defendí, no puedo ir porque me denunciaron", le dijo. Una empleada del equipo legal le replicó que no tenía margen para dudar. "Si hay dolor seguramente estás infectado y si no te revisan la pierna te podés morir. Tenés que presentarte con un fiscal. Pero primero te voy a

contactar con un defensor oficial".

No llegó a ocurrir del modo previsto. Una brigada policial de Tribunales lo fue a buscar a su casa por orden de los fiscales que investigan balaceras. Joan no estaba pero a los tres días la madre lo acompañó a entregarse. Por el tiro que tenía en la pierna ya lo habían curado. Estaba sospechado de ser quien un mes antes, el 6 de diciembre de 2021, abrió fuego desde una moto en la zona de la comisaría 21ª. En ese ataque Alexis Luján fue baleado en el pecho de lleno y la hija de su pareja, de 8 años, herida en una mano.

Una semana después de la detención a Joan lo terminaron acusando por amenazas a tiros contra una familia para presionarla a abandonar su casa. También por intento de homicidio por el ataque con disparos en el que un joven y la hija de su mujer resultaron heridas. Joan estaba seguro de que se marcharía en libertad. Tenía trabajo demostrable, no tenía prontuario y estaba convencido de que nadie conocía las duplicidades de su vida. Se equivocaba. El juez le impuso preventiva por un máximo de dos años. Hacía casi dos meses que lo estaban escuchando. Sabían que Sebastián Aguirre se lo había recomendado a Brandon Bay, líder de la banda de Los Gorditos, para hacer trabajos que implicaban acribillar lugares o personas.

El nombre de Brandon Gabriel Bay se había mencionado reiteradamente la semana previa en la prensa del país. Había quedado bajo sospecha de ordenar las ejecuciones de dos hombres que aparecieron descuartizados en barrio Saladillo. "Escuchame, van a buscar la Tornado [por la moto] y de paso matamos a un par de zombies. Te mando un video con una motosierra, fijate cómo lo voy a cortar en pedazos, bien a lo mexicano le voy a dar", le dice Brandon desde la cárcel de Piñero a su cuñado Sebastián Aguirre, a la vez preso en la Unidad N° 3 de Rosario.

En otra escucha de octubre de 2021 se oye al mismo Brandon hablando con Sebastián para requerirle que le gestione alguien que tire tiros. Sebastián, que es pareja de la hermana de Brandon, le recomienda que incorpore a Joan. "El loco tiene que terminar su horario porque labura legal pero le está haciendo la guerra hace tiempo a la banda de la pelada", le dice en alusión a otro grupo rival del mismo territorio. "Me dijo que cuando vos lo necesites él se quiere

enganchar".

El trabajo legal tiene a Joan nueve horas en la verdulería. Para los fiscales había sido él quien disparó a Alexis Luján y a la hija de su pareja tres semanas antes. Parece elocuente porque es el propio Joan quien lo revela por lo menos en tres escuchas captadas. En uno se lo oye en forma diáfana decirle a alguien: "A tres le clavamos: dos pibes y una nenita. A un pibe en el pecho y en la pierna y a la nenita en la mano. Uno me parece que ya murió".

Pese a la falta de antecedentes penales, el muchacho muestra no ser ajeno a las precauciones de quien aspira a no caer en problemas con la ley. Quiere que lo valoren por no ser improvisado. Dice que se deshace regularmente de los teléfonos que utiliza, lo mismo que de las armas, que según afirma él mismo porta cuando la verdulería de su tío baja la persiana. Sabe que tiene que ser muy precavido en sus movimientos. Entiende que sus nuevas actividades implican riesgos y se preocupa porque le acribillaron el frente de la casa a su madre, una mujer que se muestra muy afligida por la vida que empieza a llevar su hijo. Y se lo recrimina vivamente según lo exponen las escuchas.

Un compañero de celda de Sebastián Aguirre le pide a Joan que haga la denuncia de la balacera a la casa de su madre, le dice que se suba al techo, vigile el paso del auto que lo tiroteó porque ocurrirá de nuevo y que le tome además la patente. También le deja claro que Brandon le va a dar una mano pero que en un relieve de rivalidades sangrientas él debe ser muy consciente de los riesgos que implicarán sus elecciones. "Vamos a hablar bien de vos, boludo, porque si vas a seguir con la otra gente va a haber guerra y después va a ser distinto. Yo ya estoy por salir. Yo te voy a agarrar la mano pero vos tenés que pensar de qué lado vas a estar. Porque en este momento estás más solo que un perro".

Una cosa buena de la vejez, según un dicho ácido, es que no dura mucho. En ciertos entornos urbanos la juventud, o la niñez, tampoco. La vida no es esperar soluciones sino acostumbrarse a vivir sin ellas. O buscarlas uno mismo si lo que la vida le reservó a uno fue crecer a las patadas.

En una ciudad en la que el año 2020 tuvo en las balaceras el delito más reiterado, el más grave como problema de orden público, los

fiscales actuantes entrevieron que las evidencias de este legajo albergan el resumen de una historia que en Rosario se repite cada vez más temprana y dramáticamente: la construcción de un sicario. En este caso es un chico de 19 años que declara él mismo cómo disparó, contra quién, con qué resultados. Que con su testimonio reseña el parte provisorio de una batalla sin bandos fijos, que deja una cantidad de muertos en facciones cambiantes, donde las oportunidades por las mutaciones económicas son raquíticas, la violencia es mucha y las nociones de la ley están borroneadas.

Todo lo que pasa está deformado bajo una luz nublada que no permite advertir bien por qué los chicos se dejan la piel en la calle y las funerarias se llenan de trabajo. Un chico de 14 años está viviendo con otros dos en una casa de Villa Gobernador Gálvez. Repentinamente en la cocina de la vivienda uno de esos dos lo apunta con un arma. No es un juego, no hay azar, no será accidente. Es un acto intencional con un propósito escogido y un anuncio claro del final inminente. El chico solo puede mirar lo que le espera y lamentar su insuperable desventaja. Qué momento el momento en que alguien entiende que lo van a matar. A corta distancia, a quemarropa, entre cuatro paredes, le disparan un tiro a la cara y otro a la columna vertebral. El chico se derrumba. Cuando llegan los médicos está muerto.

Es un sábado de septiembre de 2022 a las ocho de la mañana. El chico se llamaba Derian Varela. Poco tiempo antes había estado del otro lado. En la Unidad de Homicidios de la fiscalía de Rosario señalaron a Derian como el responsable de matar a un adolescente de una manera propia de la criminalidad adulta. En el Juzgado de Menores coincidieron con ese enfoque. En compañía de otro chico del barrio Puente Gallegos, donde vivían todos, Derian llamó a Milton Gordillo, de 17 años, para encontrarse a orillas del arroyo Saladillo. Allí lo mataron de seis balazos. Cuatro meses después a Derian le llegó la hora.

Quién no tiene algún vecino, hijo o sobrino, propio o de un amigo, de 14 años. Nos vinculamos con ellos, conversamos, nos internamos en los matices luminosos de la sensibilidad, del ingenio, de los conflictos, del humor de sus tempranas vidas. ¿Se puede imaginar que esos chicos

que frecuentamos empiecen a usar armas de fuego a los 8 años? ¿Somos capaces de pensarlos ejecutando a tiros a alguien? ¿O enfrentándose a la inminencia de la muerte como le pasó a Derian?

Derian representa no a esos chicos de 14 que conocemos sino a todo lo que está lejos de nosotros. ¿Es casualidad esa lejanía? ¿Qué vida le tocó a este chico para tener incorporada a su subjetividad la posibilidad de matar y también de morir a la edad de estar en primer año de la secundaria?

Un especialista en niñez que trabajó a nivel judicial el asesinato de Milton Gordillo queda asombrado por un matiz de la conducta homicida. Lo que está escrito en el sumario de boca de un testigo deja sin respiración. Derian se arrima a Gordillo con un arma en cada mano y le dispara a sangre fría. Ya baleado, el chico cae arrodillado y como pidiendo ayuda murmura: “Mi mamá”. Son sus últimas palabras. Derian se iba pero lo escucha. Retoma sus pasos y le vuelve a disparar.

En ese acto tremendo, analiza el especialista, asoman los rasgos de una criminalidad adulta y afianzada. No aparece la pura impulsividad y la agresividad desbocada que caracteriza la conducta de los niños envueltos en hechos violentos. Un chico que convoca a otro a un encuentro donde hay un propósito meditado, que en ese lugar sin salida le dispara seis tiros y que se marcha caminando, lo que muestra es que tiene incorporado un patrón mafioso.

A los 120 días de ese acto inclemente Derián quedó tirado en la cocina de la casa donde estaba viviendo. Tenía dos disparos, uno en la mandíbula y otro en la columna vertebral. Uno de los diversos funcionarios judiciales que conoció la trayectoria vital del chico, notoriamente afectado ante la noticia, fue escueto al enterarse: “Lamentablemente es un final esperado”.

El año anterior a una unidad de la fiscalía regional de Rosario llevaron a una mujer acusada de quedarse con la casa de una vecina a través de una balacera. Ese caso llevó a identificar y detener a Valeria Delza como responsable de esa usurpación. La pesquisa determinó que tras las acciones de Valeria Delza había un modus operandi afianzado. En la fiscalía establecieron que ella aparecía como cabeza visible de una célula familiar que de manera violenta se quedaba con casas de vecinos. Entre quienes ejercían la violencia con armas, de acuerdo con

el informe fiscal, estaba su hijo de 14 años. Era Derian Varela. Pero previamente en el Juzgado de Menores N° 3 a cargo de Alejandro Cardinale supieron que en el pasado la familia de Derian fue víctima de la usurpación de su propia casa de parte del entorno de César "Manco" García, el dueño de una distribuidora de barrio Plata, conectado con múltiples sucesos de sangre en esa zona.

Hay una violencia circular en donde los que agreden fueron víctimas primero, dice el juez. Algo que se advierte continuamente. El acto violento saca todo lo demás del campo visible. La soledad sonámbula del sufrimiento inicial, las profundas adicciones sin posibilidad de ser tratadas, la completa ausencia de oportunidades en esa marginalidad de las cunetas para chicos que solo alcanzarán algo dejándose el aliento en la calle.

Los peligros de la precariedad social se bambolean sobre los que alcanzados por ella se empecinan igualmente en buscar soluciones sin tocar lo ilegal. Ezequiel Monzón vivió los 20 años de su vida escalando una pendiente. Creció en la Vía Honda, villa del oeste rosarino, abriéndose paso como pudo. En plena pandemia, haciendo changas en el mercado de productores, se le ocurrió poner su propio emprendimiento de verduras para procurarse una mejor vida. No tenía un capital para lanzarse por lo que recurrió a unos prestamistas que se movían allí.

El plan era difícil pero no imposible. Tomó 5000 pesos que debía reintegrar en 26 días con cuotas diarias. Lo que iba a devolver era desmesurado pero para alguien como él, nacido y criado en la informalidad, no había otras alternativas. Así que aceptó pagar un 360 por ciento de interés mensual confiando que su jornal cotidiano y las ventas diarias lo ayudarían a afrontar cada pago.

No contó que en la mitad del compromiso en el mercado lo dejarían sin trabajo. Salió a cirujear pero muy rápido se quedó sin forma de afrontar los pagos diarios. Un viernes de agosto de 2021 lo intimaron y suplicó que le dieran el fin de semana para juntar la plata. El lunes posterior se presentaron a su humilde casa de Patagones al 4300 donde estaba con su mujer y sus dos hijas. Cuando salió le pegaron un tiro en el abdomen. "De parte de los colombianos", le dijeron.

Cuando la fiscal que llevó el caso lo convocó para preparar la

acusación, Ezequiel le mostró la bolsa de colostomía que llevaría para siempre. El balazo le perforó el intestino y la vejiga. "Tengo que andar con esto y así no puedo laburar ni nada. Tengo dos criaturas y con esto nadie me va a dar trabajo".

¿Qué impulsa a una persona que nació en la marginalidad, vivió en la evidencia de la negación social de los beneficios que otros reciben como algo natural, a obstinarse en reiterar las rutinas de las personas integradas? ¿No es un insondable milagro que un chico criado casi en un gueto, sin educación y sin sostén comunitario tome un crédito para ponerse una verdulería? ¿Y cómo debería valorarse que esa posición desfavorable que lo hace recurrir a prestamistas usureros implique luego que le peguen un tiro que le impedirá trabajar?

Es interesante hacer el ejercicio de pensar en lo que ni siquiera se da por hecho. Una persona sin recursos hace un esfuerzo supremo para estar dentro de la ley. Pero el no tener recursos la priva del cuidado que supone estar en una posición material confortable. Si el que está dentro del sistema se insolventa tras tomar un crédito, tiene al menos garantías. Sabe que entre los riesgos que correrá no está recibir un balazo. Pero el pobre que le pasa eso será ejecutado, no en sentido financiero, y probablemente no podrá volver ni siquiera al trabajo informal que alguna vez tuvo.

En Rosario la violencia cae como un sudario en los barrios sucios. Y los chicos crecen bajo su influjo y su efecto. En la transformación de la ciudad violenta entre los jóvenes o muy jóvenes hay un papel nuevo. Es que se involucran en acciones de mucha responsabilidad en el campo del crimen. La relación entre infancia y delito existe desde siempre y en todas partes, pero no con posiciones jerárquicas o papeles de importancia tan tempranos. De repente chicos muy chicos asumen posiciones protagónicas en la planificación y en el riesgo. En la ciudad del alma rota los adultos de las máximas posiciones institucionales estuvieron desconcertados y sufrieron por consecuencias de las decisiones que tomaron personas recién salidas de la niñez. Así pasó. Sigue pasando.

21
NUEVAS GENERACIONES

Alan Funes y su novia Jorgelina Selerpe nunca se imaginaron que un hombre que decía ser agente de la DEA y era un abogado trucho, como Marcelo Dalesio, que había viajado a Rosario en un BMW blindado color negro, se iba a jactar de que la detención de esta pareja de jóvenes narcos había sido gracias a él. Ese día, cuando Chipi Selerpe y Alan Funes se entregan tras verse rodeados por decenas de gendarmes y policías en un Fonavi, Dalesio envió un breve texto con el link del operativo: "Cumplo" (causa Nº 3169 "D'alessio Marcelo Sebastián). La destinataria del escueto mensaje fue Romina Bedetti, abogada de Lorena Verdún, viuda de Pájaro Cantero.

El gobierno los mostró como si fueran Clyde Barrow y Bonnie Parker, la pareja de criminales estadounidenses que en la década del 30 escaparon de la policía durante tres años, una saga que terminó inmortalizada por el actor Warren Beatty. Alan y Chipi habían estado prófugos solo 18 días.

El espía prometía a la abogada que había cumplido con su parte. Dalesio ofrecía un toma y daca. Le pedía a Verdún que la aportara nombres de políticos involucrados en el narcotráfico. Y le ofrecía a cambio que podría interceder para mejorar las condiciones de detención del clan Cantero. Pero en el medio se había desatado una guerra entre dos bandas de chicos narcos, segunda y tercera generación de mafiosos pesados: Funes versus Camino. Los Monos, que no podían estar fuera de nada, jugaban para los segundos.

Por eso, Bedetti le había pedido ayuda a Dalesio en un mensaje que le mandó por WhatsApp. "Me mataron a una clienta, Marcela Díaz, que se había presentado… el día 30 de diciembre fue baleada por gente de los Funes y salió ilesa y a su hijo la gente de los Funes lo dejó tirado en la cama con un tiro en la columna. El 3 de enero metimos la

denuncia por este hecho. El 10 de enero presentamos la denuncia en Asuntos Internos. Y después presenté un hábeas corpus donde no existía ningún pedido de captura ni ninguna causa abierta de ella. Ese día la terminan matando” (Aire de Santa Fe, 24 de octubre de 2020).

Dalesio se jactaba ante la abogada de haber detenido a la pareja de narcos desenfrenados que intentaban emular a Los Monos, con una reacción similar: la muerte como venganza. Alan y Chipi provenían de familias con una prosapia narco importante, pero ellos pertenecían a una nueva generación, de pibes nacidos y criados con autos importados y una pistola 9 milímetros en la cintura.

Nunca habían tenido un trabajo formal y, como sus padres y abuelos, seguían la tradición de tener una escasa formación educativa. Probablemente, fuera de ese mundo criminal se morirían de hambre. Las redes sociales y los medios de comunicación habían contribuido a moldear perfiles distintos de esta nueva camada. Eran más violentos, no tenían miramientos en matar a cualquiera que se atravesara en su camino, fuera un menor o un anciano o una familia entera. Pretendían tener una vida acelerada, a toda máquina, cuyo destino se conjugaba entre dos opciones, en realidad, poco prometedoras, como la muerte y la cárcel. Exponían, además, ante los medios una irreverencia que sus padres y parientes nunca habían mostrado.

La imagen de Chipi Selerpe sacando la lengua a los fotógrafos cuando era trasladada, esposada, después de una audiencia en los tribunales, tras la detención junto con su novio, exhibía un desdén que era novedoso. Se burlaba de todos, de los periodistas que la veían desfilar, con sus pantalones ajustados y su campera de jean, y de los funcionarios que la exhibían como un premio que habían obtenido. También era algo nuevo en el rubro criminal que un narco como Alan Funes, de apenas 18 años en ese momento, se filmara en los festejos de Año Nuevo disparando una ametralladora FMK-3. Era lo contrario al perfil bajo que cultivaba su padre Jorge. El video que había subido a Instagram lo había registrado en la casa de su abuela donde cumplía detención domiciliaria por un crimen. Alan anticipaba con esos disparos lo que venía. Era un mensaje a sus enemigos, antiguos socios de su padre Jorge Funes, el clan Camino. Esa guerra entre las nuevas generaciones había dejado 30 muertos en solo un año.

La mecha que detonó la guerra fue un operativo que hizo la Policía Federal contra Rosa Camino, la hermana de Roberto, conocido como Pimpi, el histórico líder de la barrabrava de Newell's. El nombre que los federales pusieron al despliegue infernal de efectivos en barrio Municipal no era un ataque de originalidad: Rosa blanca. Pero la irrupción de los federales generó otro tipo de ataque. Alexis Camino, sobrino de Rosa, estaba convencido de que el golpe de la Policía Federal había tenido efectividad porque alguien había hablado. Estaba seguro de que eran sus enemigos barriales, los Funes. La idea que tenía en la cabeza Alexis no era descabellada. Formaba parte de los nuevos "códigos" que imperaban entre estas nuevas generaciones de narcos, que delataban a sus rivales en el negocio de la droga.

La respuesta de Alexis a sus sospechas de que los Funes los habían entregado fue ejecutar siete días después de los allanamientos de la Federal a la madre de Alan Funes, que en ese momento tenía 16 años. El pibe vio morir a su madre Mariela Miranda, que se desangró frente a él, después de que un balazo le destrozara la arteria aorta, contó el abogado Juan Audisio. Esa imagen nunca iba a desaparecer de su mente. Tampoco la ira para vengarse, a pesar de que era un adolescente. No había límites.

Jamil miraba videos de YouTube con el celular de su madre. Estaba sentado en el piso frío de baldosas de la cocina, en esa casa pintada con colores pastel. El calor era agobiante durante la noche, y el aire parecía más espeso en esa cuadra de la zona sur. Pablo Riquelme, su padre, descansaba sentado en una reposera en la vereda junto a sus otros dos hijos, un bebé que dormía en un cochecito, y una niña de cinco años. Una moto Enduro clavó los frenos y las balas quebraron el silencio de la noche. El hombre que iba detrás disparó un cargador entero de balas 9 milímetros sobre el cuerpo de Pablo, un vendedor de drogas de los Camino, a excepción de un proyectil que se incrustó en la axila de Jamil, de 3 años. Ambos murieron, fruto de las esquirlas de esa guerra sangrienta y salvaje que mantenían los dos clanes.

Alan se encargó personalmente de matar al que creían que era el que había desangrado a su madre. El 1° de mayo de 2016, Alan, en ese momento de 17 años, entró al pasillo de casas precarias de Ayacucho al 4300, apuntó su mirada y la pistola 9 milímetros contra Eugenio

Solano, conocido como Pupi 2, y lo acribilló. Antes de matarlo alcanzó a decirle que su muerte tenía una razón: vengar el crimen de su madre. Solano murió en el acto, en ese pasillo ancho en cuya entrada hay una enorme palmera que se trenza con la maraña de cables de las conexiones ilegales. Solano no había matado a la madre de los Funes, pero su muerte sirvió de mensaje. Alan los había visto a los asesinos.

Unos meses después, Alan fue detenido y enviado al Instituto de Rehabilitación del Adolescente (IRAR), y la causa judicial tuvo varias idas y venidas en el Juzgado de Menores N° 3 con recurrentes pedidos de nulidades de sus abogados hasta que acordaron con la fiscalía que fuera enviado a la casa de su abuela en el barrio La Tablada, donde con sus amigos lo filmaron disparando al aire con la ametralladora, una imagen que nutrió los noticieros nacionales el verano de 2018.

Los cuatro hermanos Alan, Lautaro, Johnatan y Ulises Funes heredaron de su padre Jorge el temple de hombre duro, pero no siguieron el camino que le dio fama en Rosario: ser uno de los ladrones más buscados para abrir cajas fuertes a fines de los 90. Era otra época; tiempos de relativa paz.

Los Funes vivían en el barrio Municipal, dominado por Pimpi Camino, con quien Jorge tenía una buena relación en la barra de Newell's. A las torres Fonavi las llamaban Pimpilandia, donde las paredes mostraban quién mandaba, con la leyenda repetida de "la hinchada que nunca abandona".

Sus hermanos Juan Ramón y Alberto, alias Tato, controlaban el ingreso al barrio desde un santuario del Gauchito Gil, que el líder de la barra construyó en la vereda de calle Alice. Pimpi tatuó su silueta en el lado derecho de su pronunciado abdomen. La hegemonía de Pimpi en las tribunas se extinguió cuando terminó en diciembre de 2008 el reinado de 14 años en el club de su jefe, Eduardo José López.

La "armonía" que reinaba entre Jorge Funes y Pimpi no se trasladó a la siguiente generación. Johnatan y Alexis Camino iban a la escuela técnica Nº 393, a la misma que concurrían los Funes. Unos años después, los docentes tuvieron que suspender los recreos por los tiroteos entre los exalumnos.

Los hijos de Pimpi mandaban como su padre y ya en aquella época Johnatan, conocido como Chamí, se paseaba a los 14 años armado por

los pasillos del Fonavi. Johnatan Funes declaró a un juez unos meses antes de morir, acribillado en un cruce de rutas tras visitar a sus dos hermanos presos Alan y Lautaro, que cuando tenía 12 años Chamí y sus primos, dos y tres años mayor que él, les exigían ser sus sicarios.

La herencia del negocio de las drogas no fue fácil en esa familia. Rosa, de 46 años, la hermana de Pimpi, pretendía quedar al frente pero Alexis, su sobrino, se lo impidió con un mensaje claro: disparó más de 50 balas contra el frente de su casa en Anchorena 87 Bis. Alexis se alió con Ariel Segovia, Tubi, pariente del histórico líder de Los Monos y delegado de la banda en la tribuna leprosa.

Del otro lado, Lautaro y Alan Funes buscaron alianzas y se mudaron unas cuadras hacia el sur, a La Tablada, donde para sobrevivir en esa puja permanente de balas rasantes y venta de drogas, se ligaron con el asesino de Pimpi, René Ungaro, alias el Brujo, un hombre de 31 años, flaco y pálido, quien desde la cárcel de Piñero, donde purga una condena a 13 años, mueve los hilos de la zona sur, apalancado con los Bassi, históricos enemigos de Los Monos. Con el apoyo de Ungaro fueron por más, a copar Pimpilandia, con un único lenguaje, el de las balas.

La rabia de los Funes se encendió el 11 de marzo de 2016, cuando un balazo de los Camino destrozó la arteria aorta de Mariela Miranda, su madre. Fueron sorprendidos en la puerta de la casa. “Alan vio morir a su madre y eso no lo olvidará jamás”, contó su abogado Juan Audisio.

El ataque tenía cierta explicación. Siete días antes, la Policía Federal irrumpió en esa zona donde dominan los dos clanes. Allanaron seis búnkeres, secuestraron cinco kilos de cocaína y Rosa Camino, hermana de Pimpi y tía de Alexis, fue detenida. El operativo se llamó Rosa blanca. Con la lógica narco que se impuso en Rosario, los Camino creyeron que sus enemigos barriales habían delatado a la Policía Federal los puntos de venta de cocaína.

Alan Funes se vengó a los pocos días. Tenía apenas 17 años cuando entró al pasillo de Ayacucho al 4300 y empezó a disparar contra un grupo de muchachos que tomaban una gaseosa aquel 1° de mayo de 2016. Mató a Julio Solaro, que quedó tendido en ese pasillo con piso de tierra en cuya entrada hay una enorme palmera que se trenza con

la maraña de cables de las conexiones ilegales.

Desde ese momento las venganzas entre estas dos bandas no dejaron de repetirse con un hilo estremecedor: 37 crímenes en un año y medio. Pero el clima de tensión recrudeció desde el 1° de enero pasado, cuando se produjeron siete homicidios, y Jorge, el padre de los cuatro hermanos Funes fue baleado. Luego, fueron asesinados Ulises y Johnatan Funes, y Jorge Selerpe, tío de la novia de Alan Funes. Y del otro lado, murieron Marcela Díaz, hermana de Segovia, y Luis Tourn y Sofía Barreto, ajenos a la disputa, y Pablo Riquelme y su hijo de tres años. Hay media docena de otros crímenes que los investigadores no definieron si están relacionados a esta guerra.

Chipi había sobrevivido. Estaba en libertad con la excusa que muchas mujeres usaban ante la justicia: debía cuidar a sus hijos. Sus ingresos para mantener a los chicos provenían del dinero que ingresaba a los búnkeres. Ella mantenía a raya el negocio. Controlaba a las jóvenes que embolsaban las dosis y las vendían a toda hora. Había estado presa unos meses en la cárcel de Ezeiza. Era dura. Implacable. Más dura que los hombres de su familia que reinaron en el narcomenudeo desde hace dos décadas.

22
LA PROPUESTA

En una tarde sin novedades sonó el teléfono particular de un periodista. Era mayo de 2018. Rosario estaba sacudida ese mes por una de esas seguidillas de hechos de sangre que causan aturdimiento, indignación y miedo. El periodista oyó al atender la voz reseca de un hombre conocido. Un personaje vinculado históricamente a delitos diversos que estuvo entreverado en la imputación a Los Monos pero con indicios frágiles que no alcanzaron para imponer sanciones.

“Tengo una propuesta que le va a interesar”, dijo la voz. “Tiene que ser personalmente”.

Un mes antes habían condenado por primera vez a penas de prisión a 19 personas por integrar o brindar protección a la banda de Los Monos. Guille Cantero había recibido una de las más altas. Estaba por esos días a la espera de otro juicio inaugural, el primero que afrontaría por comercio de drogas.

El gobierno de Santa Fe tenía información de que los asesinatos de esos días eran instigados por Guille Cantero desde una cárcel que está a 15 kilómetros de Rosario. Por eso querían sacarlo de la provincia. Con el gobierno nacional acordaron transferirlo a un penal de Resistencia en Chaco.

El periodista quedó en reunirse en un bar el siguiente domingo a la tarde con la persona que había llamado. Por algo de lo dicho le quedó tintineando alguna incomodidad. Era la palabra “propuesta”. Pero la cita estaba acordada. Le pidió a un amigo que lo acompañara, se sentara en otra mesa a distancia y no perdiera de vista la reunión.

El día señalado el interesado no llegó solo. Lo acompañaba un hombre de baja estatura, rostro algo enrojecido y dientes apiñados. El periodista saludó al que lo había llamado. Hombre astuto, de mucha calle, este supo por dónde había que empezar.

—No sienta ninguna preocupación. La persona que está acá conmigo es la que tiene la propuesta. Le va a hablar de frente.

El desconocido estrechó la mano y se presentó. Dado lo que llegaba a decir, tuvo gran manejo de la situación. No deseaba inspirar ninguna inquietud. Quería hacer un ofrecimiento, decía, que era para el bien de la ciudad. Habló con voz susurrante aunque clara.

Dijo que su nombre era Andrés Mártir. Contó que se dedicaba a administrar bares en la zona sur de Rosario y otros negocios de la noche. El más importante era Club Fire, un boliche de la zona sur. Habló de los contratiempos que le había traído que ese local fuera elegido y frecuentado por algunos referentes del delito de Rosario. Aseguró que su vida estaba lejos de ellos, era solo trabajar y dedicarse a su familia.

—Todo lo que le digo es la verdad. Pero también quiero comentarle que tengo una relación familiar con Guille Cantero. Tengo buen trato con él, que viene desde antes de estar preso y ahora lo visito en la cárcel. No opino ni defiendo las cosas por las que lo condenaron. No tengo negocios con él, las cosas que él hace no las habla conmigo, si hay algo que está mal yo no lo sé. Solamente tenemos una relación humana de confianza mutua.

La mujer de Guille Cantero se llama Vanesa Barrios. Mártir era el marido de la madre de Vanesa. Esos lazos de parentesco lo habían acercado al jefe de Los Monos. La proximidad afectiva le había dejado saber que Guille estaba muy inquieto con la posibilidad de que lo trasladaran a Chaco. Tenía dos hijos chicos y no quería que ellos tuvieran que viajar diez horas para poder visitarlo. Necesitaba permanecer en Rosario. Tenía las de perder, pero también una prenda de negociación. Mártir le dijo al periodista que de eso quería hablar.

—Se está diciendo que Guille está detrás de todas las muertes que están ocurriendo estos días. Él dice que eso no es cierto. Pero lo que sí puede hacer es parar esa bronca. Él sigue siendo una persona muy respetada afuera. Si da la orden de que estas cosas frenen él dice que van a frenar.

El periodista escuchó en silencio mirando a los dos hombres. Cada tanto echaba un vistazo al amigo sentado contra una ventana al fondo. Mártir insistió en que su intermediación era por simple afecto por

Guille, que era lo único que lo unía a él. Preguntó si entendía lo que Guille ofrecía.

—Entiendo. Lo que no entiendo es por qué me cuentan a mí todo esto.

Mártir explicó que necesitaban un interlocutor confiable que se comunicara con el gobierno para hacer saber lo que ofrecía. Paz en la calle a cambio de frenar el traslado a Chaco. ¿Por qué Guille no utilizaba a sus abogados para canalizar esa propuesta? Porque estos no querían quedar en posición de mediar para ofrecer menos violencia.

—¿Y por qué yo sí querría?

—Porque a usted le puede parecer una cosa buena que dejen de matar gente. Lo único que tienen que hacer es parar el traslado de un detenido. No es sacarlo de la cárcel, no es bajarle la condena, es dejarlo cerca de su familia. Para el gobierno es un precio bajo y razonable.

Si el negocio era efectivamente evitar los asesinatos había una lógica. En especial cuando ninguna fuerza del Estado podía garantizar parar la sangre. Lo que no tenía lógica, dijo el periodista, era ponerse a disposición de Guille Cantero para actuar como su intermediario.

—No puedo aceptar lo que me sugieren. Pero no por no trasladar la propuesta. Eso puedo hacerlo con funcionarios de la justicia que hablen después con el gobierno si a ellos les parece aceptable. Lo que no voy a hacer es exponerme a que Cantero interprete que estoy haciendo algo para él, que se sienta frustrado si no sale y quedar yo en el medio. Transmítaselo así. Y mándele mi saludo.

Lo que no quería el periodista era quedar expuesto a las expectativas de Guille Cantero. Mejor dicho, a sus decepciones. Mártir dijo que entendía y que no buscaban un compromiso. Pero que si podía comentar eso a alguien del campo de la justicia le parecía bien. El periodista replicó que sería todo lo que podía hacer. Pidió tres días. “Hablemos el miércoles a la mañana”.

El martes a la noche desde un auto en movimiento atacaron a balazos una casa de familia en la calle Italia. A las pocas horas hicieron lo mismo en un edificio de la calle Montevideo. La conexión de esas dos viviendas era un mismo propietario. Habían pertenecido a Ismael Manfrín. Era el presidente del tribunal que dos meses antes

había condenado a 19 años de prisión a Guille Cantero. Era también el juez a quien le habían solicitado aval para su traslado a Resistencia.

La ciudad se estremeció con una novedad sin antecedentes. Era transparente la intención y quien estaba atrás de lo ocurrido no lo era menos. El periodista contó que llamó a Mártir. Quería olvidarse del asunto y no dejar ese cabo suelto.

—Andrés, con lo que acaba de pasar, me parece que el pedido que me hizo quedó viejo.

—Y sí. Le aseguro que entiendo menos que usted.

El ataque fue el primero de una serie de catorce en total. Una sucesión endemoniada que incluyó balazos contra domicilios de jueces con el exclusivo aglutinante de que habían tenido que ver con el trámite de condena a Los Monos. Hubo atentados iguales contra el Centro de Justicia Penal, la sede de las fiscalías provinciales, una casa donde había vivido un policía muy activo en la investigación contra los Cantero, la Policía de Investigaciones.

En Rosario hay una constante. Los hechos violentos no se anticipan pero casi siempre se descubre a sus autores. Tres años después del primero de estos atentados que generaron un enorme shock institucional y político, siete acusados por todos los hechos estaban sentados frente a un tribunal de juicio. El que respondía como ideólogo era Ariel Cantero, el Guille.

Juzgaban a los organizadores de los atentados y a sus ejecutores. Siete personas en total. Y el corazón de la ciudad seguía latiendo embarullado por lo ocurrido. Se decidió que el inicio del juicio fuera sin los acusados presentes. Todos seguirían la audiencia desde las cárceles.

En el Poder Judicial de Santa Fe la inquietud era extrema y explícita. Iban a acusar a personas por disparar contra domicilios de dos jueces que habían condenado a Los Monos y a dos de los que habían confirmado esas sentencias. Aunque ninguno de los magistrados vivía en los lugares baleados les habían pertenecido a ellos en algún momento. El amedrentamiento era un mensaje inédito en el país.

También la provocación. Treinta y seis horas antes del inicio del juicio fulminaron a tiros el edificio donde debía celebrarse. Era la

cuarta vez. El Colegio de Magistrados de Rosario estalló contra el gobierno santafesino. “No somos nosotros los que podemos explicar lo que pasó. Lo que sí podemos es pedir explicaciones”, dijeron desde allí.

El gobierno había preparado un operativo inédito. Todas las calles laterales al Centro de Justicia estaban valladas e inaccesibles. Se había desviado el transporte público. Habían dispuesto 300 efectivos para las tareas preventivas y 60 patrullas. No obstante, dos hombres en una moto llegaron y dispararon siete veces contra un blindex del edificio.

Las alternativas de toda la investigación habían sido un hervidero de sensibilidades lógicamente alteradas. Los jueces se quejaban airadamente de la desprotección en la que les tocaba desempeñarse. Razón no les faltaba. La ausencia de inteligencia criminal no anticipaba actos que eran pensables. Pero también era cierto que personas modestas, con menos capacidad de interpelar al Estado, estaban todo el tiempo al acecho de una violencia letal.

Esa diferencia generó enojos dentro mismo del Poder Judicial. Varios fiscales que vivían expuestos a amenazas y aprietes por investigar a violentos estaban molestos con las quejas de los jueces. “Son parte del sistema penal hace décadas y actúan como las madres del dolor”, decían.

Ese fastidio doméstico se acrecentó cuando a los jueces les tocó declarar en el juicio. Hubo primero una deliberación sobre si asistirían a las audiencias. Lo hicieron finalmente. Pero sus declaraciones, en una ciudad cruzada por el miedo, fueron escuetas, rápidas y mínimas.

No dejaba de ser comprensible. Alguno se enojó pensando que los trataban de miedosos. No era eso. Cuando un criminal hace inteligencia, busca la casa de alguien y le dispara, la reacción defensiva no es solo entendible sino racional. Además porque la amenaza produce destrozos en todo el entorno próximo del amenazado, donde cambian las rutinas y se alteran los vínculos.

Pero eso mismo era lo que le venía pasando hacía cinco años a habitantes de la ciudad con posiciones mucho menos notorias y frágiles por su condición social. Era por eso un gran momento para ser contundente. Muchos entendieron, también dentro de la justicia, que ser parte del campo jurídico era tener ventajas y desventajas.

Regímenes laborales y remuneraciones incomparables. Y los efectos de meterse con los conflictos que, en una ciudad donde la violencia fue vertiginosa, recién empezaban a conocerse.

Fue una situación nueva. También ocurrió antes del juicio que tres fiscales pidieron salir de la unidad que investigaba los atentados a los jueces. Eso se hizo público días después de que a una economista del equipo que se encargaba de la investigación patrimonial de las bandas le tirotearon la casa y le arrojaron a su patio una caja con una cabeza de perro adentro.

Era algo tan profundamente ingrato como lleno de sentido. Las bandas aprendían que con su capacidad de intimidar lograban efectos. Intimidaban. El debate interno seguía. Fiscales se enojaban con las deserciones más que con sus colegas. Bastará que un criminal se decida a sacar del medio al funcionario que lo investiga, decían, para echar mano al método probado para hacerlo.

No obstante los juicios se hacían. Los fiscales acusaban. Y los jueces condenaban.

23
ATENTADOS DESDE EL DORMITORIO

El 4 de agosto de 2018 las 11 de la mañana hubo una reunión espontánea en el Centro de Justicia Penal de Rosario. Unas horas antes seis personas en moto con los cascos puestos habían reventado con ocho balazos un blindex de la fachada de ese mismo edificio. Adentro, en una oficina del primer piso, otras seis personas pasaron cinco minutos sumergidas en el desmoralizador silencio propio de los momentos en los que no hay nada que decir. Eran el gobernador Miguel Lifschitz; su ministro de Justicia, Ricardo Silberstein; el de Seguridad, Maximiliano Pullaro; la intendenta Mónica Fein; el fiscal general Jorge Baclini y el fiscal regional Patricio Serjal. Era el décimo atentado sin esclarecer en 60 días contra objetivos ligados al Poder Judicial o a sus funcionarios.

Mientras quienes estaban en el complejo judicial padecían el estrago de la incertidumbre, la de una ciudad zarandeada bajo un descontrol anónimo e inédito, a veinte cuadras de allí un grupo de chicos consultaba desde sus celulares noticias en la prensa sobre balaceras, se pasaba capturas de imágenes alusivas de los diarios y subía a sus perfiles en redes sociales fotos con armas y con epígrafes que, textualmente, decían: “¿Qué pasa?”, “¿Nos tienen miedo?”, “Le damos fuego a todo el mundo”, “No nos para nadie”.

Con el aliento algo recobrado por una investigación que concluiría con condenas, los equipos de fiscales que trabajaron el caso y funcionarios del gobierno no terminaban de creer, dando una mirada retrospectiva, que un pelotón de personas que no superan los 24 años hubiera tenido a la ciudad en un puño. El autor ideológico de siete de esos atentados fue Ariel “Guille” Cantero, que había sido trasladado a una cárcel fuera de la provincia de Santa Fe luego de recibir una condena a 22 años de prisión ocho meses antes como líder de la banda

de Los Monos. Los fiscales señalaron que los hechos fueron parte de un plan sistemático para desestabilizar las instituciones del sistema penal, quebrar el orden público y lograr con esa conmoción un clima propicio para negociar el retorno de Guille a una cárcel de Rosario.

Durante cuatro meses la red de jóvenes se dedicó con fantasmal precisión a llenar de balazos viviendas que habían pertenecido a jueces que actuaron en causas donde Los Monos fueron condenados. En la organización de estos ataques, según los fiscales, fueron centrales un muchacho y una chica nacidos a fines de los 90. Ambos eran descriptos de modo idéntico: personalidades impetuosas, incansable compromiso para concretar los planes propuestos, liderazgo basado en un fuerte carisma, afectuosos con sus seguidores y contenedores en las malas. Se llaman Lucía Uberti y Matías César.

En ese momento ella tenía 24 años y él 19. Los estaban investigando por separado, sin ninguna sospecha de que tuvieran alguna conexión. Pero los encontraron juntos, imprevistamente, mientras dormían en la habitación de una casa de barrio Acíndar, un vecindario del oeste levantado para obreros calificados a fines del primer peronismo.

Llegar a ellos fue abrir la caja que resolvió el destino de la causa. Todo pasaba por esa pareja. Y la sorpresa de la investigación es que estuvieran en pareja. Los fiscales tenían a dos grupos aislados territorialmente y bien delimitados en los partes de inteligencia actuando en los ataques a casas de jueces. En uno, de Tablada, asomaba como cabeza Matías César. Al otro, de barrio Alvear, lo conducía Lucía Uberti. “Teníamos a todos por separado pero nos faltaba una unión. Encontrar a los dos líderes juntos fue el puente inesperado que nos conecta a todos los actores de la trama”, dijo un investigador el día de la primera imputación al salir de la audiencia.

La cama en la que dormían Matías César y Lucía Uberti produjo la unión de esos dos campos que el análisis reticular, que es un trabajo de algoritmos con tecnología informática que expone y reconstruye las relaciones entre grupos, no había podido descubrir. A partir del contenido de los teléfonos secuestrados el camino del esclarecimiento quedó despejado.

La memoria de los celulares demostraba que Matías tenía una relación de comunicación diaria por WhatsApp, fluida y sin

intermediarios, con Guille Cantero, quien pasaba las direcciones a atacar. El vínculo de Lucía era con Daniel “Teletubi” Delgado, uno de los condenados por el triple crimen de la Villa Moreno seis años antes, un incidente que demostró una trama de dominio barrial de un grupo delictivo aliado con policías.

Teletubi y Guille compartieron el pabellón 7 de la cárcel de Piñero hasta fines de mayo de 2018. Allí se confirmaba, una vez más, el histórico lazo entre Los Monos y el grupo que produjo la matanza de tres militantes sociales en Moreno y Presidente Quintana en 2012.

Lo que desnudó la unión de Lucía y Matías es la trepidante historia de dos jóvenes que venían de mundos diversos pero que se propusieron ganar influencia, construir sus relaciones y hacer carrera en el campo criminal. No fue una deducción sino que ellos mismos lo dejaron dicho en sus smartphones. Y en las constelaciones de sus vínculos se notan prototipos interesantes de una delincuencia urbana contemporánea con rasgos reiterados. Una inclinación al uso permanente de armas de fuego, apego a figuras rituales de la contracultura del delito como Pablo Escobar y San La Muerte y una vocación indómita de hacer público ese secreto compartido en las pantallas de teléfonos y redes sociales. Con esto último terminaron generando las pruebas contra ellos mismos que significó su derrumbe.

En las fotos y los textos recogidos en la pesquisa se veían también los valores de jóvenes ahora detenidos por estos hechos, que se sienten vinculados por lazos de pertenencia y cariño, lo que refuerzan en esos textos donde se prometen crecer y se gratifican ante el poder que experimentan mientras los atentados se reiteran ante ellos. Chicos que parecen conscientes de tener vidas veloces y que descubren en sus expresiones nociones sobre el éxito, una relación ambigua de atracción por la violencia pero también de repulsión al tipo de violencia que sufrieron en sus zonas de una policía que detestan, como también detestan a los delatores, al imperdonable grupo de los que “baten la cana”.

Matías proviene de una familia del barrio Tablada vinculada al delito y enemiga de los Cantero. Su tía Norma César y su primo Nahuel César fueron asesinados a tiros el 28 de mayo de 2013 como venganza de Los Monos por el crimen de Claudio “Pájaro” Cantero, el

antiguo jefe del clan, muerto dos días antes. Por eso al principio los investigadores pensaron que Matías se entreveraba en los atentados a jueces con fines de revancha, para que les atribuyeran los hechos a los Cantero. Pero no fue así. Simplemente eligió una sociedad con los que habían sido enemigos de su familia. Su primo Milton César lo acusó de traidor y, en un mensaje telefónico recuperado por los fiscales, le prometió desquitarse.

La historia de Lucía es bien distinta. Creció en la zona de Doctor Riva al 3700, hija de la propietaria de un almacén y con un padrastro policía, en el seno de una familia integrada y destinataria del aprecio barrial, donde la recuerdan como una chica desenvuelta, con carácter, seductora y muy preocupada por estar a la moda. A los 20 años se puso en pareja con Gino, un joven aficionado a las artes marciales, medalla de bronce en judo en los Juegos Panamericanos Juveniles de El Salvador de 2008, que alternaba entre trabajos formales y robos a viviendas sin sus ocupantes presentes. Desde esa relación, en la que tuvo un hijo, Lucía fue adentrándose en el terreno de un hampa juvenil en el que, comprobaron los fiscales, buscó el contacto directo con líderes como trampolín personal.

Lucía frecuentó el ambiente del delito bravo y construyó su imagen en afters y bares nocturnos como Roma, Club Fire, La previa y Berraco. Desde allí y con los conocidos de su expareja armó contactos que le permitieron conocer a Teletubi Delgado, a quien empezó a visitar en la cárcel de Piñero.

Lo que notaron los investigadores a partir del abrumador tráfico de mensajes de los celulares secuestrados —y no ya de escuchas telefónicas, que pierden relevancia— es que Lucía fue edificando su rol de organizadora de acciones violentas que les delegaban los autores ideológicos desde la cárcel.

Lo hizo a partir de combinar fuerte capacidad de seducción y don de mando. Fue ella quien en febriles mensajes por audio, que llegan a ser 500 por día, dio cuenta del manejo de logística e información sobre comercio de drogas, ordenó disparar o amenazar para cobrar deudas, llevó en su auto las armas con las que se cometerían atentados contra objetivos del Poder Judicial, escogió a los tiradores distribuyendo los lugares a los que deben dirigirse y sus roles y hasta bajó instrucciones

sobre qué debían decir los carteles intimidatorios dejados en los sitios atacados los que, como rasgo indiciario potente, coincidieron en sus directivas con los cartones encontrados. “Con la mafia no se jode”, decía el encontrado en el Centro de Justicia Penal el 4 de agosto de 2018.

Los fiscales Miguel Moreno, Matías Edery, Aníbal Vescovo y Nicolás Foppiani notaron en ella una vehemencia y una capacidad organizativa enormes. También una autoridad construida desde el afecto hacia las personas que comandaba, que se vio claramente en la audiencia en la que fue acusada, cuando ella abrazaba, hablaba y tranquilizaba a los imputados más jóvenes, que se quebraban en llanto cuando notaban el peso de la prueba reunida contra ellos.

Toda esa destreza organizacional de Lucía no necesariamente equivale a agudeza en otros campos. “Lucía dejó por escrito o en archivos de audio todo lo que permitió que la acusáramos. Nos facilitó mucho el trabajo”, dijo una empleada de la fiscalía. En la memoria de su teléfono, que fue decisiva para imputarla por las balaceras, los investigadores encontraron indicios solventes de la conformación de su carácter. De cómo se vinculó con personas y construyó relaciones a partir de un acatado don de mando, pero también de su sentido de la amistad, de su capacidad de contención. Se notó también que en determinado momento ella tomó la opción de acercarse a Matías César lo que implica pelearse con su grupo original: Leonel Fernández, Damián “Colombianito” Chávez y Claudio Canavo, del riñón de Los Monos, todos imputados como ejecutores de atentados a jueces.

“Yo les tenía miedo a los narcos y ahora les doy órdenes a ellos”, dice Lucía en uno de sus mensajes, una meditación implícita sobre su propia transformación. Los investigadores se preguntaban, cuando buscaban a Matías César, quién era esa chica que aparecía en todas las fotos de los celulares incautados en la cárcel de Piñero en abril. “La queríamos encontrar pero nunca imaginamos que iba a tener ese rol”. Un papel que ella fue consciente de que podía ponerla en peligro y, sobre todo, en qué flancos frágiles. “Díganle a la abogada que haga desaparecer el S7 porque vamos todos en cana”, dice en referencia a un celular Samsung finalmente encontrado, que contuvo, como se preveía, prueba decisiva en su contra.

La investigación detectó la autoría ideológica de un plan, sus propósitos, modos de concreción y a buena parte de sus autores. La exposición de las evidencias, hecho por hecho, fue un mazazo para las defensas, que en seis horas de la primera audiencia casi no contestaron, algo infrecuente. La investigación lució solvente medida por sus resultados: una decena de imputados detenidos, 190 allanamientos que derivaron en una fuerte carga de prueba y episodios que no volvieron a repetirse hasta el inicio del juicio tres años después, y que sumergían en sensaciones de derrumbe a las autoridades locales, desconcertadas por la acechanza fantasmal de ataques reiterados e inéditos. Nunca en la Argentina hubo una secuencia de atentados seriales donde el objetivo fue atacar a una institución del Estado, el Poder Judicial, por imponer sanciones contra una banda criminal.

A veces a una investigación encaminada no le viene mal la ayuda de la suerte. El golpe de fortuna que tuvieron los investigadores fue encontrar a los líderes de dos grupos que no aparecían conectados en el mismo dormitorio. El informe sobre los vínculos entre todos estos grupos implicados en ataques a jueces, rearmado a partir de datos subidos por sus mismos integrantes a redes sociales, concluía con una cita de Tomás Villasante, especialista español de la Universidad Complutense en análisis criminal: “Cada sujeto está en varias redes al mismo tiempo, tanto de acción como cognitivas. Cuando dos se acuestan juntos en una cama son muchas las redes que están acostándose”.

El juicio terminó a fines de septiembre de 2021. A Lucía la encontraron organizadora de nueve de los ataques. Le dieron 20 años de prisión. A Matías César le impusieron la misma pena por actuar en el armado de diez de los hechos. Guille Cantero concibió desde la cárcel siete de los casos. Le dieron 22 años. Al final del año siguiente Guille habría sumado por sentencias en distintos hechos penas por 92 años, que en 2023 aumentaron a 113. Una humorada que hizo el día que se inició el juicio no cayó muy bien. Fue cuando le preguntaron su ocupación. “Contrato sicarios para tirarles tiros a los jueces”, dijo.

24
LA OFICINA DEL CRIMEN

Jorge A. se alisa el pelo con la mano. Es una especie de tic que tiene. Lo hace con la mano tensa, pero con suavidad. También se arregla el cuello de la camisa. Viste un pantalón de gabardina azul algo gastado, pero limpio, hasta aparenta planchado; mocasines bastante usados pero lustrados y una camisa manga corta color blanco. En el pabellón 11 de Piñero parece un bicho extraño. Algunos lo tratan de usted.

Solo hay dos presos que tienen más de 50 años. Jorge tiene 59. La mayoría de los internos tiene menos de 25. Por eso le dicen el Viejo. Su experiencia, que se trasluce en las canas que en algún momento trató de ocultar con tintura, representa indiferencia. Y a veces desprecio.

Un antiguo ladrón, especialista en abrir cajas fuertes, como Jorge, perdió ese halo de reconocimiento que tenía antes en la cárcel. Recuerda que el narco no cargaba con respeto y poder dentro de los pabellones. Los piratas del asfalto y los hampones que asaltaban bancos eran los números uno. “Tipos que usaban la cabeza, que no mataban, sino que se enfrentaban a la policía si había que hacerlo. Usaban la pistola como último recurso”, apunta. Con cierta melancolía señala que esos códigos no existen más hace tiempo. “Un tipo que le robaba a los ricos y jamás había matado a nadie, que tenía destreza y experiencia, cargaba con un prestigio que hoy se perdió”, reseña Jorge, mientras toma mate con edulcorante en la calurosa tarde dentro del pabellón.

Dice que estos chicos, que se creen narcos, “amasijan” a cualquiera por un par de zapatillas. Jorge decidió ingresar en uno de los pabellones evangélicos de Piñero. Reza y participa de las reuniones a cambio de tranquilidad. No cree en nada ni nadie, pero el rito permanente en forma de plegaria —que a veces es cansador, según él

— es mejor que tener miedo todo el tiempo a que te maten. Allí la jerarquía no pasa por la relevancia criminal sino por un liderazgo distinto. Los líderes son los garantes del orden, son una especie de policías religiosos que vigilan de forma discreta pero permanente para que no estallen los problemas. Están alerta para evitar que ingresen “infiltrados” que traten de tomar el pabellón. Los líderes no solo están convencidos de La Palabra sino que son rudos, gente que no va a generar el caos pero que puede lograr desarmarlo.

Jorge A. pertenece a otra generación de delincuentes, que hoy representan una excepción dentro de las cárceles. La población carcelaria cambió desde la última década. El narcotráfico y sobre todo los delitos vinculados a la violencia que supura de la venta de drogas se transformaron en las causas más relevantes de detención. Y el problema que aparece es que los grupos criminales continúan con sus actividades dentro de las prisiones, con una herramienta clave: los celulares.

“Todo el tiempo pido la prisión de personas que ya están en la cárcel”. La fiscal Valeria Haurigot, jefa de la Unidad de Balaceras, otra excentricidad rosarina, plantea el dilema que circula en la justicia de Rosario, donde las investigaciones para determinar dónde se gestaron los crímenes siempre terminan en el mismo lugar: los pabellones de las penitenciarías, tanto provinciales como federales.

Las cárceles son las usinas de la muerte, del tráfico de drogas, de las extorsiones. De toda una paleta de actividades mafiosas que dentro de las prisiones se perfeccionan. Es un fenómeno nuevo en la Argentina, donde las prisiones colapsan por una sobrepoblación que nadie, por lo menos en Santa Fe, previó en 2014, cuando se puso en marcha el nuevo sistema de enjuiciamiento de delitos, que es más ágil y rápido. Como ocurrió en otros países que lo aplicaron, como Chile, el resultado es previsible: cárceles estalladas de personas, que son una bomba de tiempo latente.

Una pista del poder que emana de las cárceles la dio hace unos años José Cerqueira Bremer, magistrado de Curitiba —capital del estado brasileño de Paraná—, que visitó Rosario para ayudar a diagramar un plan de protección contra jueces y funcionarios del Poder Judicial. Bremer contó que empezaron a notar que la aparición de WhatsApp

cambiaba la organización interna de los presos en las cárceles de Brasil. La tecnología había ayudado a que los reclusos se volcaran a actuar en redes. El poder de la comunicación instantánea se había vuelto un riesgo.

Bremer contó que después de varios hechos delictivos y sangrientos que se habían gestado desde las cárceles de San Pablo a través de WhatsApp un magistrado dio de baja la aplicación a través de una orden judicial. El efecto se vio en las calles casi de forma inmediata. Los jefes del Primer Comando Capital (PCC) ordenaron quemar colectivos. En solo dos noches se incendiaron más de diez ómnibus del transporte público con bombas molotov. La justicia tuvo que dar marcha atrás con la medida. Bremer admitió que el Estado había subestimado el poder que había irradiado la comunicación en el crimen organizado. Hoy el Comando Vermelho, grupo criminal de la envergadura de PCC, como advirtió el escritor y periodista Allan de Abreu, maneja y presta el servicio de internet en las principales favelas de Río de Janeiro.

El smartphone transformó la matriz del crimen organizado dentro de las cárceles. Como ocurrió en otros países, el uso que le dan los miembros de grupos criminales a ese aparato, que es más que un teléfono celular, logró que un calabozo se convierta en una especie de gerencia de delitos, donde los líderes —como lo prueban decenas de causas judiciales— siguen dando instrucciones y órdenes a través de aplicaciones de mensajería que hoy no se pueden intervenir, por lo que la justicia está a ciegas.

Los vínculos de los jefes narcos, en este caso virtuales, siguen intactos: manejan la provisión de puntos de venta de drogas y ajustes de cuenta. Y un negocio en alza: las extorsiones. El peligro que muestra el fenómeno narco de Rosario es que las bandas criminales se hacen más poderosas en las prisiones, con la protección del Estado. Muchos de los jefes que están en las penitenciarías no durarían mucho tiempo en libertad, porque la dinámica del negocio los llevaría al cementerio.

Este problema tiene un impacto directo en la violencia que se derrama a diario en Rosario, donde las órdenes para matar, disparar o extorsionar provienen de los penales, no solo provinciales, sino

federales, luego de que los jefes narco fueran trasladados a partir de 2021 a las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz, donde —en teoría— deberían tener mejores controles. En enero de ese año se cometieron 24 homicidios en Rosario, 17 de ellos con sicarios que recibieron órdenes precisas.

Funcionarios del área penitenciaria y judicial admitieron que erradicar los celulares de las cárceles provocaría trastornos serios a nivel interno, por la importancia que tiene hoy el teléfono en la vida cotidiana, también la de un preso, que más allá del manejo de actividades delictivas está en contacto permanente con su familia.

El narco Nahuel Novelino observaba desde el penal federal de Rawson, en Chubut, a través de su teléfono, las cámaras de seguridad de un negocio de ropa que tenía en el centro de Rosario y así sabía la cantidad de clientes que entraban. A la noche se conectaba con su pareja y cenaban juntos a través de una videollamada de Facebook live. Esa relación amorosa era lo menos importante. Porque con el smartphone Novelino manejaba el negocio de la venta de drogas, con más de 30 personas.

Los niveles de reincidencia entre los presos son altos en Santa Fe. El último informe elaborado por el Observatorio de Seguridad Pública señala que el 23 por ciento de la población carcelaria ya transitó por alguna prisión anteriormente.

Los internos que regresan a las cárceles son muy jóvenes. La mitad de las personas que se encuentran privadas de libertad en las prisiones santafesinas tienen entre 18 y 30 años, de acuerdo con las cifras oficiales. El 21,6 por ciento está acusado y condenado por homicidio, y el 14,9 por portación de armas. En esa franja de delitos entran, en la mayoría de los casos, los llamados “soldaditos” narcos, que enfrentan delitos del fuero provincial. Solo el 6 por ciento enfrenta causas federales. Es altísima la cantidad de presos imputados por asesinatos: hay 1555 personas que fueron detenidas por matar o intentar asesinar a alguien. Muchos de estos reclusos, que integran bandas criminales en Rosario, son considerados de alto perfil. Pero solo los líderes de las bandas o aquellos que tuvieron un rol protagónico son destinados a los pabellones que tienen ese rótulo: alto perfil, donde los controles —en teoría— son más rigurosos.

Los internos que forman parte de organizaciones criminales, como lo prueban decenas de causas judiciales, viven del negocio mafioso dentro de las cárceles. Su nexo con el "afuera" no solo son las visitas que reciben, sino también la comunicación permanente con celulares dentro de las cárceles. Esta característica tan elemental generó que el rubro de las extorsiones se extendiera dentro de los penales. La cárcel de Piñero es la mayor usina de estos emprendimientos mafiosos, pero también empezó a aparecer en el radar de los investigadores la Unidad Nº 1 de Coronda. Una semana de enero de 2023 esa prisión fue allanada por orden del fiscal Pablo Socca, porque un preso, que tenía cómplices en libertad, realizó más de una decena de extorsiones contra comerciantes pequeños y medianos de distintas partes de Rosario. Usaba el nombre de Los Monos para generar miedo, una especie de marca cuando alguien quiere irradiar temor para sacar plata.

"Con la mafia no se jode" y "Plata o plomo" son los mensajes mafiosos que se popularizaron a partir de 2018 entre los narcos y desde entonces se usan para sembrar miedo. Esas consignas y los disparos obligan a las víctimas a pagar sumas que varían de acuerdo con quiénes son los protagonistas. A Alicia, dueña de un almacén en la zona oeste, a inicios de 2023 le pidieron 250.000 pesos y terminó por pactar el pago de 50.000 pesos por semana. Abonó la extorsión una vez y después hizo la denuncia.

La mecánica que se usa más asiduamente es rústica y simple: un joven en moto dispara contra el frente de un negocio. El hecho genera terror, porque no se sabe quién está detrás. Los atacantes dejan una nota o escriben a la víctima al celular. Le dicen que debe pagar una suma de dinero, que si no lo hace va a morir su familia.

El dueño del supermercado Corazón, que está ubicado en la zona sur de Rosario, decidió publicitar en el canal de noticias Crónica TV a un grupo de música tropical que integra desde hace años. Para las contrataciones aparecía sobre un fondo rojo un número de celular.

Luego de que el anuncio comenzó a aparecer en la pantalla de TV le llegó un mensaje muy puntual: "No llames a la yuta, tenés que pagar o si no te zarpamos la familia". Le exigían una suma en dólares en una carta que le dejaron en el negocio. En el papel figuraba un número de celular al que tenía que contactar para coordinar el pago. El dueño del

supermercado Corazón decidió romper el papel.

Esa misma tarde, cerca de las 16.30, recibió la respuesta en su casa que fue baleada. Tres tiros en la pared y en una ventana le advertían que el tema iba en serio. Dos días después apareció una nueva nota en el supermercado. Decía: “Gordo Corazón pagá o te zarpamo la familia. Comunicate solo por wsp”. A la par de los mensajes en papel le llegaban a su celular nuevas amenazas y también se produjo un nuevo ataque a balazos a la casa. El comerciante hizo la denuncia en la fiscalía de Rosario, donde el caso lo tomó el fiscal Federico Rébola.

Se realizó una entrega controlada con efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en pleno centro de la ciudad, donde se usaron 12.000 dólares falsos. Un joven en moto recolectó el paquete con el dinero falso y logró huir de la policía. Los narcos continuaron con las amenazas, y además se dieron cuenta de la maniobra de la entrega controlada porque el dinero era falso.

Al otro día, el hijo del dueño del supermercado comenzó a ser el destinatario de los mensajes intimidatorios. “Tu mamá me jugó sucio. Donde salgan de la casa te la voy a matar, y decile a tu papá también. Jugaron sucio. La policía no la va a cuidar toda su vida. Mejor que paguen porque vamos a seguir insistiendo”, decía el mensaje. Unos minutos después de que llegara esa nueva amenaza impactaron ocho disparos en el frente del supermercado.

Uno de los supuestos autores de la extorsión Brian M., de 25 años, fue detenido por otro hecho intimidatorio y en el allanamiento en su casa donde se secuestró su celular apareció una evidencia clave. Le había mandado una foto del frente del supermercado a su novia y le había escrito que había disparos ahí “por bronca”. Luego, fue detenido Juan Cruz T., de 20 años, quien había sido identificado en la entrega controlada.

Un informe elaborado por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) advirtió que dentro de las unidades penitenciarias las altas jerarquías de las organizaciones narco continúan, a través del uso de celulares compartidos y los teléfonos públicos, con el tráfico de estupefacientes y también ordenando crímenes. Uno de los focos del informe está puesto en los grupos narco santafesinos, como Los Monos, Funes y Ungaro, pero también de otras organizaciones que tienen base

territorial en otras provincias, como Corrientes, Salta y el conurbano bonaerense.

La cárcel de Marcos Paz cobijaba hacia 2023 a una verdadera selección de narcos del país. Allí están alojados Guille Cantero, de Los Monos; Marco Estrada Gonzáles, jefe de la villa 1-11-14; Néstor Rojas, capo narco del Primer Comando de Frontera, y Carlos Bareiro, cabecilla de la banda que manejaba el ingreso de la marihuana al país desde Itatí, Corrientes.

El 27 de junio de 2020, tras la fuga y ataque al penal de Piñero, ubicado a 20 kilómetros de Rosario, comenzaron a ser trasladados a los penales federales de Ezeiza y Marcos Paz a otros jefes de grupos violentos santafesinos, alojados hasta ese momento en Piñero, como Esteban Alvarado, René Ungaro, los hermanos Funes y el peruano Julio Rodríguez Granthon, que está acusado de participar de la ejecución del exconcejal Eduardo Trasante, entre otros.

La situación es delicada e inédita en la Argentina, un país que no había tenido problemas profundos con el crimen organizado si se lo compara con otros países de la región, como Brasil y Paraguay. El informe de Procunar pone en evidencia este problema y abre líneas de trabajo para que los fiscales se ocupen de investigar este nuevo escenario. Cuando el problema había asomado en Santa Fe desde hace casi una década nadie le dio relevancia desde Buenos Aires. Ahora, que los presos santafesinos fueron enviados a Marcos Paz las autoridades reaccionan sobre este fenómeno criminal.

El texto revela que agentes del Servicio Penitenciario facilitan o permiten el ingreso de dispositivos de telefonía celular a las cárceles. A veces son organizaciones integradas por sus custodios. Fue el de Néstor Rojas, un compañero de Cantero en el pabellón de Marcos Paz. Era un recluso misionero, que había intentado comprar un misil dentro de la cárcel e intentó asesinar a dos magistrados de esa provincia con sicarios brasileños. Rojas usaba como método para comunicarse una triangulación que hacía con su pareja, que no estaba detenida. La llamaba con un celular a su esposa y ella con otro teléfono se contactaba con los clientes de Rojas. De esa manera, hablaba con sus socios sin contactarse con ellos de manera directa, con lo que evitaba que las autoridades judiciales que lo escuchaban pudieran captar su

voz. Luego de ser compañero de Rojas, Guille Cantero copió su método.

Motorizada por la violencia epidémica que vive Rosario, las cárceles de Santa Fe sufrieron una brutal metamorfosis. Al dejar en abril de 2023 su cargo de fiscal general de la provincia Jorge Baclini, un rosarino que había sido juez penal previamente, consignó preocupado que las cárceles eran un problema que lejos de contener la violencia la reproducía. “En 2014 arrancó en la provincia el nuevo sistema penal con 4560 presos. Actualmente son más de 10.000. La población se duplicó. Hay que preguntarse cuántos presos estamos dispuestos a tener, porque estamos excediendo la capacidad de mantenerlos”. La saliente defensora general de la provincia, Jaquelina Balangione, se retiró el mismo día con una consideración idéntica. “La tasa de encarcelamiento desde 2012 se duplicó. Y desde 2017 aumenta 25 puntos en promedio por año. También se incrementó la violencia institucional”.

Una paradoja indetenible e irresoluble. Se llenan las cárceles a la vez que la violencia exterior se dispara.

25
EL NEGOCIO DE LA PROTECCIÓN

Dos jóvenes se presentan en una casa de cambio de Entre Ríos y Córdoba, a metros de un mar de gente caminando por la peatonal, pleno centro rosarino. Le dicen a su propietario, Pablo Fortuny, que están allí a pedido de Guille Cantero, líder de Los Monos, y que tiene que pagar 5000 dólares por mes. "¿En concepto de qué?", pregunta el financista. "En concepto de que no te baleamos todo el frente y no puedas laburar más".

Al mes Fortuny y su familia suben a un avión hacia Punta del Este con la idea de radicarse allá. Un mes antes le habían robado siete millones de pesos al salir del country Kentucky donde tiene su casa. Es enero de 2021. Acaban de acribillar el casino de Rosario en un ataque extorsivo. En el atentado matan a un apostador que es un gerente de un banco. La investigación empieza y descubre a los dos meses una madeja de actores y un método. Es el negocio de la protección. El dominio de acción es la ciudad entera. Se abre una caja de pandora que parece no tener límites.

Hacia 2015 surge con una vitalidad arrasadora las formas de una criminalidad que es desconocida en su desmesura y en su escala. Sus ejecutores portan las antorchas que van a incendiar la ciudad. Lo que ofrecen no es una cobertura contra terceros sino una mediación con ellos mismos. Si no reciben lo que piden llenarán todo de plomo.

La venta de protección extorsiva se convirtió en una industria próspera en Rosario. Es una dinámica criminal relativamente nueva que en muchos casos viene de grupos que se dedicaron al narcomenudeo y que ahora entienden que para este servicio no necesitan adquirir ninguna materia prima como prenda de transacción. Solamente se requiere de la intimidación y la promesa de aplicación de violencia. Casi siempre dicen venir de grupos con fama bien ganada de

violentos para convencer de la conveniencia de pagar.

En un principio los apretados para pagar solían ser personas con motivos para no hacer la denuncia. Dueños de concesionarias de vehículos que vendían a personas fuera de la ley sin respetar siempre los trámites registrales de las compraventas, sindicalistas con negocios espurios, vendedores de cereal en el mercado negro, financistas que hacen transacciones en mesas de dinero y capitalistas de juego clandestino como Leonardo Andrés Peiti, este sí extorsionado por Los Monos. Pero el abanico se amplió luego hacia gente que no tiene que temer por nada irregular aunque sí que le revienten a tiros el frente de sus negocios.

El ataque a balazos al casino le sacó el candado a lo que ya era evidente. Dos días antes de los tiros dos individuos habían sido detenidos con armas en un operativo de Gendarmería. A partir de la apertura del teléfono de un delincuente ligado a Los Monos, Cachete Díaz, los investigadores supieron que este le pidió a una persona que moviera contactos para lograr la liberación de esos dos hombres.

El que recibió ese pedido era dueño de un nombre que a los pocos meses se instalaría durante dos años a diario en toda la prensa. Leonardo Peiti, con reiteradas causas por controlar empresas de juego ilegal y buscado al inicio sin éxito en varios allanamientos.

Peiti recibió el pedido de Cachete. Primero se contactó con el comisario retirado Alejandro Torrisi quien le dijo que no podía hacer nada porque el operativo era de Gendarmería y ya estaba judicializado. Frente a eso Peiti marcó un número del Centro de Justicia Penal.

El aparato sonó en una fiscalía. Peiti le pasó al que atendió el nombre del que había quedado detenido, Hernán Horacio Quinteros, para que intercediera en su favor. Desde adentro de la fiscalía, el consultado respondió con información fina: dijo que Quintero se había comido un encubrimiento por circular en un auto robado al ser detenido y que tenía un arma calibre 9 milímetros por lo que le imputaron portación de arma de guerra. También agregó algo significativo como para señalar que poco se podía hacer para beneficiar al detenido. “No tengo la causa yo”. No obstante dejó ver que haría una última gestión. Agregó por último que al no tener

antecedentes al imputado en un mes podrían darle la libertad. Peiti recibió el mensaje de su contacto de la fiscalía y se lo reenvió a Cachete Díaz para que al grupo de apretadores le quedara claro no solo que había efectuado la consulta, sino que se la habían respondido.

Dos años antes dos funcionarios de la misma fiscalía descubrieron en otra causa, mientras investigaban al narco Esteban Alvarado, que tres policías que se desempeñaban con ellos en la misma oficina estaban colaborando con Alvarado para desviar la investigación en su contra o ayudarlo con datos. La nueva modalidad tenía de parecido que una vez más un grupo delictivo buscaba ayuda en una fiscalía. Pero la diferencia es que la contribución ahora provenía de personal civil y no uniformado.

A los pocos meses se supo que el que había atendido la consulta de Peiti era Nelson Ugolini, empleado muy atento al campo de la rosca judicial y política. El descubrimiento llegaría a lo más alto. Le costaría el cargo al fiscal regional de Rosario por corrupción.

Pero en esta etapa apenas se estaba averiguando quién había atacado el casino. Y lo que se desnudó, lateralmente, fue la existencia de una compleja estructura dedicada a extorsiones de parte de una organización criminal que hostigaba a personas que operan al filo de la ley y que por esa razón quedaban imposibilitados de denunciar los aprietes. Los chantajes también comenzaron a recaer sobre personas con negocios lícitos como el dueño de aquella financiera y el de un bar. La actividad de los chantajistas llevó a descubrir una treintena de casinos clandestinos en la zona de Rosario y su área metropolitana, cuyos responsables pagaban de manera regular para evitar represalias.

Uno de los responsables de los locales de juego es Leo Peiti. En conexión con él estaba el comisario retirado Torrisi, que había sido jefe departamental en Villa Constitución y jerárquico en la Jefatura de Rosario, donde tras jubilarse mantiene influencias. Al jefe policial lo detuvieron cuando salía con 150.000 pesos de un casino ilegal en Villa Gobernador Gálvez. Allí había nueve computadoras con un software de juegos de azar a cambio de dinero. Según lo obtenido del celular de Cachete Díaz, a Torrisi le reportaban las ganancias de los casinos. El comisario negociaba con la policía en funciones la autorización para abrir garitos de juego de azar. Y era cobrador del dinero de diferentes

casas de juego negro.

Hubo una audiencia penal en la que terminaron todos juntos: Peiti, Torrisi, Cachete. Ahí se explicó la trama. Fue acusado como eslabón violento del grupo Otniel Almonte de León, un dominicano de 32 años que había asesinado al policía Cristian Ezequiel Ibarra por un asunto de drogas y era sicario de Los Monos. También imputaron a Flavia Broin, pareja de Cachete Díaz, a quien le atribuyeron ser encargada de cobrar el dinero de las extorsiones.

Los fiscales señalaron que al investigar las tramas extorsivas, en la que está inserto el atentado al casino City Center, aparecía orquestando acciones Ariel Máximo “Guille” Cantero.

Se revelaron todas las extorsiones. Los fiscales consignaron que en abril de 2019 una persona no identificada se presentó en un bar de San Martín al 1600 y le dijo a su dueño que era de la banda de Los Monos. Le indicó que si querían seguir funcionando tenían que pagarles, que ya habían tiroteado otro bar y que si no recibían dinero pasaría algo peor. A partir de allí se hicieron encuentros del comerciante con Cachete Díaz.

Después vino la visita al financista Pablo Fortuny. Tras una reunión en un bar de Mendoza y Río de Janeiro, en el barrio Echesortu, Cachete le dijo al cambista que empezara a pagar. Le dijo que ellos sabían dónde vivía, que iban a matar a toda su familia y mencionaron el nombre del colegio de sus hijos. Fortuny se fue del país a los treinta días.

Rodrigo Ortigala, amigo de Peiti que fue testigo principal contra Esteban Alvarado, también quedó enredado. Según los fiscales tenía conocimiento de la maniobra que se estaba ejecutando contra el financista, se comunicó con Cachete Díaz y acordó con él una investigación patrimonial de la víctima, los términos en que debía ser proferida la amenaza y los montos de dinero a exigirle.

El 30 de agosto de 2019 una asamblea en el Sindicato de Peones de Taxis de Rosario reemplazó de la conducción al histórico secretario general Horacio Boix por administración fraudulenta. A partir de esa fecha Boix les encargó a dos personas que estaban encarceladas una secuencia de actos violentos para amedrentar a las autoridades del gremio que lo habían corrido. Las extorsiones se extendieron tres

meses. A los choferes chantajeados les exigían efectivo para no atentar contra ellos o sus familiares. Hablaban en nombre de Los Monos.

Los que organizaron las extorsiones, dijeron los fiscales, fueron Guille Cantero y Damián "Toro" Escobar. Ambos, que en ese momento estaban presos, fueron contactados por teléfono por Boix, a fin de que apretaran a los nuevos directivos del sindicato. Las acciones implicaron ataques a tiros contra dirigentes que lo habían removido. Boix había hecho relación con los apretadores porque estos antes lo apretaban a él.

Esa misma operación se ejecutó con varios sindicatos. Se canjeaba paz social por una contribución mensual. Mientras tanto, las sedes de los portuarios, los mercantiles, y los gastronómicos fueron baleadas. En 2018 un colaborador de la fiscalía en la causa de Los Monos contó que Guille Cantero evaluaba pedir dinero al sindicato de choferes. Se concibió una primera cita con la conducción gremial de los choferes para ponerlos al tanto. Y si se ponían reticentes habría una fórmula infalible. "Le tiramos el cuerpo de un colectivero en la calle y vienen a negociar solos". El fiscal le preguntó al testigo si podía declarar eso. "¿Usted me paga el cajón?", le respondió.

La propiedad de una empresa de protección no es fácil de definir pero requiere de ciertos recursos como una red de inteligencia y medios para imponer violencia. No se precisa de gran capital. "Un despacho en la parte posterior de un club, armas, herramientas de vigilancia y unos cuantos escondites suelen bastar como componentes básicos del establecimiento mafioso", dice el sociólogo Diego Gambetta, en *La mafia siciliana*, sobre este tipo de accionar, el más distintivo. Pero para ser dueño de una empresa de protección hace falta tener un nombre. La reputación de ese nombre se conquista en el trabajo. ¿De qué modo se gana esa fama? Siendo inexorable en la aplicación de violencia.

En su breve y agitada vida en Palermo, Stefano Bontate desempeñó muchas veces, como mafioso siciliano, el papel de garante de la no violencia. Un hombre que vivía en su distrito se quejó de que le habían vendido en una agencia de autos usados un vehículo descompuesto. Bontade intervino, le dijo a su vecino que fuera a ver al comerciante y le pidiera una solución al tema. El agenciero se fastidió al ver venir al

cliente. Pero esta vez le sustituyó el auto sin vacilar. Fue cuando el comprador le dijo que venía de parte de Bontate.

La mafia siciliana es capaz de acciones de crueldad impactante. Pero estas o las que llegan al cine son una minoría. La presencia de la mafia es cotidiana en acciones constantes por su regularidad pero que excluyen la violencia. Básicamente la prestación de la mafia es la de resolución de conflictos como una especie de árbitro paraestatal. Si alguien tiene un problema y paga por protección la mafia interviene para resolver ese problema. Cuando obliga a alguien a devolver algo, como le pasó al dueño de la agencia de autos, a ese alguien también le conviene hacerlo. Exponerse a la mafia sería más costoso. Sería más violento.

La esencia de los servicios de protección para los mafiosos es la resolución de conflictos. Dice Paul Violi, un mafioso siciliano, grabado en secreto por la policía canadiense: "Nuestra vida consiste siempre en alentar la razón, arreglar las cosas para alguien. Cuando una persona entra en conflicto con otras y no sabe dónde dirigirse se acerca a ti porque puedes resolver las cosas de alguna manera". Como Stefano Bontate. El conocimiento de que este hombre era capaz de alguna barbaridad hizo que no fuera preciso hacer barbaridades para que el agenciero cambiara un vehículo. Agrega Gambetta: "Estos no son empresarios violentos. Son empresarios de la violencia".

No es que la mafia no sea capaz de atentados tremendos o de incrementar homicidios. En los 90 mataron a los fiscales antimafia Giovanni Falcone y Paolo Borsellino en Sicilia. Siguen matando. Pero en el día a día, dice Gambetta, los hombres de honor reciben dinero de una sociedad que sigue encontrando en ellos, también, la chance de que la sangre no llegue al río. No es nada grato. Sus clientes son sectores profesionales y vecinos que pagan por protección. Nos enteramos de que existe la mafia cuando hay derramamiento de sangre. Pero la parte más común y menos visible de la mafia, afirma Gambetta, es la disuasión. Lo que posibilita justamente que no haya sangre.

El fenómeno mafioso se está afianzando en Rosario. Pero en contraste con el de la auténtica mafia es un fenómeno más fragmentado, chapucero, fuera de quicio y sin retribución. Pequeños

grupos salen a lo loco a buscar las ventajas que da la promoción de un estado de violencia incontenible. Solamente se valen de un teléfono y avanzan sobre el que tenga un comercio. Las hace cualquiera, contra cualquiera, en cualquier zona, en base al terror de la violencia.

En una ciudad con 300 homicidios al año y con eventos que amedrentan como las balaceras con blancos colectivos, asesinatos con víctimas erradas por la vehemencia indiscriminada de tiradores, la evidencia de comercios o viviendas acribilladas, la sacudida de un restaurante baleado con cien clientes adentro conforman un acervo de memoria que produce un efecto disciplinario. Eso predispone al pago de los extorsionadores: todo lo que se anuncia puede pasar porque está pasando.

La mira ya no apunta a personas con solvente capacidad de pago sino a trabajadores muy modestos. Como los dueños de un almacén suburbano de Pueyrredón al 6100 al que le pidieron 50.000 pesos semanales a inicios de 2022. Pero también al propietario de El Establo, parrilla baleada en 2021, al que le exigieron un año después 400.000 pesos para no hacer lo mismo.

La espiral extorsiva en Rosario deriva de cuentapropistas del delito que arman sus ensayos sin ninguna regulación entre ellos. La avidez insaciable por dinero no reconoce ninguna estructura de contención. La mafia siciliana sabe que no puede pedir cualquier cosa todo el tiempo porque la voracidad conspira contra un rasgo que toda organización necesita: ser perdurable. Que no hay sobrevida si lo único que ofrece es balazos a cambio de dinero. En Rosario es solo eso.

La forma en que está operando esta delincuencia produce un colapso institucional, dice el fiscal Pablo Socca de la Unidad de Balaceras, porque no se ve capacidad de respuesta a la avalancha de eventos. “El colapso está en todos los estamentos: fiscalía, policía, Ministerio de Seguridad. Hay denuncias que entran todos los días de comerciantes extorsionados bajo la amenaza de que si no pagan los balean. Y de que si denuncian los balean. No estamos en condiciones siquiera de procesar lo que está pasando. No se pueden hacer guardias controladas ante la cantidad de hechos. Si ponemos custodia policial en los lugares bajo amenaza nos quedamos sin móviles para patrullar”, explicaba en enero de 2023.

La constante, dice Socca, es comprobar que estas acciones vienen de la cárcel. “Lo vemos en las investigaciones. No hay control. Las mismas bandas que venden drogas suman con esto un rubro más a su actividad ilícita. Tienen los recursos materiales y humanos para hacerlo. Lo único que necesitan para la extorsión es alguien que haga una llamada, deje un cartel y luego una moto desde la cual balear un objetivo”.

El plan en Rosario, leen en las fiscalías, es extorsionar a muchos, balear a uno y que el miedo general active en una mayoría los pagos requeridos. El problema es para todos. Pero el dueño de una despensa o de una verdulería de barrio no dispone de la influencia, o de la visibilidad, de una fábrica mayorista de chapas que recibe chantajes. Aquellos no tienen custodia, capacidad de poner un abogado o de pedir vigilancia. El efecto es fuerte. El contrato social, que supone reconocimiento de la autoridad pública, se resquebraja.

No hay campo de la actividad económica que esté libre del azote. En agosto de 2023 el Cirque du Soleil llegó a Rosario. Los mafiosos contactaron al productor del espectáculo que estaba inspirado en la vida de Lionel Messi. Un teléfono interceptado permitió descubrir que al productor le habían pedido 100.000 dólares para que las nueve funciones pautadas se desarrollaran sin contratiempos. No hubo respuesta. Hubo balas. El sábado 20 de agosto dos tiradores abrieron fuego contra la sede del miniestadio del Club Provincial. Casi nadie se enteró. Sí los productores que además encontraron en el interior de las instalaciones donde actuaba la prestigiosa compañía canadiense un sobre con dos proyectiles.

La detención del organizador de los cobros puso en evidencia que este no era un fenómeno esporádico sino una aceitada rutina a la que los productores estaban tristemente habituados. Si no denunciaban lo ocurrido fue porque la sola idea de no pagar desataba la ruina del negocio sin considerar impensables catástrofes con el público. El crimen del apostador del casino ocurrido tres años antes era suficientemente aleccionador. Así que los organizadores en Rosario comenzaron a tomar los aprietes de la mafia como eso que los economistas llaman un coeficiente técnico de producción. Un valor a incorporar al precio final del acceso al show.

El detenido por el ataque al Cirque du Soleil se llama Milton Larrosa. Lo llevaron a audiencia imputativa con tal sigilo que nadie de la prensa reflejó el hecho. En su teléfono quedó claro que estas extorsiones constituían una rutina de producción semejante a las fábricas fordistas. Una captura de pantalla del celular del detenido contenía los espectáculos en Rosario de agosto a diciembre, para tener así en cuenta las visitas a los organizadores y las cobranzas. Empezaban con un show de la Bersuit el 12 de agosto, seguía con Las Pelotas, Babasónicos, Jorge Drexler, Eruca Sativa. Terminaba hacia fin de año con los shows programados de Divididos y, todo muy rosarino, Fito Páez.

26
TRIBUNAS BLANCAS

Esperaron el momento preciso. El tiempo era clave, porque había que extremar la sincronización de una tribuna repleta de hinchas. No es nada sencillo, salvo cuando hay autoridad. Y en la grada sur del Coloso la había. El objetivo era que la bandera de Los Monos, que medía 40 metros, se desplegara después de que los jugadores de la selección nacional, encabezados por Lionel Messi, y las glorias deportivas de Newell's, el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Ricardo "Chiqui" Tapia, posaran para los fotógrafos. Primero se extendió en la tribuna una bandera rojo y negra con la sigla R11, en honor al homenajeado: Maxi Rodríguez. Mientras la tela gigante se enrollaba comenzó a desdoblarse otra que tenía tres dibujos alegóricos: un mono con lentes, un pollo y un toro. Había también un mensaje: "Nosotros estamos más allá de todos".

Los canales de TV de todo el mundo mostraron la insignia gigantesca de la más conocida banda criminal del país, con la cara caricaturizada de Guille Cantero, que a esa hora estaba encerrado en su celda en el penal de Marcos Paz. No pudo ver en directo esa demostración de poder que desde hacía tiempo pretendían concebir, sino después en unos videos que le mandaron a su celular. "Se cagaba de risa", contó una mujer que lo visita con frecuencia. Nadie se había animado en la Argentina a tener ese grado de exposición manifiesta de manera intencional. Guille Cantero se reía de todos. Se burlaba. Lo hacía también con uno de los jugadores más famosos del mundo en la cancha.

"Nosotros estamos más allá de todos", el texto de la bandera fue pensado por él. Ese mono con lentes, que medía el doble de las otras dos caricaturas, la de sus socios Leonardo "Pollo" Vinardi y Carlos "Toro" Escobar, estaba por encima de todo. Quería demostrar que

podía hacer lo que quisiera, porque no tenía nada que perder. Sabía que iba a estar toda su vida en la cárcel, y que el afuera de alguna manera le pertenecía, como si fuera el histriónico Joker.

La barra de Newell's era el imperio de Guille Cantero desde hacía más de una década. Era un negocio más, como si formara parte de una paleta de inversiones. El amor por el club no existía en lo más mínimo. Ni una gota de pasión intercedía en la administración de las tribunas. La gerencia de la barra era a su manera, con unas cuotas de caos y muerte, como todos los negocios que emprendía. Guille usaba una habilidad que ni siquiera se daba cuenta de que tenía. Dejaba que reinara el caos por debajo para sacar provecho, de los conflictos en los que se enredaba su gente, que como Guille, estaba presa.

Ese manejo era opuesto a lo que el jefe de una barrabrava pretende, pero Cantero era así, un innovador. Durante una década y media la barra había estado en manos de Roberto "Pimpi" Camino, un hombre que gobernaba las tribunas de Newell's con habilidad, sin que aparecieran grietas en la conducción de la barra, que fue clave para sostener durante catorce años la presidencia de Eduardo José López hasta diciembre de 2008. La caída de este dirigente y dueño de medios, fallecido en 2018, que tenía aceitadas influencias políticas y judiciales, arrastró también la de Pimpi Camino, que en enero de 2009 intentó tomar el club para destruir, en medio de la transición, la documentación que podría comprometer a López, que tenía una ventaja: la causa judicial por administración fraudulenta la investigaba la entonces jueza Alejandra Rodenas —vicegobernadora entre 2019 y 2023—, que sería íntima amiga del expresidente de Newell's. Por eso, en 2009 la Cámara de Apelación en lo Penal la separó de la causa por supuesta parcialidad. En el diario *El Ciudadano*, cuyo dueño fue López, había dos temas que no se podían tocar. Estaba prohibido nombrar a Rafael Bielsa y a toda su familia, que incluía sus hermanos María Eugenia y Marcelo, y tampoco se podía cuestionar a Rodenas, "una amiga de la casa", como decía López.

Después de intentar tomar el club, con dos colectivos cargados de hinchas que portaban palos y fierros, Pimpi Camino se fugó y estuvo prófugo durante dos meses y medio. Uno de los policías que lo persiguió y también detuvo a su hijo Jonatan, conocido como Chamí,

por el crimen de un joven en barrio Municipal, fue el oficial Juan José Raffo, que pertenecía a la banda de Los Monos. Raffo debía desplazar al líder de la barra para que los Cantero empezaran a tener el control de los paravalanchas. En ese tiempo, el clan Cantero no era ni una sombra de lo que creció una década después.

Pimpi Camino había contratado a Los Monos para recuperar la barra, que estaba en manos de Diego “Panadero” Ochoa. El acuerdo con los Cantero no podría derivar en nada armonioso y pacífico, que no incluyera pólvora. En febrero de 2010, Los Monos llevan adelante una emboscada a los colectivos de la barra que retornaban de Buenos Aires, donde Newell’s había jugado con Huracán. A la madrugada se camuflaron al costado de la ruta, armados con armas pesadas, y cuando pasaron los colectivos dispararon a mansalva. En el ataque no murió Ochoa, sino Walter Cáceres, un chico de 14 años, cuyo crimen llevó por primera vez a los Cantero a los tribunales, donde obtuvieron buenos resultados de la defensa del penalista Carlos Varela. El tribunal, integrado por los jueces José Luis Mascali, Edgardo Fertitta y Julio César García, absolvió a Carlos “Chino” Fleitas, Claudio “Pájaro” Cantero, César Raúl Marchetti y Mariano Salomón. Las pruebas no alcanzaron para culparlos.

Los Monos aprovecharon la sangre y el caos que empezó a reinar en las tribunas leprosas. La banda siempre había tenido un pie en la hinchada con un hombre que infundía respeto, como Daniel “Teto” Vázquez, cercano a Pájaro Cantero y su hermanastro Ramón Machuca. Las muertes aceleran los cambios, un rasgo que se repetirá por más de una década y media en las tribunas leprosas.

Pimpi Camino fue asesinado el 19 de marzo de 2010, en la puerta del bar Ezeiza. Fue un crimen por encargo, que quedó en manos de un pesado de barrio La Tablada, René Ungaro. El que pagó por la cabeza de Camino fue Panadero Ochoa, a quien Pimpi había querido asesinar meses antes en la autopista Rosario-Buenos Aires. También por la de Maximiliano “Quemadito” Rodríguez, a quien le vuelan el cráneo en avenida Pellegrini y Corrientes, delante de su novia. Este último había protagonizado en septiembre de 2010 un intento de golpe de estado en la tribuna que se conoció como “entangada”. Este muchacho, junto con Matías Pera, un patovica rubio, cuyo cuerpo musculoso está

tapizado de tatuajes, molieron a trompadas al jefe de la barra en la propia tribuna leprosa. Fue el fin de Panadero, detenido tres años después por la venganza contra Pimpi y Quemadito.

Desde ese momento la muerte y la violencia fueron una dinámica furiosa. Guille Cantero empezó a dominar a través de sus delegados las tribunas de Newell's, pero con el estilo y los métodos que aplicaba en su negocio narco. Las lealtades se rompían a cada momento y la desconfianza coloreaba las relaciones. Por eso cambiaban los nombres y los ataúdes. Como había escrito en la bandera que desplegaron en junio de 2023 durante la despedida de Maxi Rodríguez, Guille Cantero estaba por encima de todos. Desde la cárcel de Marcos Paz, designaba a los lugartenientes en la barra sin casarse con nadie. Los dejaba andar y al que no rendía le armaba una línea paralela para que lo desplazara y creaba otra línea de recaudación. Con esa forma de gerenciar logró algo casi imposible en el mundo del fútbol: que se rompiera la verticalidad dentro una barrabrava. En realidad, los hombres que Guille ponía al frente de esa terminal provenían del negocio de la venta de drogas, por lo que el manejo de la hinchada tenía las mismas pautas mafiosas que el narcomenudeo, y sobre todo una violencia incesante que perturbaba todo.

Guillermo Sosa, conocido en el ambiente narco como Ojito o Chupa, uno de los referentes de Los Monos en la barra de Newell's, fue detenido por ejecutar a otro rival dentro de la hinchada: Nelson Saravia, un personaje de peso, que había liderado la barra de Newell's cuando cayó Panadero. Chivo, como lo apodaban, fue baleado en 2016 y en agosto de 2022 su casa fue blanco de un ataque a tiros, pero un mes después las balas acabaron con su vida dentro de su casa en el barrio Alvear.

La llegada de Los Monos a Newell's dejó solo sangre y más dinero: en 2016 cinco crímenes se gestaron en torno al liderazgo de la tribuna. Ese año, Cristian D'Amico, exvice de Newell's, fue baleado cuando iba en su camioneta junto a su hijo de 10 años. Le dispararon más de una decena de balas pero ninguna hirió a él ni al niño.

Otro dirigente del club, Claudio "Tiki" Martínez, había sufrido dos ataques a balazos en su departamento del centro de Rosario. Martínez, que había sido vicepresidente, se alejó de la conducción política de

Newell's.

Cinco años después, cuando se presentó como candidato a presidente, D'Amico volvió a quedar cerca de las balas. Esta vez los disparos fueron contra su casa. En la investigación se detectó que ese ataque estuvo organizado por un hombre que tiene un extenso historial delictivo: Brian Sprío, alias Pescadito, un hombre con un prontuario abultado que es cercano a Guillermo Sosa.

Pescadito fue condenado a 28 años de prisión por haber participado en el triple crimen de Villa Moreno, una masacre contra un grupo de chicos ajenos al mundo del narcotráfico que se produjo el 1º de enero de 2012. En agosto de 2015, dos años después de ser sentenciado, Sprío salió en libertad tras ser absuelto por el beneficio de la duda. En ese momento, según señalaron fuentes policiales, comenzó a hacer pie en la barra de Newell's.

En medio de las elecciones en Newell's en 2021, Pescadito se alió a Sosa y siguió manteniendo contacto fluido con Guille Cantero, quien también daba órdenes a otros integrantes de este sector que están presos en la cárcel de Piñero, como Daniel Delgado, alias Teletubi, fue condenado junto a Cantero por haber organizado los ataques a residencias de jueces y edificios judiciales en 2018.

También está preso otro que comulga con esta facción, Leandro Vinardi, conocido como Pollo, sentenciado a 13 años por otro asesinato narco. Estar en la cárcel no impide a esos convictos de tramar crímenes y atentados. Las celdas son oficinas del crimen.

A este sector, la conducción de la barra le sirve como una suerte de marca. Ellos dominan las extorsiones en el centro de Rosario, donde todos los viernes recorren cuevas financieras de la city rosarina para cobrar un "impuesto" paralelo a la venta de dólar blue, a la vieja usanza de la mafia napolitana.

Después del receso por la pandemia, se apartó del primer plano de la barra de Newell's uno de los testaferros del líder de Los Monos: Aldo Sosa, conocido como Gatito Chemea, un empleado de planta permanente de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe. La otra facción, liderada por Sprío y Ojito, hizo pintadas en el centro de Rosario en las que se ligaba a Sosa con el vicepresidente D'Amico. "No a la presidencia narco-Chemea", decían los grafitis.

Según el expediente que tramitó el juez federal Marcelo Bailaque, Sosa aparece en los registros como propietario del 90 por ciento de un BMW 120D que usaba Cantero cuando estaba en libertad. Con el mismo porcentaje posee una embarcación, *La Venenosa*, que fue adquirida por el mandamás de Los Monos. Y figura como accionista del barco *El Pajarito* —nombre en honor a Claudio Cantero— que ambos habrían comprado en 2012, entre otros vehículos.

Cuando la policía allanó su casa en 2015 encontró, según declaró Sosa el 25 de abril de 2019, "alrededor de 200 y pico de boletos de compraventa de automotores". "Esos son todos los vehículos que yo fui comprando y vendiendo. Yo tengo trabajo, soy empleado de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe con una antigüedad de 28 años y tengo un sueldo de 75.000 pesos mensuales, más aguinaldo, más créditos del Banco de Santa Fe que he sacado; con eso justifico las operaciones", afirmó. El juez le creyó.

El fútbol es escenografía de un negocio que se nutre del combustible de la pasión, con un ejército incondicional en el que se trastornan los roles de pibes dispuestos a matar por los colores, que terminan por alimentar a las mafias organizadas en torno a la venta de droga. Así lo entendió el fiscal Sebastián Narvaja, que abrió una investigación desafiante para bucear en este entretejido bajo la amplia figura de asociación ilícita.

Las barras de Rosario Central y Newell's se enredan para rediscutir los liderazgos, que siembran interrogantes y aportan sorpresas: ¿puede el jefe de la barra canalla manejar o tener influencia a través de terceros en la hinchada leprosa? El negocio narco decolora las pasiones. Y las fuentes coinciden en que con la venia de Los Monos, Andrés "Pillín" Bracamonte no solo ejerce desde hace casi dos décadas la hegemonía de la barra canalla sino que gerencia la "contraria", la rival, como es la de Newell's.

Esa es una hipótesis que comparten en el Ministerio de Seguridad, en la justicia y también policías que conocen el paño por dentro y por fuera. Una vieja foto del cumpleaños de 15 de Mariana Cantero, hermana menor del clan, que figura en el expediente 913/12, ilustra como una especie de prólogo lo que vino después. En el salón Posta 36, sobre las barrancas del Paraná, posaron para el fotógrafo sentados

en la misma mesa Pillín, Mariano Ruiz, considerado uno de los lavadores de dinero de los Cantero; Mariano Salomón, lugarteniente de Ramón Machuca, alias Monchi; y Daniel "Teto" Vásquez, histórico barra leproso, que también está pegado al narcotráfico como uno de los proveedores de droga de los Monos, lo que investiga la Justicia Federal de Corrientes.

Esa instantánea de la mafia unida, en esa fiesta que Los Monos pagaron en 2012 con cajas de billetes ajados de 10 y 20 pesos que provenían de la recaudación de los búnkeres, se trasladó luego a ambas tribunas, donde se le rinde homenaje a los caídos, como a Claudio "Pájaro" Cantero en el Gigante de Arroyito, con una bandera que incluyó una frase épica: "Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros".

O un trapo enorme que colgó la barra de Newell's con el rostro pintado de Daiana Cantero, la hija de Pájaro, que falleció el 21 de septiembre de 2020 en un accidente cerca de Bahía Blanca, cuando iba a visitar a su tío Guille, detenido en el penal de Rawson.

A través de nuevos actores de la banda, los Cantero propiciaban crímenes y aprietes para copar el paravalanchas de Newell's, y desde allí recuperar poder y manejar un negocio de diversas economías ilícitas.

La influencia en el Gigante de Arroyito es a través de Bracamonte, con quien el grupo narcocriminal había tenido idas y vueltas, pero al que nunca dejó de verlo como un socio.

Pillín Bracamonte, el histórico barrabrava de Rosario Central, escuchó en junio de 2020 la peor noticia: iba a seguir preso, tras ser imputado de haber lavado dinero por más de 38.000.000 de pesos, a través de su exesposa y su hijo, que usaba de testaferros, y de cuatro empresas, que tenían una estrecha vinculación con Rosario Central, el club donde dominó las tribunas por más de veinte años. Cinco meses después quedó en libertad.

Ese beneficio parecía algo muy remoto el 8 de abril de ese año, cuando con la primera luz de la mañana, Pillín saltaba de la cama pensando que llegaban a matarlo. Hubo un fugaz intento de resistencia hasta que la cantidad de policías presentes le hizo desistir de cualquier brusquedad a la vez que pareció tranquilizarlo. El grupo de irrupción

estaba compuesto por diez hombres que en una requisa rápida encontraron pilas de billetes en una valija. “Llévense eso que está todo bien”, les dijo Bracamonte. “Nosotros no trabajamos así”, le respondió el responsable del operativo. Para saber cuánto había, los empleados de la Agencia de Investigación Criminal no necesitaron pedir una contadora de billetes. Pillín tenía una en su casa. Se contabilizaron 2.500.000 pesos y 1700 dólares. En el exterior de la vivienda, de casi 300 metros cuadrados cubiertos y rodeada de verde en el country Los Álamos, había estacionados tres vehículos de alta gama.

Tras dos jornadas de audiencias, la jueza Valeria Pedrana avaló días después la extensa imputación que hizo el fiscal Miguel Moreno, que pidió que Pillín siguiera con prisión preventiva ante la posibilidad de que pudiera amedrentar a los testigos de la causa. El abogado Carlos Varela, a cargo de la defensa del líder de la barra de Rosario Central, había lanzado duras críticas contra la investigación del fiscal, pero la jueza Pedrana terminó por convalidar la argumentación del fiscal, que puso a Bracamonte en la mira a partir de que su nombre fuera mencionado por uno de los sicarios que mató al policía narco Cristian Ibarra, ultimado por Ariel Cantero, alias Chanchón, uno de los hijos de Máximo, conocido como el Viejo.

La relación entre Pillín y Los Monos se afianzó desde que el primero empezó a capitanear la hinchada, tras desplazar a tiros y trompadas a Los Chaperos, que compartían el liderazgo en el Gigante de Arroyito. Estos antecedentes y la vinculación con la mafia de los taxis fue uno de las herramientas que usó el fiscal para dar contexto a su imputación.

Pillín pasó de vivir en un Fonavi a aquel caserón de más de 300 metros cuadrados donde fue allanado, propiedad que alquilaba al marido de su contadora. La investigación puso la lupa en que Bracamonte no podía justificar de dónde sacó el dinero para tener una vida de lujo, al residir en una mansión y tener una flota de autos de alta gama.

Según el fiscal, Bracamonte usó a su familia y a una red de empresas como testaferros para ocultar el dinero que provenía de hechos ilícitos, que no se desplegaron en la imputación. Dentro de su familia, su exesposa y su hijo eran las principales pantallas de sus bienes. Natalia

Salas, la exmujer de Bracamonte, estuvo sospechada de ser la principal prestanombre del barrabrava, con la que —según el fiscal Moreno— Pillín “consiguió desviar la atención respecto a un inexplicable y exponencial aumento patrimonial”.

Esta mujer adquirió entre mayo de 2012 y enero de 2013 tres departamentos en el edificio Altos de Alberdi, en la zona norte de Rosario. La exesposa de Bracamonte vive en otra casa de grandes dimensiones en ese barrio cercano al río Paraná. El primer inmueble lo adquirió por 46.400 dólares, según los registros oficiales, pero se sospecha que su precio real es mayor. Los otros dos los compró el 8 de agosto de 2012 y el 17 de enero de 2013, y pagó un total de 108.000 dólares.

Un día después de comprar el último departamento, Salas adquirió un BMW cero kilómetro. También compró otros autos, algunos de ellos para usar como taxi, según se sospecha en la investigación. Sumó una flota integrada por un Renault Logan, un Chevrolet Corsa, un Cobal y un BMW 125. Otros tres autos que figuran como taxis estuvieron a su nombre: un Chevrolet Prisma, un Corsa, una Meriva y un Renault Twingo.

A nombre de esta mujer estaban anotadas cuatro licencias de taxis, cuyo precio en el mercado es —según el fiscal— unos 80.000 dólares. El fiscal desplegó que otro de los posibles testaferros de Pillín sería su hijo Andrés Guillermo, cuyo único ingreso es un empleo que tuvo en la empresa Dragados y Obras Portuarias SA. El hijo de Pillín adquirió el 22 de agosto un Chevrolet Prisma, un Volkswagen Scirocco y un Chevrolet Classic que funciona como taxi.

El hijo de Bracamonte se presentó a la fiscalía para aducir que los 2,5 millones de pesos y 2800 dólares que se secuestraron en la casa de su padre del country provenían de sus ingresos por 489.000 pesos en concepto de ventas en el servicio de taxis. El análisis que hizo la unidad contable de la fiscalía advirtió que no existía correlato entre sus ingresos y sus bienes. El fiscal señaló que “Bracamonte hijo oficia de administrador de los bienes que en realidad fueron adquiridos por su padre”.

El otro punto de sospecha sobre la operatoria de lavado pasa por la creación de cuatro empresas que sirven supuestamente para desfigurar

los ingresos de origen oscuro del jefe de la barrabrava. Una de esas empresas es Vanefra, que se constituyó el 20 de abril de 2017. Pillín tiene como socio en esta firma a Fernando Rigiracciolo, en una compañía que se dedica a servicios de limpieza y al alquiler de baños químicos. Lo llamativo, según desgranó el fiscal, es que Vanefra tiene a su nombre un BMW M2, valuado en 4.471.200 pesos, y una moto de agua Sea Doo, comprada en noviembre de 2019 por 836.000 pesos. Vehículos que nada tienen que ver con la actividad de alquiler de baños químicos.

En la residencia de Rigiracciolo, socio de Bracamonte, los efectivos de la Agencia Criminal de Investigación secuestraron dos camionetas Volkswagen Amarok, registradas a nombre de la empresa, por un valor de 2.250.000 pesos, y una Kawasaki 950 CC, valuada en 1.886.100 pesos.

La contadora de Bracamonte usó a la empresa Vanefra para justificar los ingresos del barrabrava, de 1.970.500 pesos entre abril de 2019 y marzo pasado. Pretendía explicar que los 2,5 millones de pesos secuestrados en la casa del country Los Álamos habían salido del alquiler de baños químicos. El fiscal sostuvo que “Vanefra es una pantalla utilizada por Bracamonte que pretende demostrar una actividad y un giro comercial que en la realidad no se advierte”. En el domicilio de la empresa, en avenida San Lorenzo 159 en Capitán Bermúdez funcionaba una concesionaria de autos que se llama Yannatuoni.

El 27 de junio de 2018 Bracamonte y Rigiracciolo adquirieron la empresa Ser-Eco SRL, cuyo objeto es también el de alquiler de baños químicos. En el domicilio de esa firma, en Paraná 25, en Capitán Bermúdez, funciona un gimnasio, que pertenecería al socio de Pillín.

La empresa Ruffino SAS fue creada por el barrabrava el 26 de julio de 2019. Su socio era el entonces intendente de Rosario Central, Sergio Quiroga. Esta firma fue registrada para la comercialización y fabricación de indumentaria deportiva y organización de eventos y festivales culturales y deportivos. En el semestre que va desde septiembre de 2019 hasta febrero de 2020 la facturación por ventas de esta empresa fue de 925.890 pesos. Lo que llamó la atención del fiscal fue que el 87 por ciento de lo facturado tuvieron un único cliente:

Rosario Central.

Bracamonte hizo otros negocios que están registrados, uno de ellos como monotribustista. Le vendió mates y bombillas al club por 465.570 pesos.

En la casa de Pillín del country se secuestraron también cheques emitidos por Rosario Central dirigidos a las empresas Vanefra y Ruffino SAS, por 151.000 pesos. Se incautó otro cheque emitido por el club por 660.030 pesos dirigido a Jorge Bilich, representante de jugadores. Según el fiscal, ese cheque fue emitido como parte de pago por el pase del futbolista Gastón Ávila, vendido a Boca Juniors. "Esto confirma la posible participación de Bracamonte en las ganancias de los pases de jugadores", apuntó Moreno.

Esta hipótesis se relaciona con otra empresa a nombre de Bracamonte, que es Kabrasi SRL, cuyo socio era el representante de jugadores Juan Carlos Silvetti, que fue expulsado de Rosario Central en 2009 por el entonces presidente Horacio Usandizaga, que denunció que Pillín y este empresario manejaban las inferiores del club.

En el domicilio de Ruffino SRL funciona una escuela de danza clásica, que se llama Rodai. El fiscal Moreno dijo en audiencia que el uso de la coacción resultó ser una herramienta efectiva para Bracamonte, la que también aplicó para determinar a jugadores de fútbol y familiares para firmar con tal o cual representante, porque esos contratos firmados bajo coacción le garantizaban futuras ganancias. "Con el tiempo parece haber naturalizado su poder dentro del club al punto de oficiar como líder de la barra y a la vez como supuesto proveedores de productos y servicios", agregó el funcionario ante la jueza.

Desde que en 2002 puso el pie en la barra de Rosario Central, Pillín se distinguió por dos fuertes atributos: construyó su presente de magnate y no se fue más. Siempre estuvo ligado a episodios resonantes pero, gracias al consejo de asesores sagaces, el impacto era más por visibilidad pública que por consecuencias penales.

Lo cierto es que desde aquel año 2002 en el que se adueñó de la barra auriazul, Bracamonte tuvo una expansión económica que procedía, según lo dicen bajo reserva directivos históricos del club, de su capacidad de garantizar orden en las tribunas a cambio de

beneficios de la explotación de espacios de la propia institución. Esto es lo que vio y explicó el fiscal Moreno.

El caso fue apelado. La jueza que lo recibió reconoció que las irregularidades sobre las empresas y la adquisición de bienes por prestanombres eran elocuentes. Pero dijo que las acciones que el fiscal señalaba habían originado el dinero estaban flojas de evidencia. Se refería a las extorsiones, las amenazas y las maniobras fraudulentas. Le pidió al fiscal que identificara mejor esos ilícitos y superara las simples conjeturas. Una vez más el personaje sagaz, complejo y que hacía un culto de no usar el teléfono gambeteaba las acusaciones.

27
EL GRAN BENEFACTOR

El Viejo Cantero no aparece en ninguna escucha telefónica, por una simple razón: no sabe ni le interesa aprender a usar un smartphone. Su voz quedó registrada en un par de intervenciones telefónicas cuando se lo oye en segundo plano. Otra persona usaba el teléfono por él. Este hombre que nadie sabe la cantidad de hijos que tiene —él dice haber reconocido a 24— vivió siempre en la miseria, rodeado de animales de granja, en lugares sórdidos y casas precarias.

Aprendió a leer y a escribir recién cuando tenía cerca de 50 años en la cárcel de Piñero, algo que posibilitó que le concedieran la libertad condicional en medio de la pandemia, en septiembre de 2020. Había sido acusado de abusar en la cárcel de la sobrina de su actual pareja Rosa Bibiana Montero, desde que la chica tenía 13 años, a la que llevaban de visita al pabellón. Los abusos fueron, por lo menos, por dos años. La chica fue llamada a declarar por la fiscal de Delitos Sexuales, Carla Cerliani. “Solo quiero decir que se termine esto, ya está, ahora tengo 20 años, estoy haciendo mi vida, tengo mi novio, tengo mi trabajo. Esto fue hace años y quiero que se termine ya”, dijo la joven. La situación exponía, según escribió la periodista Sonia Tessa en *Página/12*, el lugar de sumisión de esta niña —y de su madre— en una estructura delictiva.

La imagen de la detención de Viejo Cantero en 2015 lo pone en ese contexto de marginalidad: lo atrapa la policía en un carro de ciruja, con uno de sus hijos, Dylan, que en ese momento tenía 11 años. El pibe salió corriendo para meterse en la villa Vía Honda, cuando aparecieron los patrulleros.

Dylan cumplió 18 años en 2023 y está preso con su padre, que también volvió a la cárcel. Dylan es el último hijo que el Viejo tuvo con su exesposa Celestina Contreras. Tenía 9 años cuando la policía

copó La Granada y se llevó detenida a su madre. Su padre, que ya no vivía allí, se fugó.

El chico quedó solo en esa casa de la calle Flor de Nácar, y una vecina lo refugió en su casa para evitar que se lo llevaran al Juzgado de Menores y terminara en un internado. “Te llamaba para decir que te tomés el palo. Se llevaron en cana a todos. Me parece que hasta a Dylan”, le avisó el 31 de mayo de 2013 el policía Juan Maciel a quien le pagaba por esa información, uno de los líderes de Los Monos, Ramón Machuca, que estaba prófugo.

El Viejo había escapado. Se sospechó que se refugió en ese barrio extremadamente pobre, Vía Honda, donde convivía con su nueva pareja. Dos años tardó la policía en ubicarlo, hasta que lo detuvo en ese carro tirado por un caballo flaco, con el que se movía por el barrio. Dylan es el más parecido a él. Algunos creen que hay una especie de búsqueda para conservar esa tradición de vivir en un western marginal, montados a caballo, en ranchos, en los suburbios de los márgenes de Rosario.

Después de salir en libertad en plena pandemia, el Viejo se refugió en Vía Honda. Su pareja, Rosa, tenía allí un comedor comunitario, al lado de su casa, en una esquina a tres cuadras de la Avellaneda. Cuando regresó a esa casa de dos plantas, con un patio enorme, que era una especie de baldío, empezó a traer los animales. Llegó a tener 18 caballos, animales de granja, como chanchos, gallinas, pavos. También había perros de pelea de raza pitbull, gallos de riña, galgos preparados para carreras. Cantero vivía en su chacra en medio de la villa, donde la basura se acumulaba en las esquinas. Aunque la cría de los animales lo hacía verse en un lugar de mayor tranquilidad, como si estuviera retirado, como sugerían gente de su entorno, la realidad era otra. Este hombre tosco, que usa pocas palabras para expresarse, fue el precursor de un grupo de delincuentes de barrio Las Flores que a mediados de los 90 comenzaron a involucrarse en la venta de drogas. Nunca se iba a retirar. ¿Qué iba a hacer? Había tenido suerte, porque no había estado muchos años en prisión. La primera vez que fue detenido fue el 27 de agosto de 1999 en Itatí, Corrientes, donde había viajado a comprar un cargamento de 76 kilos de marihuana en ese lugar costero, de pescadores, donde tenía varios amigos. Cuando la

policía lo persiguió hasta una estación de servicio en esa localidad logró escapar. Se volvió a Rosario y, en 2001, el Tribunal Oral Federal de Corrientes lo condenó a cuatro años de prisión que nunca cumplió.

En la causa por narcotráfico contra el clan Cantero, el Viejo logró zafar porque no hablaba por teléfono, y su voz no aparecía en ninguna foja, en una causa cuya investigación fue débil. Lo condenaron en 2018 a seis años de cárcel como miembro de una asociación ilícita porque los informes de la División Judiciales lo exponían como un hombre clave de la organización. Pero las pruebas también eran frágiles. El Viejo lograba sortear las investigaciones por su rusticidad, su forma de moverse, en esas zonas marginales donde no entra nadie, ni la policía.

Uno de sus enemigos, el Polaco, hombre de Los Garompas, lo describía como "un tipo duro" que "no le tenía miedo a nada". Este hombre que se enfrentó con su banda durante varios años a Los Monos, en una guerra que dejó más de 60 muertos, recordaba una noche cuando lo fue a buscar a su casa al Ariel, como le decían en el barrio. Como sabía lo que venía salió con un chaleco antibalas y dos pistolas y empezó a tirar y a avanzar. Un tiro le dio en el hombro y ni se mosqueó. El tiroteo duró varios minutos, y solo dejó en claro que los dos bandos eran duros, gente habituada al ruido de las balas.

En la puerta de la casa del Viejo en Vía Honda había varios autos de custodios. Ya no era como antes. Los soldaditos cuidaban a la leyenda, que había vuelto al ruedo, a manejar la venta de drogas con la gente más joven, la nueva generación que le era leal.

El 27 de abril de 2022, cuando llegó la policía a Vía Honda, los vecinos dudaron si celebrar o lamentar que detuvieran a Cantero. Porque el fundador de Los Monos era —y es— capaz de mandarlos a torturar y matar, pero también asistía a más de 200 personas por día en ese barrio, uno de los más carenciados de la ciudad, velaba a su modo por su seguridad y hasta organizaba actividades recreativas para celebrar, por ejemplo, el Día del Niño.

Dentro de su casa, entre una imagen de Al Pacino disparando un fusil en su rol de Tony Montana en *Scarface* y jaulas con aves exóticas y gallos de riña, los investigadores encontraron 8000 kilos de alimentos, muchos de los cuales estaban en cajas del Plan Integral de

Cuidados, más conocido como el Plan Cuidar de la municipalidad de Rosario.

El intendente Pablo Javkin negó cualquier vínculo con Cantero y deslindó toda responsabilidad sobre lo ocurrido. Definió a la municipalidad como una víctima más y le pidió a la justicia que la tuviera como querellante. Afirmó que eran 137 cajas de alimentos que debieron ir a otro centro comunitario, El Ceibo-Manos a la Obra, en otro barrio, Molino Blanco, que sí estaba empadronado en la municipalidad para recibir esos alimentos. Pero ese lugar estaba controlado por gente del Viejo.

El presidente de El Ceibo-Manos a la Obra es Leonardo Pucheta y la tesorera Cintia Macarena Berón. También están imputados en la investigación judicial. Los Pucheta tienen una relación con el crimen organizado desde hace mucho tiempo y ahora le anexaron una pata asistencialista. Varios integrantes de ese clan, a los que apodan Comegatos, que viven en el Bajo Ayolas, en el sur de Rosario, fueron asesinados. Algunos alfiles de los Comegatos se habían aliado a Ariel Segovia, conocido como Tubi, que fue asesinado en la cárcel de Coronda, y era parte de Los Monos.

Los Pucheta se ganaron ese apodo porque uno de los miembros de esa familia fue quien en 1996 le mostró al periodista porteño Julio Bazán de Canal 13 cómo asaban gatos a la parrilla en medio de la crisis del menemismo. La relación más fluida de los Pucheta siempre fue con el Viejo, que maneja el bufet del club de pescadores de la Bajada Mangrullo, muy cerca de donde viven los Pucheta.

Cuatro días después del allanamiento a la casa del jefe narco, el domingo 1º de mayo de 2022, las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social de la intendencia fueron incendiadas de forma intencional, según concluyó un peritaje de los Bomberos Zapadores.

A pedido de los fiscales, la jueza Valeria Pedrana dictó la prisión preventiva de Pucheta, por el delito de administración fraudulenta, y a Cantero y su esposa por encubrimiento, tras rechazar el planteo de su defensa, que sostuvo que esas cajas estaban en su casa para que nadie las robara. Para la justicia, sin embargo, las evidencias muestran que Cantero las repartía.

Según la fiscalía, lideró una asociación ilícita que buscó asentar su

dominio sobre barrios enteros de la ciudad, desplazando o matando clanes rivales. Y como parte de esa disputa territorial ordenó balear escuelas, concesionarias, comedores y estaciones de servicio, además de extorsiones a comerciantes y empresarios. Eso quedó grabado en las llamadas que la justicia interceptó a un colaborador preso por homicidio.

"El Ariel me dio semáforo verde para que cobremos todos los negocios a nombre de él", le comunicó el preso a una mujer que estaba en libertad. "Todos, todos los negocios a nombre de él. Todos. Vamos y vamos. Negocio que no sea del Ariel, negocio que tiene que pagar".

Desde el Ministerio Público de la Acusación consideraron un error o una conclusión malintencionada considerar a Cantero como un benefactor en zonas que antes fueron polos industriales de la periferia rosarina y ahora son bolsones de pobreza, desempleo y padecimiento. "Hay zonas muy abandonadas por el Estado, es cierto, pero tampoco estamos ante tareas de 'pacificación'", indicaron. Consignaron que Cantero había ordenado balaceras, está sospechado de participar en la trata de personas, abusos de terceros y mucho más.

Así, los clanes criminales "se ganan el respeto de la comunidad, porque son parte de ella y buscan mejorar su calidad de vida proveyendo bienes básicos que muchas veces el Estado es incapaz de proporcionar", destacaron las investigadoras Carolina Sampó y Ludmila Quirós, en una nota en el diario *La Nación*.

"Los miembros de los clanes no ostentan sus ganancias —como solían hacer los narcos de generaciones previas— y suelen permanecer en el lugar que los vio nacer", detallaron en un trabajo titulado "Las estructuras criminales en Argentina y las iniciativas de cooperación estatal para combatir su avance".

El barrio da protección porque allí se tejen lealtades con cimientos fuertes. Los Cantero siempre se ciñeron a ese paradigma, donde no solo es el dinero el que fortalece los compromisos, sino también la condición de pertenecer y estar en el mismo territorio. Ahí también tercia el miedo.

El poder de los Pucheta, socios del Viejo Cantero, se fortaleció en ese ambiente atravesado por la pobreza en épocas electorales. Porque el viejo puntero, que era el mediador entre el dirigente político con la

base social del barrio y sus necesidades, casi desapareció o bien, como en el caso de los Pucheta, se transformó. En los años impares, que coinciden con las campañas electorales, este tipo de engranajes en el que se conjugan los roles y los poderes en el barrio saca ventaja no solo con la intermediación de la distribución de alimentos, electrodomésticos y colchones, sino también con dinero. Los Pucheta son un ejemplo de esa pequeña maquinaria que se multiplica en cada barrio y que no tiene preferencias políticas. Es transversal. Solo tercia el mejor postor. En La Tablada, por ejemplo en 2021, al propio Agustín Rossi, en ese momento ministro de Defensa y precandidato a senador nacional, se lo hacen saber. En una caminata rutinaria por el cordón Ayacucho un grupo de jóvenes en moto bloquea al grupo de La Corriente. Son unos cincuenta militantes que cargan panfletos y votos para distribuir en la zona. “Rajá de acá. En esta zona somos todos de [Lisandro] Cavatorta”, grita uno de los muchachos y muestra una pistola. Nadie se asusta ni entra en pánico. Son las reglas de juego en Rosario. El exjefe de bloque de diputados kirchnerista y jefe de Gabinete, un hombre experimentado, pide a los militantes que den media vuelta y enfilen hacia otro sector del barrio.

Esos jóvenes soldaditos pertenecen a una decena de búnkeres que existen en ese pequeño callejón que termina en las vías, donde una maestra dice que es el único lugar en la Argentina donde la gente vive bajo tierra. La docente cuenta que cambian de color en cada elección. Por cómo funciona la política en periodo electoral, Cavatorta, que fue el candidato a concejal del gobernador Omar Perotti, no sabía que esos pibes decían trabajar para él en el barrio. La intermediación de la política crea esos laberintos. En la elección siguiente trabajarán para sectores de Juntos por el Cambio. No tienen colores políticos. Como en otros sectores más aventajados, lo único que funciona es el pragmatismo del dinero, que también se recauda en los búnkeres y termina en las manos de la policía, que llega los lunes a juntar una porción de la recaudación de lo que se vende en esos locales los fines de semana. Esa es la presencia más nítida del Estado clandestino.

Omar, un veterano transa de la zona, recordaba en 2022 que una década atrás llegó a vender 1500 fasos y un kilo de cocaína por día en esa zona, donde el manejo del narcomenudeo era distinto, sin tantos

intermediarios y con menos violencia. “Te dabas cuenta cómo eran los arreglos en las fiestas. En una que hizo Cabeza de Leche estaban todos los comisarios de investigaciones”, recuerda el hombre de 62 años, que estuvo preso por más de ocho años. “Teníamos el control. Hablaba y hacían caso. No eran necesarios tantos tiros. Pero había que tener todo controlado. Eso sí, cuando había que sacar los soretes y yo te los sacaba. Con [Oscar] Huevo Ibañez no robaba nadie. Esto estaba tranquilo”, rememora. Ibañez fue asesinado en 2011 en Villa Gobernador Gálvez, donde manejaba un boliche y les decía a todos que estaba retirado del negocio narco en los tiempos en que su pariente político y compañero de camino era Guillermo “Torombolo” Pérez, pesado del barrio. A Oscar le cae el reflejo de un recuerdo nítido en su memoria, aquella noche en la que Huevo Ibañez alquiló el hotel Plaza Real y llevó a todos los pibes del barrio al cumpleaños de 15 de su hija, a la que le regaló un auto cero kilómetro, a pesar de que era menor de edad. Lo recuerda como un hermoso delirio. “Nadie nunca había ido a un hotel así. Creían que todo era una película. El barrio cambió. Ahora cualquier gil se anima a matar. Antes era el último extremo. El último capítulo. Porque si vos matás todo el tiempo no sirve”.

La hipótesis de que el Estado se replegó de los barrios, donde el narco avanzó sin freno no es tan lineal, como argumentan algunos dirigentes políticos, sin ninguna información sustancial. En Vía Honda, como en la mayoría de los barrios, hay presencia del Estado. El problema es cuál es el rol, y en qué medida el trabajo es efectivo y tiene impacto en el territorio, y sobre todo se mantiene como política pública. El problema es que esa presencia se manifiesta con el móvil policial que custodia los búnkeres en cordón Ayacucho. Cerca de allí, en Ayacucho al 1400 funciona uno de los búnkeres más conocidos de la ciudad. Tiene nombre. Le dicen El Pasillo. En la puerta hay un Ford Escort que sirve de barricada y los agujeros de las balas delatan los ataques. Desde hace una década en ese lugar se vende cocaína. En 2023 quedó en manos de los hermanos Funes, y regenteado por la pareja de uno de ellos, Chipi Selerpe, una joven con estirpe de transa, actividad que ya tenían su abuelo y su tío.

En la época que estos jóvenes eran niños el Estado municipal de

Rosario puso en marcha una experiencia novedosa: los Centros Crecer, que marcaron una bisagra. Fueron creados en 1997 cuando Hermes Binner era intendente de Rosario, y se mantuvieron más de una década. Fue el propio socialismo el que discontinuó un programa exitoso, que fue clave para sostener a los barrios durante la crisis de 2001 y la posconvertibilidad, con un desempleo que en la ciudad alcanzó en 2002 el 24,5 por ciento. Llegó a haber 37 centros Crecer, cuyo manejo operativo en la Secretaría de Desarrollo Social estaba a cargo de Elida Rasino. Allí se ofrecía asistencia nutricional y pedagógica a más de 20.000 familias de hogares vulnerables, unos 5000 chicos de 2 a 5 años. Y más de 700 mujeres, bajo la figura de voluntarias, trabajaban diariamente ad honorem durante cuatro horas, ayudando con la comida y la limpieza. Hoy esa experiencia es otra de las tantas cosas que quedó en el olvido.

Durante la gestión de Miguel Lifschitz como intendente ese proyecto, que tenía el sello de Binner, cambió. Se transformaron en Centros Territoriales de Referencia (CTR), pero la función no era la misma. Lifschitz pretendía cambiar la orientación del abordaje y pasar de la primera infancia a la juventud. En charlas informales, cuando ya era gobernador, Lifschitz reconocía que el de Binner era un buen programa, pero que las prioridades debían apuntar a los jóvenes para evitar que cayeran en el delito.

Desde mediados de los 2000 el barrio Municipal, ubicado en la zona sur, que configura el complejo Fonavi más grande del país, comenzó a transformarse. Vivían allí 50.000 personas. En la calle Alice el entonces líder de la barra de Newell's, Roberto "Pimpi" Camino, había montado una especie de puesto de guardia. Construyó junto a la calle un santuario del Gauchito Gil, santo pagano del que era devoto. En su pronunciado abdomen llevaba tatuada su figura. En ese lugar estaba durante casi todo el día su hermano Tato, un hombre cojo que vigilaba quién entraba y salía del vecindario. En esa época comenzaban a sonar los tiros muy temprano. La comisaría 11ª que está a dos cuadras de allí mostraba el abandono institucional. La sede policial era una especie de basurero, colapsada y llena de autos viejos.

Una década después ese barrio fue escenario de una sangrienta batalla de una generación posterior a la de Pimpi. Su hijo Alexis y los

hermanos Funes se trenzaron en un combate feroz en el vecindario, donde a la par de las torres de departamentos cada vecino había empezado a construir lo que quería, en los patios internos y en las entradas. Eso convirtió el lugar en una especie de laberinto donde el rugido de las motos y los disparos de los soldaditos se hicieron rutina cotidiana. El barrio se había tugurizado.

Las paredes del Fonavi eran un jeroglífico del conflicto entre dos clanes narco. Contenían nombres, desafíos, fechas y homenajes a los caídos. En las paredes persistía la palabra Fonavi VIP, como si fuera una condición especial. Era el nombre que usaba la banda de Alexis Camino.

Pero el privilegio era para unos pocos, solo los que gobernaban ese lugar a costa de los balazos que se transformaron en cicatrices en esas paredes, como la de la casa de Juan Domingo Ramírez, un sicario de Los Monos, que está preso, pero cuyo departamento tenía al frente 32 agujeros.

Muchos de los apodos que aparecían pintados eran de jóvenes muertos o presos, que pertenecían a estas dos bandas que dominaron y se enfrentaron en esa especie de ciudad con vida propia dentro del barrio La Tablada.

Ese complejo de torres de tono amarillento, que se construyó en la década del 80, tiene 9300 departamentos, donde se calcula que viven 55.000 personas, y se convirtió en bastión de la lucha territorial para la venta de drogas. Allí la desconfianza de los vecinos hacia todo ámbito institucional persiste, aunque se muestran predispuestos a colaborar. El resquemor es porque están curados de espanto.

En medio de esta guerra quedaron los vecinos que viven allí, que en abrumadora mayoría no tiene nada que ver con el tráfico de estupefacientes. Se convirtieron en esclavos del terror, sin poder pedir auxilio a nadie. Y el lugar se empezó a deformar hasta en su fisonomía. Marisa, una mujer de 32 años, contó que su hijo de 8 nunca pudo jugar en una de las plazoletas internas del complejo.

No solo por las bandas criminales se transformó este barrio. Los Funes y los Camino contaron con la ayuda de parte de la policía. Del otro lado de Grandoli, la comisaría 11ª, que tiene jurisdicción en la zona, ubicada en territorio de los Camino, cobró durante una década y

media distintas tarifas de acuerdo con el rubro delictivo. El colmo de este esquema corrupto se corporiza cuando los narcos usurparon y se quedaron con el destacamento policial del barrio en el Fonavi.

"Lo peor es que nadie se dio cuenta", dice con ironía Demetrio Burgos. Ríe como si fuera un reflejo de la burla. Este jubilado que vivió treinta y cinco años en el barrio advertía que no se podía caminar ni de día ni de noche. "Los tiroteos eran permanentes. Nadie sabe lo que es vivir en medio de una guerra".

La detención en varias etapas de los cabecillas del clan Funes y el avance de causas en los fueros provincial y federal incentivaron a que se pusiera en marcha otro capítulo, ya no solo enfocado a atacar a esa banda criminal, sino a recomponer el tejido social que también fue víctima del crecimiento de esta banda liderada desde la cárcel por René Ungaro, preso por matar al líder de la barrabrava de Newell's, Pimpi Camino.

En 2018 en el Fonavi se instalaron funcionarios del Ministerio Público de la Acusación y distintas áreas del Estado municipal y provincial que integran lo que se denominó el plan Abre Familia. A la par, en el lugar empezaron a convivir en ese momento los patrullajes permanentes de la Policía de Acción Táctica y la Gendarmería.

El detonante de la puesta en marcha de este plan fue un megaoperativo que unos 200 efectivos realizaron el 26 de junio de 2018. La orden de la fiscal Gisela Paolicelli incluyó allanar 24 departamentos del Fonavi que estaban usurpados por miembros de los Funes. Estas propiedades, en la mayoría de los casos sin escrituras, eran ocupados a la fuerza para convertirlos en quioscos de drogas y aguantaderos para acopiar armas y sustancias prohibidas.

A partir de ese día, algunos funcionarios del Ministerio de Público de la Acusación se quedaron en el lugar y montaron una oficina en un departamento, para coordinar la investigación de esta trama derramada del comercio de drogas.

Los funcionarios empezaron a notar que mucha gente se acercaba a denunciar distintos hechos, en particular las usurpaciones de departamentos. La ocupación forzosa de viviendas se impuso en Rosario en los últimos años, luego de que las bandas de narcomenudeo empezaran a rotar los lugares de expendio fijos, dejándose de lado el

búnker, ese reducto blindado, a prueba de balas, atendido por menores de edad.

La tarea que realizaron los equipos técnicos de la Secretaría de Estado del Hábitat provincial y del municipio de Rosario apuntó a chequear que los departamentos estuvieran ocupados de forma regular, por los propietarios legítimos, y por otro lado, relevar las obras de mejora edilicia que debían realizarse en cada una de las torres. Los trabajos y relevamientos comenzaron en los núcleos 14 y 15, y las torres B y C, donde vivían 161 familias.

Las cuadrillas iniciaron luego los trabajos para el desmantelamiento de construcciones irregulares sobre espacios públicos, plazas y lugares de paseos, que no permitían que los vecinos pudieran transitar por el complejo. Cada habitante hacía lo que quería, sin ningún control. Ampliaba su casa, construía una cochera en la plazoleta. Se lograron escriturar 300 propiedades, que dio a la gente una mirada distinta. Ya nadie podría sacarlos de allí. Eso contribuyó a que el lugar levantara porque cada propietario invertía en mejorar su vivienda, ya no con una mirada de tan corto plazo, cargada del miedo.

La violencia bajó de manera pronunciada, después de que se conjugaran varios factores, como la detención de los miembros del clan Funes y los soldaditos que trabajaban para ellos y operaban en el barrio, las mejoras edilicias, con mayor iluminación, la custodia de los gendarmes, y un trabajo de hormiga, casa por casa, que hicieron empleados de los estados provincial y municipal, con entrevistas con cada una de las familias. Por primera vez, después de reunir toda la información de manera directa, se sabía lo que ocurría allí y cuáles eran los problemas. Había un diagnóstico de cómo la venta de drogas y la violencia habían desmoronado la infraestructura del lugar. Para cambiar la situación había primero que detener a los que generaban terror en el barrio y después destruir la tendencia a la permanente conversión de ese lugar en un arrabal oscuro.

Pero los gobiernos cambiaron y a nivel presupuestario el programa que se hacía en ese barrio perdió peso. Y eso que las cosas comenzaron a funcionar. En el primer año, en 2019, bajaron los homicidios un 25 por ciento. No había otra zona de la ciudad, donde se hiciera esta reconversión, donde hubiera hechos tan palpables que demostraran

que la violencia se podía bajar, no solo con el uso de las fuerzas de seguridad, sino también con un trenzado de políticas sociales.

En 2022 un hecho de extrema violencia conmovió la zona: el doble asesinato de Claudia Deldebbio y su hija Virginia Ferreyra, una profesora de danza, a la que su madre acompañó a tomar el colectivo y fueron asesinadas a tiros por un grupo de soldaditos que había ido a disparar contra una torre. El crimen fue atroz y sobrecogió al barrio. Los vecinos comenzaron a juntarse en la plaza Rodolfo Walsh. Antes de matar a estas dos mujeres indefensas, los atacantes habían disparado contra la torre once. Era el único lugar donde nunca nadie había podido entrar, salvo durante la pandemia, cuando parte de los trabajadores del programa se habían camuflado con barbijos, cofias y capas entre los enfermeros que ingresaban a vacunar contra el covid. La torre once era la contracara de lo que se había avanzado en el resto del barrio. El edificio tiene once pisos. Y el único acceso es por la escalera, porque el ascensor fue desmantelado. Solo quedó el hueco vacío, que se transformó en una especie de compost vertical, porque los habitantes de los departamentos, en su mayoría usurpados, lo usaban de basurero. El olor era nauseabundo porque los residuos ocupaban varios pisos. Las paredes estaban pintadas y varios departamentos ni siquiera tenían puerta. Allí se vendía droga a toda hora del día y hay reductos donde los chicos iban a consumir. El contraste con el otro lado del barrio es brutal. Ese lugar quedó abandonado, a nadie parecía importarle. Las políticas de Estado, que fueron exitosas en ese barrio, se mantuvieron por la tozudez de trabajadores que también quedaron solos, muchas veces, sin presupuesto, tratando de torcer el destino de un lugar que si no se hubiera intervenido habría quedado como la torre once.

La acción estatal vacante puede ser reemplazada con sustitutos informales. En 2014 el entonces secretario de Seguridad Sergio Berni propició en Rosario allanamientos masivos y simultáneos contra 67 puestos de venta de droga. Uno de los que se salvó de la redada, por motivos nunca sabidos, fue uno de los más célebres, en la calle Tarragona, en el extremo oeste de la ciudad.

En torno de ese búnker enclavado en un territorio más que modesto varios policías de la Agrupación Cuerpos, la que está en la calle,

constataron más de una vez un sobresaliente detalle. Los vecinos que vivían en los alrededores no estaban a expensas de la salud pública que sin embargo en Rosario es de calidad. Si necesitaban una ambulancia tenían la cobertura de una empresa privada de emergencias médicas. Los explotadores del búnker les habían contratado ese servicio. Una forma de repararlos, y contenerlos, frente a incidentes reiterados en torno de ese quiosco duradero y rentable. Una alternativa, a escala reducida, del Estado benefactor.

28
DE SICARIOS A PASTORES

La puerta de hierro hace un ruido tosco y fuerte. Varios cerrojos se abren al mismo tiempo. Es el sonido que Jorge Anguilante, un exsicario, espera escuchar cada sábado cuando sale durante 24 horas de la cárcel de Piñero para ir a su casa en Rosario. Allí instaló una pequeña iglesia evangélica en un garaje.

Antes de atravesar la puerta del penal, los guardias le sacan las esposas a Tachuela, como era conocido en el mundo de la mafia. En silencio, lo miran con recelo, por el estigma de su pasado. Él los saluda con una palabra: “Bendiciones”.

El hombre robusto y alto, que mide más de 1,85 metros y tiene en su cuerpo estampados los tatuajes de esa otra vida, según él, de la época en que mataba, queda solo en el estacionamiento de la penitenciaría, en el medio de un campo sembrado con soja en plena llanura pampeana, hasta que aparece su sobrina Carolina. Al otro día, ella lo regresará a las ocho de la mañana al pabellón de la cárcel al que los detenidos llaman “iglesia”. Hay tres de ese tipo en el penal.

Desde el 12 de septiembre de 2020 salir de la cárcel se transformó también en un trauma para él. Ese día su hermana y su cuñado murieron en un accidente a un kilómetro de allí, cuando los embistió un camión en la ruta después de ir a buscarlo a la prisión para su salida transitoria. Anguilante tiene cicatrices de ese accidente e insiste que a él lo salvó “un milagro”.

Su cuñado, Ernesto Vallejo, era otro expresidiario que se convirtió luego en capellán evangélico en las cárceles. Tachuela quiere seguir ese legado. Pasó de ser sicario a soñar con transformarse en pastor. Calcula que saldrá definitivamente de ese “infierno” de la cárcel con libertad condicional, tras estar siete años en prisión. Podrá dedicarse a su propia iglesia, que se llama Esperanza de Vida y funciona en un

garaje. Afirma que quiere ayudar a otros presos que “se convirtieron y que cambiaron su vida”.

Anguilante promete que su oficio de matar quedó atrás, que la “palabra” de Dios lo hizo “un hombre nuevo”. Fue condenado en 2014 a 12 años de prisión por asesinar a Jesús Trigo de un disparo en la cara. El rostro de la víctima se le aparece en las noches. Lo tortura. Trata de ahuyentarlo con plegarias en su pequeña y húmeda celda del pabellón 19 del penal de Piñero.

La historia de este hombre que pasó de ser un asesino a refugiarse en la religión evangélica se replica en el sistema carcelario de la provincia de Santa Fe. Las prisiones están saturadas de perfiles como el de Anguilante. Son jóvenes pobres que se vincularon desde adolescentes a la venta de drogas —los apodan “soldaditos”— y quedaron enredados en un espiral de violencia que los llevó a la mayoría a la muerte o a la reja. El resultado fue que las cárceles pasaron a estar “superpobladas” y a tener un doble comando: los evangélicos y los jefes narco.

Los pastores evangélicos dominan el 40 por ciento de la población carcelaria —que es de 6900 internos— en la provincia de Santa Fe. Es el cálculo de Walter Gálvez, secretario de Asuntos Penitenciarios, quien también es pentecostal.

El avance de esta religión en la Argentina se dio, como en la mayoría de los países de América latina, en los sectores más vulnerables, entre ellos los presidiarios, considera la investigadora Verónica Giménez del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Según una encuesta realizada por ese organismo en 2019, el número de personas católicas cayó del 76,5 por ciento al 62,9 entre 2008 y 2019. En cambio, los evangélicos crecieron del 9 al 15,3 por ciento.

Ese aumento de fieles se dio aún más en las cárceles, según Gálvez, cuya población también creció desde 2014, cuando se reformó el Código Procesal Penal, que agilizó las detenciones. La consecuencia fue una superpoblación carcelaria de 155 por ciento por encima del cupo recomendado. El Servicio Público de Defensa Penal alertó que la situación es crítica.

Las cárceles se poblaron como consecuencia de un incremento de los

crímenes en Rosario, la principal ciudad de la provincia de Santa Fe y la tercera más grande de la Argentina, que cuenta con 1.300.000 habitantes incluida su área metropolitana, y está atravesada por los problemas que supuran del crimen organizado.

Rosario encarna una de las tantas paradojas de la Argentina: está ubicada en una de las zonas más ricas del país, donde se concentra la producción y exportación agropecuaria. Por los trece puertos que están sobre la ribera del río Paraná en 2022 se exportaron 70 millones de toneladas de granos, harinas y aceites, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario. Es el segundo nodo portuario agrícola más grande del mundo, después de Nueva Orleans.

La contracara de esa riqueza es lo que sucede en la periferia de la ciudad, donde la pobreza sobrepasa el 40 por ciento de la población, según datos del Instituto de Estadísticas y Censos.

El 80 por ciento de los crímenes en Rosario son ejecutados por sicarios jóvenes que prestan servicios a las bandas narco, cuyos jefes están presos y mantienen el dominio del negocio criminal desde las prisiones, advierte el fiscal de la Unidad de Crimen Organizado, Matías Edery.

Este problema genera preocupación a nivel regional. El problema de Rosario fue analizado por la red de Fiscales Antidrogas de Iberoamérica en una reunión que se realizó el 7 de diciembre de 2021 en Buenos Aires, bajo el título: “Narcocriminalidad desde establecimientos penitenciarios”.

En las prisiones conviven en cierta armonía las bandas narco y los evangélicos. Varios jefes de las pandillas que manejan la venta de drogas estuvieron alojados durante los últimos años en los pabellones evangélicos, entre ellos, miembros de Los Monos.

El trabajo pastoral en las prisiones es una de las estrategias que usan los evangélicos para captar fieles. La tarea pastoral no solo se centra en las personas que están encerradas en una celda, sino que se amplía a sus familias que están en libertad. Continúa cuando el convicto sale de la cárcel, con un seguimiento a él y a su entorno familiar. Las congregaciones Portal del Cielo y Redil de Cristo son las que tienen más poder dentro de las cárceles de Piñero y Coronda, las mayores de Santa Fe. Empezaron a fines de la década del 80 a evangelizar a los

presos. Hoy tienen más de 120 pastores dedicados al trabajo dentro de las prisiones.

En una de las reuniones que realizan los jueves y domingos en la iglesia Redil de Cristo en Rosario el pastor David Sensini pide a los feligreses que aquellos que estuvieron presos se identifiquen. Un tercio de la sala levanta la mano, cierra sus ojos y baja su cabeza. Uno de ellos es Víctor Pereyra, vestido de traje negro y corbata, que estuvo recluido en Piñero y hoy es dueño de una verdulería y hace tareas de mantenimiento en edificios. “No quiero volver atrás. Hoy tengo una familia a la que cuidar”, dice.

Una banda pop empieza a tocar y las luces se encienden y apuntan al público, mientras tres cámaras de TV enfocan distintos planos para los que siguen la ceremonia por un canal de YouTube. “Nadie más va a ir a la cárcel. Ni tus hijos ni tus nietos. Es posible el cambio”, grita el pastor con la mano en alto.

Los que no quieren cambiar duran poco tiempo en los pabellones evangélicos, afirma Rubén Muñoz, pastor de Portal del Cielo, que estuvo detenido durante dos años por robo. Uno de los que pasó por tres pabellones evangélicos fue Ariel Maximiliano Cantero, de la banda de Los Monos. Es hijo del fundador de la organización narco. El 2 de marzo de 2021 fue condenado a 18 años de prisión por asesinar el 22 de julio de 2019 de un disparo en la nuca al policía Cristian Ibarra.

“Tuvimos que pedir su traslado porque nos dimos cuenta de que no había cambiado”, señala Muñoz. “Los jefes narcos que quieren un tiempo de tranquilidad tienen que pagar para estar acá”, advierte un preso de 38 años, condenado por asesinato que pide que no se revele su nombre.

Enrique Ribello, el pastor que lidera la congregación Portal del Cielo, niega que cobren tarifas de alojamiento a jefes narco, aunque admite que en esos pabellones han estado varios integrantes del clan criminal Los Monos. “Sabemos que el 30 por ciento de los que quieren ir a un pabellón evangélico lo hacen para refugiarse. Nosotros trabajamos con todos”. Para él ese es un problema permanente dentro de la cárcel.

El pastor de Portal del Cielo revela que vive amenazado. “Los narcos quieren apoderarse de los pabellones evangélicos porque para ellos es

un negocio, ya que desde allí se ordenan crímenes y se vende droga y se entran celulares, muchas veces", dice.

"Desde 2001, cuando empezó a hacerse más intenso el trabajo en las cárceles, no hay más motines. Tenemos el gobierno de la cárcel. Porque logramos bajar la violencia". A Ribello, que habla con autoridad, todos los presidiarios conocen con el alias de Tedy. El control de cada pabellón evangélico está a cargo de diez presos llamados "líderes", que tienen unos quince ayudantes. "Ellos se encargan de controlar todo y mantener la paz. Trabajan además con los internos que ingresan. Hay que escucharlos. Dejar que se descarguen", explica Eric Gallardo, uno de los líderes.

"Nosotros garantizamos la paz". Ribello tiene un mando indiscutido. Este hombre, que una vez al año viaja a Estados Unidos a capacitar a pastores que trabajan en las cárceles de ese país, forma parte de una gran estructura de los evangélicos que según él mismo se financia con un diezmo. "Se cobra un 20 por ciento del salario de los presos, que es de 290 pesos". Al momento del testimonio eran tres dólares.

El crecimiento del poder de los evangélicos comenzó en las cárceles hace dos décadas. Era un lugar oscuro donde nadie quería ir, según el pastor Oscar Sensini, el principal referente de Redil de Cristo, una de las iglesias pentecostales más grandes de Rosario.

"No usamos facas [cuchillos fabricados por los presos], sino la biblia para tomar un pabellón", afirmó el pastor pentecostal Sergio Prada, que concurre una vez por semana a la cárcel de Piñero. El religioso advierte que el preso que quiere ir a un pabellón evangélico debe cumplir reglas de conducta, como orar tres veces al día, dejar todo tipo de adicción, tanto a las drogas como al alcohol y al tabaco, y no pelear.

Rodeado de 90 presos en el pabellón 19 de Piñero, Prada grita que "ese hombre viejo tiene que morir". Anguilante cierra los ojos y llora. Él dice que sepultó a ese otro hombre, al asesino que está preso desde hace siete años. "No todos pueden, pero hay que intentarlo".

El pastor repite la semana siguiente el mismo ritual en el pabellón 20. Allí está Darío Berón, de 30 años, quien fue jugador profesional de fútbol. Debutó el 1º de diciembre de 2007 en Rosario Central. Llegó a jugar tres partidos y formó parte ese año de una gira por Estados

Unidos. Jugaba de 10. La habilidad con la pelota la demuestra todas las tardes a partir de las 14 cuando los presos salen a jugar al fútbol en el patio de la cárcel.

Dos años después de debutar en el primer equipo cometió un homicidio y fue detenido. Pertenecía a una banda narco conocida como Los Romero. Salió en libertad 2015 y volvió a jugar profesionalmente en otro club, Tiro Federal, de la segunda división. Solo duró dos meses en ese plantel porque volvió a la cárcel, con una condena a 13 años también por otro crimen. “La droga y la muerte arruinaron mi carrera. Ya es tarde pero ahora quiero vivir tranquilo”.

En la Unidad Penal N° 1 de Coronda, a 80 kilómetros de Rosario, las puertas de las celdas se abren a las 6 de la mañana. El día empieza con una oración y termina a las 23 de la misma forma. Los presos que recién llegan al pabellón 5 se ubican en el tercer piso, alejados del resto. “Allí están durante 30 días en un periodo de adaptación”, dice el pastor Sensini.

“En 30 días uno tiene que lograr que se despojen del viejo hombre. Desde ese momento la persona empieza a ablandarse, pero es necesario un trabajo permanente de oración. Nunca es por la fuerza. Eso no sirve. Empecé a visitar las cárceles porque yo venía de pequeño a visitar a mi padre que estuvo preso. Me crie sin padre”, sigue el pastor.

Uno de los ayudantes de Sensini es Juan Roberto Chávez, a quien conocen como Tuyanqui. Estuvo 16 años preso en varios penales de la Argentina. Los últimos ocho los pasó en Coronda, donde dice haber tocado fondo. “Vivía entre la mierda. No es una metáfora. Yo odiaba al mundo. Lo quería destruir. Era líder de los pabellones con una lanza de hierro. Vivía recluido en los buzones”, recuerda, en referencia a los pabellones de castigo. “Los chicos que recién entraban se convertían en monstruos”, dice Chávez. Trató de escapar de la cárcel, pero fracasó. Después se cosió la boca con alambre y empezó una huelga de hambre, se contagió tuberculosis, sintió que se moría: “Toqué fondo y tuve la revelación”.

“Como era un fanático de la violencia y la sangre me hice un fanático de la Biblia. Fui solo al pabellón 11 con la Biblia y convertí a todos en ocho meses. Era uno de los pabellones más feroces del penal.

Los convencí de que entregaran las armas, las facas, y lo hicieron voluntariamente. Nadie lo podía creer. Por eso digo que en la cárcel encontré la libertad", dice Chávez mientras ingresa al penal de Coronda y los guardias lo miran de reojo.

Tuyanqui abraza fuerte a José Pedro Muñoz, que vive sus últimos minutos como presidiario. "Ahora hay que ser más fuerte que nunca", le recomienda. Muñoz, 37 años, tiene su bolso armado y espera poder salir con libertad condicional el viernes 19 de noviembre de la cárcel, después de una condena a 18 años. Se casó hace tres años con Soledad Pucheta, con quien tuvo dos hijas, una de cuatro y otra de seis. Está nervioso y la espera se le hace interminable. Era sicario de Los Monos. Es oriundo del barrio La Granada, donde surgió esta banda criminal a fines de la década del 90 en Rosario. Su cuerpo tiene las cicatrices de la guerra narco que se vive en Rosario. El pecho hundido por dos disparos de escopeta y una herida que cruza todo su abdomen por un tiro con calibre 9 milímetros.

"Yo prendía fuego los búnkeres donde se vende cocaína con gente adentro. Lo hacíamos para que los vendedores de droga salieran", relató. Después los derrumban con martillos. Eran los puntos de venta de los rivales de Los Monos. "Esa vida quedó atrás. Me casé con una mujer evangélica que conocí en la cárcel y quiero de ahora en más predicar con mi testimonio. Estuve en el infierno", dice. Su alegría se demuele cuando llega un guardiacárcel y le avisa que seguirá en prisión, porque apareció otra causa en su contra. Resignado, a los pocos minutos se pliega a la ceremonia de oración con el resto de los presos.

29
LA RUTA HACIA EL MUNDO

“Pidan lo que quieran pero esto tiene que aprobarse hoy”, recomendó a los siete ediles Diego Garavano, el presidente del Concejo Deliberante de Villa Gobernador Gálvez, una ciudad de 80.000 habitantes que está separada de Rosario por una avenida. Aquel 7 de octubre de 2013 sobre la mesa del recinto había una carpeta color verde con el rótulo “Crematorio V.G.G.”, que unos minutos antes había enviado el intendente del Partido Justicialista, Pedro González, yerno de Garavano.

Un solo concejal se negó a aprobar esa ordenanza. Fue Carlos Dolce, del Partido Socialista, que pidió que se estudie el proyecto con mayor profundidad. “Sospeché que detrás del crematorio había algún negociado del intendente, pero lo vinculé con el tema inmobiliario”, advirtió. Se equivocó.

¿Quién podía sospechar e ir más allá, y pensar que detrás de la construcción de ese crematorio había un grupo narco transnacional? La “inversión” del cartel colombiano liderado por los hermanos Triana Peña formaba parte de los más de 10 millones de dólares que esta organización había lavado en la Argentina a través de 30 empresas que crearon en el país desde 2010.

Era la muestra de cómo el dinero del narcotráfico podía colarse por los puntos más débiles del Estado. Esas grietas dejaban el resquicio para que los fondos sucios se blanquearan en obras que no eran necesarias y por las que nadie pedía demasiadas explicaciones. En Villa Gobernador Gálvez, ciudad asediada por la pobreza y la violencia, el gobierno local alentaba en ese momento la construcción de un sistema para incinerar cadáveres. El proyecto era extraño.

Dos años después de que se aprobara la edificación de ese crematorio aparecieron algunas respuestas. El 17 de septiembre de

2015, Gendarmería allanó el depósito fiscal Binder, en Rosario, y tras un extenso peritaje los efectivos de esa fuerza y de la Aduana pudieron determinar con dos perros golden retriever que el cargamento de 46 toneladas de arroz que había pasado los controles de escáner contenía 12 kilos de cocaína.

Esa carga despachada por la empresa Euroexport SRL tenía como destino Guinea-Bisáu, donde el cereal iba a llegar a través del programa de Naciones Unidas “Hambre Cero”. El cartel liderado por los hermanos Triana Peña había comenzado a probar una nueva ruta por África, como punto intermedio, para luego llegar a Europa. El centro operativo de los colombianos en la Argentina funcionaba en Rosario, donde el puerto daba esas ventajas logísticas.

Las sospechas que levantaba el crematorio apuntaban al veterano cacique peronista Pedro González, quien falleció en mayo de 2017. En las calles de esa ciudad se libró parte de la guerra entre bandas narco de Rosario. Allí mataron en 2013 a Claudio Cantero, Pájaro, líder de los Monos, una muerte que disparó un raid de venganzas contra la familia Bassi, cercana al exintendente, a quien ayudaba movilizando en la flota de remises a los votantes en la época de elecciones.

El sol era implacable a las 14.26 de aquel 4 de diciembre de 2014. Guillermo Heisinger estaba a solo 20 metros del edificio del Concejo Federal de Inversiones, en la ciudad de Buenos Aires, pero prefirió no entrar. Decidió soportar el calor parado en la vereda del viejo edificio de Harrods para atender una comunicación que era importante. Lo primero que le preguntó a su socio Aldo Corizzo fue: “¿Vio la luz lo del crematorio?”. Ese jubilado que vivía en barrio Martin en Rosario y también tenía como domicilio el departamento en Alvear 1502, en el barrio de Recoleta, fue quien tejió el “negocio” en Villa Gobernador Gálvez. Ambos eran empleados del cartel colombiano.

En ese departamento lujoso donde vivía Heisinger, la Policía Federal secuestró a fines de 2015 la carpeta color verde que tenía el rótulo: “Proyecto Crematorio V.G.G.”. Estaba sobre un escritorio junto con fotografías del exfuncionario con Juan Pablo II y en otras dos con el entonces presidente Carlos Menem.

“Ya firmé con el Gordo González”, contó Corizzo aquella mañana de 2014 y preguntó si Carlos Yorelmy Duarte Díaz, uno de los capos

colombianos del cartel, había regresado de Uruguay. Tenía que reunirse con él en Rosario para pasarle las novedades. “Primero firmo lo del crematorio y después lo del puerto”, resumió Corizzo, en esa breve comunicación.

Faltaba cerrar otros eslabones de la cadena de “inversiones” que delineaba el cartel liderado por los hermanos Triana Peña para lavar dinero del narcotráfico y exportar cocaína hacia África. Pretendían manejar un puerto en la zona de Fray Luis Beltrán, ciudad ubicada al norte de Rosario, para exportar los cargamentos de arroz con cocaína de máxima pureza que Wilmar Yuriano Valencia Estrada, alias el Especialista, preparaba en la casa ubicada en el barrio de Arroyito de Rosario con un oncólogo rosarino: Gabriel Zilli, reconocido especialista en tratamientos contra el dolor a enfermos terminales.

Los peritos de Gendarmería estuvieron más de seis meses para determinar el proceso que había logrado el Especialista para cubrir con una fina película de cocaína cada grano de arroz. Nunca habían visto algo igual.

Las conversaciones entre Heisinger y Corizzo y uno de los jefes del cartel Duarte Díaz, según las escuchas de la causa, apuntaban a iniciar tratativas con el Ministerio del Interior y Transporte, que tiene jurisdicción sobre los puertos, para adquirir ese predio sobre el río Paraná.

Ninguna de los proyectos que tejió este grupo narco se pudo concretar por un motivo de fuerza mayor: con información precisa de la agencia Drug Enforcement Administration efectivos de Gendarmería allanaron el 16 de septiembre de 2015 el depósito fiscal Binder. Allí estaba listo para ser despachado hacia Guinea-Bisáu el cargamento de 40 toneladas de arroz, embebido en cocaína.

A diferencia de lo que ocurría en Rosario desde que estalló la guerra narco este rubro del negocio de las drogas no dejaba que corriera una gota de sangre. La violencia los dejaría expuestos, y no había competencia que eliminar. Los Monos mataban a sus rivales todo el tiempo, pero los verdaderos dueños del negocio del narcotráfico trasnacional no usaban violencia. Preferían el bajo perfil.

Desde que la DEA detectó a este grupo liderado por los hermanos Triana Peña, que operaban por el puerto de Rosario, no surgieron

investigaciones ni alertas sobre la salida de cargamentos de droga por el puerto. Eso no quería decir que no se utilizaran las terminales de Rosario para “exportar” cocaína.

La droga era un fantasma que navegaba por el río. Nadie lo percibía ni tampoco quería verlo. En la reunión de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés), realizada en 2022 en La Paz, los miembros de la organización advirtieron sobre el peligro de que la hidrovía Paraguay-Paraná se transforme, especialmente durante la pandemia, “en una nueva vía para el tráfico de drogas”. Pidieron además extremar los controles aéreos a Bolivia, de donde proviene la droga.

El organismo alertó por primera vez sobre una “rearticulación” del tráfico de cocaína en Sudamérica a través de la hidrovía, al indicar que Paraguay se convirtió en una zona de acopio de esta droga, que se produce en Perú y Bolivia, y que desde los puertos guaraníes tiene salida hacia África y Europa. Paraguay y la Argentina estaban unidos por la hidrovía. En solo unos meses se secuestraron 40 toneladas de cocaína en los puertos europeos, que habían salido por la hidrovía.

El fiscal Ysaac Ferreira, de la Unidad Antidrogas, que investigó varios casos de contrabando de drogas en la hidrovía, reconoció que uno de los puntos más débiles es la falta de escáneres en los puertos privados. En Paraguay hay solo tres escáneres para control de cargas, lo cual, según el funcionario, hace imposible inspeccionar los contenedores.

Más allá de los controles también la lupa se pone en las terminales de donde salieron las cargas, como Terport, que es una nueva terminal que se construyó en 2018. El senador paraguayo Pedro Santa Cruz también apuntó contra la empresa Gregser- PTP Warrant, a la que el expresidente Horacio Cartes —según él— le dio la concesión por veinte años. PTP Group había ganado la licitación durante la gestión del socialista Antonio Bonfatti de la zona franca de Villa Constitución.

“La concesión fue aprobada y según fuentes oficiales el canon que debía pagar PTP era de 5000 dólares al año, un verdadero despropósito para una terminal tan importante”, resumió. PTP Group enfrentó una investigación en Paraguay, pero fuentes de la empresa señalaron que fue cerrada. “No se encontró nada. En su mayoría PTP

Group traslada fertilizantes hacia Paraguay, por lo que hacemos el tráfico inverso", apuntaron.

Esta firma de capitales argentinos tiene varias terminales a lo largo de la hidrovía. No solo maneja un importante muelle en el puerto de Villeta, sino también la zona franca de Villa Constitución, en Santa Fe, y en el departamento Soriano, Uruguay, donde adquirió un predio de 266 hectáreas en Punta Arenal. También en el norte de la hidrovía en Puerto Murtinho, localidad brasileña de Mato Grosso do Sul ubicada a la vera del río Paraguay, a 1400 kilómetros de Santos.

En 2016, la diputada Elisa Carrió presentó ante la justicia una denuncia contra los empresarios Lucas Gancerain y Guillermo Misiano, acusados de cometer delitos de contrabando y evasión, pero la causa tampoco prosperó. Gancerain fue nombrado en 2021 jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo hasta 2023 de Aníbal Fernández. Gancerain tuvo un rol protagónico en la gestión, tras ser puesto a cargo del accionar de las fuerzas federales en Rosario. A la clase política rosarina no le despertó ni siquiera un interrogante. La única que habló siempre de este hombre y sus empresas fue Carrió.

La droga que salía por los puertos debía acopiarse cerca de Rosario. Era todo un engranaje logístico que debía moverse. En Ibarlucea, a 10 kilómetros de San Lorenzo, donde están ubicados la mayoría de los puertos, se detectó que funcionaba una zona de acopio de grandes cantidades de cocaína, que regenteaban engranajes que continuaron la tarea del clan Loza, cuyos jefes están detenidos. El proveedor de la cocaína era Jorge Adalid Granier Ruiz, de nacionalidad boliviana, detenido en 2023 cerca de San Pablo, a través de una pata local que era Fabián Pelozo, que ejercía como lugarteniente, y había montado pistas de aterrizaje en campos agropecuarios cercanos, como en Monte Maíz, en el límite entre Santa Fe y Córdoba.

Granier Ruiz, según información suministrada por la DEA a la justicia argentina, fue quien alojó en su departamento en Buenos Aires a Fuminho, sobrenombre que usa Gilberto Aparecido Dos Santos, una figurita difícil de detener del Primer Comando Capital. Fue detenido por la Policía Federal de Brasil y la DEA en un lujoso hotel de Mozambique el 13 de abril de 2020. Durante los últimos años se había convertido en uno de los líderes más fuertes de PCC.

Fue la primera vez que se encontraron nexos directos entre bandas narco que funcionan en la Argentina con el Primer Comando Capital. Hasta ese momento habían aparecido lo que las autoridades denominaban “lobos solitarios”. Sin embargo, los indicios eran cada vez más firmes de que esta organización internacional, con base en Paraguay y Bolivia, fuera de Brasil, había hecho pie en el país, a través de alianzas con otras bandas.

En 2022 reaparecieron los colombianos como gestores de tráfico de cocaína desde Rosario. Aunque no se habían producido detenciones ni secuestros importantes de droga siempre quedaba pendiente el misterio de la zona del Gran Rosario, que es un enclave importante para la salida de la droga.

En diciembre de ese año un engranaje clave cometió un descuido. O fue por la ambición de cobrar un negocio que se moldeaba desde hacía meses. Gabriel Jaime Londoño Rojas fue detenido en diciembre de 2022 en el aeropuerto de Abu Dabi, cuando pretendía ingresar a ese país de los Emiratos Árabes, una región que iba a ser el destino de unos 3000 kilos de cocaína. Una parte de esa carga fue secuestrada en Rosario y otra salió por el puerto de esta ciudad.

Según fuentes de Interpol en la Argentina, Londoño Rojas era uno de los tres integrantes de un cartel colombiano que estuvieron supervisando en Rosario la salida de estos cargamentos de cocaína que tenían como destino final Dubái. Los investigadores de la Policía Federal Argentina consideran que la droga servía de provisión para esa región del Golfo Pérsico, donde se organizó la Copa del Mundo en diciembre de 2022, y donde el precio de la cocaína era entre cinco y ocho veces más cara que en Europa.

Londoño Rojas tenía pedido de captura internacional pero la cédula roja, como se denomina técnicamente a esa instancia judicial, no figuraba en la web de Interpol, por lo que los investigadores deducen que posiblemente este colombiano de 55 años haya creído cuando voló desde Bogotá a Abu Dabi que nadie lo buscaba.

Londoño Rojas es uno de los tres colombianos que coordinaron el envío de 1658 kilogramos de cocaína desde Rosario a Dubái, pero antes de que se concretara el despacho de la droga por el puerto de Rosario el cargamento, en agosto de 2022, fue secuestrado en un

galpón en el barrio Empalme Graneros de Rosario. Se sospechaba que otro cargamento similar, que salió de la terminal rosarina y fue secuestrada en los puertos de Santos y Rotterdam, tenía el mismo destino y pertenecía a la misma organización internacional.

Un día antes de que la Policía Federal incautara uno de los cargamentos más grandes de la historia en Rosario llegó a la ciudad el embajador de Estados Unidos, Mark Stanley, en un plan de visita protocolar, que incluyó degustación de alfajores de la zona y varias selfies. Si fue una casualidad o no, nadie lo sabe, pero desde hace tiempo la DEA puso el ojo en la zona. La información inicial para comenzar esta investigación que terminó con la incautación de la droga comenzó semanas antes en la oficina de la DEA en Bogotá.

La agencia norteamericana pretendía trabajar de manera directa en Rosario, a partir de algunos vínculos con agentes que se habían capacitado en Estados Unidos, como el exjefe de la Tropa de Operaciones Especiales, Maximiliano Bertolotti, pero la falta de respaldo del gobierno de Santa Fe y la desconfianza en la policía llevaron a que pensaran asentarse en San Nicolás, provincia de Buenos Aires.

En la Argentina, Londoño Rojas y Ramírez Duque eran dos fantasmas, pero se sospecha que estuvieron en la provincia de Santa Fe para generar la operación de tráfico de droga más grande de la historia.

El encuentro entre varios miembros del cartel se hizo en el country Aguadas, en Funes, un lugar selecto pegado a Rosario en el que viven funcionarios políticos, judiciales y empresarios importantes de la ciudad, que nada sabían de que sus vecinos estaban preparando uno de los contrabandos de cocaína más grandes de la historia.

En Aguadas había alquilado de forma temporaria una casa en el lote 183, según la causa judicial que está en el juzgado federal de Campana, Marco Páez, un bonaerense que había convocado Gabriel Nicolau, un narco del conurbano que era junto con José “Tano” Sofía, un veterano protagonista del mundo del hampa bonaerense, oriundo de Haedo. Ambos eran los encargados de manejar el cargamento en Rosario, cuyos dueños eran los colombianos.

Esa mañana del 22 de junio en la reunión en Aguadas estaba el

representante del cartel internacional Antonio Ramírez Duque, otro colombiano, que seguía de cerca la operación y controlaba a los argentinos. Duque había llegado a Buenos Aires dos días antes y quien lo llevó hasta Rosario en su camioneta Volkswagen Amarok fue Nicolau. La reunión, según las tareas de inteligencia que constan en la causa, duró una hora. Las cuestiones importantes se definen sin demasiada charla.

Duque regresó a Buenos Aires y se fue a España, pero un mes después volvió a la Argentina, y viajó a otra reunión en Funes. Esta vez el encuentro no se hizo en el country Aguadas, sino en una casaquinta con pileta en calle Tandil al 2400, otra propiedad que habían alquilado de forma temporaria. Una característica que aflora en esta organización es el bajo perfil que pretendían imponer a las gestiones los representantes de este cartel. Por ejemplo, no se alojaban en hoteles, sino que preferían alquilar inmuebles de manera temporaria fuera de Rosario, donde los registros son menos rigurosos. Nicolau dormía en un complejo de cabañas en Victoria, Entre Ríos.

Al otro día, el 25 de julio, Duque y Nicolau fueron en la camioneta Amarok hasta un galpón en Juan B. Justo 2885, una zona modesta de barrio Empalme Graneros. Allí vive Ramón V., un hombre que se dedica a la herrería y es quien habría preparado los dos lugares donde se acopió la cocaína, uno muy cerca de su casa, en Génova al 2400, y otro en la zona sur, a pocas cuadras del puerto, en Cerrito 17.

Londoño Rojas y Ramírez Duque aparecen como los enlaces de la organización. Fueron dos fantasmas en Rosario, donde no se gestó ninguna relación con una pata local del narcotráfico. Los colombianos se movían por un universo paralelo a las bandas narco rosarinas, trenzadas en problemas de violencia extrema desde hacía casi dos décadas. “Si esos dos mundos se tocan puede ser terrible. Eso ocurrió en lugares como Ecuador y parte de México”, alertó un analista internacional. Por ahora esos mundos conviven por separado.

30
NUESTRA PLATA Y LA DE ELLOS

Hay un apostador sentado en una mesa de póker bonus en el VIP del casino City Center que juega como un magnate. Es el año 2012. Pone 250 pesos, que equivalen entonces a unos 40 dólares, para recibir las primeras dos cartas. Cuando la banca ofrece cartas él sigue poniendo fichas para recibirlas pero no mira ninguna. Juega a ciegas. Paga 1250 pesos por partida y por casillero, que son siete en total, pero se queda seis horas.

Si gana le pagan pero en cualquier mesa de un casino ganar es lo más infrecuente. Si pierde, que es lo más usual, no se marcha. Pase lo que pase no mira las cartas. Se le escurren sumas siderales de dinero en minutos y cuando eso ocurre le destina la misma muletilla al crupier que retira las fichas: "Pero, pipi, me hiciste perder, te la llevaste toda".

El hombre que está allí jugando en el salón preferencial es David Delfín Zacarías. Un año después dejará de asistir. Lo atrapan en un chalet en Funes, en el conurbano de Rosario, entre bidones de acetona cocinando cocaína con 300 kilos de esa sustancia recién elaborada en la casa. En 2018 le dan 16 años de prisión por comercio de drogas. Enseguida se le inicia un proceso de lavado por todo lo que atesoró en su entorno próximo: una remisería oficial en Granadero Baigorria con 30 autos habilitados, 45 vehículos propios, 40 inmuebles, cocheras y hasta un gimnasio de varios pisos levantado con excepciones municipales en el centro de San Lorenzo, la ciudad donde San Martín ganó su primer combate, y donde le revocan los permisos cuando lo atrapan en su cocina.

Lavar ese dinero adquiriendo bienes o empresas es algo que de ser descubierto es perseguido por la ley. Pero un casino es una formidable aspiradora sin riesgos del dinero de la economía negra o delictiva

como el narcotráfico. Y una inmejorable maquinaria de blanqueo porque en ellos lo único que hay que hacer para jugar es poner plata a cambio de fichas. En *Ozark*, una de las series más exitosas de Netflix, un asesor financiero y su esposa son forzados a lavar una fortuna de efectivo para un cártel de droga mexicano. Lo que hacen, además de comprar favores a la política y ocultar peligros medioambientales, es instalar un casino a la orilla del gran lago en el centro de Misuri. El casino de Rosario es el contribuyente número uno de la ciudad. A las arcas municipales también entra dinero narco.

Los trabajadores de las mesas tenían simpatía por David Zacarías por dos de sus rasgos: dar un trato afectuoso hacia cada empleado que lo atendía y ser un fortísimo propinero. Los crupiers saben que en el VIP los apostadores del mundo narco se sientan al lado de empresarios encumbrados de la ciudad de todos los rubros cuyos nombres, de tan reiterada asistencia, se conocen. “Acá vemos narcos todos los días”, dicen.

Lo que se juega en ese reducto selecto es plata en grande y no entra cualquiera. Es un recinto con las atmósferas pintadas en tantas películas: oscuro, cubierto de cortinas que impiden ver hacia adentro y hacia afuera, a donde solo ingresan los pagadores, empleados y personal de limpieza. Los clientes comunes no pasan. El apostador diferencial debe mostrar un piso de dinero para las apuestas y registrarse. En caso de que el cliente lo desee se le abre una cuenta, en pesos o en dólares. El cocinero de cocaína más importante de la región tenía ese privilegio.

Las relaciones entre el terreno de la legalidad y el campo del delito tienen, más que parentesco, relaciones estables y perdurables. El plantel profesional de Rosario Central entrena en un predio de 21 hectáreas en Arroyo Seco dotado con estadio para 12.000 personas, siete canchas de entrenamiento, seis de fútbol infantil, dos gimnasios y hasta un hotel que fueron levantados en tiempo récord en el año 2005. El proyecto lo impulsó un emprendedor que en lo formal era propietario de una vinería y dueño de una historia de excentricidades que serían un banquete para cualquier novelista. Se llamaba Patricio Gorosito y murió a mitad de 2018 a los 68 años. Nacido en el ámbito de una familia humilde de esa pequeña ciudad situada 30 kilómetros

al sur de Rosario, cimentó desde los años 90 un pasar económico con origen enigmático, pero que sus vecinos decían conocer muy bien en cuchicheos de pueblo.

La imprecisa procedencia de la fortuna de Gorosito dejó de ser misterio cuando en 2012 lo detuvieron en Barcelona como organizador del envío de una tonelada de cocaína a Europa. Por esa detención de la policía española fue condenado a 19 años de prisión en una causa conocida como Carbón Blanco.

Lo desconocido del origen del financiamiento del Club Real Arroyo Seco, que insumió 10 millones de dólares, no lo era para la Secretaría de Inteligencia del Estado, la actual Agencia Federal de Investigaciones, que alimentó con informes reservados sobre este tema al diario uruguayo *La República*. Este medio publicó una larga nota cuando Gorosito se convirtió en gerente del Club Deportivo Colonia en el país vecino. En el artículo se consignaba además que había levantado en dos años el impresionante predio deportivo en su pueblo natal “para desarrollar sus actividades non sanctas”.

También parecían otros muchos conocer, salvo el Estado, que la plata con la que Gorosito armó su fortaleza deportiva no venía de la vinería Patricio primero, como se llamaba. El 11 de noviembre de 2006 Real Arroyo Seco jugó la final del Argentino A con Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay. Los hinchas de este club, en los chats de las publicaciones de AFA, trataban a su presidente de narco en comentarios de a decenas.

Cuatro años después de esa inversión Rosario Central compró ese magnífico complejo deportivo edificado con dinero del tráfico de cocaína en el equivalente a 4.610.000 dólares, es decir, la mitad de la inversión del fundador del proyecto. El que decidió adquirirlo fue un exintendente radical de Rosario, Horacio Usandizaga, que era presidente del club auriazul. Quien presentó la posibilidad del negocio era el encargado de seguridad del club, Ricardo Milicic, antiguo jefe de policía de Rosario primero y de la provincia de Santa Fe después. El negocio se celebró en una inmobiliaria céntrica de Rosario, propiedad de Alfredo Buhler, que era en ese momento vicepresidente del club y ostentaba igual cargo en la Cámara Inmobiliaria de Rosario.

Para los dirigentes de Rosario Central que cerraron la compra del

predio del Club Real Arroyo Seco en junio de 2008 la principal dificultad de la negociación era nada menos que localizar al hombre que debía venderlo. Por esos días Patricio Gorosito vivía escondido. Estaba aterrado, según admitió el día de la escrituración, por la urgencia de pagar una deuda, obligación que lo había empujado a desprenderse a bajo precio de la entidad cuya construcción había financiado desde 2004. Lo que les dijo a los gestores de la compra era que temía por su vida. Y por eso requería con tono desesperado el anticipo de un millón de pesos.

Los directivos de la entidad auriazul aprovecharon esa urgencia para comprar las magníficas instalaciones del club a un precio muy por debajo del valor de mercado. Pero le dijeron que de la única manera que le cederían el anticipo pedido sería en el momento de la escrituración. El pánico que sentía Gorosito frente a su apremiante situación hizo que la operación se concretara en un horario insólito: a la 1.30 de la madrugada. Fue en la inmobiliaria Buhler de Tucumán y Santiago.

En ese acto nocturno se firmó la cesión del predio de Arroyo Seco por 16.100.000 pesos, con la entrega de 2.500.000 en concepto de adelanto y el acuerdo de la liquidación en cuotas mensuales consecutivas. Tras contarlo, Gorosito ensobró los dos millones y medio y murmuró a los presentes algo que años después pareció sugestivo: que debía ir volando a la provincia del Chaco, donde tenía una empresa, y de allí a Bolivia.

Precisamente en Quitilipi, Chaco, está la empresa Carbón Vegetal SRL a la que la Justicia Federal de Resistencia determinó en 2015 como la pantalla utilizada para la exportación a Portugal de casi mil kilos de cocaína, que le valió la condena a Gorosito.

La premura por la venta de las instalaciones de 28 hectáreas en Arroyo Seco fue comunicada a la comisión directiva de Rosario Central que encabezaba Usandizaga por el exjefe de policía provincial y entonces directivo Milicic. El enlace había sido la esposa de Gorosito. Y era ella quien refería que su marido mantenía una deuda que lo aterrorizaba. A tal punto llegó el temor que en medio del trámite Buhler fue a Uruguay con Gorosito para poder negociar en una atmósfera más calma.

Los que llevaron adelante la gestión de compra fueron Buhler, Usandizaga y el tesorero Hugo Ruggiero. El 26 de junio de 2008 se acordó mediante la escritura 100 las condiciones de la operación. Gorosito no aparecía en persona como vendedor sino que el predio estaba inscripto a nombre de una sociedad off shore uruguaya denominada Bavella SA. El acuerdo de pago fue el siguiente: 2.500.000 pesos en el momento de la escritura y el saldo de 13.600.000 a cancelar en 40 cuotas iguales, mensuales y consecutivas de 340.000 pesos cada una.

Gorosito, que había construido su club con dinero narco, cobró mensualmente esa obligación pagada por Rosario Central en un convenio celebrado en una inmobiliaria habilitada.

En economía legalidad e ilegalidad son campos delimitados. Pero la plata porfía en mezclarse. A mitad de 2013 se descubrió una red que abastecía de cocaína de fabricación propia a seis ciudades del sur santafesino. En 2017 diez personas de esa estructura fueron condenadas a distintas penas por narcotráfico en un juicio abreviado. El responsable del grupo era Leonardo Popea, un residente en Funes, la misma ciudad donde había sido atrapado Zacarías en plena cocción de pasta base.

Popea había progresado de estafador de poca monta en los 80 a millonario a partir de la instalación de dos laboratorios de fabricación de cocaína para la elaboración propia. Cuando lo atraparon tenía 29 kilos de esa sustancia y una magnífica mansión a su nombre frente a Funes Hills, uno de los barrios cerrados más prósperos del departamento Rosario.

A Popea lo procesaron por blanqueo de activos al igual que a sus dos hijos, que aparecieron como testaferros. Uno de estos jóvenes, Alejandro, figuraba como empleado de una joyería. Pero la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos detectó algo alucinante. El descubrimiento fue que Alejandro Popea no trabajaba en un negocio de alhajas sino que era su dueño. El dictamen de la Procelac indicaba que la familia compró una joyería en pleno centro de Rosario: La Casa de las Alianzas, de San Luis y Maipú, tres años antes de que empezaran los problemas que llevaron a Popea a juicio.

El flamante propietario se inscribió como monotributista en el mismo momento en que incursionó en la compra de ese comercio. Hasta entonces no había presentado declaraciones juradas ante la AFIP. Y sin registro de actividad previa resultaba ser dueño de una histórica joyería rosarina a la edad de 25 años. Cinco meses después aparecía como dueño de dos inmuebles en el centro de Rosario de los cuales, decía la resolución fiscal, se desconoce el origen de los fondos con los que fueron adquiridos. Un crecimiento económico en coincidencia, según el dictamen del procesamiento, con los tiempos en que su padre prosperaba sin actividad económica declarada, un indicio de la necesidad de usar testaferros para ingresar el dinero al mercado legal.

No todo en el campo de la droga es caer fulminado a tiros en una esquina o multiplicar el trabajo de las funerarias. Hay una parte de preocupación en esta empresa que tolera mal el conflicto. En una pesquisa de 2015 el auricular devolvió limpia la voz del dueño del teléfono interceptado que luego sería, merced a esa escucha judicial, detenido como jefe de una banda de vendedores de droga de la zona oeste de Rosario, en diciembre de ese año. No hablaba de armas, ni de perseguir competidores, ni de asegurar búnkeres. “Tenemos que lograr que esta actividad se vea como un negocio. Alejémonos de la violencia. Existimos porque hay un mercado que nos pide lo que vendemos. Tenemos que vender. Nada más”.

El que aconsejaba a un colaborador tomar el camino de la mesura es un hombre llamado Fabricio Lorincz de entonces 38 años. En 2019 fue condenado en juicio oral como jefe de un grupo de vendedores organizados de cocaína en un vasto territorio urbano donde durante años imperó su cuñado, Esteban Alvarado, quien no se destacaba por métodos pacíficos para ejercer su patronazgo en la zona.

Lorincz, que estaba casado y convivía para entonces con la hermana de Alvarado, añoraba para sí un futuro menos próximo a los avatares de una carrera criminal que al campo de la gente de negocios. Sus aspiraciones colapsaron en el momento que una brigada policial entró a su casa ubicada a quince cuadras del Monumento a la Bandera.

Pero su sueño no era inconcebible en una ciudad como Rosario donde, al igual que en cualquiera de nuestras sociedades, el dinero

informal y el formal están mezclados en el circuito económico. Donde los excedentes del narcotráfico se incorporan con espontaneidad a la vida cotidiana en los espacios y rutinas más visibles. Una ciudad en la que personas que tienen repulsión moral por la droga y su violencia participan de las actividades que la economía de la droga no solamente impulsa, sino que hace posible.

En 2021 dos fiscales federales se ponen a seguir los bolsos cargados de dinero que todas las semanas salen de locales de droga en Villa Banana. Notaron así que terminaban en una compañía financiera del centro de Rosario, en España al 800. Una conexión con dos puntos comunes: un mismo negocio que vincula a vendedores de cocaína con vendedores de divisas y un fallo judicial en el que terminaron insertos los nombres de unos y otros.

El dueño de los quioscos de cocaína era Julio Andrés Rodríguez Granthon, un piloto comercial peruano establecido en 2012 en Rosario, con tres condenas por narcotráfico, que dirigía desde su celda en Marcos Paz la actividad de varios quioscos de cocaína. Gustavo Shanahan es un exdirector del concesionado Puerto de Rosario, entrepreneur privado y dueño de la financiera a la que los enviados del peruano Rodríguez llegaban a cambiar billetes por dólares.

El día que allanaron la financiera encontraron allí más de 30 millones de pesos y 30.000 dólares sin respaldo contabilizado. El intermediario entre el búnker y la financiera estaba agendado como "Ivandólar" en el teléfono que el traficante peruano tenía en su calabozo. Cuando siguieron al arbolito supieron que se llamaba Iván Ferrarons. Vivía en el country Aldea Lago en el barrio de Fisherton y efectivamente se dedicaba a comprar y vender dólares.

En 2023 Shanahan espera un juicio porque su financiera absorbía, según los fiscales, efectivo de transacciones con droga. "Es un profesional de las ciencias económicas con instrucción universitaria orientada al entendimiento de transacciones comerciales, financieras, bancarias, entre otras. Estas cuestiones deben ser atendidas a los fines de analizar el rol que tuvo en la organización criminal investigada", decía el dictamen fiscal.

Shanahan no conoce a Rodríguez Granthon. Pero el juez federal Marcelo Bailaque los procesa a los dos como miembros de la misma

estructura de comercio. Los dólares que el contador Shanahan le vende le sirven al piloto peruano para comprar en Bolivia la cocaína que venderá en Rosario.

La violencia y los negocios no tienen un vínculo esporádico. Cuando se investigaba el crimen del prestamista informal Lucio Maldonado se supo que el GPS de su Chevrolet Cruze, la noche que desapareció, había marcado el frente de una casaquinta a 15 kilómetros de Rosario. Con la precisión del reporte satelital el fiscal ordenó requisar el lugar. Cuando entraron al caserón encontraron, arriba de una mesa, seis recibos de impuestos y servicios. Algunas estaban a nombre de Esteban Lindor Alvarado, aquel escabroso jefe rosarino de una banda de ladrones de autos de San Isidro, siempre ubicado en los bordes del narcotráfico. Luego se estableció que dos hijos suyos, de 14 y 17 años, figuran como propietarios de esa casa.

Los fiscales decidieron allanar las direcciones referidas en las boletas de impuestos. Uno de los domicilios era una mansión de dos plantas con pileta climatizada del country Funes Hills, uno de los más exclusivos del departamento Rosario. Allí encontraron viviendo a la mujer de Alvarado. La sorpresa mayúscula llegó al allanar otra propiedad. Era un segundo piso en los Condominios del Alto, un complejo de alta gama construido por desarrolladores inmobiliarios al lado del shopping Alto Rosario. En ese departamento valuado en 250.000 dólares encontraron viviendo al segundo jefe de Inteligencia de Drogas de la Policía de Investigaciones de Rosario, comisario Javier Makhat.

Lo que despunta en toda esa constelación de propiedades es, para los fiscales, el indicio concluyente de una robusta estructura de lavado de activos del delito organizado en el mercado inmobiliario, que fue el boom económico de la ciudad a partir de los 90, cuando las inversiones de bienes raíces concentraron en las torres frente al río Paraná y en los barrios privados a actores de las finanzas, del agro, de las profesiones liberales y del narcotráfico.

En el festival de fideicomisos que viene de esa etapa se mezcló todo. Encontrar a un comisario en una casa de supuesta propiedad de un narco tiene mucho de estruendo pero poco de sorpresa. El título de la propiedad que presentó el comisario Makhat está inicialmente a

nombre de una persona que figura como directivo de la Bolsa de Comercio de Rosario. Sea en una torre inteligente o en un barrio exclusivo, los que ponían por entonces dinero en el pozo eran, bajo el nombre de los administradores de la sociedad fiduciaria, indetectables. Los vendedores de droga de Rosario armaron sus patrimonios dejando fardos de billetes en fideicomisos que no exigían ningún estudio de ingresos. Luego podían transferirlos sin necesidad de escriturar.

El mayor exportador de cocaína en los últimos diez años en la zona de Rosario le vende a uno de los mayores clubes argentinos un inmenso complejo deportivo a través de una inmobiliaria cuyo titular es vicepresidente de la cámara del sector. El dueño de un laboratorio de fabricación de la misma sustancia tiene una empresa de remises en la ciudad de Granadero Baigorria que era, al momento de su detención, la más utilizada por los funcionarios municipales de esa ciudad del área metropolitana. Las parejas de Rosario compran sus alianzas en una joyería adquirida por el hijo insolvente de un narco condenado.

El hallazgo de boletas de impuestos de 14 propiedades en la casa de un narco conducen a la policía a allanarlas. Algunos de esos lugares son reductos económicos de clases acomodadas de Rosario como Funes Hills o Condominios del Alto. En uno de esos departamentos encuentran viviendo a un comisario de Inteligencia de Drogas. Ese edificio fue construido mediante un fideicomiso administrado por un directivo de la Bolsa de Comercio rosarina. El desarrollador inmobiliario es el dueño de una de las financieras privadas más grandes de la ciudad.

El criminólogo inglés Jock Young medita sobre las representaciones sociales del delito con una especie de chiste negro. “Los progresistas dicen ‘el problema son los otros, hay que ayudarlos’. Los conservadores dicen ‘el problema son los otros, hay que matarlos’”. Entre las supersticiones más endurecidas de la sociedad contemporánea campea firme la idea de que el mundo de la droga es el campo del otro. Muy recientes, muy vivos y muy próximos, los casos de Rosario se empecinan en mostrar que el delito es lo que nos pasa a nosotros. Y no precisamente a nosotros como víctimas, que es la forma predilecta de representarnos nuestro lugar en relación con el delito.

Con esas personas a las que llamamos narcos convivimos en la sociedad y mantenemos relaciones cotidianas en nuestros hábitos de consumo, de esparcimiento, de movilidad y de contacto.

Como a Fabricio Lorincz, el comercializador de cocaína que como empresario buscaba estar lejos de los métodos cruentos del mercado de drogas, a gran parte de la sociedad no le gusta la violencia de este terreno. Pero para comprar un departamento compartimos plata en el mismo pozo inmobiliario, nos subimos a sus remises, vamos a sus financieras, desde el municipio tomamos en impuestos lo que gastan en el casino o les compramos anillos en sus joyerías. Las distinciones simbólicas y el shock moral siguen siendo fuertes. En nuestros intercambios, a diario, estamos con ellos.

31
EL ETERNO RETORNO

Sergio Berni subió al auto blindado y se acomodó en el asiento de atrás. Le ordenó al chofer: “Vamos a dar una vuelta”. De una caja de metal que estaba debajo del asiento sacó una pistola 9 milímetros, que guardó en una sobaquera del lado izquierdo de su chaleco. Pasó su mano por el pelo embardunado en gel que lo dejaba tirante. Con ese peinado hacia atrás quería imponer la imagen de hombre duro. Estaba vestido con ropa marca Columbia, color caqui, como la que usan los cazadores deportivos. Le quedaba holgada, pero ese hombre robusto, de más de 1,85 metros, necesitaba moverse con comodidad. “Esperen a que lleguemos. Estamos yendo”, dijo Berni con un tono cortante por teléfono. Del otro lado de la línea, estaba uno de los comandantes de Gendarmería, que había quedado a cargo de un allanamiento en un búnker en el barrio Ludueña, en el oeste de Rosario.

Hacía menos de un mes que 3400 gendarmes habían “desembarcado” en Rosario, como si fuera una fuerza de ocupación, con un operativo de alto impacto social y de escaso efecto en la lucha contra el narcotráfico, como se va corroborar casi una década más tarde. En 2022, nueve años después del debut de la Gendarmería en Rosario, la estadística demarca el fracaso: en ese año los homicidios rompieron el récord de 2013 —cuando se cometieron 264 asesinatos— al alcanzar los 280 crímenes.

La policía tenía mucho que ver en este proceso. En octubre de 2013 otro hecho había provocado una conmoción fuera de lo común: el atentado a la casa del entonces gobernador Antonio Bonfatti, quien años después, con explicaciones controvertidas, abandonó la imputación contra el joven que admitió que había disparado contra su residencia en el barrio de Alberdi.

El lugar al que Berni acudía esa noche de mayo de 2014 no estaba

muy lejos del centro, en Urquiza al 4000. En realidad, era un pasaje de casas bajas de clase media, donde a mitad de cuadra había un pasillo en el que vendían cocaína y marihuana. Era cerca de la medianoche. En una plazoleta que está a unos cien metros había unos jóvenes asando unos chorizos a la parrilla. Festejaban un cumpleaños en lo que parecía el patio público de una casa. Los muchachos quedaron estupefactos cuando vieron venir los carros de asalto y otro grupo de gendarmes más numeroso que había arribado en un colectivo. Ante el desconcierto, los que fumaban apagaron los porros al instante.

En la cortada, que tenía una luz difusa, amarillenta, los chicos que esperaban, algunos de ellos sentados en el cordón, a ser atendidos en el búnker salieron corriendo. Otro grupo de gendarmes los esperaba al final de la cuadra. Los emboscaron sin mucho esfuerzo. El grupo de asalto que tenía que entrar al puesto de drogas se sorprendió por un cartel que estaba pegado en la puerta de una casa. “El búnker es al lado”, decía el texto escrito con fibrón negro. Los vecinos estaban hartos de que a toda hora les tocaran timbre para comprar cocaína. Una vez había llegado la policía de Santa Fe que casi les destroza la casa, porque se había confundido y estuvieron por allanar el sitio equivocado. Vivir al lado de un lugar donde se vende drogas y funciona las 24 horas era una tortura.

Los gendarmes entraron al pasillo y en pocos minutos terminaron su tarea. Dentro del búnker había dos chicos menores de edad, que fueron reducidos sin ninguna resistencia. Los compradores, que eran más de 30, quedaron esposados y sentados contra una pared en la vereda. El olor dentro del búnker era nauseabundo. Un hedor intenso y ácido rompía en las narices de los gendarmes, que subieron sus cuellos de combate para tratar de aminorar el olor. En un reducto de no más de seis metros cuadrados había más de 50 botellas de litro y medio cargadas de orina. Un tacho de lata estaba repleto de mierda. Los dos pibes que atendían el búnker hacía tres días que estaban encerrados. Tenían agua, algo de comida, y unos 100 gramos de cocaína fraccionada que tenían previsto vender esa noche. Los gendarmes no sabían qué hacer con las botellas con orina. No las podían dejar allí, ni tampoco tirarlas en cualquier lugar. “¿Qué hacemos con la meada?”, preguntó uno de los uniformados. Sus jefes se miraban sin tener una

respuesta clara. Pidieron el apoyo de una camioneta y cargaron en la parte de atrás las botellas. Berni llegó para hablar con los medios. Repitió las frases que usaba desde que en abril de 2014 desembarcaron por primera vez los gendarmes en Rosario para "emprender una lucha frontal contra el narcotráfico". El operativo había sido considerado un éxito.

"Hoy allanamos el búnker instalado para captar la demanda que había quedado desabastecida por el cierre de las instalaciones desarticuladas este fin de semana. La oportuna intervención del juez arrojó resultados gracias al efecto sorpresa", aseguró Berni, mientras detrás suyo las cámaras registraban a unos 30 muchachos esposados y sentados contra la pared, con sus cabezas tapadas.

Una semana antes de ese allanamiento "exitoso", el entonces secretario de Seguridad de la Nación había disertado en la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la OEA, en Washington. Ante funcionarios de 34 países había explicado de qué se trataba el llamado Operativo Rosario.

Vestido de traje gris y una corbata roja y azul, Berni describió que la actividad iniciada en Rosario ese año tenía como objetivo "completar la tarea de conjuración del crimen y la violencia en zonas urbanas sensibles, recuperar el control del territorio por parte de las autoridades legítimas e imponer el sistema de derechos y garantías vulnerados por el avance de bandas delictivas".

Con su tono castrense, el entonces funcionario del gobierno de Cristina Fernández dijo que "el 9 de abril a las 16 horas se llevaron a cabo 67 allanamientos simultáneos ordenados por la Justicia Federal". "Las operaciones fueron resultado de una pormenorizada investigación judicial encomendada a los detectives de las instituciones dependientes de la Secretaría de Seguridad", apuntó. No era necesario profundizar en los detalles. Porque ese día gran parte de los búnkeres que fueron allanados estaban vacíos. La sospecha fue que la policía de Santa Fe "vendió" el operativo.

El "éxito", palabra que repetían desde el gobierno nacional y desde el gobierno del socialista Antonio Bonfatti, no estaba en la cantidad de droga secuestrada. En seis meses de operativos incautaron 6,9 kilos de cocaína, según los registros oficiales. El "éxito" no tenía nada que ver

con la seguridad. Era una momentánea maniobra de la política. Berni había encontrado, a su manera, una estrategia que no tenía una relevancia profunda sobre los grupos narcos, que seguían con su negocio, al adoptar otras maneras de venta, sino en el plano social y político. La llegada de los gendarmes a Rosario había "pacificado" los barrios de la bronca de la gente. No de los narcos. Los vecinos encontraban en los patrullajes de los gendarmes —que ocupaban el rol de la policía, que deambulaba siempre por zonas grises— un escuálido respaldo del Estado.

Los patrullajes de Gendarmería generaron un cambio fuerte en los barrios, donde se practicaba la llamada "pacificación" que había planteado Berni. El objetivo más fácil para mostrar esa estrategia fueron los jóvenes, siempre "bajo sospecha". Se practicó una especie de colimba a cielo abierto, como planteó el colectivo Juguetes Perdidos en un trabajo que editaron en forma de libro que se llamó *Quién lleva la gorra*, donde describían la experiencia de la llegada de la Gendarmería a los barrios del conurbano bonaerense a partir de 2010 y 2011, con el llamado Operativo Centinela, el experimento que ensayó la entonces presidenta Cristina Fernández —a través del decreto 2099/10 y 864/11— para calmar las críticas que surgían en las encuestas con el problema de la seguridad como nudo.

En Rosario ocurrió en un principio algo similar. Hubo una fascinación con el gendarme como personaje dentro de la crisis de seguridad. Su perfil cargado con las herramientas que aparentaba ser un agente más severo y honesto que el policía era lo que más seducía al electorado. Por eso la promesa de un nuevo arribo de la Gendarmería pasó a formar parte de la arquitectura proselitista de los sucesivos gobiernos.

El operativo diseñado por Sergio Berni no provocó ninguna baja en los indicadores más problemáticos en materia de seguridad. En 2014, el año en el que debutó la Gendarmería en Rosario, se cometieron 250 crímenes, solo un 7 por ciento menos que el año anterior, que fue el quiebre dentro de lo que se llamó la guerra narco, porque ese año se produjeron asesinatos emblemáticos dentro del universo criminal rosarino, como el de Pájaro Cantero, líder de Los Monos, y Luis Medina, "empresario" narco, entre otros. La tasa de homicidios en

2014 fue de 20,8 muertes cada 100.000 habitantes, contra la de 22 que se registró en 2013 en el departamento Rosario. Si el objetivo del plan de Berni era contener la violencia el fracaso era palpable. Tampoco fue eficaz en cuanto a la desarticulación de bandas. Hasta ese momento miembros de Los Monos no tenían causas en el fuero federal por drogas. Recién a principios de diciembre de 2015, en el llamado Operativo Los Patrones, se logró abrir proceso a más de 20 integrantes de la banda, en una causa que fue el debut del clan Cantero con el apelativo "narcos".

Ante cada crisis de seguridad, que fue algo casi permanente en la última década en Rosario, el poder político aplicó la misma receta a nivel nacional, que Berni había decretado como "exitosa". Entre 2014 y 2023 se repitió nueve veces el mismo argumento que —fuentes de la Nación y la provincia— admitían que nunca funcionó: un comando unificado para que coordine la lucha contra el narcotráfico. La desconfianza mutua hacía naufragar los intentos de un trabajo compartido.

En 2016, Patricia Bullrich, en ese momento ministra de Seguridad, decidió romper el molde en medio de una de las mayores crisis políticas de Santa Fe generada por la inseguridad y la violencia. El detonante fueron las multitudinarias marchas bajo el lema "Rosario Sangra". Una serie de crímenes provocaron el estallido social. No eran asesinatos que se producían casi todos los días en la periferia de la ciudad, con víctimas casi anónimas. El efecto fue similar al que ocurrió en 2005 en la Plaza del Congreso, cuando más de 100.000 personas marcharon en reclamo de justicia y hartas por la inseguridad, tras el secuestro y asesinato de Axel Blumberg.

La gente había salido a la calle a expresar el fastidio de haber tenido que cambiar los hábitos de vivir en una ciudad que históricamente fue áspera, por su trama social, pero que nunca irradiaba miedo. El entonces ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, se había guardado por orden del gobernador. Su rol en el gobierno socialista de Lifschitz era amortiguar los golpes. Pero en esta coyuntura tan especial había aparecido Bullrich con una impronta similar a la de Berni, pero recargada. Después del escándalo en que derivó la triple fuga de los hermanos Martín y Cristian Lanatta, y

Víctor Schillaci el 27 de diciembre de 2015, la ministra de Seguridad había quedado debilitada, al borde de su renuncia. Y Rosario era la oportunidad para redimirse. También para pasar algunas facturas. Ella decía que quien le informó que los tres prófugos estaban detenidos en Cayastá había sido Pullaro. En el calabozo de la pequeña comisaría solo estaba detenido Martín Lanatta. En el debut del nuevo gobierno, Bullrich había quedado mal parada.

El objetivo de Bullrich era intervenir la policía de Santa Fe en Rosario con fuerzas federales. El plan se lo había comentado a Mauricio Macri. Ella consideraba que la policía provincial era parte esencial del problema, tanto por sus altos niveles de complicidad como de inoperancia. Berni tenía el mismo diagnóstico. Una muestra de esa connivencia la planteaba con la detención de Ramón Machuca, conocido como Monchi, hermanastro de Guille Cantero, que fue detenido en el barrio del Bajo Flores en junio de 2016 después de estar prófugo durante tres años y burlarse de las autoridades santafesinas cada vez que aparecía en un canal de TV. En una entrevista con la periodista Virginia Messi del diario *Clarín* confesó en julio de 2023 que una de sus pretensiones era entregarse en el reality show *Gran Hermano*.

Lifschitz pensaba que detrás del proyecto inicial de Bullrich estaba la intervención total de la provincia. El entonces gobernador socialista había sucedido a Antonio Bonfatti, una gestión atravesada una violencia inédita, de la que él mismo había sido víctima. Lifschitz le había ganado al candidato del PRO Miguel del Sel por apenas 1776 votos. Su gestión había arrancado con síntomas claros de debilidad, algo que iba a dar vuelta cuatro años más tarde.

El gobernador Lifschitz viajó a Buenos Aires, se reunió con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y le explicó que la apuesta de la ministra de Seguridad podía terminar en un desastre. Usó su muñeca política para rodear a Bullrich, y lo consiguió, porque Macri terminó por bajarle el pulgar a su proyecto de intervención. Años más tarde, ya con el traje de precandidata presidencial, Bullrich remarcaría que ella no estaba equivocada, y que las dudas del gobierno nacional provocaron que los males en Santa Fe “no se cortaran de raíz”. Lo más extraño de la dinámica de la política era que el ministro al que le iba a

intervenir la policía, Pullaro, en 2023 iba a sacar casi un millón de votos.

Cuando en 2012 la Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo al entonces jefe de la policía, Hugo Tognoli, el socialismo salió a plantear que el gobierno nacional, en ese momento, en manos de Cristina Kirchner, aspiraba a generar un plano de tal conmoción que la estrategia terminaba en una intervención de la provincia. Los socialistas se preocupaban por enunciar teorías conspirativas, quizá reales, pero nunca lograron solucionar el principal problema que enfrentaban: una policía que era parte del problema y sobre todo de la mafia.

Lo único que se tocaba de la policía eran nombres, pero la estructura institucional, que databa de una ley de 1974, no solo era obsoleta sino que había servido para mantener el statu quo. Durante a gestión de Bonfatti, Raúl Lamberto, a cargo de la seguridad, había intentado modificar la trama institucional de la policía al crear jefaturas regionales, en paralelo a las tradicionales unidades regionales que tenían el liderazgo de la fuerza de seguridad en cada departamento. El proyecto, que aspiraba a generar un mayor control político, sumó más ruido y burocracia.

La relación entre Bullrich y Lifschitz era tirante, pero el que logró recomponer su vínculo fue Pullaro, después del desaguisado de los prófugos en Cayastá. Como jefe de la Gendarmería del operativo en Rosario la ministra designó a Claudio Brilloni, un hombre que luego se transformaría en el ministro de Seguridad de Omar Perotti, pero que tenía buen diálogo con todos los sectores políticos.

La fascinación de la población con los gendarmes comenzó a perder afinidad con el paso del tiempo y con los problemas de violencia que se mantenían estables. El fracaso gubernamental se transformó en un fenómeno transversal. Irradiaba a todos los frentes políticos, tanto a nivel nacional como provincial. El único año en que bajaron los homicidios, de manera muy leve, fue 2017. Después la estadística retomó la tendencia ascendente.

El retorno del peronismo al poder en Santa Fe de la mano de Omar Perotti elevó la vara al inicio de su gestión con un discurso inaugural que planteó “cortar el vínculo con el delito”. Era un eslogan similar al

de “paz y orden” que lo había llevado a ganar las elecciones en 2019. Perotti designó a Marcelo Saín como ministro de Seguridad, que tenía una oportunidad histórica de reformar la policía y emprender cambios de fondo en la estructura política que gestionaba la seguridad. Hasta su llegada a Santa Fe Saín tenía algo que lo diferenciaba con el resto de sus antecesores: prestigio por su trayectoria académica y en la creación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Saín ocupaba un cargo en Santa Fe, como director del Organismo de Investigaciones, puesto que había ganado por un concurso que lo tuvo a él como único participante. Dos años más tarde iba a quedarse sin nada. En marzo de 2021 renunció al Ministerio de Seguridad y la Legislatura lo destituyó del cargo de director del Organismo de Investigaciones en septiembre de 2021.

Casi todo el arco político se había unido para dejarlo fuera de todo. No solo molestaba su alto perfil mediático, con audios que se viralizaban en los que ponía en ridículo al propio gobernador, sino las investigaciones que impulsaba sobre actores clave, como Armando Traferri, el senador peronista del departamento San Lorenzo, que fue elegido como una especie de símbolo y articulador de la connivencia con el crimen organizado.

Saín no solo estaba en permanente conflicto con los otros ministros en el gabinete sino también con Sabina Frederic, designada como al frente de la cartera de Seguridad de la Nación, con quien compartían el claustro docente en la Universidad de Quilmes.

Un año después de asumir, Saín presentó una propuesta para reformar la policía, que nunca prosperó, porque el que jamás estuvo convencido fue su propio jefe político: Omar Perotti. Una de las partes del proyecto apuntaba a que la policía no iba a realizar más tareas administrativas, sino que cumpliría funciones operativas. Las actividades burocráticas las absorbería el Ministerio de Seguridad, que —de acuerdo con el proyecto de ley de seguridad pública— tendría mayor poder para “fortalecer capacidades de conducción y control político de la policía”.

Esa era parte de la visión sobre la reforma en seguridad que tenía en mente Saín, al que Perotti ordenó que antes de que ingresara a la Legislatura pusiera el proyecto en discusión en foros, como los de las

universidades de Rosario y Santa Fe.

Los tres proyectos fueron considerados como la base de la reforma policial, que incluso tenían un alcance mayor porque abarcaban también el sistema de seguridad en su conjunto, con un ministerio con mayor poder político sobre la fuerza. Las leyes eran las de "seguridad pública", que es el paraguas de otras dos que son "ley del sistema policial" y la de "control del sistema policial".

"Por un lado, los problemas de seguridad ocupan un lugar destacado en la agenda social y política, y por otro el sistema político no ha sido capaz, hasta ahora, de sancionar una legislación que regule los principales instrumentos institucionales para su abordaje", señalaba el documento. A excepción de Santa Fe, las provincias más grandes tenían un marco normativo más moderno como Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba y Mendoza.

Antes de que Perotti anunciara que se enviarían estas leyes, el ministro de Seguridad amenazó con renunciar si no se concretaba este paso, en medio de una fuerte pelea con el jefe de la policía, Víctor Sarnaglia, que después dimitió. Si se aprobaba ese nuevo marco jurídico, el titular de la policía perdía poder y quedaba relegado, como ya ocurría durante la gestión de Saín, porque la fuerza se iba a dividir en tres: la parte de seguridad preventiva, que iba a estar a cargo de la policía; la Agencia de Investigaciones y de Control.

Para Saín, que se enredaba en el terreno de la polémica, estos tres proyectos eran la base de cualquier cambio con una matriz institucional que lo diferenciaba de las políticas coyunturales, marcadas por los hechos de inseguridad. Saín confiaba en que la policía se iba a cuadrar bajo la conducción política. El problema, como escribió en el libro *El Péndulo*, con respecto a la reforma policial en la provincia de Buenos Aires era la resistencia del establishment político.

Esa resistencia era lógica en Santa Fe, una provincia donde todos los sectores con representación cuidaban su espacio, sin despertar ningún conflicto y menos estridencias. El socialismo había impuesto esa dinámica desde que llegó al poder en 2007, con el acuerdo de peronistas y radicales y sobre todo la justicia. Nadie se animaba a patear ningún tablero. Saín tampoco llegó a patearlo, aunque se jactaba en proferirlo.

Por eso su destitución, algo inédito en la provincia, fue exprés. Una causa judicial por supuestas tareas de inteligencia ilegal terminó de excluirlo de todo, con la amenaza de que podía ir preso, tras un allanamiento plagado de irregularidades a los funcionarios que habían llegado con su gestión.

Pero la investigación quedó atascada en una permanente demora, bajo la controversia de la prueba y la lentitud del procesamiento de los datos, con escuchas que volvieron a poner a Saín en el centro del escándalo. En una coyuntura de enorme fragilidad para un gobernador con minoría legislativa, con fuertes enemigos dentro de su partido y conflictividad en la justicia el camino de pelea con todos que eligió Sain, aunque acertara en sus diagnósticos, no podía sino hundirlo. Se trasladó al Ministerio de Seguridad de la Nación, con Aníbal Fernández, quien luego también le pidió la renuncia.

Después de su salida del gobierno retornó la vieja idea del regreso de la Gendarmería como bálsamo para calmar las recurrentes crisis. Ante el fracaso de las políticas de seguridad, ahora en manos de dirigentes sin ninguna preparación, Perotti volvió al mismo libreto del socialismo de victimizarse por la seguridad ante la Nación.

El gobernador peronista no tenía plan B, después de la salida de Saín. Y eso quedó claro con experimentos absolutamente disímiles en el área. Perotti reemplazó a Sain con un abogado sin experiencia en el campo de la seguridad, Jorge Lagna, que sucumbió jaqueado por una violencia teatral con fenómenos nuevos como balaceras extorsivas a locales gastronómicos, y por el boicot del elenco ministerial que tenía por debajo. Luego el gobernador eligió a Rubén Rimoldi, un funcionario del sistema policial tradicional que se había retirado como comisario general en 2008. Tras una más de las recurrentes crisis eligió a Claudio Brilloni, el comandante de Gendarmería que Bullrich había destinado a Santa Fe unos años antes. Una ensalada de nombres y orientaciones dispares. Que no podía prosperar en medio de desnortado manejo general no ya de la cartera sino del gobierno todo. A fines de agosto de 2023, restando cuatro meses para culminar el año, de las partidas anuales dispuestas para seguridad en el presupuesto provincial solo se habían ejecutado el 16 por ciento.

Seguridad fue un área acechada por paracaidistas. Entre ellos,

algunos peligrosos, como un extraño personaje al que muchos le tenían miedo, y la mayoría desconfiaba: Horacio Lucchini, un hombre que no era abogado pero provenía del juzgado federal de Venado Tuerto. Allí era una especie de cadete con influencias. Pocos días después de asumir como director de Análisis Criminal Estratégico del Ministerio de Seguridad, Lucchini fue denunciado por una integrante de la banda de Los Monos.

Mariana Ortigala, testigo en la causa de Esteban Alvarado, les entregó a los fiscales Schiappa Pietra y Edery audios y videos en los que Lucchini pedía dinero a cambio de otorgarle beneficios en la cárcel a Guille Cantero. Lucchini había visitado a Ortigala con un personaje oscuro, ligado al narcotráfico rosarino, como era Matías Herrera, condenado por tráfico de drogas.

No hay muchos antecedentes en la historia reciente de Santa Fe de funcionarios que ocupaban cargos de relevancia que aparezcan con este nivel de complicidad involucrados con organizaciones criminales. Pero lo increíble es que Lucchini nunca fue imputado.

En ese diálogo que aparece en un audio que está en posesión de la justicia, Lucchini le responde a Matías Herrera: “Vamos despacito. Vos dame una mano para que no pare el quilombo. Hay que seguir. Hay que armar algo que sea un impacto. No hablés nada por teléfono”. Esa frase llamó la atención a los investigadores porque unos días después se produce el ataque a balazos al restaurante El Establo, en pleno centro de Rosario, que generó una gran repercusión.

Esa conversación es más amplia, aparecen otros nombres, incluso de funcionarios nacionales, y la grabó Herrera para mostrar las influencias que tenía Lucchini, que —según la denunciante Mariana Ortigala— le ofrecía a Guille Cantero brindarle mejores condiciones de detención en Marcos Paz a cambio de 150.000 dólares.

Ortigala era la encargada de llevarle el mensaje a Cantero y es la que dejó expuesto al exfuncionario, que será imputado. “Herrera me trae esta grabación para demostrar las influencias y el poder que tiene Lucchini”, contó la mujer, la testigo que se salvó de un ataque sicario en marzo de 2020 organizado por Alvarado.

Lucchini fue designado como director de Análisis Criminal Estratégico en diciembre de 2021, luego de que se produjera la

renuncia de varios funcionarios del Ministerio de Seguridad que habían llegado con Saín.

Ortigala dijo que mantuvo tres reuniones con Lucchini, que se acercó a ella, porque sabía que es “amiga de Vanesa Barrios”, la mujer de Guille Cantero. El contacto lo había hecho Herrera.

El fiscal Edery explicó que “Lucchini no era abogado, sino que cumplía un rol en el juzgado federal que consistía en ser un asistente, una especie de ordenanza”. Lo que se investiga es si las influencias que pretendía vender eran reales o no.

La primera reunión entre se produjo en octubre de 2021, cuando Lucchini aún no había sido designado. Luego, Ortigala mantuvo otros dos encuentros. En uno de ellos, según Ortigala, ya estaba en el cargo. “En un momento me empezó a pedir cosas extrañas. Me dice que él podía ‘conseguir beneficios’ para Guille Cantero. Por ejemplo, los beneficios serían frenar requisas en la cárcel, que le habiliten 24 horas de teléfono fijo y la posibilidad de que Guille tenga un teléfono celular. Todo esto me lo decía para que yo se lo transmita a Cantero. Incluso, se mostró ofuscado porque al Guille le habían devuelto el teléfono fijo y supuestamente esa gestión fue de él y él no recibió nada a cambio. A mí me llamó la atención porque esa devolución fue legal, quiero decir que el teléfono se lo iban a devolver igual”, declaró Ortigala.

La testigo aseguró que el funcionario, que se jactaba de tener contactos en la justicia y en el gobierno, le propuso un tarifario. “Para frenar allanamientos, adulterar pruebas, realizar traslados, engarronar a otra banda pedía 20.000 dólares por cada cosa”, reveló la testigo.

En su declaración ante los fiscales, Ortigala contó que Lucchini, que se sumaría efímeramente al Ministerio de Seguridad tras la renuncia de Saín, le dijo que podía tramitar beneficios mayores para Cantero como un traslado, que él estaba gestionando los hilos para subir al gobierno y que para eso necesitaba un par de golpes sociales. Estos eran hechos de resonancia social para, desde la gestión, sacar partido. “Concretamente me pidió que Guille mande a balear distintos lugares o que le entregue a él datos de donde estaban las cocinas de droga para hacer que las descubre él y beneficiarse”.

La testigo presentó además las capturas de pantalla de los diálogos

que mantenía con el supuesto intermediario Matías Herrera. En uno de esos mensajes se menciona a otro narco de Los Monos, Gustavo Martinotti, alias Toro, exjefe de la barra de Rosario Central preso en Ezeiza. Según los diálogos presentados en la justicia, Martinotti pretendía que lo trasladaran al penal de Piñero, a 20 kilómetros de Rosario. “El traslado 40.000 dólares. Si quiere protección de parte del dopale [sería Lucchini, según Ortigala] son 100.000 dólares”, escribió Herrera.

Nadie del gobierno de Perotti dio explicaciones sobre este desaguisado. Muchos descargaban las culpas sobre el sucesor de Saín, Jorge Lagna, que también es oriundo de Venado Tuerto. Otros proferían que el sostén de Lucchini venía de más arriba.

La permanente subejecución presupuestaria en seguridad, el área más crítica de Santa Fe, nunca aclarada. Lo indetenible de los crímenes de alta lesividad y el escaso conocimiento de sus lógicas. La incapacidad total de contener el gerenciamiento del delito desde las cárceles. La desconexión entre Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación encargado de la persecución penal. La escasez de los policías capacitados para el delito complejo. La falta de una política de Estado concertada y perdurable de inteligencia criminal y prevención en las ciudades. Todo esto fue revelador de la falta de un plan. O mejor, de una política envejecida que ha trascendido gobiernos, con dificultades notorias para cambiar para bien la vida de quienes habitan Rosario, dar previsibilidad a sus rutinas y moderar los miedos comunitarios.

32
LA MAGNITUD DE LO QUE SE VENÍA

En abril de 2004 el presidente de Tiro Federal de Rosario cerró el estadio y el campo deportivo en pleno campeonato. Fue una medida sin antecedentes en el país. Los aprietes de la barra lo obligaron a trasladar su fútbol en el mejor momento de su historia. Meses después coronaría, en esas condiciones, algo que no parecía caber ni en un trastornado sueño de barrio. Un club de un vecindario castigado y pobre llegaba a la primera división del fútbol argentino.

No solo eso. Jugó dos torneos y con buen desempeño. Era increíble. Ese modestísimo cuadro de Ludueña, un arrabal de ferroviarios situado a pocas cuadras de la cancha de Rosario Central, se medía con River, Boca, San Lorenzo, Independiente, Racing. Podía perder. Pero les jugaba de igual a igual. Lo entrenaba el profesor Jorge Castelli. Y tuvo al goleador del campeonato, Javier Cámpora, un punta muy oportuno salido del barrio Rucci, a veinte cuadras de ahí.

En ese momento de efímero esplendor deportivo la acechanza de la violencia a Tiro Federal no le dio respiros. La notoriedad de un equipo en lo más alto del fútbol argentino, que exigió grandes despliegues de seguridad los días de partido, ayudó a disimularlo en parte. Pero los que conducían el club estaban asfixiados por las exigencias. Dirigentes, jugadores y empleados soportaban la extorsión de los que vivían a la vuelta. Que a veces se habían criado adentro del complejo, porque habían jugado en divisiones inferiores del club.

En 2013 la realidad del barrio Ludueña era agobiante. El asesinato de Mercedes Delgado, una voluntaria de un comedor comunitario, había gestado una fuerte movilización del barrio, observada por los violentos desde sus recovecos con las armas en la mano. En esa atmósfera Carlos Dávola, el mismo presidente que en 2004 había advertido que no podía mantener al equipo en el estadio, volvió a

cerrar el club.

Hasta el momento de ajustarse este texto el estadio no reabrió. Como tantas afrentas sangrientas o ultrajes es un asunto más sepultado en el olvido. Pero la situación habla de un fracaso comunitario y de una capitulación cotidiana. La violencia que se pasea como el bamboleo de un oso en la ciudad distorsionada, los hijos maltratados por la falta de proyecto y de compañía, los tiros sin pausa de chicos que mueren y dejan muertos. Demasiado como para que el Fortín, como llamaban a la cancha, siguiera abierta.

Después del cierre Tiro Federal cayó en un pozo sin fondo. En cuatro temporadas desapareció del mapa del fútbol nacional.

Cuando por primera vez le pusieron candado al club Dávola dijo, en una conferencia de prensa que estuvo en la tapa de los diarios locales, que las instituciones santafesinas no captaban, lo expresó con estas palabras, la magnitud de lo que se venía. “Yo sí lo vi venir y no lo digo con orgullo”, decía el dirigente. “Todo se nos iba de las manos. Llegar a primera división es un trabajo de esclavos y lo hicimos. Pero después perdimos todas las batallas. Los pibitos que gritaban los goles en la cancha eran los mismos que venían a extorsionarnos. Eran nenes a los que vimos crecer y nos fuimos porque no queríamos denunciarlos. Pedimos auxilio públicamente pero nadie nos ayudó. No alcanzan las buenas intenciones, hay que estar rodeados de un sistema que funcione”.

Una tarde al terminar la práctica se escucharon balazos en la puerta que da a Felipe Moré y Casilda. Se asomaron los jugadores y vieron a un joven sobre una moto al que habían matado de siete balazos. Fue el último día de actividad en la cancha. En 2023 a las instalaciones las cuida la Gendarmería. Pero están vacías. No las usa nadie.

El presidente de un club de barrio que logra la hazaña de llegar a primera se ve forzado a abandonar la sede. En la otra punta de la ciudad los socios de un club de pescadores histórico, en la bajada Mangrullo, se marcharon a la fuerza porque enviados de Los Monos lo coparon en una irrupción armada. “La hacemos corta. Les damos la única posibilidad de irse. Avisen a los conocidos que ni se arrimen”. El Viejo Cantero pone a un hombre de confianza como encargado del bufet. Los socios dejan de ir. Los nuevos ocupantes no se van más. El

tema es mencionado hasta en el juicio. Pero los usurpadores nunca se fueron.

Situaciones desviadas, anómalas y paradójicas ingresan en el terreno de lo esperable. En una tarde del verano de 2019 una licenciada en Economía que investigaba los patrimonios de actores del campo criminal encontró una caja con la cabeza de un perro en el patio de su casa. Dos días después percibió el sonido de una moto en la noche, un frenazo y ocho balazos que impactaban en el frente de su casa. Dos de los plomos atravesaron una ventana y pasaron a 60 centímetros de donde estaba su abuela. Adentro también jugaban dos nenes en edad de primaria invitados a una pijamada por uno de sus hijos.

Hacía dos meses que un compañero de trabajo de ella en la fiscalía, un policía investigador, le pedía con insistencia detalles de pesquisas que él no tenía motivos de tener. Eran contenidos reservados del celular del acusado Esteban Alvarado a quien ella le había tocado investigar por su perfil narco. Antes ese policía era un amigo estrecho. Había estado en su casa tomando fotos del cumpleaños de 15 de su hija. Ahora, frente a la caja con los restos del perro y los balazos, Marina Marsili entendía que lo que le estaba pasando tenía que ver con el legajo que investigaba.

El día siguiente al atentado el policía que trabajaba con ella no apareció por la fiscalía. Sí fue el día posterior. Se dirigió a ella sin hablar con nadie, se puso de rodillas frente a ella y llorando le dijo: “Perdoname, perdoname”. Un año después lo condenaron por pasarle datos reservados de la pesquisa al entorno de Alvarado. Una de las pocas cosas que admitió Alvarado en el juicio en que lo sentenciaron a perpetua fue que él había dado la venia para lo de la cabeza del perro. También le pidió disculpas a Marsili. Dijo que el ataque a balazos a su casa había salido de sus allegados pero que él no lo había ordenado.

Lo impensable se vuelve posible. Las zonas que eran un límite para el crimen son profanadas. Se normalizan hechos asombrosos. Como dispararle a una parrilla en el centro de la ciudad con cien clientes durante un feriado largo. O tirar frente a la puerta principal del estadio de Newell’s el cadáver de un chico que caminaba a diez cuadras para pasar un mensaje entre las facciones de una misma banda criminal. O coser a tiros la casa de un gobernador, o las viviendas de

funcionarios judiciales, o contra cuatro abogados penalistas en diez años, o sedes penitenciarias, comisarías, fiscalías, bancos, casas velatorias. Contra escuelas primarias o contra el súper del suegro de Lionel Messi.

El presente en Rosario impone la narración de una ciudad que despide el miedo por la boca. La incógnita aterradora para muchos no es salir a la calle sino lo que el futuro representa. A veces de lo que hay que liberarse es de esa incertidumbre como sea. Eso hizo Joan, el chico que a los 19 eligió emanciparse de una vida como dependiente en una pequeña verdulería familiar y ofrecerse como tirador del narco del barrio, porque en ese cambio de vida hay un sueño de superación que no existe en la vida esperable para uno de su condición. En la Rosario del 40 por ciento bajo el umbral de pobreza el porvenir es una promesa de asfixia.

Y la política, además de fracasar en dar respuestas en el campo de la seguridad, no tiene para muchos vecinos la formulación de un plan de vida. Las economías criminales, aún las más desavenidas, sí lo tienen. Y no es siempre con un arma de fuego o con violencia sino proporcionando contención o sostén.

Pero en el horizonte urbano bajo y escuálido de los frágiles siempre está la posibilidad del padecimiento. A fines de 2019 se leyó el veredicto en el juicio a una organización de comercio de drogas. Era la segunda vez que en los Tribunales Federales de Rosario juzgaba por narcotráfico a miembros de Los Monos. Guille Cantero, el líder, recibiría una de sus tantas condenas.

La mayoría de los que esperaban la sentencia eran personas desconocidas. Antes de la sentencia el tribunal invitó a estos seres anónimos a decir sus últimas palabras. E imprevistamente fueron estos acusados, no las celebridades juzgadas, las que llenaron de novedad la mañana.

Eran todos hombres humildes que admitieron haber vendido drogas pero no ser narcotraficantes, ni pertenecer a banda alguna, algo que el mismo fiscal dijo que era cierto. Lo que se investigó no había sido el accionar de una banda sino de una red de personas, la mayoría sin conexión, las cuales en el escalón más bajo vendían como rebusque. Casi todos eran trabajadores informales muy modestos que ni sabían

quiénes manejaban el negocio. Vendedores ambulantes, fruteros, albañiles, pintores, lavacoches, que aceptaban que habían encontrado en la venta de una mercancía prohibida, no en la violencia, un recurso de última para mantener a sus familias.

Era notorio el destrozo que la cárcel les había causado. Todos llegaron al juicio con el rótulo de narcos. Algunos no aceptaban hablar. Conteniendo la voz quebradiza, uno que se llamaba Marcelo Romero se animó. “Soy una persona que trabaja. Siempre mantuve a mi familia como pintor. Pero las cosas no fueron bien. No conozco a mi hijo de un año y medio. Hace tres años que estoy preso. Soy el único sostén de mi familia. Es todo lo que quiero decir”. Otro, Gustavo Fernández, recibió tres años y tres meses de prisión. Como llevaba ese tiempo encarcelado se fue a su casa. “No pertenezco a ninguna banda. Estoy con el deseo de ver a mi madre. Quiero darle esos besos que le mandé en cartas, tomarla del brazo y pasear con ella. Cada día puede ser único a los 86 años que ella tiene”.

Ninguno tenía idea de que en esa malla donde eran el último nudo estaba el líder de Los Monos como organizador. Así pasa en una economía clandestina y próspera. Para la mayoría de los que asistían el juicio era el momento de comprender que esos desdichados habían encontrado en la droga, en una mercadería que se vende bien, un refuerzo de su ingreso. Atendían una frutería, llevaban a sus hijos a la escuela, conversaban con los vecinos, comían con sus padres los domingos y pasaban un papel de cocaína para sumar un poroto extra. De estos omnipresentes seres acorralados siempre se sabe poco o nada.

Las historias aludidas en este libro muestran un costado rutinario de las balaceras en Rosario. Ataques ordenados por personas jóvenes a tiradores que aún transitan o apenas salieron de la adolescencia en un contexto de venta de drogas. Eso explica el 75 por ciento de los hechos con muertos o heridos de arma de fuego.

Los clientes de la violencia en su rol instrumental, los chicos que tiran, ni siquiera necesitan saber que todo el campo de sus expectativas está fuera de la economía formal. Sus padres y sus abuelos tampoco lo supieron.

Esa plataforma movediza de la cual constantemente van cayendo hace que centenares de chicos aparezcan sin pausa entrenados como

gatilleros. Y no es que son reclutados sino que se ofrecen de manera racional porque la misma sociedad que los invita a todas las variantes del consumo les demuestra al mismo tiempo que no hay otro lugar para ellos.

Muchas franjas barriales de Rosario están consolidadas como guetos. No hay integración plural entre sus poblaciones y otros espacios. La pobreza estructural forma nichos donde no se establece el intercambio humano. Presente y enérgica, lo que sí existe es una apelación constante a consumir. Y al mismo tiempo una negación de las desventajas.

En esas condiciones sin escapatoria lograr las cosas como sea para una vida fugaz ni siquiera es una idea. Pero sedimenta fuerte lo mismo que el rencor. Una comunidad del desprecio, que segrega y margina, produce desprecio en cuentagotas que explota en tantos niños a los que manda a la oscuridad de los murciélagos.

Hacia 2013 se manifestó en Rosario una transformación radical que venía armándose desde mucho antes. Existían los homicidios pero eran la mitad de los que se expresan diez años después. Lo que creció más que un fenómeno de grandes bandas fue la dispersión de patrullas desharrapadas de mucha gente que proviene de la marginalidad, que viven vidas fugaces, que son conscientes de esa brevedad. Grupos con gerentes de 25 años que activan desde la cárcel a ejecutores de 15 a 18. Esa inexperiencia se traduce en una violencia muy vehemente, descompuesta y sin mediaciones.

Los ejemplos de chicos captados para ejercer violencia, todos detallados cada día en audiencias judiciales, son un fenómeno torrencial en Rosario. Exponen no ya conductas desviadas sino un prototipo acabado que nuestra sociedad fabrica en serie y con éxito. Los que salen de circulación porque van a la cárcel o son ejecutados tienen una larga hilera de reemplazantes.

Tres rasgos fundamentales hacen a la cruenta idiosincrasia de la ciudad. A nivel más superficial la violencia es el modo de regulación donde, sin líderes fuertes, nadie disciplina a nadie. En un mercado fragmentado y dinámico, que produce mucha plata, la forma de conquistar terreno para hacer dinero es con disputas.

El segundo rasgo es que ese mercado violento tiene operadores nada

estáticos en el campo económico legal. En octubre de 2021 mataron a un chico de 24 años que había sido jugador de rugby en el Club Provincial en un complejo de edificios conocido como barrio Latinoamérica. Se llamaba Sebastián Mandón. Lo ejecutaron ante vecinos un mediodía en un pasillo de los monoblocks por una deuda de drogas. Mientras el gabinete criminológico recogía las evidencias del asesinato del chico a veinte cuadras de esos edificios allanaban una financiera. Su dueño es un inversor inmobiliario que además fue director del puerto de Rosario. Fiscales federales llegaron a esa oficina porque detectaron que una banda que controla puestos de droga cambiaba el dinero obtenido con ese comercio por dólares en la financiera. El intermediario que al menos dos veces retiraba la plata de los búnkeres para ir a comprar estaba registrado al menos dos veces entrando a la financiera. ¿Sabía el financista que le vendía dólares al encargado de un búnker? Probablemente no. Pero igualmente hacía negocios con él sin requerir de dónde salía su dinero.

Finalmente hay un tercer rasgo o escalón de la violencia. Que son las estructuras de protección estatal a la criminalidad. No todo termina en Alvarado o en Cantero sino que más bien empieza. Los juicios muestran cómo las fuerzas de seguridad actuaron para regular los manejos delictivos de las bandas dejando hacer, proveyendo armas o actuando en contra de unas para favorecer a otras. Quisieron controlar pero no fueron eficaces. La dinámica de un mercado multimillonario las visibilizó porque no lograron ser consistentes en la cobertura de la actividad de las organizaciones más grandes o pequeñas. Al no poder impedir la violencia quedaron al descubierto.

Las conexiones entre todas las partes que trabajan para los inversores del dinero del delito no exigen presencia física. No los veremos sentados a una mesa ajustando los movimientos de cada parte. Pero cada parte garantiza el suceso de la empresa ilegal. Lo que se viene mostrando en Rosario es que en esa mesa conjetural también está sentado el Estado. De la balacera al casino City Center que en 2020 mató a un apostador se derivó que había una estructura para explotar el flujo del dinero del juego. Todo empezó al verse que el ejecutante de las extorsiones de Guille Cantero, chantajeaba al empresario de juego ilegal. Investigando eso se supo que el capitalista

pagaba sobornos al exfiscal regional de Rosario y a un exfiscal adjunto. Y que eso financiaba campañas proselitistas de la política con representación institucional. En ese orden clandestino está una parte de la política como componente y otra que sin participar la tolera.

El polvo de los barrios y sus ausentes tapa a los sectores profesionales que permiten que circule el dinero de los narcos. El constructor que durante años hizo edificios y recibe a un inversor con una valija sin controlar de dónde vienen los billetes colabora con eso. También los abogados que les dan sustento, no los que defienden a acusados esporádicamente, sino los que están vinculados a los grandes nombres del crimen durante veinte años y permiten que a través de sus gestiones circulen sus bienes. Pasa con arquitectos, escribanos, contadores. La política estatal ha sido ineficiente o muy tímida con estas estructuras que a la violencia le garantizan estímulo y perspectiva.

En los dos primeros meses de 2022 hubo 25 chicos menores de 16 años heridos de bala en el barrio donde en 2013 el presidente del Club Tiro Federal tuvo que cerrar el estadio. Un ejemplo de la acechanza espectral que hostiga a muchos barrios con la violencia de la droga, con adolescentes de ojos amarillentos por los consumos problemáticos, con familias que no tienen nada que ofrecer ni dónde acudir ante la fortaleza huidiza y pactada con la policía del transa del lugar.

Los rasgos de la ciudad demacrada son lastres de la incapacidad de maniobra de las instituciones estatales, no solamente de la dirigencia política, para cambiar para bien la vida de la gente, reducir la incertidumbre y mitigar su miedo. Las violencias que se prolongan deshacen allí todos los contratos sociales. En Rosario una de cada tres personas está en una pobreza consolidada. A mitad de 2023 son 444.000 pobres de los cuales 85.000 son indigentes, o sea, sin capacidad de asegurarse la alimentación diaria elemental. Los escombros del estado de bienestar dejan como residuo sólido a personas que perciben que la política es un lenguaje hostil y lejano, nada que garantice el mejoramiento de la vida, o de una existencia decente. Los medios de comunicación cada vez más concentrados han sido parte de estos cerrojos que han transformado a los ciudadanos y los han vuelto individuos.

Pero Rosario es también prosperidad, ingenio, talento y enorme capacidad productiva. El Gran Rosario generaba hasta 2022 el primer PBI per cápita de la Argentina y el segundo de Latinoamérica luego de Brasilia. Posee una estructura industrial muy sólida, con la mayor cantidad de empresas y tasas de empleo registrado que superan a la media nacional, con el polo biotecnológico mayor de América Latina. El último censo económico nacional sitúa al distrito ampliado de Rosario como el de mayor densidad industrial del país. El incremento de los precios de los commodities a mediados de la década de 2000 posicionó a la región de la que es eje como el corazón de la exportación de soja, a través del complejo agroexportador que se montó a fines de la década del 90, donde se asentaron las principales multinacionales del negocio cerealero y oleaginoso. Desde los 36 puertos que tiene esta región se exporta actualmente el 82 por ciento de la soja que produce la Argentina.

Rosario y su área metropolitana producen el diez por ciento de los automóviles, el 30 por ciento de los refrigeradores domésticos, el 40 por ciento de la maquinaria para la industria de la alimentación y el 45 por ciento de las carrocerías para autobuses de media y larga distancia fabricados en la Argentina. Las empresas transnacionales con plantas en la región incluyen, entre otras, a General Motors, Cargill, Monroe (ex-Fric Rot), Dreyfus, Unilever, John Deere, Pampa Energía (ex-Petrobras) e ICI. Vio surgir fuertes unidades locales como Paladini, La Virginia y Liliana. Tiene una institución en la Bolsa de Comercio que es líder en el mercado de corredores de cereales y contiene al principal mercado de futuros de la Argentina y uno de los más importantes del mundo.

De mucha mayor resonancia son otras fuentes no tradicionales de generación de ingresos, reconocimiento y admiración. De la ciudad y un anillo circundante de no más de 40 kilómetros son Lionel Messi, Ángel Di María, Javier Mascherano, Ezequiel Lavezzi, Maximiliano Rodríguez, Luciana Aymar, Emiliano Boffelli, Juan Imhoff. Entrenadores como Marcelo Bielsa, Gerardo Martino, Eduardo Bauza o Lionel Scaloni, entre otros. Artistas, intelectuales, músicos, investigadores, académicos.

Existe en Rosario una vigorosa base material y humana para una

transformación deseada, pensable y posible. En algunas ciudades con realidades más críticas se la pudo hacer. Con conciencia de sus fortalezas, Rosario la espera.

33
LA VOZ DE LA MAFIA

Hace unos años un fiscal de Rufino, en el sur de Santa Fe, detectó un camión colmado de cereal en la plaza principal de la ciudad. El acoplado iba derecho a un acopio clandestino, sin cartas de porte, con elocuente destino de evasión. El fiscal pidió interceptar la carga y acompañó a los policías. Lo cruzó un alto representante de la Sociedad Rural de la ciudad. Era el dueño del cereal. “Dejame de joder a mí”, le dijo. “Metete con los delincuentes que para eso te pagamos”. El fiscal le hizo saber que se metía con él porque lo que estaba haciendo era un delito. “Yo no le robo a un vecino. En todo caso le robo al Estado por todo lo que me saca. Ocupate de lo importante”.

El dinero de la evasión de segmentos de la economía legal suele encontrarse en espacios opacos de inversión con los capitales de la economía delictiva. En Rosario uno de los sectores más prósperos, el inmobiliario, fue receptor de esos ingresos entreverados. Precisamente en el juicio a Esteban Alvarado se vio esa alquimia tan propia del capital que si algo tiene es que no discrimina. En un mismo barrio privado el capo criminal les compraba lotes a policías. Su arquitecto les diseñaba las obras. Alvarado compró lotes en Puerto Roldán, Tierra de Sueños, Funes Hills y Condominios del Alto frente al shopping Alto Rosario. Todos barrios exclusivos con administraciones legales.

La más notoria conclusión del juicio a Alvarado no tuvo que ver necesariamente con los hechos que se le atribuyeron. Sino en cómo fue la articulación estatal la que permitió a una organización criminal establecerse en un territorio, construir su vigor en una madeja que necesitó de hechos de sangre para expandir negocios y pese a innumerables advertencias ser viable a lo largo de mucho tiempo.

No es poca enseñanza el hecho de que la evidencia inicial que posibilitó describir la conducta de la banda de Alvarado, sus

conexiones policiales, los permisos judiciales y políticos que en forma deliberada u omisiva obtuvo, provinieran de fuera de la provincia.

Adentro la prueba no se generaba, no por incapacidad sino porque las fuerzas de seguridad y los actores judiciales y algunos de la política actuaron para que no se viera. Como dice el criminólogo Matías Dewey, facilitando los permisos estatales, noción muy utilizada por los fiscales, para que la organización criminal tuviera el insumo indispensable para afianzarse: impunidad.

Desde 2012, cuando Alvarado fue detenido a requerimiento de un fiscal bonaerense, hubo un sinnúmero de alertas sobre el tipo de acciones que desplegaba en Rosario, sus socios policiales, la continuidad de sus acciones, su actividad económica fuerte en el comercio de drogas que en la ciudad recién mereció sentencia diez años después. Eso le facilitó, al cumplir su condena en 2017, salir de la cárcel de Urdampilleta más robusto de lo que entró. Al menos, en capacidad de generar inestabilidad política con su factor de violencia y con la potencia de su logística.

Estando preso un camión de una de sus empresas fue detenido en Río Negro con media tonelada de marihuana. La Justicia Federal de Rosario ni se asomó al caso pese a que en la provincia patagónica sus socios, todos con residencia en Rosario, habían sido condenados.

Las cosas que dijo Alvarado no tienen hasta el presente respuestas públicas de la política. Alvarado en un audio dice con acierto, antes de que lo nombren, que el futuro jefe de policía será Cristian Sola. Se advierte que antiguos jefes de Drogas Peligrosas, con conexiones más que llamativas con el principal acusado del juicio, se refugiaron en la Jefatura de Policía de San Lorenzo, a 20 kilómetros de Rosario, articulando con dirigentes políticos.

Y queda como momento fundamental y desconcertante la voz de un jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que elaboró informes que mostraban cómo policías que habían investigado a Los Monos protegían o eran cómplices de Alvarado, cómo uno de ellos hasta compartía caballos de carrera con él y cómo la Justicia Federal actuante pese a la contundencia de la prueba rendida, prueba que se usó para imponer condenas en la provincia, no avanzó un tranco para poner a tiro a Alvarado.

Se consigna este caso prototípico, el juicio a Alvarado concluido en 2022, para mencionar efectos extendidos durante años a otros actores del campo criminal. En audiencias a las que prácticamente no acudía nadie, que en su mayoría cuando no había testigos notorios transcurrieron sin público, se ofreció una explicación institucional de la violencia epidémica que desde 2013 puso a Rosario en la prensa de todo el mundo. La chance de empezar a sanar de ese profundo tajo narcisista fue a partir de la exposición de explicaciones y de argumentos expuestos en juicios, que tuvieron fuerza como para derrumbar un edificio pero que la comunidad y sus instituciones atendieron poco. Difícilmente se encontrarán en otro lado tantas explicaciones sobre el presente que lastima Rosario como en el debate oral y público al que no asistía nadie.

Una posición simplificadora y mediocre persiste en hablar de oscuros acuerdos entre los “políticos” y “los delincuentes” en base a indicios que muchas veces no pueden superar niveles de convincentes conjeturas. Lo que sí existen son dinámicas de la política en sus tres poderes que facilitan relaciones de convivencia, beneficios y cobertura recíproca entre Estado y delito. Por desconocimiento las menos de las veces; por negligencia, por omisión deliberada y a veces por acción también.

Y si bien no todo es prueba, las estructuras de protección a la criminalidad se están viendo de modo continuo en los juicios de los últimos años. El sudario de la violencia cae sobre los barrios sucios de la ciudad donde la muerte encuentra a los vecinos volviendo del trabajo, esperando el colectivo o barriendo la vereda. En esa marginalidad y dolor de las cunetas, la política, con sus omisiones y sus trampas, se queda cada vez más sola.

¿Qué es la mafia en la Rosario de hoy? No son organizaciones como las italianas del presente que garantizan la venta de protección, el derecho a transitar y a concretar negocios de los intimidados. Ni entidades como los grupos de principios del siglo XX en la misma ciudad, mayormente inmigrantes calabreses y sicilianos, que cometieron secuestros y crímenes resonantes durante la Década Infame. Es más bien la presencia fantasmagórica, impulsada mayormente por la miseria y la desesperación, que produce un daño

que se palpa a diario y que tiene eslabones poderosos allí donde los balazos no resuenan. Son los chicos de vidas fugaces que se dejan la piel a tiros. Es un barrio advirtiendo que cierra el club por las presiones de los chantajistas. Son magistrados de las más altas instancias que garantizan cobertura al poder político. Son financistas del campo legal o chacareros o abogados que sin propósitos violentos cubren las demandas sin saciedad de esa construcción que llamamos crimen organizado. La mafia es un fenómeno de red donde cada engranaje asociativo garantiza la dinámica del todo. La mafia es un concepto que suena a caricatura o a desmesura pero que se manifiesta en la inercia de una violencia inédita y encarna en la melancolía que dejan los muertos. La violencia es el hijo bastardo de la ciudad. Una construcción muy propia que no hacen solamente los que amartillan un arma y pulsan el gatillo.

Ricardo Piglia dijo al ganar el premio Rómulo Gallegos que la revelación de la verdad de una sociedad está en el crimen y no en lo que la sociedad cuenta de sí misma. La tercera ciudad del país, con los claroscuros de su pujanza vital y sus destrozos, no se acostumbra a tolerar su costado más sombrío como un producto propio. Desde 2013 a 2023 entre heridos de balas y muertos hay más de 7000 víctimas. No son guarismos estáticos. Cada número en su singularidad supone nuevos ataques letales, más población en prisiones, más carga de trabajo en hospitales, más familias teniendo a la cárcel como ámbito de socialización, más circulación de armas de fuego.

Todos esos rasgos componen la fatigada vigilia de una ciudad de enormes contrastes. Pero en la fuerza productiva y el contumaz deseo de otra vida late una posibilidad de cambio. Cada vez que hay una marcha, un reclamo airado o un insulto, el contrato con la autoridad institucional sigue vigente. En esos gestos los ciudadanos de Rosario siguen reconociendo en el Estado el ámbito para acudir ante un conflicto para buscar su resolución. La política, que no son solo los políticos, tiene la obligación noble y estimable de hacerles sentir a los ciudadanos que no están solos. En ese claro en la niebla aparece, concreta y fornida, la huella de una salida.

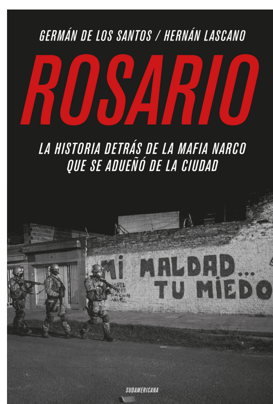
Cada mil lágrimas sale un milagro, dice una línea de canción de un artista brasileño. La fe en un porvenir distinto es un estímulo

bienvenido. Pero no es lo mejor para una comunidad aguardar el favor de lo sobrenatural. Una construcción humana ingeniosa, esforzada, colectiva y constante posibilitará un futuro mejor.

AGRADECIMIENTOS

Los hechos volcados en este libro guardan relación con acontecimientos ocurridos y con actos atribuidos sin arbitrariedad a sus protagonistas. Están asentados en evidencia rendida judicialmente, en algunos casos en trámite de ser analizada, en mayor proporción ya convalidada en resoluciones de tribunales. Muchos de estos hechos fueron referidos previamente por medios de prensa nacionales y extranjeros, están consignados en documentos de instituciones públicas u organismos de la sociedad civil, o se basan en revelaciones aportadas en las más de doscientas entrevistas que durante años se concretaron para sustentar el texto. Las inferencias y miradas que se desprenden son propias del trabajo periodístico que los autores realizamos con absoluta buena fe y dentro de las competencias del ejercicio profesional.

En ese sentido queremos agradecer cada uno de los aportes. Muchos de ellos son de personas que prefieren no ser mencionadas. Nuestra gratitud a fiscales y defensores públicos, magistrados, funcionarios de distintas fuerzas de seguridad, profesionales del Derecho, Ciencias Económicas, Arquitectura, Ciencia Política y Comunicación Social. También a funcionarios de los tres poderes del Estado, a personas que fueron o están privadas de libertad, a trabajadores de las áreas sociales del Estado, a periodistas y editores, a agentes del campo financiero, agropecuario e inmobiliario que brindaron información y consideraciones. Aunque palabra y percepción no son la misma cosa, lo que los exime de responsabilidad en el resultado, sus voces diversas fueron una gran contribución para el libro.



En Rosario se respira un clima de guerra. Desde la muerte del líder de Los Monos en 2013, distintas facciones narcos se disputan el negocio de la droga, pero como ninguna prevalece y no se garantiza la paz, la violencia llena las calles de muertos.

En la ciudad pasaron cosas que no tienen precedente. Fueron acribillados edificios del poder judicial, casas de jueces y restoranes ubicados en zonas gastronómicas con gran afluencia de público. Un gerente bancario murió de un tiro en el balcón de un hotel, un gobernador se salvó de milagro cuando atacaron su domicilio. Nunca antes hubo tanta droga para vender, tanto dinero sucio para repartir y tanta gente implicada. Esta transformación tiene detrás una historia compleja y oscura relacionada con un pacto entre las bandas, la policía y el entramado político. Jefes mafiosos que continúan liderando desde la cárcel; grandes cárteles de drogas que disponen libremente de los puertos de la provincia; sicarios dispuestos a matar por poca plata; financieras, mutuales e incluso empresas legales funcionales al lavado del dinero proveniente de estos negocios.

Germán de los Santos y Hernán Lascano indagan en decenas de historias para entender cómo se consolidaron los vínculos entre el crimen y el poder; cómo es que en la cárcel hoy vale todo; cómo fue que una de las ciudades más importantes del país se convirtió en un infierno, y cómo hace una sociedad entera para convivir a diario con el horror. *Rosario* es un libro urgente y necesario, una investigación única a cargo de los dos periodistas que mejor conocen el fenómeno del narcotráfico en esa zona.

GERMÁN DE LOS SANTOS

Nació en Santa Fe en 1972. Estudió en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario y en TEA. En 1998 ingresó a *El Ciudadano* de Rosario, donde trabajó hasta 2008. En 2001 fue corresponsal de guerra en Afganistán y en 2022, en Ucrania. Fue corresponsal de *El Litoral* de Santa Fe, y luego de Aire de Santa Fe, función que aún desempeña. También colaboró con *Crítica de la Argentina*, en la edición de un suplemento regional de Rosario. Actualmente, es corresponsal de *La Nación* en esa ciudad. En 2015 y 2022 fue distinguido con el premio Adepa a la mejor investigación periodística por un trabajo sobre narcotráfico en Frontera, Santa Fe; en 2017, con el Konex en el rubro Periodismo Gráfico y en 2023, con la Pluma de Honor de la Academia Nacional de Periodismo. Con Hernán Lascano publicó el libro *Los Monos*.

HERNÁN LASCANO

Nació en Buenos Aires en 1967. Se graduó en Comunicación Social en la Universidad Nacional de Rosario y realizó posgrados en Flacso. Trabaja en *La Capital* de Rosario desde 1993, diario en el que fue editor de la sección Policiales durante dieciocho años. Colaboró con el suplemento rosarino de *Página/12* (1991-1993), fue corresponsal de *El Litoral* de Santa Fe (1995-2006) y también, redactor del suplemento regional santafesino de *Crítica de la Argentina*. Formó parte de distintos proyectos televisivos en Canal 5 de Rosario y en la Radio Universidad de la misma ciudad. Con Germán de los Santos publicó el libro *Los Monos*.



Otro título de los autores en penguinlibros.com

De los Santos, Germán
Rosario / Germán de los Santos ; Hernán Lascano. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Sudamericana, 2023.
(Investigación Periodística)
Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-950-07-7003-3

1. Investigación Periodística. I. Lascano, Hernán. II. Título.
CDD 070.4



Penguin Random House Grupo Editorial

Diseño de tapa: Penguin Random House Grupo Editorial
Foto de tapa: © Rodrigo Abd / AP

Edición en formato digital: noviembre de 2023

Humberto I 555, Buenos Aires
penguinlibros.com

ISBN 978-950-07-7003-3

Conversión a formato digital: Estudio eBook

Facebook: penguinlibrosar
Twitter: penguinlibrosar
Instagram: penguinlibrosar

Índice